

Hoy, la situación dramática de Bolivia constituye un espejo posible del futuro de Latinoamérica. Por eso el tratamiento de la crisis político-social boliviana, crisis de carácter sistémico, constituye parte de la preocupación solidaria de la región, en la medida en que vuelve a plantear los límites de la democracia como institucionalidad capaz de regular progresivamente la vida nacional.

Pero ¿qué peculiaridades del proceso histórico son las que amenazan esa precaria institucionalidad democrática, cuya consolidación y profundización—si bien fragmentada por múltiples escisiones ideológico-partidarias—sigue alentando la voluntad de los sectores mayoritarios populares?

Quizás esa realidad solo puede recuperarse a través de una elaboración ensayística que combine con agudeza hermenéutica la perspectiva estrictamente política con la perspectiva histórica. El autor de este trabajo puede intentar esa tarea con una identidad académica y política destacada, donde la reflexión sobre el destino del pueblo y la nación bolivianos tiene como fuente constante la pasión de servir primordialmente a ese destino.

Abogado boliviano, especializado en temas de historia y teoría políticas. Actualmente desempeña un cargo parlamentario electivo.

Cuenta con una beca de investigación del Social Science Research Council para trabajar sobre historia del movimiento obrero boliviano con un enfoque comparativo.

La democracia subversiva

Ramiro Velasco

Ramiro Velasco

La democracia subversiva



Ramiro Velasco

**La
democracia
subversiva**

**ciacso
Consejo
Latinoamericano
de Ciencias
Sociales**

Biblioteca de Ciencias Sociales
Director: Mario R. dos Santos

*A Jeannett Prudencio, Ernesto Mario,
Ramiro Fidel e Irma Leonor, compañeros
en mi camino.*

I.S.B.N. 950-9231-10-1

Diseño gráfico: Beatriz Burecovich
Composición y armado: Estudio Century,
Azcuénaga 34, Tel. 48-0166, Buenos Aires
Impresión: Artes Gráficas Santo Domingo,
Santo Domingo 2739, Buenos Aires
Primera edición: mayo de 1985
Queda hecho el depósito que marca la ley 11.723
Copyright de todas las ediciones en español por
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO)
Av. Callao 875, 3º E, Buenos Aires, Argentina

El presente trabajo es el resultado de una investigación realizada mediante una beca recibida del Programa de Asistencia Académica Individual de CLACSO, período 1982. La publicación fue financiada con aportes de la International Development Research Centre (IDRC), Ottawa, Canadá.

INTRODUCCION

Este trabajo ha sido posible gracias al Programa de Asistencia Académica Individual del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) y contribuirá, en alguna medida, al esclarecimiento de las cuestiones del Estado y de la democracia. Con el apoyo a este tipo de investigación, CLACSO promueve una alta discusión teórica y científica sobre problemas que, en Bolivia, concitan una enorme expectativa y son una realidad dramática que sufren generación tras generación millones de hombres. Tampoco pasará desapercibido para el estudioso de otros países latinoamericanos, porque el tema que aquí se trata es también un tema latinoamericano.

El golpe de Estado del 17 de julio de 1980 no sorprendió a nadie, ni a los bolivianos ni a la opinión mundial. No fue un hecho inesperado pero tampoco *esperado* en el sentido de poder oponer una respuesta a la ofensiva militar del ejército. De pronto, el país se sintió paralizado, prisionero en la gran prisión del *toque de queda*, repentinamente inermes. Se sintió derrotado, humillado, aplastado por el estado de sitio, frustrado por una democracia que había capitulado de antemano al ceder la iniciativa a sus adversarios. El temible espantajo de la "resistencia nacional" que jactanciosamente había pronosticado la democracia pequeño-burguesa, resultó un fantasma, un desafío imaginario. Menos éxito aun tuvieron los que apostaron todas sus esperanzas al "diálogo" con los militares; todo fue en vano, los militares demostraron una capacidad ilimitada para la insensatez. Ocurrió, simplemente, que el ejército en su fase más crítica y de más severa descomposición, trató de encontrar la fórmula de su recomposición orgánica con un manotazo sangriento sobre la Nación.

Lo cierto es que el fatigoso curso de las tres elecciones consecutivas (1978-79-80), una cada año, no terminó en la fiesta del poder constitucional sino en la orgía de sangre de la dictadura terrorista. El sufragio y el Parlamento, como todas las instituciones de la democracia —en estos

años tormentosos de drama, comedia y tragedia—vivieron zafándole el cuello a la cuchilla del poder militar; pero la democracia ya había sido condenada a muerte: todo era cuestión de tiempo.

Ese es, en pocas palabras, el cuadro sombrío que resulta del proceso democrático. Su final tiene la apariencia confusa del absurdo; por tercera vez, el pueblo acude a las urnas armado con las armas de su terquedad cívica, tres veces elige a sus gobernantes; pero al final, no es la constitución sino la espada la que acaba reinando en el país. El ejército, con su vertical arrogancia simplista y brutal, se impone con la suficiencia de la fuerza y aplasta con sus tanques y aviones esa explosión de ilusiones y anhelos espontáneos que fue el proceso democrático. Pero, si la democracia fue vencida por el ejército; el ejército, en cambio y a pesar de todo, fue el otro vencido. El precio del golpe no puede ser más caro para los militares, no sólo por eso que ellos llaman "su imagen", no sólo por esta carga extenuante de la debacle económica, no sólo por los efectos implacables de la corrupción de la institución; sino sobre todo, porque el precio del golpe puede ser el mismo ejército.

Nada, empleo, está sujeto al ocaso. Aun en la insensatez primaria de este golpe de Estado, aun incluso en el absurdo, la incongruencia y la obscuridad, hay que tratar de poner al descubierto sus raíces. Esto nos permitirá intentar un reconocimiento de las causas que están detrás de la estrategia de poder de los militares y del fracaso de la democracia.

Bolivia se hunde en la miseria y el hambre, la desolación de sus ciudades es el reflejo de una organización económica que ha llegado a su estado agónico y de un sistema político agotado y estancado que, en conjunto, configuran una verdadera crisis nacional. Este es el saldo de varios años de inestabilidad, de gobiernos que hoy están arriba para caer mañana, de una práctica sistemática del terror oficial y de una vulnerabilidad esencial del sistema democrático. García Meza, Torrelio, Vildoso no son más que los personajes episódicos de un sistema que se viene abajo, pero que en su caída arrastra a toda una jerarquía de valores, intereses, símbolos y grupos sociales. Contra ellos nada pudo la democracia: el método democrático se mostró impotente contra el método reaccionario. Es por eso tan urgente y necesario un examen a fondo de la crisis boliviana, que no es otra cosa que una crisis del Estado dependiente. Los orígenes, formas y consecuencias de esta crisis ya son objeto de un amplio debate nacional. Hay cuestiones de ineludible tratamiento como el concepto y los alcances de la democracia, la naturaleza del ejército y el sentido de las movilizaciones populares. La dilucidación de estos problemas no puede ser postergada.

Este estudio contribuirá a satisfacer esta necesidad. La intención es subrayar los problemas y enmarcarlos en este drama de la democracia y la revolución. La tesis que aquí se sostiene es que las formas recientes de inestabilidad política, la incertidumbre económica y encerramiento de las soluciones democráticas son manifestaciones de un hecho mayor que es la crisis del Estado dependiente. El golpe de julio ha revelado dramáticamente la fragilidad de las instituciones del Estado boliviano, todo lo ha

conmocionado, ha sacado a la superficie la resaca del sistema de dominación. Sería superfluo atribuir el atentado de julio a un simple acto de maldad de los hombres; los García Meza, los Arce Gómez son representativos de un determinado prototipo militar y son parte de los grupos económicos y políticos dominantes. Los rasgos delincuenciales del gobierno de los militares, la institucionalización de la corrupción, constituyen la expresión de un estado de cosas y de las nuevas jerarquías económicas y sociales que se han establecido en los últimos años. Es necesario anotar esto, puesto que hay una inclinación a sobrevalorar el carácter anómalo, delictivo, corrupto, del experimento garciamecista, descategorizándolo y reduciéndolo a la acción episódica y parcial de un grupo inhumano de las Fuerzas Armadas.

Tampoco podemos aislar estas consecuencias políticas de julio de su contexto histórico. Los monstruos de la violencia y la prevaricación no han nacido recién, son hijos de toda una historia de derrotas y frustraciones. Y por monstruoso que sea el sistema de julio, no se trata de un hecho insólito, es parte de una concatenación que nos remite causalmente al pasado. Los antecedentes deben ser resumidos en una visión totalizadora que abarque el conjunto. Por eso, en una primera parte, nos proponemos un bosquejo de la "fisonomía del Estado boliviano", un intento de establecer sus rasgos más generales, su evolución compendiada desde la revolución de 1952 y su desemboque inexorable en la actual crisis de Estado. Sin un *reconocimiento* del terreno, no sería posible situarse en la debacle de la crisis actual, caracterizada por el derrumbe de la dictadura terrorista de los militares y la impotencia del Estado para reorganizar su continuidad democrática burguesa. Al hacer este *reconocimiento* del lugar, queremos anotar los rasgos más esenciales de las clases y su organización con relación al *nuevo Estado* que se erige sobre el sacudimiento insurreccional del 9 de abril. Asimismo, las peculiaridades del ejército boliviano, principal protagonista de la política.

Sobre este fondo, analizamos el intento democrático de 1978-80, y las verdaderas causas de su frustrante conclusión. Se trata de lograr una imagen relativamente fiel de la precaria existencia de las instituciones democráticas durante este período: el sufragio, el parlamento, y la figura discutible de los gobiernos interinos constitucionales (Walter Guevara y Lidia Gueiler). Con estas cuestiones están entrelazadas otras: los partidos y la marcha del movimiento popular. En síntesis, hay un cuadro de conjunto, una situación previa y una consecuencia que es necesario reproducir en el plano teórico.

Aunque, a estas alturas, el fracaso de la dictadura militar está a la vista, y existe un movimiento de opinión pública que empieza a exteriorizarse con energía; no hay, todavía, una acción y un pensamiento coherentes desde los grandes frentes de partidos. La crisis también ha desnudado a la mayoría de los partidos, los ha arrastrado a un coyunturalismo espontáneo que no está a la altura de la situación. Sin embargo, el futuro se anuncia con pronósticos de renovación. Pero partidos que, como la Unidad Democrática Popular (UDP),¹ recogieron por tres veces la victo-

ria electoral sin llegar al gobierno, no están a este nivel, son renuentes y están estancados, no ofrecen ideas nuevas sino sólo la solapada astucia de la maniobra de cúpulas. La izquierda está volcando sus esperanzas en la corriente socialista que fundó su líder Marcelo Quiroga Santa Cruz. Pero la otra izquierda permanece en la adolescencia: oscila entre el maximalismo y el minimalismo, no tiene la personalidad ni la patética presencia de la izquierda salvadoreña, tampoco la razón práctica de la izquierda chilena.

El centro, por su parte, es una sombra agónica del pasado, es un heredero bastardo del MNR de abril del 52, ha perdido su perfil progresista; lo que quiere, simplemente, es ocupar un sitio en la máquina burocrática. Las tendencias más degeneradas del centro y la derecha fluctúan entre su colaboración con las dictaduras de turno y su adhesión electoralista, son "donatistas"² o legalistas según la ocasión. Sin embargo, este cuadro ensombrecido de esta manera, tan patéticamente negativo, no puede aun ser matizado con tonos optimistas.

En 1978-80, la izquierda se introdujo en el esquema electoral; el movimiento popular, desde abajo, presionaba enérgicamente rompiendo el rígido armazón estatal; sin culminar, empero, en un hecho superior. El carácter provisorio de las "aperturas" en Bolivia determinaba que si el proceso electoral no se transformaba en un proceso popular, no podría esperarse la posibilidad de una victoria verdadera. Y eso es lo que ha ocurrido.

El cuerpo muerto de una democracia formal no podía flotar indefinidamente sobre el oleaje vivo de la adhesión popular; la democracia para sobrevivir tenía que cambiar de calidad. Esta era la tendencia fundamental de aquel período: la democracia sólo podía defenderse a sí misma con un giro del movimiento popular hacia un planteamiento antioligárquico y antimperalista. Pero no se captó esta tendencia, el movimiento popular lo concedió todo, se subordinó al orden y terminó derrotado por el estado de sitio. No hizo nada por convertir a sus organizaciones en una máquina de combate: ante el destino sombrío de la democracia tradicional, cayó con ella, abrazado a sus símbolos y a sus mitos.

Entonces, los hechos mismos, con el implacable azote de sus lecciones, nos han ratificado que los problemas de la libertad y la democracia no pueden seguir subordinados a las veleidades de un poder militar que en lugar de atribuirse el papel de "juez" debería estar sujeto al juicio público. En el contexto de la crisis de Estado sobre la de la experiencia del 17 de julio, resulta indispensable una *reinterpretación de la lucha democrática*. En Bolivia, las banderas democráticas no sólo están vigentes sino que tienen una gran trascendencia. Lo importante es situarlas en un escenario más amplio y profundo que el de los confusos hábitos electoralistas. De ahí la necesidad de estimular la reflexión sobre la democracia y su relación con la lucha de clases.

Notas

¹ Alianza de partidos triunfante en los procesos electorales de 1978-80, e integrada por el Movimiento Nacionalista Revolucionario de Izquierda, que lideró Siles Zuazo, por el Partido Comunista de Bolivia y el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR).

² "Donatismo", término que alude al nombre de Donato Muñoz, político del siglo pasado que colaboró con la tiranía de Melgarejo. En este caso usamos el término para designar a aquella *intelligentzia* que se pone al servicio de las dictaduras.

I. Fisonomía del Estado Boliviano

Contenido de la insurrección de Abril. El Estado boliviano moderno data del hecho insurreccional de 1952. Es resultado de la acción transformadora de esta insurrección popular, tan colosal como lo fue en su tiempo la Revolución Mexicana y de tan grande significación histórica como la ulterior Revolución Cubana. Lo que hace posible una equiparación de este hecho con aquellas gestas universales es *el factum del 9 de Abril*, el acto de guerra que logra destrozar el aparato de coerción del *ancien régime*, e instalar, en su lugar, la milicia de obreros y campesinos. La insurrección fue un acontecimiento esencialmente urbano; una guerra civil corta, de tres días, en la que los obreros, mineros y trabajadores fabriles se colocaron a la cabeza de las masas y enfrentaron al ejército, derrotándolo y arrancándole su rendición en la peñascosa planicie de Laja.¹

Por primera vez, el ejército nacional firmaba un acta de capitulación ante su histórico enemigo; el pueblo. La firma del general Torres Ortiz significaba la rendición incondicional del ejército ante una nación que rescató las armas que hasta entonces habían disparado en su contra. Este solo acto final que cesó el fuego de la batalla, no apagó, en cambio, la llama de la revolución. La revolución se nutrió con la sangre de la *vendeta*, el cadáver del ejército era la osamenta del viejo régimen. De los restos del despotismo decapitado surgió el entusiasmo, el coraje, el delirio de la masa. La revolución podía avanzar porque el nuevo edificio estaba cimentado sobre la argamasa de la sangre.

Eran los obreros con las armas de fuego quienes decidían la suerte de la nación; no era, sin embargo, la ideología obrera la que se imponía en el terreno de las grandes decisiones: las armas de la política estaban en manos de la dirección pequeño-burguesa del MNR. En realidad, el contenido del Estado boliviano, en la *fase caliente* de la revolución, será un reflejo de las relaciones entre las clases que intervinieron en la insurrección.

Pese a su concluyente resultado militar, la insurrección en el plano político se caracterizaba por su estilo espontáneo y abigarrado, por su *incertidumbre ideológica*. No fue una insurrección planeada, fue un

improptu, un estallido espontáneo de la pasión popular que rebasó el curso político del golpe de Estado del MNR.² Comúnmente se aceptó que la espontaneidad en el movimiento termina reproduciendo, en última instancia, la ideología de la pequeña burguesía. Pero una fórmula de carácter general como ésta es insuficiente para aplicarla a las peculiaridades de una situación tan algebraica como la del 52. Hasta ahora, el trotskismo boliviano discute si el POR (el partido trotsquista) podía tomar el poder en la insurrección de abril: discusión inútil. El partido del 9 de abril era el MNR. Aún con su impronta espontánea, la sublevación del pueblo tenía que expresarse en un partido; y, en este caso, en el partido que mejor mostraba su aptitud para ocupar el poder del Estado. Sin embargo, la relación entre el partido y las masas, durante un buen tiempo, estuvo marcada por la presión revolucionaria de la base social; y el hecho de esta presión fue decisiva para el curso de la revolución.

El MNR de hoy es una imagen decrepita del MNR de ayer que acaudilló al pueblo del 52. El MNR fue un fenómeno político nacional. Era un partido sobredotado con una inmensa base social, y por eso mismo, el único que en ese momento podía erigirse en el jefe de la insurrección. Las masas, a su vez, no tenían otro punto de referencia a sus intereses que la presencia indiscutida del MNR en la escena política. Por una parte, los intereses generales —en un sentido nacional— estaban descritos en el programa básico de tres puntos: *reforma agraria, sufragio universal y nacionalización de las minas*. Y por otra parte, este programa, recogía el sentido de la época: la necesidad de la modernización del Estado boliviano. Razones estas, que hicieron del MNR el agente histórico de la Revolución del 52 y al mismo tiempo la causa de su frustración. Pues, si el MNR representaba lo que la historia disponía como instrumento en ese momento, expresaba, también, la ambigüedad de las clases intermedias cuando copan la dirección de una situación revolucionaria decisiva.

Fue este encuentro entre las limitaciones ideológicas del MNR y la energía revolucionaria de las masas, entre la inercia y el impulso, lo que caracterizó el proceso de la Revolución Nacional. Esta dialéctica, que colocaba al gobierno como un rehén de las masas, es una característica propia del período revolucionario. En este período, la agitación revolucionaria no cuestiona el liderazgo del MNR; pero presiona, exige y obliga. Es el brazo del pueblo el que remueve las escorias del viejo orden; es el impulso convertido en exceso el que pone en movimiento las ruedas de la revolución. Si bien los anhelos de la masa no traspasaban el límite democrático burgués, su acción y su ímpetu fueron decisivos para el cumplimiento de las primeras tareas de la Revolución Nacional. Los campesinos marcharon sobre la tierra, la ley de reforma agraria no hizo más que sancionar el hecho; los mineros impusieron, sin las largas dilaciones de estudios consumados, la nacionalización de la gran minería.

Las primeras tareas de la revolución fueron producto del vértigo revolucionario, obra de aquellas multitudes cuyo único trofeo era el cadáver del ejército.

Imprimimos un intencional acento en la intervención de las masas y

no así en el héroe de las mismas (Paz, Lechín o Siles), puesto que son ellas que con su enérgica acción quiebran las lindes que cercaban al viejo Estado oligárquico. Hasta 1952, el Estado había prescindido de la espesa masa rural, de los "condenados de la tierra"; analfabetos y envilecidos en la miseria no podían ser parte del *establishment*, de la vida política. Y este estado de cosas estaba consagrado en los hábitos y las costumbres de las gentes. El Estado boliviano aparecía como un enclave privilegiado para los contados hombres de empresa, los latifundistas y un pequeño círculo de la alta clase media. Fuera de lo urbano, todo era restringido, nimio, languidecente. Entre la ciudad y el campo se había erigido una muralla infranqueable tras la cual la vida, el trabajo, los conocimientos y las costumbres quedaban estratificados en la rutina de los siglos. El campesino vivía en los páramos de la miseria y del atraso, sin ambiciones de salud ni educación, como si su género de vida perteneciese al derecho natural, abandonado a la desnuda hostilidad del Altiplano y a la brutal naturaleza del trópico.

Tan tremenda distorsión y divorcio entre el campo y la ciudad inspiró a los teóricos movimientistas en su inconsistente tesis del "Estado Nacional" (recogían los hechos pero no disponían de la fórmula teórica para precisar este estado de cosas). El primitivismo del Estado oligárquico no era la premisa del "Estado nacional", sino del Estado democrático moderno que es, hasta hoy, una tarea inconclusa. De todos modos, el mal había sido diagnosticado: la Revolución tenía que transformar el Estado boliviano. Pero, ¿cómo? Todo dependía de la acción de las clases; el Estado no es más que una forma de expresión de las relaciones de todas las clases en la sociedad.

Es interesante que en toda la producción teórica del MNR (Carlos Montenegro, Céspedes, Guevara Arce) está presente la preocupación por la realización del *Estado nacional* como una meta u objetivo inconcluso. El solo hecho del planteamiento, pese a su impertinencia teórica, puesto que aun defectuosamente el Estado Nacional ha existido desde el acto de fundación de la república, revela el reconocimiento de un desequilibrio rotundo entre el Estado y la nación, de una débil capacidad de centralización estatal. Los rasgos antiguos del Estado prerevolucionario no han desaparecido del todo. Hoy mismo, como rémoras o vestigios, prevalecen tendencias autocráticas sobre las que actúan los despotismos bárbaros de Barrientos o García Meza. Pero con relación al Estado prerevolucionario, los rasgos antiguos, extremadamente pronunciados, se traducían no sólo en la incomunicación entre la economía urbana y la economía rural, sino también en la escasa predisposición para integrar el territorio y los grupos humanos en una sola voluntad estatal. "Cualquier intento democrático tiene que comenzar aquí por solucionar problemas resueltos hace siglos en otras naciones", sostenía Guevara Arce en su programa de Ayopaya, que servía de contratesis al planteamiento clasista de los obreros mineros.

Con este acento *nacional y democrático* se perfiló el MNR como el instrumento de la revolución nacional democrática, de la revolución

burguesa históricamente relegada. "No hay feudalismo ni capitalismo científicamente definibles en la economía y la sociología boliviana. Esta muestra más bien rasgos inconfundibles del Estado colonial".³ Débil, superficial e inexacta en su negación del capitalismo (la burguesía del estafio ya había incorporado el país a la economía mundial y a la división internacional del trabajo) esta observación de Carlos Montenegro penetra, sin embargo, no sin agudeza, en el problema del *arcaísmo* de la sociedad boliviana. En efecto, mas que feudales son rasgos antiguos y asiáticos los que configuran la forma estatal pre revolucionaria. En su afán por *singularizar* la formación social boliviana, Montenegro se extravía en una apreciación unilateral y anticientífica, no intenta interpretar el atraso extremado del país como la expresión de una combinación del capitalismo en su forma de *enclave* con formas precapitalistas rígidas y resistentes que abarcan a casi todo el territorio; y dice en cambio: "no hay feudalismo ni capitalismo propio, sino dominio delegado del imperio metropolitano". La "delegación" supone un sistema colonial puro y no cabe hablar de "Estado colonial" como sinónimo de la realidad *dependencia-imperialismo*, sino sólo de su naturaleza antigua, asiática y despótica, que únicamente en este sentido *perpetúa* formas pertenecientes al pasado colonial.

Necesario es detenerse en esta glosa del pensamiento movimientista por dos razones: por prefigurar en un breve rodeo lo que era el viejo Estado oligárquico, el *ancien régime*; y captar en la visión incongruente de Montenegro (principal teórico del MNR) el vacío histórico de la revolución burguesa. Para Montenegro "la Rosca ... no constituye una clase capitalista ni económicamente definida en nuestra sociología, es insuficiente e impotente para defenderse. Ella es un instrumento simple de la colonia". Si hay un caso gráfico de aquello que los sociólogos modernos llaman la "economía del enclave", éste es el del tipo de economía capitalista y de clase capitalista que se desarrolla (sin desarrollar el país) a partir del ciclo del estafio y de la burguesía minera. Pero ambos, el desarrollo del capitalismo y el dominio de la clase no llegan a romper el carácter antiguo y asiático del Estado, no se traducen en democracia burguesa efectiva ni en desarrollo nacional, sino en dominación despótica de la Rosca, que es la dominación común de la burguesía minera y la oligarquía latifundista, con todas las consecuencias distorsionantes de esta combinación.

El medio campesino, analfabeto y miserable, era un retrato de la oligarquía rural que había permanecido por más de un siglo sin contacto con el mundo, tan incivilizada como sus mismos siervos y que, en eso tiene razón Montenegro, más que feudal era un lastre de la colonia. "Por cada mil indios que rezan hay uno que lee" sentencia R.A. Reyeros, y añade: "el indio no tiene más visión del mundo que la de la región que lo rodea". El habitante del campo tenía una imagen parcial de la nación, el Estado le era indiferente y, cuando no extraño, hostil. Como no iba a serlo, si nada tenía que hacer con las instituciones de la República:

en una población de 3 millones de habitantes sólo 58 mil votos elegían al presidente y al gobierno.

El dominio jurídico territorial del Estado no se expresaba económica ni socialmente en un intento de integración. Todo conducía a la dispersión. Geográficamente, el país, dividido por sus murallas interiores y sus grandes espacios vacíos, no podía superar el aislamiento de realidades étnicas incomunicadas y de grandes porciones territoriales cuanto más alejadas del *enclave minero* tanto más deprimidas y abandonadas a su suerte. El altiplano, tierra fría y mezquina, cobijaba a dos tercios de la población, mientras las inmensas planicies orientales fértiles y calientes estaban despobladas. Entre una y otras regiones eran escasos los caminos, los ferrocarriles orientales —según la economía de exportación— no promovieron las migraciones internas ni ampliaron el mercado.

La dominación de la "rosca" era la expresión despótica de la hibrididad de la oligarquía, bajo la capa respetable del capitalista minero entregado al extranjero y del señor de la tierra insensible a la técnica y al progreso. Es por eso que la revolución democrática no viene de la contradicción entre la minería y la tierra, viene de la pequeña burguesía movimientista resuelta a organizar un nuevo Estado con el fetiche de la creación de una burguesía nacional independiente. Pero, desde luego, si la dirección ideológica de la revolución apuntaba a fines estrictamente burgueses como lo enunciaba Guevara en su tesis de Ayopaya, "la Revolución Nacional es sobre todas las cosas un esfuerzo encaminado a crear en Bolivia las condiciones propias a la democracia"; los obreros que la hacen, con el fusil en la mano, en cambio, se constituyen en un factor que interviene imponiendo cambios de calidad e intensidad por encima de las cortas previsiones ideológicas de los dirigentes movimientistas. La adhesión de la masa a los jefes no oculta las profundas contradicciones existentes entre las pasiones de los *sans culottes* de la calle y sus portavoces políticos.

Resulta, por eso, no sólo importante detenerse un poco en estas premisas, sino también adentrarse en el papel de las clases insurrectas. A eso obedece que un aspecto importante en este estudio lo constituye el período revolucionario de la revolución nacional, caracterizado por una vigorosa actuación proletaria y popular. Los problemas del Estado y las clases, cuando estaban en vías de resolución, abarcan un período comprendido entre 1952 y 1954. Allí estaban en germen todos los elementos que contribuyeron a la estructuración del Estado democrático, y lo que hacemos es tratar de reproducir las relaciones de las *clases en movimiento*, en su plena dinámica revolucionaria, ya que fueron estos impulsos y los ulteriores retrocesos los que definieron el contenido y la forma del Estado del 52.

En la teorización de los hechos del 9 de abril utilizamos a menudo el término "revolución plebeya"; categoría que nos permite interpretar el papel del proletariado urbano en la revolución democrática, sin dirigirla, empero, políticamente. Nos sirve también —este término— para captar el torbellino del movimiento con su protagonista heroico: la masa. Finalmente, para reflejar ese proceso de tormentosa transición

entre el caduco Estado oligárquico y el nuevo Estado que se alza desde los escombros de la vieja sociedad rosquera.

Una revolución plebeya. El proletariado (minero y fabril) fue la cabeza de la insurrección, el jefe indiscutido en las calles pero no en la política. En política se subordinó a la dirección de la pequeña burguesía. El proletariado no contaba con "su" partido obrero, tuvo que hacer suyo al MNR. Actuó, entonces, como actúan las clases oprimidas cuando apoyan a otra clase en las grandes revoluciones: como pueblo más que como clase. Claro que el proletariado boliviano contaba ya con una tradición sindical respetable, la Federación de Mineros había aprobado la célebre "Tesis de Pulacayo" con mucha antelación al 9 de abril de 1952. El programa de Pulacayo reclamaba para el proletariado el liderazgo de la revolución democrática que se transformaría en un proceso socialista. Aunque aprobado por aclamación, el grueso de los obreros, paradójicamente, estaba afiliado al MNR. El programa socialista sólo quedó en la élite, no se filtró a la masa, no bajó al pueblo obrero. La insurrección no cristalizó en las banderas de Pulacayo, sino sólo en su programa mínimo, cuya expresión material era el programa máximo del MNR.

Subrayan las corrientes trotskistas que las tres grandes medidas de la Revolución Nacional (nacionalización de la gran minería, reforma agraria y sufragio universal) eran parte del programa de Pulacayo: "La revolución será democrático-burguesa por sus objetivos y sólo un episodio de la revolución proletaria por la clase social que la acaudillará".⁵ Lo cierto es que las tres grandes medidas eran parte de ese programa en cuanto eran *el programa nacional mismo* de abril, pero no en cuanto *el eslabón* para asegurar la transición socialista.

El programa *sin el movimiento* no ilustra ni dirige. El programa de Pulacayo no encarnó en los obreros del 9 de abril: podían izar sus banderas a grandes alturas en el movimiento sindical pero carecían del partido socialista con arraigo y prestigio en las masas. Los obreros no siguieron al POR,⁶ siguieron, en la práctica, al MNR y a su programa. Las cosas no pueden producir más de lo que contienen en sí mismas.

El espontaneísmo de las masas determinó el carácter de la revolución. Sin embargo, los objetivos burgueses que estaban en la substancia del pensamiento movimientista, tardaron en definirse con precisión. Durante algún tiempo, la masa actuante hizo avanzar a la Revolución Nacional, empujó al MNR hasta los mismos límites de su programa exigiéndole continuidad revolucionaria y la organización de una dictadura popular. Esto fue posible porque el MNR era un partido que atacó demolevemente a las clases oligárquicas. En su vocabulario, en su lenguaje, hay una implacable denuncia de la gran burguesía; la *rosca* o el *superestado*, para los que propone la expropiación. Pero, indudablemente, esto no significaba acción ni pensamiento anticapitalista; significaba que "esa" burguesía exaccionadora que se había alimentado del fraude al Estado, que conspiraba contra la economía de la nación, los "barones del robo" como los llamaba Augusto Céspedes, debía ser expropiada.

Después el mismo MNR comprobaría con su propio fracaso, la inutilidad de destronar a una burguesía para coronar a otra en su lugar. El pensamiento del MNR era ese, llevar al cadalso a la "rosca" para impulsar el desarrollo de un *Estado nacional* sobre los cimientos de una burguesía nacional no subordinada al imperialismo.

Cuando se habla de "superestado" es posible representarse una imagen del poder colosal que había adquirido la burguesía minera: poder sobre el ejército, que con raras excepciones, era una incubadora de generales incondicionales; poder sobre los partidos "demoentreguistas", que organizaban el parlamento y el ejecutivo como instrumentos de la exacción y el saqueo. Sobre este desmesurado desarrollo de la fracción minera de la burguesía, dice el escritor Augusto Céspedes: "El peso de esa riqueza que había creado un poder más fuerte que el Estado era de tal manera aplastante que nadie podía oponerse a su fenomenal apetito. Pero sobre no oponerse, justificar a los Barones del Robo, defenderlos y aun alabarlos es una actitud que define el miserable rol de la oligarquía boliviana y la descalifica para siempre".⁷ Aquí, en estos acentos de enérgica convicción, *antirrosquera* y *antioligárquica*, estaba el verdadero sentido revolucionario del MNR, que sabía atraerse a la masa de la nación y le fijaba un objetivo certero: el objeto por destruir. Así funcionan las revoluciones, contra la personificación del poder y sus símbolos. Este fue también el lenguaje de los diputados del MNR y de su órgano de prensa *La Calle*. Un lenguaje incisivo y franco que cautivó a la masa porque atacaba con justeza: hería en la cabeza.

En síntesis, el programa del MNR era una apelación a la nación para destituir a una clase: la fracción monopólica de la burguesía y sus aliados, los grandes terratenientes. Sin el hundimiento de estas clases no era posible, tampoco, la regeneración del Estado boliviano; la verdadera realización de la *unidad nacional* a través de la reforma agraria y del control estatal de la riqueza nacional.

Naturalmente, en cuanto programa democrático burgués, no puede negarse que el del MNR era un programa avanzado para la época. Puesto que, en esencia, planteaba una profunda transformación democrática del Estado. Más aún, el MNR supo agitar sus banderas de combate; su estilo, la audacia de sus consignas apuntadas con oportunidad contra el objeto concreto y carnal del superestado. 26 años más tarde, la UDP (el MNR de izquierda y otros partidos) hará todo lo contrario, su programa consistirá en su habilidad para escabullir el bulto. Pero volviendo al tema: el pueblo adhirió al MNR porque intuyó que con él podía ajustar cuentas con la anacrónica oligarquía boliviana. Era su instrumento de demolición. Una cosa era el vago discurso socialista de Pulacayo, y otra esta sencilla pero maciza convocatoria a la liquidación del superestado; este *movimiento* de acción concentrada fue, para el pueblo, una opción práctica.

Pero la *descalificación* de la oligarquía boliviana, que estaba en el centro del programa del MNR, no hubiera podido realizarse como derrocamiento sin la insurrección. Distinto habría sido todo si el MNR hubiese llegado al poder por vía electoral (una maniobra golpista desconoció su

victoria electoral de 1951 en circunstancias análogas a las del golpe del 17 de julio de 1980) o a través del golpe de Estado. Nada de esto sucedió. El MNR se vio arrastrado al terreno de la insurrección por el impulso espontáneo de las masas: esta acción repentina, irresistible, arrastró todo, destruyendo lo que tenía que destruir. Abatido el ejército, el pueblo estableció su *dictadura de la calle*, su "tercer Estado". Introducido en la escena insurreccional, el MNR tuvo que actuar como un partido radical. Por eso puede hablarse del *período revolucionario* en cuanto resultado de la influencia directa que ejercieron las masas sobre el gobierno. La realización de las medidas revolucionarias impuso un nuevo orden: la vieja máquina oligárquica había sido desplazada; frente a un ejército arrinconado y vencido, emergía la victoriosa milicia de obreros y campesinos. Las antiguas relaciones de clase y de autoridad habían sufrido un desplazamiento.

Necesariamente tenían que surgir nuevas relaciones entre las clases, y tenía que configurarse un nuevo "bloque en el poder", para utilizar un concepto de Poulantzas.

Las relaciones entre el gobierno y la masa, que brotaron de la insurrección, no han sido suficientemente recogidas en el plano de la teoría. Quizás la preocupación más sistemática en este terreno ha estado a cargo de Guillermo Lora, René Zavaleta y Sergio Almaraz. Sin la misma dedicación teórica, está la producción de Céspedes y otros exponentes de la literatura política. Sin embargo, a tres décadas de la insurrección de Abril, es muy poco lo que se ha avanzado en la sistematización teórica de la historia de la revolución, que es también la historia del nuevo Estado. Los mismos jefes de la revolución no han dejado ideas de relativa significación teórica; hay un vacío, especialmente notorio en la actuación de los partidos en la escena política.

Lora y Zavaleta han tratado de recuperar las experiencias de Abril, pero con una visión distinta de la de este trabajo. Lora interpreta los hechos valiéndose de la categoría "dualidad de poderes" tan brillantemente expuesta por Trotsky en su *Historia de la Revolución Rusa*. Zavaleta, en cambio, como resultado de sus agudas observaciones sobre la situación revolucionaria de 1970-71 (Gobierno de Torres), vuelca su atención a los casos de "bonapartismo" que suceden a la Revolución de Abril. Se ve, de todos modos, que en el terreno de las relaciones de clase existentes tras el estallido del 52, está la clave para la comprensión de los cambios en el Estado boliviano y en el ser social y político de la actualidad. La reducción de la historia a la oposición mecánica entre revolución burguesa-revolución socialista es un recurso insuficiente para adentrarnos en la dinámica complejidad de una revolución viviente. En este caso, la misma virulencia en la caída del viejo régimen confundió a todas las clases y por cierto espacio de tiempo los hombres —los jefes— eran más víctimas que dueños de los acontecimientos.

El desborde popular provocado por la insurrección impuso su vehemencia y su carácter al período revolucionario. Marchaban las milicias populares en las calles, los fusiles descansaban al hombro de obreros y

campesinos. Sobre el pueblo armado empezó a reinar el gobierno de la Revolución Nacional. El poder de la masa residía en la realidad de su movimiento, se hacía sentir en el terreno de la acción, en la oposición entre su consistente existencia multitudinaria y las vacilaciones del gobierno. Detengámonos en lo que dice Lora: "El primer gobierno movimientista no pasó de ser un virtual títere en manos de las organizaciones obreras pujantes y poderosas"... "En la primera etapa de la revolución el control obrero se mueve impulsado por las masas y se convierte en un verdadero órgano de poder obrero. El control actúa como portavoz de los trabajadores, se opone al gobierno movimientista y a los excesos de la administración de las minas. Por excepción, el control, en esta etapa, coincide en su conducta con el grueso de las masas radicalizadas". Es de difícil determinación la correlación de clases en esta primera etapa de la revolución. Hubo un *momento* (varios meses) en que la fuerza obrera concentrada en la COB (Central Obrera Boliviana) ejerció una influencia tan enérgica que efectivamente en muchos casos llegó a imponer sus decisiones. Aunque el retrato está bastante próximo a la realidad, Lora marca los acentos porque quiere rematar en la dualidad de poderes con una interpretación excesiva: un sacrificio de la realidad en los altares de las categorías.

Los obreros actuaban y se imponían sin apartarse de su adhesión al gobierno movimientista, eran el factor del radicalismo revolucionario dentro de un contexto en que el Estado democrático trataba de organizarse sobre las cenizas del *ancien regime*. Sin este *élan* que venía del proletariado no se habrían dictado las grandes medidas económicas y políticas que permitieron el ensanchamiento del Estado, que permitieron su modernización. El proletariado sin ideología proletaria, el proletariado militante de las organizaciones sindicales, fue, por ese momento, una clase hegemónica en la alianza de clases del nacionalismo revolucionario. Según Zavaleta: "la ideología burguesa dominaba tanto en el polo burgués como en el polo proletario".⁸ Porque, en sentido estricto, la acción proletaria no estaba dirigida por la ideología proletaria.

Puesto que el Estado democrático debía ser expresión de la nueva correlación emergente del 9 de abril tiene importancia el alcance de las contradicciones de clase en este escenario gigantesco de la Revolución Nacional. No había una muralla china entre el proletariado de la COB y el gobierno del MNR. Pero la *condición obrera*, aun espontáneamente, oponía sus instintos revolucionarios a la indecisa pequeña burguesía gobernante. Los objetivos burgueses de la revolución democrática tampoco estaban perfectamente delineados, el gobierno del MNR ocupaba el poder de un Estado que se construía en medio de la *incertidumbre de clase*. Era esta incertidumbre, esta *indefinición* sobre los propios objetivos burgueses y no la lucha entre dos poderes orgánicos opuestos, lo que caracterizó al período revolucionario. No puede hablarse de una burguesía dominante en sentido absoluto: las fracciones burguesas que no fueron afectadas por la revolución se establecían poco a poco en el nuevo estatuto de la nación. Por su parte, el gobierno estaba dirigido por pequeño-

burgueses que aspiraban a un status burgués. Pero si el Estado es una "poderosa herramienta para organizar o desorganizar a las clases", no puede, en cambio, crearlas. La utopía de algunos dirigentes movimientistas de "crear una burguesía nacional" —agente de la revolución democrática— es el antecedente de la actual burguesía intermediaria y de sus métodos originarios de acumulación capitalista basados en el pillaje. Lo cierto es que el MNR no pudo liberarse nunca de las fuerzas que se propuso destruir: el mismo Patiño, expropiado por la revolución, manipuló después al gobierno para boicotear las fundiciones;⁹ los grandes monstruos como la "Grace" recuperaron y aumentaron su poderío; las mismas tareas de la vieja burguesía se reprodujeron en la nueva: volvió con más fuerza la potencia corrosiva de la corrupción. Aun dentro de la escena del nacionalismo revolucionario, el proletariado no quería de igual modo, ni quería lo mismo que la pequeña burguesía del MNR.

Este era el verdadero contenido de la contradicción entre la clase obrera y la irresoluta mesocracia movimientista. La clase obrera avanzaba más, no quería que se rompiera el hilo de continuidad del programa revolucionario, imponía, mediante el control obrero, una fiscalización de hierro sobre las autoridades. Aunque se movía dentro del continente histórico del nacionalismo revolucionario, podía avanzar y hacer avanzar mucho más el proceso aun, pero como su ala radical; oponiendo la superioridad de su movilización a la indecisión de los jefes. Es dentro de este marco que el gobierno del MNR aparece como un cautivo de las emociones de la masa, con una conducta típica de las clases intermedias. Marchando empujado, impelido por el impulso del tumulto, pero urgido de encontrar soluciones burguesas al Estado.

El golpe asestado a la oligarquía dominante había producido una conmoción que se traducía en la divergencia y la convergencia de unas y otras clases. Pero la burguesía, ocultando la mano, hacía mover con la potencia de su ideología a los hombres y los hechos. Y así como el grupo dirigente de la revolución se sentía arrastrado por la rapidez del movimiento, buscaba, también, la oportunidad de utilizar los frenos que lo detuviesen. ¿Qué podía hacer el MNR para frenar la fuerza del impulso obrero? ¿Cómo iba a institucionalizar el nuevo fenómeno estatal que contenía en su seno las fuerzas que desbordaron en la insurrección? El papel del campesinado fue predominante en la táctica del gobierno. La élite dirigente estaba consciente de que el *orden* pasaba por el aislamiento del proletariado dentro del bloque de clases y por la *posesión política* del campesinado. Empero sólo se llegó a este resultado una vez que el proceso de la revolución definió claramente sus fronteras de clase.

El Estado que emerge del 52 es, en esencia, un producto de la insurrección, en la medida, incluso, que sólo dentro de él los obreros adquieren, en la confrontación, su propia conciencia. Es la eclosión de las clases populares lo que produjo esa notable expansión social en la base del Estado que transformó íntegramente toda la concepción de la democracia política. En la medida que las milicias de obreros y campesinos, los sindicatos campesinos y la COB (el pueblo organizado) ejercieron una in-

fluencia decisiva en el curso revolucionario, el gobierno de la Revolución Nacional no tenía aun clara certeza respecto de la organización burguesa del Estado. La lucha de clases había erigido un poder popular cristalizado en la COB, las cuestiones de gobierno parecían mantenerse en una indefinición propia de las revoluciones plebeyas y del período jacobinista de las grandes revoluciones burguesas.

Propio de la fase revolucionaria era este estado de cosas en el que aun no se lograba el equilibrio: el pueblo armado o la milicia popular era el sostén de un Estado que no había, todavía, logrado *autonomizar* el aparato estatal de la acción directa de las clases.

Tampoco el "poder popular" a cuya cabeza estaban los obreros se proponía reemplazar a la burocracia estatal o a la clase que detentaba el poder político, puesto que no contaba con una voluntad socialista organizada en partido hegemónico, ni el gobierno se había despojado de su carácter popular. El *factum* de la marcha revolucionaria no se había encontrado aun con la contramarcha del termidor. El "estado llano" se sentía incorporado al nuevo Estado democrático. Por eso es que las diferencias y contradicciones en cuanto a la extensión y profundidad del contenido social de la revolución no alcanzaron de inmediato calidad antagónica. Organizadas en la "dictadura de la calle", las masas forjaron una nueva democracia que la dirección movimientista adaptaba a sus actos de gobierno.

La dirección oficial del gobierno no había podido privar al proletariado de los recursos de la coerción estatal, de la fuerza militar constituida por las milicias populares; no se había producido aun una centralización definitiva del poder del Estado que se tradujese en la unidad de la dominación política con su capacidad coercitiva: el monopolio de la fuerza. El *apoyo armado* al gobierno confundía las líneas limítrofes entre un Estado *escasamente autonomizado de las clases* y un *poder obrero consentido*, sin conciencia plena de su independencia de clase. Es por eso que el Estado del 52 emerge como una *dictadura popular* donde las clases están ideológicamente masificadas y la democracia se ejerce directamente sin la intermediación formal de órganos representativos legislativos. Si la existencia de un polo proletario con su función coercitiva inherente daba lugar a una apariencia de *dualidad típica*, en la realidad la clase obrera no era ajena al Estado del 52; la oposición y la contradicción estaban enmascaradas en la imbricación y colaboración de clases.

A su vez, la dictadura popular es la expresión de una democracia de masas, producto vivo de la calle y de esa situación de provisionalidad propia del apogeo revolucionario. Más esta democracia, una tendencia y no un hecho aun, tiene la particularidad de que surge de la alianza de la pequeña burguesía y el proletariado con el apoyo de los campesinos. En la alianza de clases —en esta fase— la burguesía nacional no juega un papel rector; la pequeña burguesía movimientista establece en los hechos —por decirlo así— una alianza principal con las clases oprimidas. En ese instante preciso, el Estado de la Revolución Nacional no es el Estado "de una burguesía que detenta la hegemonía" sino más bien el Estado de

la pequeña burguesía, el proletariado y los campesinos. Por eso mismo, por sus rasgos jacobinistas, es una "revolución burguesa políticamente fracasada" desde sus mismos orígenes, ya que no es la burguesía que expropia a los terratenientes, son las clases del nacionalismo revolucionario las que expropian a la gran burguesía y a los latifundistas.

Cuando se interpreta este fenómeno social sobre la base de la absolutización del concepto sociológico de revolución burguesa, se corre el riesgo de perder de vista la especificidad y en consecuencia el sentido de la evolución desde un punto a otro. No siempre una revolución, burguesa en sus fines, ha empezado como revolución burguesa; es el caso, claro que único en Europa, de la Revolución Francesa, expresión típica de la pequeña producción y de la amalgama entre el artesanado y el proletariado urbano en formación. El desarrollo del Estado capitalista francés presenta, por eso, peculiaridades definidas; afirma Poulantzas que "todo pasa, en efecto, como si la Revolución Francesa no hubiese coincidido nunca consigo misma, como si estuviera a la vez en avance y en retroceso respecto a sí misma" o, como observa E. Hobsbawm, el desarrollo económico de Europa del siglo XIX "contiene una paradoja gigantesca: Francia". No habría porqué enlazar dos sucesos situados a distancia histórica tan grande y en realidades tan distintas; pero como metáfora, el fenómeno jacobinista tiene un valor interpretativo universal no sólo en el meollo democrático-burgués sino también como fuente inspiradora en los teóricos del marxismo. Entre el contenido individualista formal de la revolución burguesa tradicional y el *contenido social particular* del jacobinismo, hay profundas diferencias: el jacobinismo es una expresión social de la pequeña producción. Sólo ahondando en estas diferencias es posible entender situaciones como las del 52 que no encajan a medida en la categoría de la revolución burguesa; ni tampoco (pese a Lora, Liborio Justo, y otros) se presentan como el dilema ya madurado entre revolución burguesa o revolución proletaria. Sólo así es posible entender, asimismo, el desarrollo ulterior del Estado boliviano cuya crisis, a veces latente y otras declarada, tiene su origen en la frustración de la burguesía como clase, en su impotencia y prescindibilidad en la dirección de la revolución democrática.

El ejército de las milicias populares, forma desprendida de la coerción estatal, se auto-organizó como la base de apoyo de los "montagnards" movimientistas, no como su opción antagónica conscientemente dirigida a fines distintos. La democracia y su ejército de milicias obreras y campesinas, las formas de participación de "todo el pueblo" a través de la *dictadura de la calle* de la COB, del *control obrero* en los mecanismos de la administración de la economía estatal, de las funciones del sindicato campesino (que retenía, según Lora, funciones judiciales y ejecutivas de decisión) y, en general, toda la acción de la masa compacta en movimiento, eran fruto del ascenso irresistible de las clases sacadas a flote por la revolución. Pero ésta, que era una democracia en sí misma, era una democracia que se expresaba en la existencia de sus dos polos: la élite gubernamental, cuya intención se resumía en un ideal renovador de las viejas ideo-

logías, y la actitud ansiosa, beligerante y ardiente de la masa que no encontró sin embargo, el instrumento de una ideología nueva.

Está muy difundida la tesis del carácter político de la COB. Variantes en el seno de la izquierda boliviana magnifican o disminuyen este hecho, pero nadie lo rechaza. Objetivamente, tiene no sólo su propio poder de convocatoria de masas, sino también respecto de los partidos, con los que puede desarrollar políticas de concertación concreta como el "Gobierno COB-MNR" o la "Asamblea Popular de 1971". Pero su existencia y su forma de insertarse en la política podemos enterderlas mejor mediante un rodeo retrospectivo hasta las circunstancias de su origen. La COB, creada el día 17 de abril (a los pocos días del 9 de abril), era a un tiempo una confederación sindical y un órgano político. Tales características resultaban de la escuela de clase del sindicato obrero y del hecho mismo de la insurrección. La insurrección del proletariado crea su órgano proletario: la COB, que, por otra parte, "procede directamente de la tesis de Poulantzas"¹⁰ y compacta a la masa en el momento del apogeo de la revolución. Los campesinos, aislados secularmente de la ciudad, se incorporan a la revolución urbana integrándose a la COB y al MNR. "Las masas que ansiosamente buscaban un polo aglutinador y un comando, estructuraron la Central Obrera Boliviana al calor del triunfo del 9 de abril de 1952".¹¹ "En los primeros meses de la revolución, la COB contaba con fuerzas armadas; las milicias armadas de obreros y campesinos".¹²

Suscinto, este inventario de los hechos nos hace captar el sentido de ese acontecimiento central que es el nacimiento de la COB. Para Lora, la COB más que un sindicato era un consejo. Una cosa, empero, es cierta, que la COB era mucho más que un sindicato, muy próxima a un consejo, pero menos que un "poder" en el sentido de la dualidad. En último término, la COB, que contaba con el pueblo armado, no cuestionaba el poder del Estado (el poder oficial); en la medida que la función hace al órgano, la COB que asimiló y organizó a las fuerzas proletarias de la insurrección, tenía un rol de primer orden en la marcha revolucionaria. Pero actuaba no como el partido del socialismo, actuaba como el *partido extremo de la revolución democrática* en el continente de la alianza de clases del nacionalismo revolucionario. Lechín era la personificación misma de este fenómeno; el lechinismo, el ala radical del MNR, era también el tope del radicalismo de las masas. Y aunque Lora diga que "Victor Paz no era más que un prisionero de la COB", la COB, a su vez, no dejaba de ser un prisionero del lechinismo, del movimiento de izquierda, porque la democracia (la Revolución Nacional) unió a toda la nación con su ideología política. Los rumbos opuestos del proletariado armado y de la dirección pequeño-burguesa no rebasaron, en la práctica, el continente teórico del nacionalismo revolucionario; su oposición ideológica, posible en la teoría, en la realidad se manifestó como los dos extremos opuestos de la dictadura popular.

La dirección movimientista, en cuanto *voluntad del Estado*, fue tan lejos como lo quisieron los horizontes limitados de las masas. Dijimos que entre el pueblo y el gobierno no había una muralla china, que el nuevo

Estado no había alcanzado a autonomizarse de la acción directa de las clases, y en este sentido y sólo así, se dio el fenómeno de la implicación e imbricación de funciones típicamente estatales que tomó para sí la masa (tal el caso de la función coercitiva de la milicias populares y el control obrero). Más que de un poder en disputa o del encuentro entre dos poderes, se trataba de la fase revolucionaria de la Revolución Nacional, en la que no se había dibujado aun con nitidez la línea de separación entre el Estado y el pueblo organizado *revolucionariamente* en la COB. Las milicias de la COB, en los primeros meses de la revolución, eran un aspecto de la función coercitiva del Estado sin ser parte del Estado mismo.

La fase del *termidor*, en cambio, corresponderá a la decantación y separación de estas imbricaciones en algunos casos, y en otros a su *institucionalización*, como ocurrió con el Cogobierno COB-MNR. El *termidor* desprenderá y desencarnará del seno del pueblo aquellas auto-atribuciones revolucionarias que ahora pasarán a cristalizarse en la burocracia de la Revolución Nacional. Como la COB no había logrado objetivar fines subjetivos de clase, aun con todo su aparato armado, contribuirá también con su presencia a la institucionalización burocrática del nuevo Estado. La fase plebeya de la revolución transformó el Estado sobre la base democrática con la participación de todo el pueblo; pero la dictadura de la calle, en ninguna revolución, puede ser un hecho que se perpetúe, un hecho en sí mismo. Su provisionalidad y su carácter revolucionario o bien rematan en el *poder*, que es el objeto definitivo de toda lucha de clases, o terminan *consolidando* el poder de los detentadores coetáneos.

La insurrección alzó el pueblo de los suburbios, sublevó a los mineros, destruyó el viejo orden; pero todo quedó, en la realidad, subordinado a la estrategia de la Revolución Nacional. "Los obreros realizaron la labor ingrata de la revolución" para que la mesocracia movimientista disfrute del "goce del poder".

El *termidor*. El "Cogobierno COB-MNR", desde el punto de vista del proletariado victorioso en la insurrección, significó el fin de la dictadura callejera, y la subordinación obrera a los objetivos burgueses de la revolución. Sin embargo, esta ingeniosa fórmula, peculiar y talentosa, consolidó la hegemonía pequeño-burguesa en el frente de clases y resolvió, por el método ecléctico, el problema de la indefinición jacobinista del período revolucionario. Resolvió, asimismo, de una manera definitiva, el problema de la correlación de fuerzas en la alianza de clases del nacionalismo revolucionario. Puesto que los representantes del proletariado no entraron en el gobierno para romper la barrera entre el programa mínimo y el programa máximo, entraron, en realidad, para consolidar la *unidad del gobierno* desde el punto de vista de la pequeña burguesía. Todo gobierno es la expresión de determinada correlación de las fuerzas sociales, en este caso, la COB con sus representantes obreros, decidió la forma y contenido de la colaboración de clases dentro del estatuto teórico y político de la Revolución Nacional. "Ahora bien,

por su propia naturaleza, tales movimientos tienden a instaurar —y lo han hecho— gobiernos populares que representan a todas las clases que integran el frente de la Revolución Nacional".¹³ El populismo del MNR, teóricamente sistematizado en la categoría del policlasismo, encontró en el "cogobierno" su última expresión: la pequeña burguesía dirigente aseguraba su hegemonía, el dominio de la democracia urbana sobre la masa campesina y la dirección sobre el movimiento obrero.

Los campesinos, "aliados naturales de la democracia urbana", eran el más firme pedestal de la Revolución Nacional. Y aunque la COB, con su sola existencia logró romper el secular aislamiento campesino integrándolo al fenómeno urbano aunque la relación obrero-campesino quedaba de este modo expedita, un hipotético movimiento independiente del proletariado no habría podido arrastrar prematuramente a la masa rural porque la Revolución Nacional había liquidado la cuestión agraria. El MNR personificó el anhelo campesino; y pese al extraordinario movimiento de la guerra agraria en la toma directa de la tierra, el MNR resultó el *emancipador del campo*, el partido natural de la masa rural, y por un largo tiempo incluso, una forma de vida y un hábito político. Los pequeños productores, resultado social y orgánico de la reforma agraria, se sentían representados por el MNR "y sus representantes debían parecerles al mismo tiempo sus amos", quienes les enviaban desde arriba "la lluvia y el buen tiempo". Pero la pequeña producción, además, a través del partido, se organiza social y políticamente en el Estado, llega a ser, como clase organizada por el poder, un aspecto del nuevo Estado oficial. El *fetichismo del poder* de los campesinos se traduce primero en la ilusión ideológica que hace del gobierno del MNR su propio gobierno; después esta ilusión se prolongará en el "pacto militar-campesino" como elemento estabilizador de los gobiernos de las Fuerzas Armadas.

Como superestructura política, el Estado del 52 se asentaba en la pequeña producción agraria, difundida en extensión impresionante; en el sector estatal de la economía cuya omnipresencia era el instrumento clave del proceso de modernización; en la empresa capitalista privada cuya existencia dependerá del aporte tonificante del Estado, además de las combinaciones entre lo antiguo y lo nuevo que se perpetúan hasta ahora. Aun dentro de las relaciones capitalistas, se había producido un profundo cambio cuantitativo "las fuerzas revolucionarias distrajerón su poder en la ocupación del viejo aparato estatal, rehabilitándolo con savia nueva"¹⁴ convirtiéndolo en un aparato con capacidad de dirigir, organizar y planear. Existía una base económica que había liberado a nuevas fuerzas productivas, que incorporaba a tres millones de campesinos a la pequeña producción y rescataba para la nación sus riquezas. Una base que tenía que producir, necesariamente, un fenómeno político más amplio expresado en formas nuevas de autoridad y de consenso.

Detenido el período revolucionario, la fase de la institucionalización empezó a manifestarse en una realidad estatal más consistente.

Para intentar una *periodización* relativamente aproximada a la realidad del nuevo Estado, hemos distinguido tres etapas de su desarrollo: a)

el período revolucionario o jacobinista que se inicia en abril de 1952 con la insurrección popular y se prolonga hasta 1953; b) el período del temor que representa la fase de la institucionalización del Estado de la Revolución Nacional, y tiene como base el "Co-gobierno COB-MNR", la reorganización del ejército y la tentativa de creación de una burguesía nacional; y c) el proceso de afirmación burocrático-estatal que comprende el final del primer período gubernamental de Paz Estenssoro (1956) hasta el golpe de Estado de 1964, y como corolario, la crisis del Estado.

Cuando hablamos, no obstante, del período del temor, designamos un estado de cosas caracterizado por la conclusión del *equilibrio inestable* entre la fuerza obrera y la pequeña burguesía gobernante, por el término de la indefinición de clase en el contenido del nuevo Estado, y por el esfuerzo, con más coherencia burguesa, de institucionalización de la Revolución Nacional. El vértigo revolucionario hace que políticos como Lora o Ayala Mercado hallen una situación típica de *dualidad de poderes*, donde sólo había condiciones de proximidad a esta figura que, en este caso, carecía de lo esencial: de la contraposición, antagonismo y oposición de dos clases que se disputan definitivamente el poder del Estado. La dirección de la COB no se propuso el desplazamiento de la clase gobernante, sino más bien su reforzamiento vía el "cogobierno".

El "cogobierno" congeló la correlación social existente y cohesionó el frente de clases de la Revolución Nacional. Pero la hegemonía de la pequeña burguesía urbana y de la pequeña producción en el bloque de clases fue factor definitorio en la fijación de los rasgos permanentes del nuevo Estado. La prescindencia de una burguesía dirigente que modela al Estado según sus ambiciones propias de acumulación, el vacío ideológico y político de la clase históricamente dirigente de la revolución democrática marcó el predominio de la *instancia estatal* o del desarrollo sobredeterminante de la *función económica* del Estado. Es por eso que el Estado surge como una realidad omnipotente, como el centro y el origen de toda tendencia de modernización nacional. Tales características, sin embargo, no se detienen en aspectos puramente económicos, van más allá, fijan el rasgo fundamental del Estado: la hipertrofia de su papel político. Y ambas cosas, en suma, que serán fuente de toda tentativa de modernización, serán, paradójicamente, causas que acentúen los factores de la crisis política nacional.

Dentro de este marco del papel hipertrofiado del Estado y de la consolidación del poder, es que el "cogobierno" se sitúa en una coyuntura en la que la revolución cristaliza su contenido nacional de colaboración de las clases motrices al servicio de un proyecto burgués de la pequeña burguesía. La discusión sobre las consignas políticas de la época, acerca del significado del "cogobierno", desde el punto de vista de la táctica de los partidos obreros, no es parte fundamental de este tema. Sólo nos interesa el hecho del "cogobierno" en cuanto programa y mecánica de la colaboración de clases y su importancia en la adecuación estatal a la nueva realidad económica. El hecho es que este Estado, fundado sobre la pequeña producción y la nacionalización del suelo y del

subsuelo, se convierte en un gigantesco comité de administración económica y en un formidable organizador —y a veces desorganizador— de las clases sociales.

Por otra parte, se manifiestan las líneas de decantación que configuran un proceso de autonomización del aparato estatal. El método del "cogobierno" determina, sin embargo, que este proceso de autonomización no se inicie con una ruptura de las fuerzas motrices del nacionalismo revolucionario, sino dentro de una fórmula de complementariedad que permite la supervivencia del fenómeno democrático de masas. Queda aplastada, sin embargo, la efervescencia revolucionaria con la creación de las instancias burocráticas propias que institucionalizan y consolidan el contenido social de la revolución. Los "ministros obreros" no representaban un desequilibrio en favor del ala izquierda del MNR, representaban la presencia del ala obrera burocratizada y absorbida como elemento mantenedor del Estado. Representaban, asimismo, la fase de depresión política en el movimiento obrero y particularmente en la COB. El Programa Ideológico y los Estatutos de la Central Obrera Boliviana, aprobados en 1954, eran un intento de justificación histórica del "co-gobierno" y de diferenciación política de los principios de Pulacayo: "La creciente participación de las masas confiere a nuestra revolución un carácter popular que tiende a superar el esquema puramente democrático-burgués de sus principios"... "La clase trabajadora actuando en el seno mismo del poder, está logrando conquistas que interesan vitalmente a las más amplias capas de la población y no particularmente a ella o a la burguesía"... "Mientras las clases trabajadoras utilicen el poder para empujar la revolución, mientras los Congresos Obreros mantengan su calidad de parlamentos populares en el sentido exacto de la palabra, no puede apreciarse como un 'colaboracionismo' de clases la actual participación en el poder"... "A las medidas anteriormente enunciadas debemos agregar la destrucción del antiguo ejército 'rosquero', que se nos presentaba... como un instrumento de opresión al servicio de la casta dominante y su reemplazo por un ejército popular junto al cual convive una fuerza premilitar, el pueblo en armas"... "La conciencia de clase, capacidad política, son los fundamentos de la disciplina del nuevo ejército". Los párrafos precedentes del documento de la COB, en los que se señala el límite de la colaboración obrera y la posición frente al *nuevo ejército reorganizado*, enmascaran el contenido y el programa de dicha colaboración con el discurso popular y democrático del nacionalismo revolucionario.

Por la vía burocrática, la COB se establece momentáneamente en el Estado de la Revolución Nacional. La clase obrera actúa como clase democrática y ya no como clase revolucionaria; ya no como el impulso irresistible de la masa en movimiento sino como objeto de las fuerzas de la inercia social que consolidan lo avanzado sin poder avanzar sobre lo consolidado.

La clase obrera estaba en el aparato del Estado pero no en el poder del Estado; si bien se mantenía el mecanismo del "control obrero" y la COB podía afirmar que era "un parlamento popular", en la realidad, am-

bas cosas resultaban ahora el disfraz de la subordinación obrera a la legalidad del nuevo Estado y a los fines burgueses de la pequeña burguesía movimientista. Sin embargo, paradójicamente, el aumento del poder obrero en el aparato estatal no daba como resultado mayor poder político e ideológico. La presencia de los "ministros obreros" no era más que la expresión de la *transición* de la fase revolucionaria al momento de la condensación burocrática del nuevo Estado, cuando aparecía definitivamente como el *resumen oficial* de la sociedad.

Si el Estado es el "resumen de los combates prácticos de la humanidad" el Estado de la Revolución Nacional empezaba a cohesionar a las fuerzas sociales del 52 en torno de transformaciones fundamentales que iban a permitir su modernización. En este horizonte, la participación obrera no podía ser —como que no fue— un hecho de relativa permanencia histórica, su papel era el de establecerse, aun provisoriamente, en el nuevo orden democrático. Al instalarse en el aparato del Estado, la COB contribuyó eficazmente a la resolución del equilibrio inestable entre las clases y a la estabilización de la élite gobernante. Pero este estado de cosas duró poco. En la medida que la Revolución Nacional clarificaba su perspectiva burguesa, el "cogobierno" fue liquidándose hasta concluir en su disolución.

Está dicho que toda una serie de factores (prescindencia de la burguesía nacional en la dirección de la revolución democrática e importancia gigantesca de la pequeña producción) determinan que el Estado del 52 asuma coetáneamente la sobredeterminación de las funciones económicas y políticas. La expropiación de la gran minería, por sus proporciones y magnitudes económicas, equivalía a la expropiación de la clase capitalista monopólica, es decir, del sector exportador tradicional, del sector *especializado* como dicen hoy los sociólogos. El Estado absorbió casi todo el peso de la administración económica de la nación, sus responsabilidades y fines se hipertrofiaron y empezó a disponer de gran parte del excedente económico nacional. La administración directa de la minería permitía no sólo consolidar la reforma agraria, sino también plantearse un proyecto nacional de desarrollo sobre la base de la economía estatal. Sin embargo, el "proyecto nacional" fue perdiendo su sentido social originario y el área social de la economía: la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), los Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la Corporación Boliviana de Fomento (CBF), el Banco Minero, el Banco Agrícola, etc, resultaron una poderosa palanca para la acumulación capitalista privada y para el desarrollo de la *burguesía nacional*.

El cambio diferencial del dólar, que llegó a extremos abismales entre el precio de 90 Bs. para las transacciones oficiales de COMIBOL y de 12.000 Bs. en el mercado libre, resultó un magnífico negocio para los restos de la antigua burguesía y para la ávida nueva burguesía que obtenía las divisas de la COMIBOL al precio oficial y las vendía en el mercado libre. Los "cuperos"¹⁵ hicieron grandes fortunas con la inflación; la poderosa COMIBOL no tardó en caer en un grave debilitamiento. Los "diviseros" y los negociantes con los fondos de "contrapartida" constituían

parte importante de la nueva clase que emergía como la resaca de una revolución que comenzó en el drama de la batalla insurreccional y terminaba capitulando ante los mercaderes de la última hora. La COMIBOL conquistada con la sangre de los combatientes no estaba al servicio del pueblo que luchó, estaba al servicio de la minoría que capitalizaba la revolución.

La inserción definitiva de la burguesía en el Estado de la Revolución Nacional y las modalidades de su acumulación imprimieron sus rasgos característicos a la clase dominante, la modelaron y caracterizaron como clase clientelista y succionadora de los mecanismos estatales económicos. La burguesía nacional no perderá nunca este estigma de su proximidad burocrática al poder y en los regímenes militares se reforzará aún más su condición pasiva y parasitaria.

En la medida que la Revolución Nacional definía, de este modo, sus objetivos burgueses, creaba, también, las condiciones de la readecuación del país a las nuevas condiciones de la dependencia. El 24 de julio de 1953 se decretó la reorganización del ejército y la reapertura del Colegio Militar. No tardaron en llegar las "misiones militares" norteamericanas y con ellas todo el bagaje ideológico que formó la conciencia del nuevo ejército, del ejército de la Revolución Nacional. Empero, el ejército no fue reorganizado sobre la base de las milicias populares que salieron del 9 de abril, la revolución renunció a los materiales que la hicieron posible y la recreación del ejército tuvo por base la definición burguesa del gobierno y la "ayuda norteamericana" que colocaba una poderosa cuña a los "excesos" de la masa. El Estado de la Revolución Nacional ponía al servicio de la "creación de la burguesía nacional" todo el aparato económico estatal surgido del acto de rescate emancipador de la riqueza y se planteaba la eliminación de los factores de poder popular concentrados en la milicia obrera.

Se puede decir que la nueva burguesía era hija del nuevo Estado, en cuanto se le brindaron los recursos de su existencia o enajenaba la parte de excedente necesario en actividades lucrativas y especulativas. Ya sea con los "cupos", "liberaciones", "préstamos de honor", "fondos de contrapartida",¹⁶ y otros recursos semejantes, el Estado cumplía un papel director en el proceso de reconducción del desarrollo del capitalismo. La formulación de los teóricos del MNR de construir una nueva burguesía nacional sólo era posible desde el aparato estatal-militar y sobre la base de privilegios clasistas establecidos y practicados por el gobierno del MNR. El aspecto burgués de la revolución democrática empezó a adquirir consistencia de clase no solo por la reorganización del ejército sino también por la presión externa, por las imposiciones imperialistas. Mientras el "cogobierno" se iba diluyendo, devorado por la ley de la gravedad del aparato burocrático-estatal, el aspecto burgués de la revolución encarnado en la derecha del MNR negociaba los términos de la dependencia con los Estados Unidos. Mientras el "cogobierno" representaba la presencia obrera extemporánea en una revolución que no pudo ser proletaria, y en la que los ministros obreros no podían ser sus "intelectuales orgánicos", la élite movimientista reconducía la revolución por la corriente de la rea-

lidad imperialista. La disolución del "cogobierno" vino, finalmente, como la superación de un obstáculo innecesario en un proceso que definió ya el carácter del Estado y sus relaciones con la sociedad.

En 1955, el Ministerio de Relaciones Exteriores publicó el llamado Plan de Política Económica de la Revolución Nacional que en su presentación dice: "Este documento responde a una doble finalidad: presentar al Gobierno de los Estados Unidos de América el panorama esencial de la economía boliviana, tal como lo encontramos después de medio siglo de exportación sistemática de los recursos del país, y exponer un plan inmediato, serio y orgánico, para modificar fundamentalmente esta situación, contando con la ayuda indispensable que para ese fin requerimos y parte de la cual ya hemos recibido en alimentos y bienes de capital". ... "Gracias a la primera ayuda financiera y técnica del gobierno americano se ha conseguido evitar, en parte, el sufrimiento del pueblo de Bolivia por la insuficiencia de alimentos, y abrir nuevas esperanzas para su porvenir, mediante un programa serio y responsable destinado a superar la situación presente. El pueblo y el Gobierno de Bolivia expresan su más sincero reconocimiento al pueblo y al Gobierno de los Estados Unidos de América por su generosa actitud, que ha creado sólidos vínculos de amistad entre ambos países. Los bolivianos que desean desarrollar, de una vez por todas, una economía nacional estable, contando con su esfuerzo propio y la ayuda financiera y técnica de los Estados Unidos".

Como se ve, el Plan de política Económica de la Revolución Nacional fue redactado para el destinatario norteamericano. El "plan" era un acto de expresa capitulación, un acto de rendición incondicional; se comprometía al pago de indemnización e intereses a los ex-propietarios mineros. Con relación al hierro del "Mutún"¹⁷ se decía que: "el Gobierno desea que estos yacimientos sean explotados por una empresa americana". En cuanto al fomento a las inversiones extranjeras: "se establecerá categóricamente el *deracho* de las empresas de negociar directamente con los obreros con el *minimum* de interferencia oficial". Sobre el petróleo: "se encuentra también en preparación una nueva Ley General de Petróleo"¹⁸ en la que se establecerán adecuadas garantías para las inversiones privadas en esta industria". El Estado del 52 definió sus relaciones de clase principalmente en sus relaciones con el imperialismo. Sus tareas democráticas, cumplidas en el período revolucionario, no pudieron ser completadas desde un punto de vista antimperialista.

Una vez que la revolución se detuvo, las fuerzas hostiles que al comienzo se opusieron a ella terminaron por vencerla y devorarla. El "plan" publicado en 1955 no era sino un anticipo de lo que serían los restantes nueve años de la Revolución Nacional. Después vendrá el "Plan Eder" de estabilización monetaria, o sea el "control" de los "expertos norteamericanos" sobre la política fiscal. Vendrán la *Gulf* y la *South American Placers*. Pero, sobre todo, el ejército, y la burocracia jerárquica del MNR separada ya de la masa, sin el apoyo multitudinario del pueblo, sin el carisma del partido radical serán las fuerzas que la revolución incubó en sus entrañas para su destrucción final. El programa democrá-

tico ya no era una realidad, había sido suprimido por la paralización de las energías revolucionarias y por la paciente y metódica acción corruptora del dólar. Entre el programa de 1952 que levantó y enervó a la masa y el "programa desarrollista" que era su negación, había un profundo contraste que se reflejaba no sólo en la pérdida del entusiasmo general sino también en la actitud de la masa que ya no tenía estímulos para seguir luchando; la revolución sucumbió "no por haber querido demasiado, sino por no haber querido bastante".

El golpe de Estado del general Barrientos, en un primer momento, apareció como una transferencia del poder desde la burocracia civil del MNR a la burocracia militar.¹⁹

Empero, el MNR que caía derrocado no era el MNR que existió antes. Había perdido su sentido nacional y popular, sus grandes caudillos se disputaban rencorosamente el poder, la cohesión ideológica y política de sus comienzos había desaparecido para siempre. Ahora, la COB y los obreros estaban al frente del gobierno movimienista. El gobierno trataba de dividir y destruir la COB intentando organizar sindicatos oficialistas, pero ya el nacionalismo revolucionario se había enajenado la adhesión obrera. El golpe de 1964 no hizo más que echar abajo una revolución que ya estaba derrotada, que por renunciar a su carácter popular y antimperialista tuvo el destino de todas las revoluciones inconclusas: se entregó a las mismas fuerzas que en el pasado trató de destruir.

El poder de la burocracia militar. "La caída de mi gobierno se ha producido, precisamente, cuando me encontraba desarrollando una política de realizaciones con ayuda de los Estados Unidos"... "La semana anterior movilizamos sobre La Paz casi 10.000 campesinos armados; pudimos seguir haciéndolo cuantas veces se nos ocurriera; era cuestión de ponerles camiones. Pero el domingo, cuando empezó la crisis decisiva, mandamos comisionados al campo y sólo pudimos traer 200".²⁰ Así resumía Paz Estenssoro el derrocamiento de su gobierno, y el panorama de desolación final en el que epilogaba, como un recuerdo remoto, la pasada grandeza de la revolución. Pero la burocracia militar había tomado el poder para no soltarlo más; en ese momento se iniciaba el largo ciclo, de casi 18 años —con apenas breves interrupciones— de los gobiernos de las Fuerzas Armadas.

El golpe de 1964 fue una continuación de la degeneración burocrática de la Revolución Nacional, un acto de ruptura definitiva con el pasado popular del MNR. Pero, como Paz Estenssoro lo reconoció tácitamente, los apenas 200 campesinos que llegaron a la capital para defender su gobierno eran una comprobación demasiado pobre, un saldo demasiado exiguo de la poderosa marcha de los campesinos sobre la tierra que tuvo lugar en los primeros años de la revolución. Y como ya lo dijimos, la pequeña producción, clase organizada por el Estado, llegó a ser una clase oficial, una condición de estabilidad política del régimen de dominación.

Es por eso que, para que la nueva fórmula de la dominación no

fuese aislada por las clases populares, el ejército llegaba al poder del Estado montado sobre los lomos del movimiento campesino. El "pacto militar-campesino"²¹ no fue sino una expresión del reclutamiento político de los campesinos para sostener socialmente a la burocracia militar en el poder. ¿Qué otro significado podía tener un "pacto" entre opresores y oprimidos? El hecho es que Barrientos surgió como el jefe natural de la reacción y el caudillo ocasional de los parcelarios atrasados. Pero, en esencia, era el nuevo ejército remozado que, al garantizar la intangibilidad de la pequeña producción y los resultados de la reforma agraria, lograba neutralizar al campesinado conservando su ilusión ideológica: el fetichismo del poder. El "pacto" le servía al ejército para consolidar el Estado dependiente y sus clases intermediarias sobre el pedestal del apoyo campesino.

Mediante el "pacto militar-campesino" la reubicación política de los campesinos pasaba por la mediación directa del Estado, consecuencia de la *subdeterminación política* de las "clases apoyo" que frente al fracaso de su partido, el MNR, se apoyaban en el "Estado guardián". La masa rural intuyó que el ejército no podía revertir el *statu quo* de la reforma agraria y los militares a su vez, se alzaron como los amos del movimiento campesino para consolidar la autoridad del Estado.

El poder del ejército era resultado del final ecléctico de la revolución. Pero el Estado democrático del 52 se estableció sobre el cimiento del partido populista de masas, de un poderoso instrumento de la colaboración de clases en el poder. El MNR fue el partido indiscutible de la revolución democrática, de una revolución que se frustró, es cierto, pero fue el partido que "captó" al pueblo y lo personificó. Es por eso que su sola presencia redujo de tal manera el espacio social de masas de los demás partidos que sólo los partidos obreros (PCB y POR) pudieron sobrevivir en su ostracismo de clase: en el incomunicado mundo obrero. El MNR copó todo el territorio social del país bloqueando toda posibilidad para otros partidos democráticos o centristas. Tampoco la derecha (FSB) tuvo mayor margen de acción y apenas influyó sobre un magro espacio urbano, la Democracia Cristiana nunca pasó de ser una élite intelectual extraña al país. No había relación entre estas expresiones famélicas y la poderosa corriente social que discurría en el MNR. El MNR se apropió de la política nacional; casi toda la política estaba dentro del partido, en él se concentraba y realizaba. Por eso es que para desorganizar y desarticular el movimiento popular, el ejército reprimió al MNR, y junto con él a los partidos obreros y a los sindicatos. Al reprimir al MNR, sin embargo, el ejército estaba destruyendo la verdadera base más o menos consistente de sustentación política del Estado democrático-burgués; al hacerlo, los militares tomaban exclusivamente a su cargo el *interés político de la burguesía* y el monopolio de la política.

Los movimientistas soñaron con un poder eterno, con algo similar al curso mexicano, pero no fue así. Lo cierto es que el ejército se lanzó a la destrucción del extenuado MNR, golpeado antes por su propio proceso de diferenciación interna, por la parcelación del poder entre sus

sectores y tendencias encontrados. El golpe de Barrientos fue el último puntillazo mortal para el MNR. Este golpe de Estado no era un incidente ocasional, no era un hecho episódico. El mismo transcurso del tiempo (casi 18 años de régimen militar, con sólo aisladas y brevísimas excepciones de gobiernos civiles) confirma que el ejército tomó, con todas sus consecuencias, el papel de *organizador político* de las clases dominantes.

Aunque la burguesía nacional —como clase, en su sentido histórico— se benefició con la revolución, no por eso la burguesía se convirtió a la democracia. Simplemente *se acomodó* en el Estado de la Revolución Nacional, sin convicciones, sin sentirse comprometida ni responsable. Pero tampoco sus distintas fracciones sintieron la necesidad de organizar los partidos que proyectasen la continuidad de sus intereses políticos hacia una sólida estabilidad democrático-burguesa. Recelosa y conservadora respecto del MNR, no podía tampoco exhumar a sus partidos tradicionales sepultados por la revolución: el Partido Liberal y el PURS. En 1971, cuando la crisis política llegó al mismo ejército y los militares democráticos de Torres enarbolaron la bandera nacional y popular, toda la lucha política de la burguesía se redujo a convocar históricamente al ala reaccionaria de las Fuerzas Armadas. Es muy común, por otra parte, que las sociedades empresariales sobornen a los militares para inducirlos al golpe de Estado; la burguesía agroindustrial y la minería mediana en el golpe de Banzer; la Confederación de Empresarios Privados y el narcotráfico en el golpe de García Meza. Los gremios empresariales no movilizan partidos; no apelan al pueblo, apelan a los cuarteles. La burguesía estaba, en consecuencia, incapacitada para hablar en "representación" de la nación; se veía a sí misma más como un gremio que como una clase. El estatuto de su dominación se consolidó en un proceso parejo al curso del despotismo militar.

Cuando una clase es históricamente pobre, lo es también intelectual y culturalmente. Por eso, entre otras cosas, la burguesía boliviana se insertó con repugnancia en el Estado de la Revolución Nacional. La revolución era para ella un cataclismo extraño; no entendió las perspectivas históricas del gobierno democrático y fue impotente para crear un proyecto nacional burgués propio. Cuando vino el golpe de 1964, adhirió a él con entusiasmo: el ejército, entonces, se convirtió en "la religión de la burguesía".

Los militares resultaron los herederos de un poder político que conservaba un grado de eficiencia y decisión infinitamente mayor y más consistente que en el pasado oligárquico. Los sectores claves de la economía estaban en manos del Estado, y éste, desde un punto de vista más estatista que privatista, era la verdadera herramienta de la reproducción ampliada de la economía capitalista. Pero los militares (excepto Ovando-Torres, 1970-1971) son liberales en economía y totalitarios en política; todos los gobiernos, desde entonces hasta hoy, no han hecho otra cosa que esforzarse en la desnaturalización de todo fundamento nacional en el Estado y la economía. O en potenciar al sector privado para estrangular desde fuera la economía estatal. La burguesía y las Fuerzas Armadas

se identificaron en el sentido reaccionario. Aunque la política desnacionalizadora ya empezó en el MNR (Código del Petróleo, entre otras cosas), continuó de un modo más sistemático y ampliado en el barrientismo. El régimen militar de Barrientos perfeccionó y consolidó la soldadura de la economía boliviana con el imperialismo.

El fetiche del poder en los estratos atrasados. El campesinado nacional ya no era la "esfinge de la historia", pero tampoco había despertado más allá de sus impulsos originarios del 52. De hecho, el escenario de la diferenciación de clases en el medio rural había sufrido una variación sustancial en relación con el pasado oligárquico; ahora el curso de esta diferenciación pasaba por la existencia dominante de la pequeña producción y el lento proceso de acumulación capitalista en los sectores más dinámicos.

Es sabido que la tendencia de la pequeña producción es la de reproducir incesantemente en su seno la ideología dominante, por lo menos mientras los pequeños productores se sientan todavía satisfechos con su "status", mientras no se vean espolcados por la urgencia del desarrollo o golpeados por la crisis y la miseria. La revolución democrática del MNR liberó jurídicamente al campesino de su servidumbre, pero lo esclavizó políticamente respecto del capitalismo. El mismo jefe del MNR, Paz Estenssoro, durante su último gobierno, trató de movilizar a los campesinos armados contra la hulega general de los obreros mineros. Igual cosa quiso hacer Barrientos; utilizó sistemáticamente el chantaje campesino contra los obreros (sin embargo, el proceso democrático, 1978-80, ha presenciado un movimiento campesino más independiente y pujante), haciendo de este chantaje un arma para desarticular las relaciones de solidaridad entre las clases oprimidas.

El golpe del 64 trató de liquidar al MNR atrayendo su base social rural y reclutándola como sostén político del ejército. Barrientos comenzó atando a los campesinos a los grilletos del "pacto militar-campesino". Con este acto, convirtió a la masa de los pequeños productores en el pedestal de la dominación despótica del ejército.

Esta "conquista" trató de ser celosamente conservada por las Fuerzas Armadas. Los militares actuaban como los *redentores* de un campesinado "redimido" de la acción "disolvente" de los políticos y los demagogos. Los políticos estaban impedidos de entrar al campo, un sitio reservado sólo a los políticos de uniforme: los militares estaban convencidos de que todo lo campesino era exclusivamente suyo. El "pacto militar-campesino" era un instrumento hábilmente concebido para renegar de la Revolución Nacional conservando su base social. No podía tampoco producirse una ruptura completa entre la fase terrorista de la revolución y el comienzo de la dictadura burocrática del ejército: respecto de la masa rural los militares podían todavía explotar sus ilusiones y fetichismos de clase atrasada.

Sobre la base de la subordinación campesina, el ejército quiso tomar el lugar físico del MNR pero no su lugar político. Y de algún modo

el "pacto militar-campesino" resultó un ingenioso recurso, en la mecánica de las relaciones de clase, para estabilizar dictaduras militares. Los militares no tomaron ninguna medida en favor de los campesinos. Simplemente montaron guardia en las fronteras rurales para asegurarse su "apoyo" y mantenerlos en el límite de sus aspiraciones de clase intermedia. El ejército resultaba un mediador entre la dominación burguesa y el *pueblo* de pequeños productores.

Barrientos-cubría con los harapos del discurso movimientista la desnudez de su pensamiento. No podía ser sino así, puesto que él, y el ejército con él, usurpaban una falsa popularidad conservando de la religión movimientista sus rituales pero practicando el ateísmo en contra de ella. Lanzado a la conquista política del campo, Barrientos se sentía, todavía, obligado a repetir el abecedario del nacionalismo revolucionario (claro que lo hacía pésimamente) porque estaba ubicado en la fugaz zona ecléctica del hundimiento de una revolución y del flujo reaccionario. Era un digno representante del momento, al que Sergio Almaraz llamó "el tiempo de las cosas pequeñas" en una alusión lúcida que traducía el envilecimiento de la revolución democrática.

Para los campesinos, para quienes el decaimiento revolucionario se produjo con los estremecimientos de la lucha fratricida, de las rivalidades entre los caciques,²² Barrientos resultaba el "pacificador del campo", en contraste con la impotencia del MNR para concluir con el incendio y el exterminio de las cruentas guerras locales en Ucureña, Cliza y Potosí. Al intervenir en esas rencillas que turbaban la concordia en el campo, el ejército supo sacar un provecho político momentáneo erigiéndose en el "guardián" de la "paz y tranquilidad" de los "hermanos" campesinos.

La pequeña producción, esa especie de esclavitud atemperada por el derecho de propiedad, se convirtió en el pilar de la "estabilidad política" del despotismo burocrático-militar. El ejército alentó conscientemente la inclinación tradicional del habitante rural por el caciquismo; reclutó a los viejos caciques movimientistas y formó otros nuevos con los dineros oficiales. Nada igualó el poder corruptor de los gobiernos militares en el campo. Cada gobernante, a su turno, era obsequiado con el "bastón del mando" y cubierto por el "chullu y el poncho"²³ como símbolo de la subordinación de clase ante la "bota del orden". Los nuevos amos, los militares y los caciques, hicieron del campesino su capital político, tanto más rentable cuánto más atrasada y miserable la vida rural. Sólo el paciente paso del tiempo y el rastallar del látigo de las clases opresoras levantarían el velo del engaño. La obra inexorable del tiempo y las implacables leyes de la necesidad, obligarían a la masa campesina, sólo más tarde, a distinguir sus propios intereses y contraponerlos a los de la casta militar.

El monopolio de la política y de la violencia. El ejército fue el único agente efectivo de la reacción en una época saturada por la revolución democrática. El ejército se había reorganizado con una obsesión guerrera, dentro del orden de la Revolución Nacional pero para revocarlo,

para destituir a la burocracia movimientista y reemplazarla. El mismo Barrientos reconoció que la conspiración contra el MNR fue una paciente, difícil y silenciosa labor, realizada desde el ejército. Pero la interrupción del hilo histórico inició una época de violencia, a la cual habría que interpretar como efecto de la convicción reaccionaria de las clases que establecen su dominación completa a través del Estado dependiente.

Entre el ocaso del MNR y la sublevación militar del 64 se completó el circuito de la definición burguesa dentro de la realidad de la dependencia. En este sentido, el golpe de Barrientos fue el coronamiento definitivo del abandono, por parte del MNR, de su propio proyecto burgués independiente. Es la discontinuidad del programa revolucionario del MNR, mejor aún, su interrupción, lo que genera la dictadura burocrática del ejército como nueva modalidad de la dominación de clase de la burguesía dependiente. Pero el vacío histórico y social que deja la caída del MNR, hace perder al Estado el principio de su estabilidad. No estaba en condiciones, el ejército, de reemplazar con su exigüidad la abundancia política de la época movimientista. La dislocación de este principio lo dislocó todo, como si los militares quedasen encadenados al aparato del poder, condenados a mantener el orden o a perecer con él.

En la medida que el ejército se constituyó en el único apoyo real del sistema existente, en su único dique de defensa, el Estado fue aflojando sus lazos con la sociedad civil. Se rompió el sentido del equilibrio entre el consenso y la coerción. El monopolio de la fuerza y el monopolio de la política se fusionaron en un solo haz, se fundieron en un mismo tronco, acabaron concentrándose e identificándose en una sola y única institución del Estado. Esta concentración del poder, particularmente intensa y localizada, no era, sin embargo, un hecho circunstancial; era la expresión de un modelo estable de sustitución reaccionaria del gobierno movimientista.

Barrientos era el puente entre el ocaso movimientista y la consolidación de la burguesía dependiente. Era el inicio de toda una época de preponderancia del ejército en la vida nacional; pero, sobre todo, del proceso de neta diferenciación entre el aparato del Estado burgués y la nación.

El ejército se solazaba con el "liderazgo" de Barrientos, pero los fuegos fatuos de su "popularidad" fueron fugaces. Su "popularidad" surgía de sus relaciones con los estratos atrasados: turbamultas que se sentían atraídas por los discursos de este paracaidista con voz de tiple y curiosamente cautivadas por la vulgaridad dulzona y pegajosa del demagogo. (Su prestigio entre los militares tuvo una historia mucho más simple ante la muerte trágica de algunos paracaidistas durante una demostración de la Fuerza Aérea, y ante sospechas sobre la calidad de los paracaidistas, Barrientos se lanzó desde un avión "comprobando" que los accidentes se debieron sólo a la impericia de los pilotos. Cosas como ésta matizaban la personalidad ruda, elemental y pintoresca del jefe militar). Pero ya, el mismo Barrientos constituía una definición: si en alguna medida era la personificación de la degeneración burocrática de la Revolu-

ción Nacional, no lo era menos de la influencia imperialista en el país. Se enorgullece de ser "el hombre" de los norteamericanos. "No podemos ser los perros del hortelano que no comemos ni dejamos comer", decía mientras firmaba decretos y convenios para los consorcios extranjeros.

Sobre todo, Barrientos era el representante de una época gris del reflujo revolucionario, en la que la pequeña burguesía urbana y rural se mostraba como un conglomerado inconsistente e insensible introducido en los engranajes del orden. El personaje correspondía a este momento. A este instante de descenso y aplastamiento. "Si hay pasaje de la historia pintado en gris sobre fondo gris, es éste"; donde se ha alojado el sistema muscular de la resistencia nacional y donde una opinión pública pusilánime y relajada contempla insensible la erección a la cumbre de este militar bobo, maniático y malvado.

Nos hemos detenido un poco en el sistema barrientista por distintas razones. No sólo porque Barrientos significa el fin del gobierno del MNR, sino también porque esta irrupción del ejército en el poder es la cristalización de la organización burocrática del nuevo Estado que empieza a perder su contenido democrático. Porque inicia el largo ciclo militar cuya característica principal es la organización de la violencia del Estado, de las matanzas en masa de obreros que declaraban huelgas. Es con estos métodos que Barrientos encara la tarea del "desarme" de los obreros y la recuperación de las armas que habían quedado en poder de los civiles desde 1952.

Detrás de la pose demagógica de Barrientos, de su máscara de "General del pueblo" como le llamaban los áulicos, no tardó el ejército en mostrar su aptitud para la violencia: a las matanzas de Villa Victoria en la capital siguieron los pogroms de mayo y octubre de 1965 en los campamentos mineros.²⁴ Pero la restauración no sólo descargó sobre los obreros la potencia destructora del orden militar en un acto insólito, rebajó los salarios, les "ajustó el cinturón" y dispuso la ocupación permanente de los centros de trabajo sustituyendo a los capataces por los esbirros de la policía política. Sergio Almaraz llamó el "sistema de mayo" a esta aplicación metódica de la violencia.

Otro suceso trascendente en este período es la guerrilla de Nancaguzú, hecho de gran significación no sólo porque representa el primer desafío consistente y definido al Estado burocratizado del 62, sino también por sus consecuencias políticas. La guerrilla logró despertar a importantes sectores de la pequeña burguesía urbana que habían permanecido en una pasiva aceptación del *statu quo*. Pero el *estado mayor de la contrainsurgencia* se vengó con la "masacre de San Juan" para compensar sus frustraciones de las primeras acciones antiguerrilleras.²⁵ La guerrilla abrió las puertas a una nueva época. Sin embargo, el ejército, consolidó su lugar de predominio en el aparato estatal.

Algo sobre el gobierno de Torres. Antes de entrar al fenómeno banzerista, es necesario referirse en un corto espacio, a la experiencia del

gobierno de Torres que escapa a la línea de los modelos autoritarios militares y recobra los elementos originales de la democracia de masas del 52. Torres continúa, en parte, la línea nacional de los primeros meses del gobierno de Ovando, pero con mucha mayor profundidad y dentro de un escenario social donde vuelven a plantearse las consignas democráticas y revolucionarias.

Torres no aparece "salvando" al gobierno de Ovando,²⁶ surge como algo nuevo, como una fórmula popular, como una combinación singular entre los militares democráticos (el ala torrista de las Fuerzas Armadas) y la COB y los partidos, para recuperar el espacio democrático aplastando la sublevación fascista del triunvirato militar. Esta combinación entre la huelga general de la COB y el alzamiento de Torres en la Fuerza Aérea puede interpretarse como la primera crisis nacional profunda desde 1952 y la primera crisis de importancia dentro de la institución castrense. La política de nacionalizaciones de intereses norteamericanos y de sectores empresariales nacionales puso en su nivel más caliente la lucha de clases y polarizó la sociedad. En uno de los frentes se agrupaba la burguesía, asustada pero agresiva; y en el otro polo la *Asamblea Popular* que funcionaba en el Palacio Legislativo. La Asamblea Popular pretendía organizar revolucionariamente a las masas y constituirse en un *poder independiente* respecto del gobierno de Torres.

Los partidos dedicaron casi todo su tiempo a *definir* el carácter de la Asamblea Popular. Para unos, como el POR, se trataba de un "poder dual", para otros "un germen de poder", "poder popular", o finalmente, para el PCB, "escuela de cuadros". Esta discusión se realizaba en medio del drama, porque mientras adentro se polemizaba sobre literatura política, la reacción no dormía, preparaba febrilmente la vendeta sangrienta dirigida por Banzer y los militares de la derecha. Adentro, los partidos competían en resoluciones y programas, discursos y tesis; pero la Confederación de Empresarios Privados, los partidos de la derecha y el ala reaccionaria del ejército se movilizaban tras las consignas del orden con sus habituales imprecaciones en contra del "caos y la anarquía". Mientras la Asamblea Popular perdía el sentido de la realidad y acumulaba testimonios teóricos al acervo de la revolución, "conquistas teóricas" dirá Lora, la conspiración derechista se organizaba con el sentido práctico con que se suelen defender los intereses creados.

El movimiento obrero (en su sentido organizativo) estaba por debajo de las organizaciones populares del 52; ya no era un poder armado basado en las milicias obreras y su desafío al orden en una perspectiva socialista era una actitud verbal más que práctica. Si bien no todos los partidos estaban de acuerdo con la tesis maximalista del POR, ninguno de ellos hizo nada por constituir una alianza antifascista con Torres. Este curioso extravío de la Asamblea Popular, que se consideraba un *poder* sin tener las armas para serlo verdaderamente, que despreció un acuerdo antifascista con el general Torres, tuvo el enorme precio de sangre del 21 de agosto de 1971.

Empero, es cierto que pese a la derrota de la Asamblea Popular,

ésta recupera la formidable experiencia de masas de 1952; pertenece, por eso, a la "memoria acumulativa" de las grandes gestas del movimiento obrero boliviano. No tuvo la perspectiva estratégica de una revolución victoriosa por su ingenuidad táctica: creyó ver a la reacción derrotada, donde se estaba preparando, al contrario, el movimiento contrarrevolucionario más coherente y consistente de cuantos le precedieron. La reacción estaba en condiciones de aislar al movimiento revolucionario desde una amplia concertación de fuerzas, como lo demostró después Banzer al unirse con Paz Estenssoro y los falangistas.

La Asamblea se estancó en los embelesos verbales del triunfalismo revolucionario, cuando las circunstancias imponían la consigna práctica del *frente antifascista* con el gobierno de Torres. La consecuencia fue la caída del gobierno de Torres, de la Asamblea Popular, y siete años de depresión del movimiento popular. La Asamblea Popular no quiso confiar en Torres, pero su peor error fue confiar excesivamente sólo en sí misma.

La consolidación del sistema dependiente de dominación. La burguesía se solidarizó con el golpe de Estado del 21 de agosto de 1971. Encontró en Banzer al nuevo abanderado de sus intereses, ya que emergía como triunfador luego de la derrota popular del 21 de agosto y con un nítido programa reaccionario fundado en la consigna "orden, paz y trabajo" que le sirvió para consolidar su esquema autoritario. A su vez, Banzer, en una forma más definida que en el pasado, se encargó de identificar el interés económico de la burguesía con la eficacia del autoritarismo militar. Gobernó para la oligarquía agroindustrial, los mineros medianos (los mineros medianos han llegado a acumular un gran poder económico, en la realidad se han convertido en un sector paralelo que compete con la COMIBOL) y la generación de los nuevos ricos que florecía en el fango del contrabando y del naciente narcotráfico. El ejército era el centinela de esta burguesía cortesana.

Desde el punto de vista político logró un entendimiento consistente entre los sectores empresariales y los partidos que se ubicaron en la contrarrevolución, como el MNR jefaturizado por Paz Estenssoro. El Frente Popular Nacionalista (FPN) era un frente de orientación profascista en el que intervinieron las Fuerzas Armadas como institución. De este modo, el ala derechista del ejército congregaba en torno a un partido que todavía contaba con cierto apoyo campesino y urbano y a la Falange Socialista Boliviana, exponente del nacionalismo de derecha, que expresaba a las fuerzas sociales más conservadoras. Este aparato social, montado sobre una base reaccionaria, sirvió para desarticular al movimiento obrero y a los partidos revolucionarios.

La empresa privada respiró con alivio y se sintió protegida por esta concentración del poder en sus puntos más reaccionarios. Si financió el golpe del 21 de agosto, ahora estaba cobrando los réditos de su "inversión política". El financiamiento al golpe nunca fue oculto: la "colonia alemana", los grandes empresarios como Gasser o Elsner, reconocieron públicamente sus fuertes contribuciones económicas a Banzer, "para

salvar a Bolivia del comunismo" como lo manifestaron. La burguesía criolla no se quedó atrás; los grandes azucareros y los mineros medianos también invirtieron su cuota parte. Pero Banzer respondió con desprendimiento económico a sus acreedores políticos, claro que a costa de los fondos estatales y del porvenir de la nación. Si ya en el MNR de los últimos años se había organizado una casta succionadora de los fondos fiscales, con Banzer estas argucias se perfeccionaron y se convirtieron en el modo habitual del desarrollo de la empresa privada.

El Banco Central de Bolivia y el Banco Agrícola se convirtieron en las principales fuentes de capitalización de los sectores empresariales, de los burócratas militares y de los amigos influyentes del régimen. Los créditos de fomento al cultivo del algodón, no son más que un ejemplo de esta escandalosa manera de transferir el excedente nacional a una minoría que se enriquecía aceleradamente. Estos créditos, por sumas fabulosas en dólares, nunca fueron pagados por los deudores, ni aún en los contados casos en que fueron utilizados realmente en el algodón. Las operaciones de los "algodoneros" eran apenas una muestra de lo que sucedía como técnica consumada y sistema de gobierno, como un método ya clásico de la burguesía boliviana de "alimentarse" no de sus propias inversiones sino de los fondos del Estado. Referirse a estos casos de reiterada apropiación o expropiación privada del excedente nacional es importante, porque estos métodos de la burguesía boliviana fueron utilizados por Banzer como un verdadero programa, como un instrumento de desarrollo del empresariado nacional.

El proyecto banzerista se puso al servicio de la consolidación de los intereses económicos de la burguesía intermediaria. El Estado, con su eficiente concentración del poder, resultaba el gran dinamizador de la empresa privada. Pero este desangramiento de la economía estatal no estaba compensado por el desarrollo industrial del sector privado. En realidad, los beneficios recayeron, especialmente, en las fracciones más intermediarias y en los grupos financieros y comerciales más especulativos.

Estos métodos se constituyeron en "función" del Estado, fueron sistematizados y depurados. El gobierno introdujo la costumbre de los "decretos reservados" para autorizar compras o ventas de un volumen considerable sin los controles de la opinión pública. Quienes se beneficiaban con este tráfico eran, en primer lugar, los más altos burócratas militares convertidos en poderosa casta millonaria. Gracias a estos trucos, los altos oficiales de las Fuerzas Armadas pudieron entrar en sociedades y combinaciones con la empresa privada. Naturalmente, estos decretos reservados fueron rodeados del halo misterioso de la "seguridad nacional", pero eran negocios comunes y corrientes en los que intervenía el Estado para ser estafado. Son incontables los casos en que estos "decretos reservados" protegían con la coraza del secreto sólo a los negocios que, legalmente, no hubiesen sido posibles.

Pero no sólo así impulsaba el Estado la concentración del capital; contaba también con argucias legales, con la vía administrativa directa, con la "legitimidad" de la acción gubernamental. Tal el caso de la trans-

ferencia de empresas públicas rentables al sector privado. La Corporación Boliviana de Fomento (CBF) que tiene a su cargo ciertas industrias podría ser la base de un área social de peso en la economía. Empero, el papel que cumple la CBF es el de establecer estas empresas con recursos estatales, hacerlas rentables, para, finalmente, traspasarlas a la empresa privada. Es obvio que esta última, resulta así, ampliamente favorecida por el esfuerzo ajeno. Sin embargo, la empresa privada, paradójicamente, es antiestatista.

Bolivia participa en el mercado internacional del azúcar con una cuota comparativamente muy inferior a la de otros países productores. Sin embargo, en el país existen ingenios azucareros del Estado y de la empresa privada. Y son estos últimos los que se benefician con las fluctuaciones de los precios, porque exportan cuando las cotizaciones internacionales están en alza, o venden en el mercado interno cuando se produce el fenómeno inverso. De esta manera, la industria estatal subsidia siempre a la empresa privada. El Estado, especialmente en el período de Banzer, brindó todas las oportunidades al círculo burgués dominante.

Lo que hizo el gobierno fue enajenar una parte importante del excedente nacional en favor de la cúspide social, establecer un estricto orden jerárquico de clase en la distribución. Pero lo que se hacía con esto no era acelerar el desarrollo económico del país, sino simplemente, crear privilegios clasistas injertando riqueza en los sectores improductivos. Las clases altas empezaron a disfrutar de su reconcentrado poder económico; pero la misma inercia del capital hacía participar en las migajas a círculos cada vez más amplios de las clases medias. Es por eso que uno de los rasgos del régimen banzerista fue el ensanchamiento de las clases medias urbanas, su mayor inserción en el consumo.

Para entender este hecho hay que partir de la situación raramente afortunada que le tocó al gobierno de Banzer; una coyuntura internacional caracterizada por la elevación impresionante de los precios de las materias primas (minerales, petróleo y gas natural) y la contratación de créditos externos en una magnitud jamás vista en Bolivia; la deuda pública externa aumentó en una proporción de nueve veces y el ingreso de divisas por exportaciones casi se duplicó. Naturalmente, para las proporciones del país, había la sensación de una verdadera invasión de dólares. Sin embargo, los grupos que absorbían estos recursos no tenían la capacidad para transformarlos en actividad industrial: se levantaron costosos edificios y mansiones de lujo, las firmas importadoras saturaron el mercado, los negocios prosperaron; pero, no habían chimeneas que revelasen la presencia de fábricas. En todo caso, la opulencia de las clases dominantes no significaba la opulencia del país; era el espejismo de una economía de derroche construida sobre el cascarón vacío del subdesarrollo.

Mientras la burguesía construía su mundo opulento sobre el suelo movedizo de la dependencia y el atraso, el gobierno seguía exigiendo sacrificios al pueblo en "este momento del despegue" nacional. Los costos del "sacrificio" recaían sobre los obreros y los campesinos; el congelamiento de los salarios y el intercambio desigual entre el campo y la

ciudad ahondaban la depauperación de estas clases que de la "Nueva Bolivia" sólo conocían sus miserias. El gobierno había tenido un fácil acceso a los mercados financieros pero el país estaba viviendo de dinero prestado. Desde luego, los sectores más favorecidos en el reparto no dejaban escapar la oportunidad de exaltar la "prosperidad económica" o el *boom*, como les gustaba decir. ¿Y por qué no iban a hacerlo? Cada clase es egoísta con relación a otras; y más aún, esta clase que es egoísta con el país mismo. Por un lado, el oligopolio estaba satisfecho con su hartazgo de dólares que entraban al país para volver a salir definitivamente al extranjero formando cuentas bancarias privadas. Pero esta burguesía no sólo expropiaba el salario de los obreros (congelamiento de salarios), sino que estaba comiéndose al país por adelantado.

El *boom* no era otra cosa que la más intensa fase de apropiación que había habido hasta entonces en la formación de capitales. Gracias a un Estado convertido en "mecenas" de estos grupos, estaba realizándose un fenómeno de *atesoramiento* súbito que producía ricos y no capitalistas en el sentido industrial.

Los índices del crecimiento económico alcanzaban a un 6% después de 1973, pero no se había creado ninguna base productiva consistente. Como reconoce el mismo FMI, no hubo ninguna conexión entre financiamiento y desarrollo. ¿Qué podía ofrecerse al futuro inmediato del país? Solo la condición de deudor arruinado, acosado por la fría requisitoria de los acreedores. Sólo podía ofrecérselo, en una palabra, la crisis. Pero los grupos succionadores, embriagados con este bacanal de dólares, disfrazaban con supuestas inversiones los obsequios que recibían del Estado. De este modo, sin posibilidad de ahorro interno, la irresponsable empresa de este endeudamiento colosal conducía inexorablemente a la economía nacional al fondo de un pozo.

Actualmente, muchos de los más entusiastas panegiristas del gobierno de Banzer, ante la trágica situación económica de Bolivia, no pueden reprimir sus lamentos retrospectivos al período del gran derroche. Entonces, sin embargo, los áulicos y los tecnócratas se explayaban en demostrar al mundo que Bolivia atravesaba un *boom* sin precedentes.

Así, como lo que se llama en el derecho *enriquecimiento sin causa* formó parte de la rejerarquización de las clases, también las inversiones y las obras públicas contribuyeron a los bolsillos de las castas privilegiadas. Las "comisiones" y el tráfico de influencias, las fabulosas inversiones para erigir los "elefantes blancos", como las refinerías de petróleo sobredimensionadas y otras costosas obras sin justificación, beneficiaban a los negocios de los mismos círculos.

De este modo, el Estado seguía pagando los costos del desarrollo de una burguesía que nunca se proyectó a la actividad fabril.

En realidad, el *boom* era un dato contingente; ni los desembolsos de la banca internacional ni el incremento en el ingreso de divisas modificaron el estado de estancamiento de la producción. El Estado gastaba pero no invertía. Todo el deslumbramiento de las castas dirigentes no hacía más que ocultar con el velo de los intereses privados la patética

depauperación de la masa. En Bolivia, la miseria es tan ostentosa como la riqueza; pero en la época de Banzer la línea divisoria entre estos dos extremos se hizo abismal, categórica y absoluta. Nunca antes se había producido una concentración de la riqueza de un modo tan fácil y rápido; la producción andaba, como siempre, rezagada. Pero sobre el mundo de la pobreza se alzaban los palacetes del consumo suntuario y civilizado. La "Nueva Bolivia" era para unos pocos. El bienestar, tema de los panegiristas, sólo una nebulosa de esperanzas frustradas, frente al cual, el pueblo era un espectador extraño.

Bolivia se caracteriza por su extrema dependencia de las veleidades de la economía metropolitana. De pronto, las exportaciones chocaron con las contradicciones del mercado mundial, el auge de los precios se insumió en el incremento de los costos de producción y la industria del petróleo empezó a padecer los síndromes del agotamiento. Las esperanzas se ahogaron. Al entusiasmo con que se saludó el "despegue" le sucedió el tono patético de la destrucción de todas las esperanzas.

En realidad, los beneficios de la política de "orden, paz y trabajo", se habían concentrado intensamente en un solo sitio, en una sola clase. La hipertrofia del consumo suntuario y de las fracciones de la burguesía intermediaria era el principio del desequilibrio económico, pero también era el fundamento natural de clase en la base social del régimen.

Como había hecho Barrientos, también ahora se buscó seducir al campesinado, pero esta vez a través de la alianza con el MNR. Sin embargo, los campesinos del 71 no eran los mismos que los campesinos del 52; los diez y nueve años que separaban un momento del otro habían consolidado la pequeña producción y reforzado la conciencia parcelaria. Todavía era posible trazar una delgada línea divisoria entre el pacto militar campesino y la capacidad de reclutamiento del MNR, pero al poco tiempo el mismo Banzer se convenció de que podía prescindir de sus aliados civiles sin temer ninguna conmoción social. Cuando se expulsó al MNR del gobierno no pasó nada; el campesinado movimientista contempló con indiferencia el destierro de Paz Estenssoro, con la misma indiferencia que recibió la capitulación de 1964.

En realidad, el hecho que rompió la indiferencia campesina fue la matanza de Tolata y Epizana. La respuesta con tanques del ejército a un pacífico bloqueo de caminos removió los pilares en que se sostenía la dominación burocrática de los militares. No tiene nada de extraño, entonces, que las elecciones de 1978 se hubiesen caracterizado por el implacable rechazo de los campesinos al candidato de las Fuerzas Armadas. No fue sólo el hecho de la masacre de Epizana y Tolata lo que decidió la ruptura entre la autoridad del despotismo militar y la masa rural; este hecho no era más que la acción refleja de todo el proceso de organización de la economía y distribución del excedente nacional. Los reajustes monetarios y de los precios no alcanzaban a los campesinos y éstos veíanse cada vez más esquilados en su economía familiar. El mercado de la ciudad les era tan indispensable como adverso; en la medida en que la relación entre el campo y la ciudad se hacía más fluida,

mayor era la conciencia de la abismal desigualdad en el intercambio de los productos. Por sí sola, la posesión de la parcela ya no era suficiente. Pero más insuficiente aún, si los riesgos del encarecimiento de la vida ahondaban allí la miseria sin contemplaciones ni esperanzas. El pequeño productor necesitaba más y más del mercado urbano y mientras mayor era su vinculación, mayor resultaba su insatisfacción.

Entre la dictadura de Barrientos y la de Banzer hay una diferencia notable en el ritmo de la acumulación capitalista: mientras el uno está todavía atado a la fase agónica de la Revolución Nacional, el otro actúa en forma resuelta en la consolidación de la burguesía dependiente. Barrientos manipula con la adhesión campesina porque cuenta con un labriego no despertado del todo de las formas naturales de su economía; adormecido aún en el aislamiento de la parcela sus perspectivas y sus horizontes son inciertos. En cambio Banzer, al elevar a los sectores más parasitarios de la burguesía, hunde aún más la famélica economía campesina. Al excitar el desarrollo del consumo suntuario, profundiza la división entre el campo y la ciudad y acentúa el estado de depauperación de los indefensos parcelarios que venden a precios bajos y compran a precios siempre más altos.

La concepción elitista del Estado, profundamente arraigada en la burocracia militar, va desarticulando la relación entre el consenso y la autoridad. La tendencia del desarrollo estatal, a partir del 64, es la del reforzamiento de las formas coercitivas. Se aflojan los mecanismos de relacionamiento y de participación social, pero en la armazón total del Estado el gobierno adquiere un carácter despótico que restringe el papel de la sociedad civil. Queda mediatizada la opinión pública, la prensa amordazada, el derecho amputado; y el Estado se levanta como un monumento extraño y hostil a la población.

Paradójicamente, el gobierno banzerista era el intento más sólido de la estructuración de un poder burgués neto y al mismo tiempo la expresión más clara de la decadencia de la democracia burguesa. Los "partidos de la democracia", que organizaron la oposición al gobierno de Torres anatemizándolo por su "origen de facto", olvidaron por completo sus exigencias electorales. Eran "democráticos" contra Torres y antidemocráticos con Banzer. Esta dualidad empero es también explicable, porque al tener conciencia de su impotencia para preservar la unidad burguesa de la nación, la misma "democracia" conjuraba al "partido del orden": la dictadura burocrática de las Fuerzas Armadas. Un ejemplo notable del doble filo de la democracia es el mismo Paz Estenssoro, quien encubría su conspiración contra Torres con el argumento de una inmediata convocatoria electoral, pero consumado el golpe reaccionario del 21 de agosto capituló de sus nostalgias parlamentarias y adhirió decididamente al método dictatorial. Por una parte, los "partidos democráticos" abdicaban de la democracia; y por el otro, la burocracia militar ejercía su *vicariato* histórico sobre el cadáver insepulto de los viejos partidos que al renegar de sus principios iban destruyendo los cimientos de la democracia burguesa. En síntesis, la "democracia" inclinó la cabe-

za ante las cachiporras de la autoridad, se sometió y se plegó de buen grado a la dictadura, aceptando su razón, sus métodos y sus fines. Pero en la medida en que los partidos democráticos cediéndolo todo cedieron su misma razón de ser, perdieron su capacidad de unificar los intereses de las clases dominantes bajo la categoría de intereses políticos y nacionales; en otras palabras, de la democracia política.

Finalmente, la colosal deuda externa tenía que pagarse algún día. Los 3.600 millones de dólares contratados en la banca internacional pesan enormemente en una economía que no ha incentivado la producción. El pago de amortizaciones e intereses representa casi el 40 % del presupuesto nacional. Las empresas estatales entran en crisis. El petróleo baja en sus niveles de producción en una proporción del 5 %; el incremento de la producción que anunció Banzer quedó en nada. El año entró en la curva de su declinación. "Las nuevas refinerías, fundidoras y las plantas de procesamiento construidas por el gobierno para diversificar la economía, estaban cargadas con sobrecapacidad, aumentando los costos más allá de los niveles internacionales" (Informe del FMI). La llamada estrategia de la diversificación había creado un agudo estrangulamiento estructural de la economía boliviana. Para 1978, la mayoría de las inversiones disminuyó, se acabaron los préstamos a largo plazo y los bancos extranjeros los negaron por más de un año.

"El FMI se había vuelto el único recurso de financiamiento de Bolivia" (Informe del FMI).

En síntesis, el modelo autoritario de 1971-78 fue agresivo en la contratación de créditos, pero al no haber contado con un proyecto efectivamente nacional, lo que hizo fue acumular los materiales de la crisis económica y política. En su sentido político, destruyó las bases de la democracia política y concentró el poder en el ejército, convirtiéndolo en el factor más vulnerable de la crisis de Estado. Más adelante, en los próximos capítulos, veremos la naturaleza y los alcances de la crisis de Estado en una forma minuciosa. Por ahora, bástenos decir que el Estado, a lo largo de los últimos años, fracasada la tesis del MNR de la creación de una burguesía nacional independiente, se acomoda a los fines de la burguesía dependiente, se desgasta y entra en su fase de agotamiento. La crisis del Estado del 52, protagonizada fundamentalmente por la burocracia militar, parece colocarse en el punto preciso en que es posible una nueva convocatoria revolucionaria que someta a cambio, nuevamente, las relaciones de autoridad y las relaciones entre las clases.

Ahora, vemos otra vez, que el protagonista de la democracia no es la burguesía democrática sino (como en 1952) el pueblo, que unas veces se levanta triunfante para volver a caer derrotado, en una historia infortunada, es cierto, pero llena de trágica grandeza y heroísmo.

¹ Después de tres días de combate, el ejército capituló en la región de "La-ja", situada a pocos kilómetros de la ciudad de La Paz. La firma del acta de rendición puso fin a los combates y el MNR se hizo cargo del gobierno.

² La dirección del MNR había puesto en acción un golpe de estado contra la Junta Militar presidida por el general Hugo Ballivián. En el golpe participaba el Ministro del Interior, el oficial de carabineros, coronel Seleme. El golpe fracasó, pero el pueblo ya se había levantado y prosiguió la insurrección hasta el fin.

³ Afirmación de Carlos Montenegro, principal teórico del MNR. Citado por Mariano Baptista en su recopilación, *Montenegro desconocido*, Ed. Última Hora.

⁴ "Rosca", nombre que designaba a la oligarquía boliviana, la unión de los grandes mineros (Patiño, Hotschild y Aramayo) con los terratenientes. El nombre de "rosca" sugiere el carácter cerrado y hermético de la oligarquía.

⁵ La "Tesis de Pulacayo" aprobada seis años antes de la insurrección de abril, planteaba la transformación de la revolución democrática en revolución socialista, en un proceso acaudillado por el proletariado. La Tesis de Pulacayo tenía inspiración trotskista.

⁶ "POR" (Partido Obrero Revolucionario), partido trotskista que se caracterizó por su infatigable trabajo en los distritos mineros. A ellos se debía la Tesis de Pulacayo, sin embargo, los obreros mineros no llegaron a militar masivamente en el POR.

⁷ *El Presidente colgado*, escrito por Augusto Céspedes, otro de los teóricos del MNR.

⁸ Zavaleta, René, *El poder dual*.

⁹ Las fundiciones de estaño eran una importante bandera nacional que debió complementar la nacionalización de las minas. Patiño, socio mayoritario de la "William Harvey" en Inglaterra, se opuso a la instalación de las fundidoras en Bolivia y logró utilizar a los dirigentes movimientistas en el boycott de este propósito. Recién en el gobierno de Ovando (1969) se dan los pasos efectivos que culminan con la instalación del Ingenio. La empresa estatal a cargo de las fundiciones es ENAF (Empresa Nacional de Fundiciones).

¹⁰ Ayala Mercado, Ernesto, *¿Qué es la Revolución Boliviana?*

¹¹ Lora, Guillermo, *La Revolución Boliviana*.

¹² Lora, Guillermo, *La Revolución Boliviana*.

¹³ Ayala Mercado, Ernesto, *¿Qué es la Revolución Boliviana?*

¹⁴ García, Antonio, *La reforma agraria y el desarrollo social en Bolivia*.

¹⁵ Los "cuperos" eran los favoritos del régimen que podían disponer de las cuotas de productos que escaseaban para venderlos en el mercado a precio de especulación.

¹⁶ "Fondos de contrapartida" o la "ayuda americana" recibida en productos de primera necesidad.

¹⁷ "Mutún", rico yacimiento de hierro ubicado en la región oriental de Bolivia.

¹⁸ Efectivamente, se aprobó la Ley del Petróleo que, en los hechos, significó un instrumento de desnacionalización del petróleo. Gracias a esta ley, ingresó la Gulf a Bolivia.

¹⁹ En el ejército existía una célula del MNR. Barrientos era uno de los dirigentes de la célula militar del partido. Es por eso, incluso, que Barrientos fue impuesto por las Fuerzas Armadas como candidato vicepresidencial de Paz en una Convención partidaria.

²⁰ Esta confesión de Paz Estenssoro contrasta con el enorme optimismo que demostraba ante las multitudinarias concentraciones campesinas en su apoyo.

²¹ El "pacto militar-campesino" tuvo su apogeo durante Barrientos y sirvió para mantener a la masa rural bajo el dominio del ejército. Ahora se trata de resucitar este pacto pero los campesinos se resisten y menudean los pronunciamientos en pro de la ruptura del pacto militar-campesino.

²² Casi al final de la Revolución Nacional, la lucha entre regiones campesinas y los caciques alcanzó proporciones de tragedia. Los campesinos morían en luchas fratricidas que no tenían otra causa que la rivalidad de los caciques. El ejército tomó a su cargo la "pacificación del campo" y esto también sirvió para la popularidad de Barrientos.

²³ "El chullu y el poncho", elementos de la vestimenta campesina, eran entregados a los presidentes militares, en ceremonias organizadas por las concentraciones campesinas.

²⁴ Las matanzas de 1965 fueron parte de la consolidación de la autoridad del régimen militar de Barrientos. Estas masacres tuvieron lugar en La Paz y en los distritos mineros.

²⁵ La "masacre de San Juan", ocurrida en los centros mineros de Catavi y Siglo XX, durante los festejos de "San Juan" que los mineros celebran haciendo fogatas y bebiendo alrededor de ellas. Fueron sorprendidos en plena fiesta por la incursión del ejército.

²⁶ En octubre de 1970, el gobierno nacionalista de Ovando fue derrocado por un triunvirato militar de extrema derecha. A su vez el general Torres se alzó en la Fuerza Aérea en combinación con la huelga general de la COB, derrotando la tentativa del triunvirato.

II. Bolivia en el Cono Sur

El 21 de agosto de 1971: el golpe de Estado del coronel. Banzer no fue un hecho de simple importancia local. Fue el comienzo de la contramarcha reaccionaria en varios países. Después vinieron Bordaberry, Pinochet, Videla y Morales, hasta completar un cuadro de uniformes características; tan uniformes que en ocasión de la reunión en Brasilia entre Geissel, Banzer, Pinochet y Bordaberry, el dictador chileno se atrevió a formular la propuesta del "pacto antimarxista del Cono Sur". La situación había variado sustancialmente: si antes Torres, Allende y Velasco Alvarado, parecían abrir las puertas a la democracia argentina y uruguaya, ahora el cerrojo reaccionario terminaba completando su cerco de hierro. No es difícil explicarse esta simultaneidad y uniformidad de métodos e ideas, si se reconoce la existencia previa de una maquinaria estratégica común; pero la "solidaridad reaccionaria" de los ejércitos, la solidaridad política, ha resultado un hecho desproporcionadamente superior al de la solidaridad económica entre las naciones del Cono Sur. Los ejércitos han igualado sus doctrinas (doctrina de la seguridad nacional) sobre un continente económicamente desvinculado y disgregado sin verdaderos lazos materiales que articulen y complementen entre sí a las distintas economías nacionales. No es casual que, frente a los intentos de integración económica regional, los militares sean indiferentes sino adversarios como es el caso de Pinochet respecto del Acuerdo de Cartagena.

Brasil está próximo a cumplir los veinte años de dictadura militar, después de barrer con el experimento de Goulart. Pero el golpe de Estado de 1964 repercutió inmediatamente en Bolivia con la ruptura del proceso de la Revolución Nacional y el asalto golpista de Barrientos. No fue tampoco inesperado el apoyo brasileño al golpe de Banzer, el calendario golpista en Bolivia se distingue por su profusión, pero esta vez, como en 1964, se trataba de un asunto decisivo. El general brasileño Hugo Bethlem había desempeñado un importante papel desestabilizador a nivel continental del Gobierno de Torres: en junio de 1971, propugnaba una "intervención sobre Bolivia a manera de ejercer un protectorado o tutela", "una especie de protectorado a naciones como

Bolivia, por un período determinado de tiempo, una especie de tutela de sus hermanos mayores para que la integración de los países se haga aquí, con las naciones del mismo continente". Naturalmente, la reacción local no se molestó en rechazar las tesis de Bethlem; al contrario, se apoyó en ellas justificando su conspiración en la "inminente colonización de Bolivia" y la "defensa de la integridad territorial" amenazada.

Sobre todo, después del golpe de Banzer, se refuerza el "cliché" del "subimperialismo brasileño"; idea que pretende dar expresión gráfica a la política de sistemática injerencia del militarismo brasileño sobre algunos estados fronterizos. Los militares brasileños educados en la Escuela Superior de Guerra, con un sentimiento elitista arrogante, tratan de reorganizar su nación "saneando la política y la sociedad". Para ejercer su dominio en una proyección histórica estable, la dictadura inventa su propia poesía, se adorna de una simbología abundante en superlativos: "el milagro brasileño" o "el desarrollo de la industria moderna"; o sea, toda una ideología que está subyacente en el sueño de gran potencia.

Nada es casual en la política. La dictadura brasileña suplanta en el momento de su ocaso al nacionalismo populista inspirado por Vargas y asume conscientemente el sistema de acumulación y desarrollo del capitalismo dependiente. Theotonio dos Santos y Vania Bambirra dicen que el capitalismo dependiente definirá "una masiva inversión directa de capitales monopolísticos extranjeros en los sectores básicos de la economía brasileña, particularmente en el manufacturero". La gran empresa monopolística multinacional, que desempeña un papel gigantesco como factor aglutinador de la burguesía nacional en sus fracciones industrial, financiera y comercial, resulta, también, un factor de crecimiento industrial acelerado a la luz de la dependencia y en relación con las transformaciones operadas dentro de la propia economía imperialista internacional. El golpe de Estado de 1964 coincide con el momento, o con la coyuntura, en el que se producen, de manera más sustantiva, estas transformaciones del imperialismo. Cambia el sentido de la política de exportaciones; ya no sólo lo que había descrito Lenin: la exportación de capitales; ahora, como afirma Mandel: "las exportaciones de máquinas, de material de transporte y de bienes de equipo en general iban ocupando cada vez más el primer lugar". En otras palabras, el gran monopolio internacional "ya no se opone a la industrialización del Tercer Mundo". Claro que contribuyen a este cambio la creciente pugna por los mercados del capitalismo europeo, japonés y norteamericano, y los intereses de las transnacionales, que entran a jugar un rol decisivo en la producción manufacturera de América Latina.

El sueño del "milagro brasileño" coincidía con esta fase de acelerado crecimiento de la economía capitalista internacional. Coincidía con la insurgencia preponderante de las sociedades multinacionales como "forma de organización preponderante del capitalismo contemporáneo" y su dinámica autónoma y peculiar en su inserción en el fenómeno de

industrialización en el Tercer Mundo. Es por eso que los militares de la "sorbona brasileña" no recurren a eufemismos, hablan claramente del "desarrollo dependiente" como la forma que preconizan frente al derrocado "nacionalismo populista" que, como en todas partes, intentó sin conseguirlo un plan de sustitución de importaciones. Esta concepción económica tiene su remate en la política: el general Golbery do Couto e Silva, brillante estratega de la Escuela Superior de Guerra, es el más resuelto abogado de la dependencia y del imperialismo en cuanto factores concomitantes y en cuanto reconocimiento de las más crudas realidades. Couto e Silva llega a un curioso sofisma que adquiere carta de ciudadanía en la doctrina de los militares brasileños: la sobredeterminación de las fronteras ideológicas sobre las fronteras geográficas. En pocas palabras, era el corolario político de la paradoja económica del "desarrollo dependiente"; la sujeción consciente y deliberada a la supremacía global de Norteamérica. Lo que en política venía a traducirse en un estatus preferencial para el "desarrollo dependiente" del Brasil frente a los demás países subdesarrollados. Estuvo incluso de moda llamar el "satélite privilegiado" al Brasil, traduciendo lo que en términos más prosaicos podía definirse como "Estado gendarme". Para Couto e Silva "fuera del poder no hay salvación" y de este modo, identificaba la política con la doctrina de la "seguridad nacional" y con un "destino manifiesto" en las responsabilidades del continente. Es obvio que la "seguridad nacional" debía desembocar en la "seguridad colectiva", en la constitución de un bloque de naciones.

Tampoco era ajeno al sistema del 64 el impulso de "exportar el modelo brasileño" de "seguridad y desarrollo". En gran medida lo de 1964 no sólo había sido una "contrarrevolución preventiva" en el Brasil, no tardaría en verse su gigantesca importancia continental. Fruto, tanto del peso específico de la economía brasileña en América Latina como de su indiscutible significación política. Entró en el nivel de las especulaciones teóricas la célebre tesis del "subimperialismo" que, pese a sus contrasentidos implícitos, se difundió ampliamente en los círculos intelectuales y políticos. Vania Bambirra y Theotonio dos Santos no se niegan a compartir estos puntos de vista: "De ahí que su lucha por la expansión internacional asuma un sello subimperialista, es decir, la implementación de una política de dominio compartido con otras naciones, dentro de las reglas del juego de la gran potencia imperial, lo que por cierto limita las posibilidades de maniobrar de la burguesía brasileña y define su papel subyugado de clase dominante dominada".¹ Por supuesto la fase subimperialista está apenas en su comienzo y tiene un largo recorrido por realizar para convertirse en realidad histórica... "Sus síntomas son muy reveladores en muchos aspectos que desnudan la injerencia del Brasil en la economía de los países fronterizos".² Empero, la paradoja del "subimperialismo" no es una paradoja simple. Teóricamente, el concepto podría ser rechazado ipso-facto: el mercado interior del Brasil está lejos de considerarse saturado; la exportación de capitales, como forma sistemática del funcionamiento del capitalismo en

expansión, no existe; las exportaciones de productos primarios y no primarios están en parte dedicados al servicio de una deuda externa colosal. "En otras palabras, hay una pauta imperialista (en la fase de industrialización de la periferia) y no subimperialista (o sea, no autónoma en ese aspecto) que lleva a replantear la situación de la economía brasileña como una economía de exportación (de productos agrominerales e industrializados) que, simultáneamente, expande el mercado interno, concentra capitales, se industrializa, aumenta sus deudas e intensifica sus exportaciones y su dependencia hacia el exterior".³ La discusión sobre el carácter "subimperialista" o no del nuevo curso brasileño no pudo escapar a la preocupación de economistas, políticos y sociólogos. Hubo, es cierto, una marcada exageración en el tono del análisis, resulta forzado concederle a esta amplia gama de situaciones económicas, sociales y políticas, que se desenvuelven bajo el autoritarismo militar, el carácter de una nueva forma de imperialismo, que no otra cosa sería el "subimperialismo". Las "fronteras ideológicas" que salen de la cabeza de Couto no pueden tener otra validez que la de la realidad hegemónica mundial de Norteamérica imposible de ser compartida con cualquiera de los hijos privilegiados del Tercer Mundo.

Pero aunque el estricto rigor científico del marxismo podría oponerse a la idea del "subimperialismo", hay que reconocer, sin embargo, la existencia de nuevas realidades que no han agotado su tratamiento teórico. Tal es el caso, también, del Estado autoritario latinoamericano, imprecisamente definido como fascismo. Volviendo, empero, al tema del subimperialismo, cabe destacar que los sociólogos y politicólogos brasileños y latinoamericanos no han podido escapar a su discusión. En una réplica a Cardoso, Julio Labastida⁴ sostiene que en el caso brasileño es aplicable el concepto de "subimperialismo": "Por otra parte, Brasil está tratando de controlar fuentes de energía y materias primas centrándose en dos objetivos principales: 1) control del potencial hidroeléctrico de la Cuenca del Plata y 2) el mineral de hierro en Bolivia... Pero es precisamente esa característica, o sea el papel intermediario de la burguesía local asociada y del Estado nacional y la función de *trampolín* que cumple la economía periférica, lo que le da su carácter *subimperialista* ya que *no imperialista*... la política externa brasileña traduce el propósito del Brasil de desempeñar el papel de socio subordinado pero privilegiado de los Estados Unidos de América Latina, particularmente en el Cono Sur". Es cierto que el concepto de "subimperialismo" si no abusivo como dice Cardoso, es extremado para establecer los límites y alcances de la interrelación entre el proceso interno de acumulación acelerada bajo el control de las transnacionales y la influencia política sobre otros estados. Subrayo *influencia política*, porque a diferencia de lo que debe entenderse por *imperialismo clásico* aquí no aparece como una ley de la necesidad la razón económica. Los dos casos que anota Labastida casi nada tienen que ver con el imperialismo económico; el mineral de hierro en Bolivia es accesorio para el Brasil, lo que interesan son los hidrocarburos que además de reducir su dependencia del Medio

Oriente representarían una gran solución a la industria petroquímica de São Paulo.

Brasil ofrece todas las ventajas al capital internacional cuando las transnacionales empiezan a jugar su papel preponderante, introduciendo modificaciones en la división internacional del trabajo. ¿Pero, por qué la era de los militares coincide casi cronológicamente con la era de las transnacionales? Es obvio que las condiciones que el Brasil podía ofrecer no eran posibles en Europa: un mercado barato de la fuerza de trabajo, materias primas a bajo costo y la posibilidad de mercados ampliados de consumo. Hay que añadir que el Estado autoritario podía, además, disponer de la fuerza de trabajo estableciendo un régimen laboral excepcionalmente rígido como en los albores del capitalismo. Las transnacionales pusieron los ojos en Estados de la magnitud nacional del Brasil, Argentina, México o Venezuela, países de tradición manufacturera y de ingentes recursos naturales. Bolivia, en la época de Bánzer, se esforzó por atraer a las transnacionales con una ley de inversiones absolutamente liberal y entreguista sin conseguir resultado alguno. Era lógico; el desarrollo del capitalismo no se basa en razones filantrópicas sino en estrictas leyes de la necesidad económica, las necesidades de la reproducción ampliada del capital. La exportación tecnológica al Brasil —aun de la tecnología de segundo orden— entusiasmó a la burguesía que se asoció al capital multinacional, en la forma de las *joint ventures* (aunque el *know-how* tecnológico no esté bajo su control), a la élite militar que impulsó las "sociedades mixtas" y a la tecnocracia que se sentía embelesada con los índices del crecimiento. El "milagro" de la producción automovilística, de la maquinaria, de la industria de guerra, de las manufacturas livianas y de la petroquímica, fue interpretado como el "milagro brasileño", como la razón de las razones del orgullo nacional. Pero el crecimiento económico del Brasil no era más que un reflejo de la aceleración del capitalismo mundial; la parte que llegaba y se realizaba era el *subproducto*, de un "largo período de crecimiento acelerado de esta economía".

El control de la economía por el capital extranjero en la magnitud brasileña hizo posible una nueva división de funciones entre los países de capitalismo avanzado —países centrales como dicen los sociólogos— y los países dependientes más favorecidos de América Latina que se reinsertan en la economía mundial como importadores de tecnología y de bienes de equipo, para participar en mejores condiciones del fenómeno de la acumulación mundial. El trasfondo de este nuevo giro en el desarrollo desigual debe ser encontrado en las modificaciones que se presentan en la economía imperialista, asimismo en "la índole económica particular del crecimiento industrial" producido en los últimos veinte años. Lo cierto es que estas formas de alianza del capital extranjero con el capital autóctono, la aceleración del crecimiento industrial y la reconcentración del capital en algunos pocos países dependientes son efectos del desplazamiento en el seno del imperialismo de los intereses tradicionales exportadores de bienes de consumo, en favor de los expor-

tadores de bienes de equipo, máquinas y medios de transporte. Consecuencia de estas contradicciones y desplazamientos es la posibilidad de una "industrialización limitada" en los países más importantes de América Latina. Juega no sólo el interés competitivo de las multinacionales que actúan en la previsión de asegurarse mercados por largos años y entrar a la concurrencia mundial con mayores ventajas, sino también las propias leyes ciegas de la expansión capitalista. Las transformaciones ocurridas en el Brasil están en este nuevo marco de la dependencia y como lo anota de una manera mucho más general Mandel: "La nueva oligarquía está fundada sobre una alianza entre el capital imperialista y unas clases poseedoras autóctonas, cuyo interés común es ahora el de un crecimiento y una industrialización, limitados pero reales, de los principales países de América Latina. En el seno del capital imperialista, las sociedades multinacionales y los bancos interesados en esta industrialización y en la fabricación manufacturera local reemplazan como fuerza preponderante a las sociedades extranjeras especializadas en la producción de materias primas para el mercado mundial y los monopolios privados de los servicios públicos". Mandel llama "nueva oligarquía" a esta fracción que no puede ser otra que la fracción industrial de la burguesía nativa, que ocupa una posición de punta en la alianza dominante. Es esta nueva oligarquía la que logra una fusión personal con el capital extranjero a través de *joint ventures* definiendo el espacio industrial para sí mismo. El "satélite privilegiado", "socio privilegiado", o como quiera que se le llame, viene a ser el producto del desarrollo capitalista subordinado en aquellas regiones donde se encuentra en plena expansión.

El esfuerzo por ubicar históricamente la nueva fase del "capitalismo dependiente", sirve para interpretar los cambios políticos y sus influencias internacionales recíprocas en este momento o en esta coyuntura de América Latina. Es tan importante la dilucidación del carácter del capitalismo dependiente que es motivo de preocupación creciente en los investigadores y no pocas veces de inquietud intuitiva en los dirigentes políticos de la izquierda tan inclinados al estilo de la vaguedad libresca. Motivo, también, no sólo de esclarecimiento histórico sino de ácida polémica entre quienes, como Cardoso, ven en estos procesos económicos la "revolución burguesa de los países dependientes", y quienes con justa razón, alzan su grito de protesta contra esta generosa y benevolente apreciación de una nueva y no menos tremenda fase de la dependencia. Y si vamos más lejos aún, este modo de "internacionalización del mercado interno" si resultare un *modo de ser* de las economías dependientes, sus formas particulares de *industrialización limitada* no han alcanzado, ni alcanzan en todo caso a la mayoría de los países latinoamericanos cuya regla es el estancamiento, sin posibilidades de actuar en este fenómeno de modernización refleja. Es por eso que la individualización del Brasil permite una analogía restringida con la Argentina, México y Venezuela, cada uno con sus particularidades específicas naturalmente; en lo demás, en el panorama continental, sin exclusión de estos países, lo que predomina es la regla del desarrollo desigual.

Otra cosa que hay que despejar es el puntilloso temor, a veces justificado, a las generalizaciones groseras; de ahí que tampoco esta "modernización refleja" sea resultado de la traslación mecánica del capitalismo de "afuera" al capitalismo de "adentro". Si es posible ubicar al "milagro brasileño", así entre comillas, en un momento dado del desarrollo del capitalismo mundial, es por la realidad incontestable de la unidad mundial del capitalismo; y tan cierto es esto que el crecimiento inducido en Brasil por una fase mundial del crecimiento empieza a aflojar, demostrando trágicamente su naturaleza coyuntural.

Tomo nuevamente a Mandel para hacerme cargo de su lúcida apreciación: "Toda la historia del capitalismo confirma, sin embargo, que los largos períodos de crecimiento acelerado de la economía capitalista internacional son en general de 20 a 25 años, y jamás de duración ilimitada. Los indicios según los cuales el término de este período ha llegado ya, o está a punto de manifestarse, se multiplican: disminución de las tasas de crecimiento de la producción industrial a largo plazo, caída de la tasa media de provecho, multiplicación de las recesiones y tendencias a su sincronización internacional progresiva; número creciente de ramas industriales con una tasa importante y duradera de capacidad de producción excedente". Este negro augurio fue lanzado hace seis años, en 1977⁵ cuando comenzaba a asomar la crisis económica que envuelve hoy al mundo. Ahora, los signos de salud se han convertido en síntomas de enfermedad. Pero continúo con el orden preestablecido. ¿Hasta dónde el entusiasmo nacionalista del poder militar podía abrigar esperanzas en un curso estable y duradero? No hay duda de que ésta es la otra gran experiencia burguesa que sucede a la etapa de "sustitución de importaciones" realizada en el marco del nacionalismo económico. En este caso se entra en un nuevo sistema de alianzas de clases con el rol preponderante del capital extranjero en el momento más favorable para alcanzar altos índices de crecimiento económico. Esta forma de alianzas con el capital extranjero, este tipo de industrialización, sin embargo, fueron sólo posibles en países de alta concentración urbana que estaban en condiciones de absorber el flujo de inversiones extranjeras. Es dentro de este contexto que se afianza el poder militar, que el Estado autoritario surgió como un producto político de las necesidades inexorables del capitalismo monopolista internacional en cuanto forma de cohesión social impositiva.

La cuestión de la dependencia no es un dato secundario, es un elemento fundamental de la realidad económica. Tampoco es un elemento inerte en las relaciones internacionales. Cuando insistimos en que el caso del Brasil y su "subimperialismo" resulta una consecuencia de las modificaciones en la división internacional del trabajo, objetamos que en el plano estrictamente científico pueda hablarse de "subimperialismo", pero tampoco rechazamos que en el terreno de una realidad teóricamente poco elaborada existan rasgos peculiares y nuevos en las hegemonías de unas naciones sobre otras. Brasil entró en una fase de intensa desnacionalización de su economía, lo que en otros términos se traduce en acen-

tuación y perfeccionamiento del sistema de dependencia: la asimilación de su naturaleza social y política a las nuevas necesidades del capitalismo mundial. Ya se ha indicado que en ello juega un papel de primer orden "la corporación monopolista gigante, de base nacional pero dispuesta en realidad para el dominio del mundo". Se sabe bien que el Brasil no es el único sitio donde se produce este fenómeno de intensa concentración y expansión monopolista, pero lo que nos interesa es llegar a las causas del lugar político que ocupa en la coyuntura de América Latina y el Cono Sur. Y para entender mejor su preponderante influencia en las relaciones internacionales de la región, se hace indispensable derivar este fenómeno económico al fenómeno político.

Sin llevar las analogías a un exceso grosero —así como el interés de los monopolios llevó al poder a Hitler—, ahora son las fuerzas económicas de similar signo las que están en la base del "Estado autoritario latinoamericano" que sin ser fascista tiene de común con el fascismo que "la burguesía recurre a su expropiación política (abolición de la democracia) para evitar su expropiación económica". Todos los intentos de independencia económica, de desarrollo autónomo, a partir incluso de alianzas entre pueblo y sectores burgueses (populismo) como ocurrió con Goulart, parecen asfixiados por el régimen de hierro del Estado autoritario.

No se debe tampoco confundir este concepto del "Estado autoritario" con el clásico gobierno gorila latinoamericano. Aquí hay un grado de coherencia en la dominación de clase mucho más explícito y contundente. En el fondo hay una verdadera estrategia que, como lo señalan sus mismos protagonistas militares, arranca del "capitalismo dependiente" para llegar al "desarrollo dependiente" como realidad inobjetable de la división del mundo. El "poder militar" en este caso, no es sólo ya un "poder de excepción" limitado y provisorio, que lo es sólo en la medida de la respuesta al estado de insurgencia popular bajo Goulart; es un poder establecido y estable que asume una tarea nacional. Es por eso que los militares de "la sorbona" empiezan manipulando símbolos de "grandeza nacional" y del país "gran potencia", identificándose ellos mismos con el destino nacional. Pero como el capitalismo dependiente es sólo un "subproducto" del capitalismo, la sociedad de consumo de masas —la rebelión de las masas en el sentido de Ortega y Gasset— queda en una ilusión muerta, en un deseo irrealizado. La "grandeza nacional" en medio del drama de la marginalidad, de las profundas, abruptas y brutales desigualdades en el ritmo del desarrollo, es una grandeza de oropeles. Pero el Brasil se alza como un flamante taller en medio de su propio desarrollo. Entre el subdesarrollo de Bolivia, Paraguay y Perú, como un "modelo de exportación" y como el primer eslabón de la "integración latinoamericana", una integración orientada y fomentada por la General Motors, la Ford o la Kaiser. Así como para los ingleses su primer artículo de exportación fue el "libre comercio", la élite brasileña supuso que su primer artículo de exportación era su propio modelo económico y político.

En una región (el Cono Sur) donde dos grandes países como el Brasil y la Argentina comparten sus fronteras con los llamados "Estados menores", es obvio que la trama de intereses nacionales opuestos y de influencias particularmente intensas tengan mucho que ver con la política doméstica de los países. Tomando en su sentido popular el término de "subimperialismo", no es exagerado colegir que una de las principales víctimas de esta "política de gran potencia" fue precisamente Bolivia. Pero algo más tendrá que decirse: la diplomacia brasileña aplicada al "intervencionismo" en las naciones vecinas, resultaba un reflejo particular del hecho global de la dependencia. Es en los años de 1969, cuando la política exterior del Brasil muestra su rostro agresivo; cuando sucesivamente el Perú, Bolivia y Chile irán configurando un nuevo cuadro de tentativas nacionales en el plano económico y de movimientos sociales revolucionarios.

La coyuntura que maduró en 1971-73 en el Cono Sur es como si la historia abreviada de varios decenios de lucha se hubiese concentrado casi simultáneamente en varios países: Bolivia, Chile, Perú y posteriormente en la Argentina y Uruguay.

Sobre todo Bolivia y Chile, que cuentan con un movimiento obrero organizado y unificado y con una tradición política de peso, habían entrado en el ritmo de los grandes procesos históricos emancipadores. Las formas y los métodos que asimiló el proceso boliviano eran distintos a los de Chile; estaban aquí resueltos los obstáculos jurídicos de la democracia representativa, de la caparazón legal de la dominación de clase que para el gobierno de Allende fueron fatídicos. Pero así como se demostraban dos cosas de capital importancia: la simultaneidad de la acción histórica y el vigor de las respuestas internas, se demostró, también, a la postre, el poderío de la resistencia reaccionaria y la versatilidad de los recursos imperialistas. El nuevo curso fue roto en su eslabón más débil: Bolivia.

Hacia mediados de 1971, la conspiración interna estaba perfectamente eslabonada con los factores externos: la parte contrarrevolucionaria de las Fuerzas Armadas actuaba aunadamente con el "militarismo continental" para interrumpir la corriente que avanzaba adelante. Lo de Bethlem, lo de su idea peregrina del "protectorado" sólo era la parte de la guerra psicológica de un mecanismo más complicado que empezaba a armarse, un aspecto en la decisión superior de interrumpir el *continuum* geográfico e histórico de tan importante porción continental. Bethlem era, y la lógica política lo confirma, un portavoz oficioso del militarismo brasileño que, repitiendo cosas triviales, "no podía permitir una experiencia comunista en sus mismas fronteras".

En todos los casos, la experiencia popular resultó un lapso demasiado breve. Y si se tienen en cuenta los efectos de simultaneidad en aquel afortunado realineamiento político y las condiciones para definir nuevos conceptos de solidaridad internacional sobre la marcha misma de los acontecimientos, había elementos firmes y consistentes de optimismo. En Bolivia, una huelga general de la Central Obrera engranó con

el pronunciamiento militar progresista del general Torres y culminó en un pacto entre gobierno y movimiento obrero que hizo posible una ampliación inesperada del proceso popular. En el Perú, los militares de Velasco Alvarado pusieron término a la democracia conservadora de Belaúnde, nacionalizando, en el acto, compañías norteamericanas petroleras y pesqueras. En Chile, la coalición socialista-comunista había llegado al gobierno por el método democrático del sufragio. En los tres países se estaba operando un proceso de nacionalización de la economía, privando de sus viejos privilegios al tradicional poder extranjero. Nacionalizaciones, por un lado, y movimiento revolucionario, por otro, que actuaban en un redespertar de las masas populares. Derrito del cuadro general del Cono Sur, podía, y en efecto era así, hablarse del comienzo de una fase histórica que superaba el habitual aislacionismo y localismo de los experimentos revolucionarios anteriores.

Lo que hacían Torres, Allende, e incluso el propio Velasco Alvarado era el reverso de la medalla de lo que estaba ocurriendo en el Brasil. La pelea estaba planteada contra los grandes consorcios: en Bolivia, la Gulf Oil y la IMPC; en Chile, los grandes intereses del cobre. En unos casos, la nación marchaba triunfalmente hacia la reconquista de su propio suelo, de su propio territorio económico; en el otro, había triunfado el híbrido acuerdo de los intereses compartidos con el imperialismo. La propia naturaleza, en suma, del poder militar en el Brasil entraba en un antagonismo decisivo e irreconciliable con su "zona geopolítica de influencia", que según sus estrategias comprende a los territorios que separan el Atlántico del Pacífico. Seguramente los "estrategas del este" percibían que, desde el punto de vista de su ambiciosa ilusión de una "marcha al oeste", se estaba produciendo un peligroso vacío que resolvía una solución de continuidad política en la realidad geográfica. Cuando los militares piensan en términos continentales la geopolítica deja de ser un embeleso; en este caso, el interés brasileño era un interés básicamente estratégico: el control "subimperialista" de las llanuras tropicales y de la plataforma altiplánica de Bolivia como espacio vital para entrar en contacto con el extenso litoral chileno. Pero el interés geopolítico del Brasil se traducía, en último análisis, en el designio general del sistema "occidental y cristiano" cuya consolidación se traduce en la permanencia de los trusts y los oligopolios nativos y extranjeros. El osado desafío de Bolivia y Chile estaba sentenciado por lo que era y por lo que podía ser.

La contrarrevolución que se orquestó en Bolivia no innovó los viejos argumentos, pero, curiosamente, empleó una lógica novedosa. Las fuerzas de la contrarrevolución, la "cosa nostra militar empresarial" como dijo Marcelo Quiroga, estaban "salvando" al país de una "inminente polonización". Los estados vecinos, particularmente el Brasil, no permitirían un "experimento marxista" que pusiera en riesgo el sistema y su propia estabilidad política y social. Bolivia, a su vez, se estaba acercando al momento en que sería desmembrada y repartida por las naciones vecinas. Esta confabulación "patriótica" descubría por sí misma

la madurez y contundencia de la solidaridad reaccionaria continental entre los militares bolivianos y brasileños. ¿Qué hubiese ocurrido si el golpe de Estado del general Banzer fracasaba en La Paz y se localizaba exitosamente en Santa Cruz? El mismo Banzer, ya en el gobierno, reconoció que entre sus planes figuraba el recurso de proclamar a Cochabamba⁶ la capital, obviamente de la "nueva república" seccionada del altiplano. En otras palabras, si la confabulación "patriótica" no capturaba el poder en todo el territorio nacional, quedaba el recurso de convertir a Santa Cruz y Cochabamba en una "Corea del Sur" que, con el reconocimiento y solidaridad del Brasil y otros Estados pudiera lanzarse a la conquista de la parte occidental del país. Por propia confesión, los verdaderos "polonizadores" estaban adentro y no afuera. Esta sola hipótesis, por lo demás de base real, basta para comprender la gravedad del entendimiento conspirativo internacional que culminó con la victoria de Banzer.

La caída del gobierno de Torres fue un hecho decisivo para Chile, para el ulterior encuadramiento militar en la Argentina y la clausura de la democracia en el Uruguay. Roto el hilo de la continuidad revolucionaria, Chile quedó aislado por una correlación internacional adversa a partir de la "entente" Brasil, Bolivia y Paraguay. Banzer apareció automáticamente ligado a la estrategia brasileña; en los documentos reservados que suscribió con su colega el 22 de mayo de 1974, se descubre y se revela la enorme importancia de los sucesos bolivianos en los planes del Brasil. Estos documentos, en apariencia encuadrados a las habituales relaciones comerciales entre dos Estados, no habrían sido suscritos con tanta agilidad y eficacia de no estar de por medio las características acentuadamente ideológicas del régimen Banzer. Más allá de toda apariencia, tales precompromisos tienen una indudable importancia estratégica para Brasilia. Figura allí el propósito del Brasil de elaborar los estudios de ingeniería para la construcción de una vía ferroviaria que vincule las ciudades de Santa Cruz y Cochabamba y un camino entre Puerto Benegas y Puerto Suárez.⁷ Antes, en abril de 1972, durante la entrevista de Banzer y Garrastazú Médici en la ciudad de Corumbá, se adelantó la "constitución de grupos mixtos de trabajo para la realización de estudios de factibilidad destinados a la creación de complejos industriales boliviano-brasileños para el aprovechamiento de recursos naturales de ambos países". El otro capítulo es la entrevista Banzer-Pinochet en Charaña,⁸ el 8 de octubre de 1975, que no fue sino resultado de la reunión previa en Brasilia entre Geisel, Pinochet, Bordaberry y Banzer, en la que quedó trazada la política acerca del problema portuario de Bolivia.

Esta sucesión de acontecimientos era resultado de un plan que empezó a funcionar desde la misma caída del general Torres. Y es profundamente revelador del papel que juega el nuevo régimen boliviano para la política expansionista del Brasil. La declaración de Charaña, que dio comienzo al restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Bolivia y Chile y al esfuerzo más importante de Brasil y Bolivia por neutralizar el aislamiento internacional de Pinochet, tenía por objeto dar cur-

so a las tratativas boliviano-chilenas para "resolver" el problema "portuario" de Bolivia sobre la base de un posible canje territorial. Sin embargo, los mismos hechos iban a demostrar que la verdadera inspiración de estas negociaciones no estaba en la solución de la "cuestión mediterránea" que, en el fondo, no era más que la retórica que adornaba los verdaderos propósitos de Brasil de ejecutar su gran proyecto ferroviario y vial para llegar a la costa del Pacífico por el camino más directo. Y si se revisa el contenido de las tres entrevistas que Banzer sostiene con las autoridades del país vecino, se ve que detrás de la complejidad de los varios proyectos económicos y del "empujón" para el problema marítimo de Bolivia hay una constante: caminos y gas natural. En cambio, para Pinochet, el aval del país históricamente "mutilado" por Chile, significaba hablar con fuerza en los organismos internacionales presentando "una nueva cara" ante la comunidad mundial.

Lo del puerto de Bolivia, además de una cuestión accesorio para toda esta élite militar, resultaba inviable en los hechos desde todos los puntos de vista: material, técnico y político. El Brasil, estaba vivamente interesado en el restablecimiento de las relaciones entre La Paz y Santiago tanto por el peso de las razones ideológicas como porque se quería apurar la conexión vial entre las naciones; por su parte, Banzer, actuó no en la línea del "interés nacional" sino de las "coincidencias ideológicas" que él mismo, arrogantemente, las subrayaba en sus arengas públicas, puesto que se sentía parte — ¡y vaya con qué socarronería! — del nuevo alineamiento dictatorial del Cono Sur. La traidora posición de Banzer fue vencida por una poderosa ola de opinión pública que denunciaba el fraude; que rechazaba el juego de impacientes contactos y grises resultados, en esta al mismo tiempo ingenua y maliciosa aventura diplomática. Las cosas con Chile volvieron a fojas cero.

Si bien, sin embargo, toda la "política portuaria" terminó en un resonante fracaso, quedaron en pie las declaraciones, cartas de intenciones y compromisos acerca de la "creación de complejos industriales boliviano-brasileños para el aprovechamiento de recursos naturales de ambos países". Pero ¿qué recursos naturales? Si Bolivia incrementa sus exportaciones de gas natural (actualmente sólo vende a la Argentina) con destino al mercado brasileño, es probable dentro de veinte años el completo vaciamiento de sus yacimientos. Lo que en otras palabras significaría la renuncia a su potencial industrialización en base a la petroquímica y a la siderurgia. El lenguaje, empero, de las negociaciones que se iniciaron con Banzer pretende disfrazar con una ampulosa mezcla de planes y programas un hecho bastante simple: la operación de compra-venta. A diferencia del esquema grosero y sin matices de las negociaciones del "puerto y el canje territorial", este lado del problema está matizado por toda una suerte de ofertas tentadoras para el "desarrollo" de Bolivia. Brasil quiere el gas, pero para obtenerlo o para que la entrega no choque con fuertes resistencias en Bolivia, promete cooperar para levantar el complejo industrial siderúrgico del Mutun⁹ y apoyar la instalación de plantas petroquímicas; promete también com-

prar la tercera parte de los productos: hierro, cemento, abonos químicos, etc., para su propio mercado donde la industria propia produce más barato.

Una vez concluido el gasoducto Santa Cruz-San Pablo, toda esta envoltura que sirve para tranquilizar la conciencia del entreguismo boliviano quedará en nada, se esfumará como se esfuman los planes que no tienen sentido en la lógica económica. El verdadero interés brasileño nada tiene que ver con la siderurgia o la petroquímica bolivianas; está en el gas natural que le permitiría un flujo seguro de por lo menos veinte años a la industria petroquímica de San Pablo y, eso sí, el apoyo a una red vial y ferroviaria sobre Bolivia que desarrolle su expansión comercial en los países del Pacífico.

Volviendo, empero, a la raíz de la cuestión, este anecdótico de los complejos precompromisos económicos entre Bolivia y Brasil demuestra hasta qué punto era importante para el régimen brasileño el derrocamiento de Torres y el de Allende. Pero algo más es necesario agregar: la operación "Charaña", montada en la misma Brasilia, tenía que culminar (como en el juego del billar) en el "rebote" en la tercera bola: el Perú. El "puerto enclave" de Bolivia sobre ex-territorios peruanos, situados históricamente en una zona incierta y en una frontera caliente, le habría servido a Chile no sólo para liquidar definitivamente su pleito latente con el Perú sino también para romper su continuidad fronteriza con este país en esa región del Pacífico. El "puerto" era técnicamente un absurdo para Bolivia¹⁰ pero para el Perú era políticamente inadmisible además de que, siendo el tercer Estado interesado por el Tratado de Ancón,¹¹ ni siquiera fue previamente consultado. Toda la hojarasca del "puerto" y del "complejo industrial del Mutun" cubrían una solapada red de intrigas internacionales y una bien montada conspiración que tenía por centro y objetivo el Cono Sur Latinoamericano. Después de Torres vino Allende. El complot contra el gobierno popular de Chile se ejecutó en un amplio escenario internacional.

El régimen autoritario de Pinochet, su fugaz entrelazamiento con la "entente" Bolivia-Brasil resultó decisivo en la nueva fisonomía del Cono Sur. Pero ¿cuál fue el resultado histórico de esta alineación de fuerzas? Lo que en Chile había venido cumpliéndose dentro de una arrolladora ejecución del programa de la UP (el rescate de la riqueza nacional para la nación) terminó en un abrupto retroceso, en una verdadera "restauración" de los "derechos" de las transnacionales, en la revocatoria de todo lo cumplido y en el restablecimiento de los viejos intereses. Sería exagerado conceder a la sola acción externa (transnacionales y juego de intereses internacionales) todo el peso de la decisión sobre los acontecimientos; no se trata de eso. Se trata de colocar a las piezas internacionales en el lugar que les corresponde en esta aguda y crítica fase que está viviendo América Latina. De subrayar la importancia — tanto mayor cuanto más exacerbadas aparecen las contradicciones en el terreno internacional — de los factores del equilibrio y desequilibrio de diversos hechos que sobrepasan el estricto ámbito nacional. La mano de las

transnacionales (ITT) actuó desembozadamente en Chile, y Banzer, desde una posición internacional de fuerza sostenida por Brasil y EE.UU., fue un activo cómplice en el entrenamiento en Santa Cruz de fuerzas irregulares de derecha. La posición fronteriza de Bolivia respecto de Chile fue utilizada en la logística conspirativa de la unión reaccionaria internacional. El sentimiento estrecho, localista y "chilenista" de los protagonistas de la UP, su entusiasmo por la experiencia "excepcional" de su camino democrático y la casi sagrada posternación a los valores institucionales del ejército constitucionalista y de la democracia contrastaba con el tremendo aparato que se había montado dentro y fuera de sus fronteras para llegar, como se llegó, al epílogo sangriento y al terrible holocausto del 11 de setiembre.

A lo largo de estas páginas estamos tomando parte importante del papel del Brasil en el acontecer político del Cono Sur. Hay una razón, el largo período militar ha consolidado un tipo de Estado que aquí alcanza sus rasgos más estables, convirtiéndolo en el "Estado tipo" de lo que es posible generalizar como "Estado autoritario latinoamericano". Además existe otra razón, la permanencia del "Estado autoritario" y el peso específico histórico y económico de esta nación en el hemisferio, hacen del Brasil el centro de las influencias hegemónicas con un gran poder de irradiación ideológica y política. Ningún país es una isla en el estado actual de la economía mundial y mucho más si por ahora se asiste a una creciente internacionalización del capital. Es por eso que el concepto de "subimperialismo" pese a su incertidumbre científica, a su ambigüedad teórica, ha sido formulado no sin convicción por connotados científicos sociales y eso, porque las cosas se suceden y se mueven en un terreno siempre renovado de las prácticas políticas. Los nuevos fenómenos políticos y económicos no pueden ser traducidos rutinariamente a un lenguaje inerte que pierda de vista actualizaciones necesarias, incluso en el uso contemporáneo de las categorías científicas más consagradas. La realidad latinoamericana tiene que incorporar a sus análisis una readecuación de categorías políticas y económicas. De hecho, el concepto de fascismo no es convincente en la explicación de la naturaleza y el contorno de las "dictaduras reaccionarias" que tienen sus rasgos peculiares en América Latina. Lo propio ocurre con las formas especiales de dependencia en los países más importantes como Brasil, la Argentina o México, separados de ciertas constantes económicas que prevalecen en otros países latinoamericanos, y más bien próximos a las modalidades del desarrollo inducido de la época fascista en España y Portugal. Es dentro de este contexto que el Brasil a través de sus teóricos militares invoca su propio "Destino Manifiesto" y refiriéndose a los Estados Unidos es que Couto e Silva podía decir: "Tanto más, cuando él (Brasil) no roza, en el Caribe, con el de nuestros hermanos mayores del norte".

Pero esta influencia que se extiende a un radio de acción inmediato, influencia política más que económica, más propia de los antiguos imperios que del imperialismo moderno tiene sus raíces en condi-

ciones históricas y en los virajes de la correlación mundial de fuerzas. El caso brasileño no es único. Países con un "retardo significativo" en sus procesos de industrialización se acoplan a un fenómeno más amplio de acumulación acicateados por la inversión extranjera, particularmente norteamericana, dentro de ciertas condiciones políticas internas. Poulantzas generaliza también esta nueva situación en los términos enunciados: "en la fase actual del imperialismo intervienen modificaciones considerables cuyos comienzos pueden situarse inmediatamente después de la guerra, ampliándose su consolidación y reproducción alrededor de la década del sesenta".¹² Lo que fue principal deviene accesorio: la exportación de capitales para el control de materias primas; y lo que pasa a ser principal es la necesidad de la valorización —a escala mundial— del capital monopolista imperialista. Marx había previsto las crisis del capitalismo en función de la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. La "industrialización inducida" en ciertos países dependientes es un elemento que se desprende de esta tendencia a la baja de la tasa media de beneficio en la realidad mundial vigente. En la situación de Brasil, la Argentina, México y Venezuela, el capital monopolista compensa esta tendencia con la "explotación intensiva del trabajo a escala mundial". "El caso que más ha llamado la atención, no siendo más que un indicio limitado del fenómeno, es el de las grandes sociedades multinacionales: en su gran mayoría norteamericana, producen en ciertos países dependientes —en razón de los costos ventajosos de producción— fracciones enteras del producto acabado que venden en todo el mundo o bien instalan allí un estadio completo de su producción global o, incluso, acumulan el producto terminado que destinan para la venta en ese mismo lugar".¹³ El fenómeno de "industrialización dependiente" no es un hecho aislado para tal o cual país, que al expulsar la *descalificación* del trabajo hacia los países dependientes se propone nuevos procesos de socialización de la producción *integrando* varias de estas economías según una nueva distribución de funciones.

La capacidad de las economías nacionales latinoamericanas para concluir sus propias metas de integración se ve sobrepasada, por el impulso irresistible de la reproducción inducida en la reorganización de la explotación y la dependencia de la cadena imperialista. "Empobrecidos, incommunicados, descapitalizados y con gravísimos problemas de estructura dentro de cada frontera, los países latinoamericanos abaten progresivamente sus barreras económicas, financieras y fiscales para que los monopolios, que todavía estrangulan a cada país por separado, puedan ampliar sus movimientos y consolidar una nueva división del trabajo, en escala regional, mediante la especialización de sus actividades por países y por ramas".¹⁴ Eduardo Galeano reproduce la opinión de Raúl Prebisch que escribía: "otro argumento que escucho con frecuencia desde México hasta Buenos Aires, pasando por San Pablo y Santiago, es que el mercado común va a ofrecer a la industria extranjera oportunidades de expansión que hoy día no tiene en nuestros mercados limitados". Lo cierto es que el proceso de integración latinoamericana, está resultando un *fait accompli*

donde el sistema planetario latinoamericano puede convertirse en una sola constelación de grandes empresas.

"Las empresas extranjeras tienen, como nadie, sentido de las proporciones. Las proporciones propias y las ajenas. ¿Qué sentido tendría instalar en Uruguay, por ejemplo, o en Bolivia, Paraguay o Ecuador, con sus mercados minúsculos, una gran planta de automóviles, altos hornos siderúrgicos o una fábrica importante de productos químicos? Son otros los trampolines elegidos, en función de las dimensiones de los mercados internos y de las potencialidades de su crecimiento. FUNSA, la fábrica uruguaya de neumáticos, depende en gran medida de la Firestone, pero son las filiales de la Firestone en Brasil y en Argentina las que se expanden con vistas a la integración".¹⁵ Según Rosenstein-Rodan la "integración latinoamericana tendrá también sus nordestes y sus polos de desarrollo". ¿No es acaso lógico que la "integración inducida" por el "élan" de la expansión monopolista, no resulte, a su vez, en un efecto reconcentrado del desarrollo desigual?

No sólo que cada país tendrá su nordeste sino que cada región, frente a su Brasil o a su Argentina, tendrá su Bolivia o su Ecuador o Paraguay. La forma clásica de la polaridad imperialismo-dependencia reinaba sobre la división, sobre el aislamiento hostil y receloso entre las naciones de economía subordinada: pero como ahora el capital extranjero ya no es una simple palanca para la extracción de materias primas, y "toma progresivamente la vía de inversiones directas en el sector mismo del capital industrial-productivo", necesita imponer formas de "mercado común" donde las partes en vez de oponerse se complementan. Desde luego que estas tendencias a la integración no pueden sino basarse en la existencia económica de los grandes: Brasil, la Argentina, México, constituyendo una cohorte de subsatélites en los que el subdesarrollo será una consecuencia del desarrollo, para hablar en el lenguaje de Gunder Frank. Una respuesta a lo rotundo de este hecho, quizás aún larvado y de dudosa consistencia, todavía es el esfuerzo de las naciones del Pacífico en el Pacto Andino para unirse en un esfuerzo aparte y contestario contra la corriente absorbente de la integración imperialista.

No hay que olvidar que uno de los primeros actos del régimen de Pinochet fue el de apartar a Chile del Pacto Andino, por las restricciones de la legislación al capital extranjero. Y tampoco, en este mismo camino, la hostilidad de las dictaduras militares a este intento de integración: García Meza, hablando el idioma de los militares argentinos, rechazaba al "Pacto Andino" preconizando, en su lugar, un "pacto del Cono Sur"; éste no era un simple caso de ignorancia, sino de "reflejo condicionado" con estímulos en Buenos Aires. La integración dirigida por las trasnacionales supone también la subordinación de las economías nacionales menos significativas, tal como lo expresó un Ministro de Estado en el Brasil: "en un futuro cercano, Brasil estará invirtiendo capitales en Bolivia, Paraguay o Chile".¹⁶ Claro que antes tendrá que pagar sus deudas. En 1965 el senador norteamericano Fulbright atribuyó al Brasil la misión de dirigir el mercado común de América Latina y casi una década después Kis-

singer afirmó que a donde vaya Brasil irá Latinoamérica. Todos los altos funcionarios norteamericanos como la élite militar brasileña concuerdan en la premisa de que los intereses norteamericanos en la región tendrán que ser básicamente administrados por el "satélite privilegiado".

Cuando la retrospectiva histórica nos regresa a la angustiosa búsqueda de la unidad continental por Bolívar, San Martín o Artigas y a sus grandes proyectos fracasados, no hace más que demostrarnos que la inercia de la fragmentación, heredada de la estructura colonial fue la base de la acción imperialista de "dividir para reinar". El aislamiento nacional de los Estados fragmentados, divididos, atomizados y enfrentados, permitió un dominio imperialista continuado y sistemático; así entró la América Latina al vientre de la economía mundial. Los nuevos Estados que nacieron ya dentro de la frontera económica de la Gran Bretaña y dentro de las necesidades políticas del equilibrio europeo fueron seccionados y despedazados de acuerdo a los intereses del comercio internacional. "La política británica es hostil a los intentos de desarrollo nacional independiente, al fortalecimiento de empresas privadas nacionales con autonomía e iniciativa. Es hostil también a la integración de las nacionalidades divorciadas por la emancipación, y en consecuencia favorece a la balcanización y el equilibrio de fuerzas entre los países latinoamericanos".¹⁷ La evolución hacia un esquema de división y especialización internacional del trabajo profundiza el abismo entre las naciones. Si la época de la conquista y la colonización correspondían a la fase mercantilista-financiera, el sometimiento de los Estados nacionales es parte de la historia del imperialismo mundial. Es la propia estructura de la dominación la que refuerza las tendencias al aislamiento nacional, a un "nacionalismo" hostil entre los Estados latinoamericanos y a rivalidades que frecuentemente concluyen en la guerra internacional.

Uno de los más grandes proyectos federativos, la "Confederación Perú-Boliviana" liderada por Andrés de Santa Cruz, termina en la derrota militar impuesta por los nacionalismos de Chile y Argentina y estimulada por inspiraciones británicas. En cambio, el "nacionalismo" asimilado y desarrollado por las oligarquías latinoamericanas no brilló nunca, por sus aspiraciones emancipadoras respecto a las hegemonías de Europa y Norteamérica, ni se asentó nunca en una genuina tendencia a la solidaridad continental, ha sido y es escisionista, separatista, exclusivista y localista. La unidad centroamericana quedó disgregada en sus pequeños estados competitivos e igual destino tuvo el sueño irrealizado de la Gran Colombia. La corriente escisionista y fragmentaria ha actuado junto a la fuerza irresistible del capital, desuniendo a las naciones que debieron permanecer unidas pero asociándolas y unificándolas respecto a un solo centro económico rector.

Ahora, la concepción integradora que parte del propio peso de la acumulación capitalista mundial es, en el fondo, tan desintegradora como lo fueron los viejos intentos colonialistas y neocolonialistas. "El resultado está a la vista: en la actualidad, cualquiera de las corporaciones multinacionales opera con mayor coherencia y sentido de unidad que este con-

junto de islas que es América Latina, desgarrada por tantas fronteras y tantas incomunicaciones. ¿Qué integración pueden realizar, entre sí, países que ni siquiera se han integrado por dentro?¹⁸ La palabra "integración" resuena en todas las citas internacionales y en todos los foros. Toda una corte de líderes, dirigentes, tecnócratas y expertos montan la escena a sabiendas que los verdaderos ausentes son las "naciones" en el sentido de sus intereses permanentes. Sólo el gran capital trustificado y sin fronteras, con la lógica infalible del interés, está "integrando" su economía sobre la base de la desintegración americana, sobre la dispersión territorial y la incomunicación económica de los latinoamericanos. La estricta compartimentación nacional de estos países, obra solidaria de las élites oligárquicas y del capitalismo mundial, nos ha encallado en una veindad sin vinculaciones y con sólo retóricas aspiraciones comunes.

Se tiene un progreso sistemático de la ciencia económica basada en certeros diagnósticos del problema latinoamericano, explicación de los fenómenos del crecimiento y del estancamiento; lo que no se tiene es el rescate histórico del arcano común para proyectarlo en el sentido bolivariano. Por un lado, estamos ante la presencia de la extensión inexorable de las fronteras del capital internacional en un medio social "ablandado" por la disuación de las bayonetas, por otro, frente a estos procesos económicos sin historia, solo puede responderse con un concepto de integración que asimile la memoria social del espíritu de la independencia. Los que pensaron en las certidumbres absolutas del "desarrollo", de la "industrialización" y del "crecimiento", con la devoción de un veredicto, se percatan ahora que el "desarrollo" que cae de arriba o mejor que viene del norte conserva la miseria, acentúa la desigualdad regional y la dispersión nacional y coloca una muralla china entre las naciones históricamente destinadas a una intensa vida económica común y a un intercambio natural.

Pero dijimos antes, que el año 1964 brasileño coincidía con la fase más devoradora de este intenso período de expansión capitalista. Además se debió subrayar un importante elemento político: Brasil aparece como un "precursor" del "Estado autoritario", producto histórico de los países del Cono Sur. Esta concepción del Estado, antes que similitudes, tiene diferencias significativas con los clásicos despotismos militares centroamericanos, enquistados en un subdesarrollo sin esperanzas y con acentuadas características de satrapía que se perpetúan por vínculos familiares. Lo de "gorila", creación conceptual sudamericana, es más propio de las atrofiadas "democracias" centroamericanas, que la de la organización militarista del Cono Sur. Sin embargo, la concomitancia entre expresión capitalista mundial y "Estado autoritario" no pudo darse con una mecánica tan lineal como se supone en el maniqueísmo "centro-periferia", cuya sola enunciación sugiere una pérdida de control de la "periferia" que, en realidad, no es posible. Hay una realidad social nacional que impera en cada país y un mundo de relaciones que se restringe o cristaliza en cada región.

En Bolivia fue posible pasar por la experiencia del 71, porque así

se condensaba toda una memoria colectiva abreviada; con el general Torres reproduciendo el espíritu de un Lázaro Cárdenas y la inédita *Asamblea Popular* que el contorno internacional observaba con un recelo paternalista. De Bolivia o la Argentina podía pensarse en un estado de turbulencia política más o menos "establecido" y en un *corsi e ricorsi* que ponía a los militares en el gobierno a la vuelta de cada intento popular o populista. Lanusse también reaccionó ante la Asamblea Popular y el gobierno de Torres, con los mismos nerviosos resquemores de Garrastazú, aunque con menor arrogancia, pero entre ambos había una importancia diferencia: el grado de *consistencia estratégica* del "Estado autoritario". En efecto, la historia del "poder militar" en la Argentina no ha seguido el "camino brasileño" sino hasta mucho más tarde. Hay un comienzo mucho más confuso que no se sitúa como en el Brasil en un momento de subida del movimiento popular; el caso argentino, se caracteriza más bien por la emergencia del orden militar sobre el abatimiento, la frustración y la derrota de las postrimerías del peronismo.

No es sin motivo que en nuestras indagaciones sobre el poder en el Brasil, hemos tomado nota del entrelazamiento entre la expansión capitalista mundial y la forma del Estado independiente, como dos aspectos coetáneos. Pero ahora, para referirnos al proceso de constitución del "Estado autoritario", desde un plano principalmente político, y para completar el cuadro de referencias internacionales en las influencias recíprocas entre los países del Cono Sur, estamos intentando un breve bosquejo sobre la Argentina. La "revolución libertadora" de 1955 emerge de la catástrofe peronista pero nace muerta. Entre los "accesos" de una larga crisis de Estado, de tentativas fracasadas de "restauración civil", de acuerdos ocasionales y desacuerdos permanentes en el mismo seno de las Fuerzas Armadas, el "Estado autoritario" argentino resulta de una prolongada etapa de gestación. El solo hecho de que Lonardi apenas llegue a gobernar dos meses lo dice todo y su derrocamiento prematuro por Aramburu es una prueba de la existencia *in ovo* de los elementos de disgregación que estarán presentes a lo largo de toda esta crisis en que el ejército es juez y parte.

Hasta llegar a Videla, al estricto monopolio del poder político por la organización de la fuerza, el propio ejército tuvo que pasar por fases sucesivas de desorientación y desconcierto, por situaciones de grave conflicto interior (colorados y azules) sin aptitud puntual para remontar las herencias de la "década infame" y los fuertes resabios emocionales del peronismo. Paradójicamente, el final del gobierno peronista, como Euclides, lega sus deudas a los militares, encadenando el ejército a la política. El ejército se convierte en el árbitro, en el celoso vigilante de las proscripciones y del "estado de sitio" indeclarado. Las soluciones electorales son "soluciones" atadas al espíritu antiperonista de la "revolución libertadora"; Frondizi es el ejemplo viviente del "prisionero civil" de la voluntad omnipresente de la estructura castrense. Y como él, los otros. El mismo Guido, cuya asunción "legal" como Presidente del Senado, no es expresión de los homenajes rituales a la constitución, sino

de la falta de una voluntad consumada en las Fuerzas Armadas para reasumir toda la responsabilidad del poder.

Gobierno civiles manipulados desde los cuarteles y endémica crisis de poder, alternativos triunfos y derrotas de las dos alas del radicalismo y todo un proceso de contradictoria unificación de las Fuerzas Armadas van conformando las condiciones para la consolidación de la dictadura abierta de los militares.

Esta historia de inestabilidad política y de la contradictoria presencia militar en los asuntos públicos, resulta diametralmente opuesta al suceso político chileno de caracterizado ejercicio democrático, pero también lo es de la tediosa estabilidad del terror en el Paraguay; es más similar a la ocupación militar del poder en Bolivia que también ocurre sobre los escombros del populismo del MNR. Pero obviamente, a lo que aspiran los militares argentinos —sus sectores desarrollistas— es a la "brasileñización" de la Argentina: Juan Carlos Onganía representa el primer intento serio en este sentido. "El general Onganía y su gobierno se instalan en la historia a largo plazo, con un sentido de omnipotencia e intemporalidad. Subdividen el futuro en fases predeterminadas que adquieren la pulcritud tranquilizante de los organigramas (primero un tiempo económico, luego un tiempo social, y finalmente en el porvenir brumoso un tiempo político)".¹⁹ No se trata ya de ajustar el dogal sobre el cuello del gobernante civil, se trata de salir de una comprometida retaguardia para asumir una responsabilidad de vanguardia en el gobierno, no se trata ya de una confusa provisionalidad que sugiere todo "estado de excepción", sino más bien de un proyecto sin término y con la idea de la permanencia y estabilidad. Sin embargo, la "estabilidad" del autoritarismo brasileño, el intento "cronogramático" de producir los fundamentos para un dominio pacífico del neocapitalismo encuentra grandes dificultades para su reproducción en la Argentina. Las Fuerzas Armadas que privaron al radicalismo de su autonomía de acción, por el imperio implacable de la realidad, tuvieron que compartir los fracasos con los civiles que habían sido colocados en la vanguardia de las responsabilidades.

La sucesión incontrolada de gobernantes militares, en lapso tan abreviado, que comienza en Onganía, pasa por Levingston y concluye con Lanusse en 1973 es la manifestación patética de una crisis de Estado irresuelta, de un proyecto militar debilmente unificado y cohesionado. La dictadura planeada *ex-temporí* con la misma filosofía del desarrollo de los militares brasileños, con su misma impronta de adaptación al nuevo curso del capitalismo dependiente no duró sino apenas siete tormentosos años en una inconsciente preparación del postrer fracaso peronista.

Esta historia de extravíos fundada en el espíritu vigilante y receloso de un ejército politizado y sobre la interrupción de una notable experiencia de masas, como fue el período 1946-55 no llegó a cristalizar en una enérgica atracción de capitales que acelerara, a la manera brasileña, el desarrollo del capitalismo dependiente. Claro es, sin embargo, que la economía argentina goza del poderoso impulso de la inercia por su privilegiada naturaleza nacional, por su abundancia de recursos y por su po-

sición en el mundo. El desarrollo agropecuario e industrial argentino tiene una base nacional históricamente más consistente que la del Brasil. Es característico, por otra parte, el hecho de que el suceso social argentino —más rico que el brasileño— contribuya a que la travesía hacia un "Estado autoritario" definido, esté marcada por apremiantes contradicciones dentro de las Fuerzas Armadas. El retorno a la legalidad, al nuevo ciclo peronista desdibujado por su extemporaneidad no significó, para las Fuerzas Armadas, la culminación de un proyecto sino su capitulación ante un destino inseguro y oscuro. El apagado período de tedio que vivió la Argentina en los 18 años que precedieron al retorno peronista (retorno iniciado y seguido por Cámpora-Lastiri-Perón-Isabel Martínez), ni sirvió para alterar el espíritu del peronismo sobreviviente en la conciencia social, ni para consagrar en el ánimo común la religión artificial del "orden", el "progreso", galvanizando a la nación con la idea del "destino manifiesto". Pero así como esos 18 años de atrofia de los prestigiosos marciales prepararon el lecho para la agonía del peronismo, Isabel Perón, insólita convidada a la historia, abrió el cortejo de la sórdida contramarcha militar de los Videla, los Viola y los Galtieri.

El orden meticuloso de las sucesiones militares en el Brasil contrasta con los turbulentos cambios y contraexperimentos que fisonomizan al proceso del Estado autoritario argentino. Sólo el fracaso del pálido paréntesis peronista y su flagrante ruptura histórica permiten el retorno de los militares con sus tropas de asalto frescas y listas para asistir a su cita con la "guerra sucia". Recogen su razón de ser y estar en su misión "salvadora", en la lucha antisubversiva, rodeada siempre de argumentos terribles y metafísicos sobre la "seguridad nacional" y el reordenamiento compulsivo de la economía. Esta vez, la máquina del golpe de Estado había sido puesta en movimiento con la oportunidad brindada por la indolencia del gobierno civil; dueños de la situación, los militares, ahora sí, encontraban los justificativos históricos a su mesianismo de dirimidores y actores desde fuera y por encima de la sociedad. La "revolución libertadora" más que una tragedia había sido una comedia, ahora, en cambio, el final de la comedia se convertía en el principio de la tragedia, en una combinación siniestra del totalitarismo político con el liberalismo económico.

Combinación, por lo demás, típica del Estado autoritario actual, sostenida, otrora, por Mussolini: "La dictadura política aplicada a la economía es un contrasentido y lleva al desastre". El *recurso* militar argentino extendió el terror a las calles, el lenguaje liberal de la "pacificación nacional" tenía a las bayonetas por instrumento y a la contrainsurgencia como método de combate.

Con la Argentina se completa la uniformidad parda del Cono Sur. No es sólo el colapso y la desintegración del intento democrático que muere en el ambiguo final de Isabel Martínez, es la astucia de los hechos que se han enfilado sucesivamente desde Bolivia, Uruguay y Chile hasta hacer de la dictadura un hecho inexorable, casi un sistema. Este "nuevo Estado" es resultado de las esperanzas y frustraciones de la poderosa oligarquía industrial y agraria y de las presiones de los intereses extranjeros

pero también del vacío social e institucional dejado por el peronismo que sobrevivió, a pesar de todo, en un equívoco sindicalismo privado de grandes banderas de combate.

Completado el vivaqueo militar sobre el Cono Sur, se uniformó la doctrina de "seguridad nacional", pero las "identidades ideológicas", fundadas en la faena de la depuración social, no podían dejar de chocar con las rivalidades nacionales históricas. La pugna hegemónica argentino-brasileña, el diferendo argentino-chileno sobre el Beagle, no sólo acentuaron los celos nacionales, no sólo estimularon la carrera armamentista de Perú, Chile, Argentina y Brasil, sino que fueron, incluso, determinantes en las posiciones nacionales ante el conflicto bélico de las Malvinas. Para el régimen de Galtieri —para la institución de las Fuerzas Armadas— la cuestión de las Malvinas resultó un naufragio histórico, para la Argentina un verdadero sacudimiento nacional que la obliga a recuestionarlo todo, y para América Latina el principio del fin del llamado "sistema interamericano". Curzio Malaparte dice que "la historia no ofrece ningún ejemplo de un capitán que haya hecho el arte por el arte, la guerra por la guerra". En este caso, la historia pudo estar de parte de la guerra (justicia histórica se entiende), pero el cálculo, la lógica de las expediciones militares, no es el cálculo ni la lógica de las legitimidades territoriales o de los sentimientos de justicia internacional. Y así como no hay latinoamericano con conciencia latinoamericana que no redima las Malvinas para la Argentina, queda también la sensación de que a partir de las Malvinas y su final inexplicable empieza un nuevo periodo de honda reflexión sobre las relaciones internacionales. Sin hablar de las incertidumbres acerca de la hora, el lugar y los medios, la guerra de las Malvinas como toda guerra ha tenido fines políticos: ha sido un aspecto de la política del Estado. Lo nuevo es que el ejército argentino "ha tenido que combatir ejércitos y no asambleas" ¿Por qué?

La década del 80 es la que más se está aproximando a esa apremiante definición continental que Ernesto Guevara pronosticó como la "vietnamización". La longevidad de la dinastía Somoza no se ha derrumbado sola, no ha sido un hecho nicaragüense particular. Rodeando la retaguardia imperialista de Honduras, arde el incendio centroamericano en El Salvador, y el calor y la fiebre de la revolución avanzan sobre Guatemala. La "cintura de América" es una "amenaza" tan urgente como la tensión global sobre los misiles de mediano alcance en Europa. Es la bandera de lucha más exasperante de Reagan y los halcones. El más apremiante de los sucesos en la más vulnerable "frontera ideológica" de los Estados Unidos. Pero los Estados Unidos, con las cicatrices frescas de su casi interminable empantanamiento en el Vietnam y sus ejércitos militarmente vencidos y moralmente destruidos, temen otro Vietnam con grandes expediciones derrotadas de antemano. No hay una "opinión pública" favorable que santifique aventuras neocolonialistas sin futuro, con el aurea sagrada de la lucha contra el comunismo. El espectro de Vietnam enerva las sórdidas energías de la guerra de intervención, desalienta a las ya condenadas fórmulas de los desembarcos de marines, el recurso supremo y último que,

de método normal y tradicional del "sistema interamericano", se ha convertido en un augurio tenebroso.

En 1965 las fuerzas de la "OEA" tomaron a su cargo la defensa de la "civilización cristiana y occidental" en Santo Domingo. Fue una "intervención de la OEA", de América sobre América, para enmascarar la verdadera intervención: la intervención norteamericana. A esta política militar de los Estados Unidos, Juan Bosch la llamó "pentagonismo", porque como todo político liberal latinoamericano supone, sin fundamento, la existencia de "dos políticas" en Norteamérica: la del Pentágono y la del Departamento de Estado. Pero aparte de esos devaneos, lo que interesa es seguir la tendencia y las condiciones dentro de las cuales se acentúa la vocación militarista en la diplomacia norteamericana. Ahora como en 1965, los Estados Unidos consideran "amenazada" su seguridad nacional, pero el tiempo ha transcurrido en contra de las intervenciones directas y abiertas. La OEA, como en Santo Domingo, ha jugado siempre un papel legitimador de la invasión militar, para eso el órgano político cuenta con su policía internacional: el TIAR. República Dominicana, sin embargo, fue invadida en la fase de apogeo de las "guerras defensivas" de los Estados Unidos en territorios ajenos, en plena escalada en Vietnam, después del intento de Bahía Cochinos y después del bloqueo de la OEA contra Cuba, en un momento de máxima consagración de la "legalidad imperialista" en Latinoamérica. Cuando el dominio de la élite oligárquica continental y el dominio imperialista habían tejido una argumentación común, el "sistema interamericano". En síntesis, es todo este edificio jurídico y político el que ha empezado a derrumbarse por las implacables consecuencias de la guerra de las Malvinas.

El traspaso del poder a Galtieri y el tránsito Cartel-Reagan revitalizaron hasta el extremo más favorable las relaciones entre el régimen militar argentino y el gobierno norteamericano. El "descongelamiento" no sólo tuvo que ver con la cuestión del comercio internacional dio lugar a un hecho mucho más decisivo: a la "preocupación común" sobre el problema centroamericano. Lo que le correspondió al Brasil en 1965, debía corresponderle a la Argentina en la década del 80. Galtieri no se distinguía por ser un adversario de esta función consular encubierta de exabruptos anticomunistas, que le permitirían, además, perpetuar un estado de guerra interna sacralizada por la campaña exterior. La entrevista Reagan-Galtieri sugirió inequívocamente este curso equívoco.

Pero los cambios que se venían sucediendo en el continente, el sur y el deterioro político estimulado por la crisis económica no podían estar, como causas, ausentes en el transcurrir nacional argentino. La aproximación Reagan-Galtieri se proyectaba con su sombra amenazadora sobre Centroamérica y sobre las fronteras de menor resistencia en el Cono Sur.

Cuando las preocupaciones se habían concentrado en el Beagle surgió, de pronto, ondeando, la bandera argentina sobre las islas Malvinas. Fue una madrugada que iba a tener un pronto atardecer. La dictadura de Galtieri aparecía, repentinamente, reforzada con argumentaciones históricas y con una intempestiva como intensa resurrección del sentimiento

patriótico. Si la diplomacia, empero, carece de un pedestal militar, si la palabra que condena no está apoyada en la fuerza que redime, la victoria diplomática se invierte en derrota militar. Más aun si esta guerra diplomática se había iniciado con un acto de guerra militar: la ocupación de las islas.

Las premisas diplomáticas eran inmejorables. Jamás tuvo la Argentina una manifestación de solidaridad continental semejante. La adhesión latinoamericana, sin embargo, era fruto de una paradoja: el ejército argentino en vez de marchar como los "carniceros" de Centroamérica, salía al encuentro de los "carniceros" del Reino Unido. Pero este conflicto que pudo situarse en el centro de los grandes problemas diplomáticos se deslizó al terreno de la guerra. La esperanza en los Estados Unidos, fundada en el abrazo Reagan-Galtieri, y la convicción en el infalible poder persuasivo de los aliados del norte, se vino abajo. Las condiciones de la paz que propuso el intermediario norteamericano, equivalían a la peor de las capitulaciones: a la capitulación sin lucha, a una capitulación que se anticipaba a la guerra misma. Pero el "mediador" resultó un mediador interesado, un gestor de los propios negocios, que no pudo, frente a la astucia de los hechos, mantener la comodidad de las apariencias. Se vio obligado a elegir un camino entre dos caminos: un solo aliado entre sus dos aliados; el tinglado del TIAR quedó convertido en nada, todo comenzó a retroceder, y las realidades internacionales —realidades al fin— tomaron su verdadero nivel.

El TIAR, concebido como un instrumento militar de América contra las agresiones extracontinentales, quedó desnudado como el instrumento de América contra América; contra todos los santo domingos, salvadores, nicaraguas y guatemalas posibles; como un instrumento, finalmente, que sin la subordinación a los Estados Unidos no tenía razón de existir. El TIAR era mentira y la OTAN era verdad. La flota británica cruzó el océano con el apoyo de la OTAN. Si de batallas diplomáticas se hubiese tratado, la Argentina habría contado con América Latina y con la condena al colonialismo inglés, con el apoyo político de muchos países y con la mesurada y cauta posición de Brasil y Chile. Pero la batalla militar concluyó en la adversidad. La Argentina tuvo que volver al comienzo y con ella América Latina, en las peores condiciones. Las abandonadas Malvinas que emergen de las frías aguas oceánicas, ya no están abandonadas, se han convertido en un objetivo estratégico de la OTAN, están, ahora, erizadas de cañones. De una isla de pastores se ha convertido en una base militar.

Las fugaces glorias que explotaron con los *exocet* se apagaron, tristemente, en el acta de capitulación del general Menéndez. Rápido y trágico el fin, ahogó los entusiasmos prematuros y repuso expedientes para un juicio público de los militares. El fin de la guerra decretó el principio de la paz republicana. Creyentes de la diplomacia y del maravilloso poder de las presiones norteamericanas, a los militares argentinos les faltó creer en la guerra misma. Pusieron, quizás, sus esperanzas, antes en los salones cerrados de las cancillerías que en los campos abiertos de la guerra. Y no

porque como había sentenciado Talleyrand "la guerra es un asunto muy delicado para dejar en manos de los militares", sino porque a la deuda luctuosa de la "guerra sucia" se suma esta deuda, luctuosa también, de una guerra internacional cuyo fracaso, como es lógico, deja el peso de un saldo político agobiante.

Si la guerra es el resultado de una determinada política de Estado, en la Argentina ha sido derrotada toda una política de Estado. Galtieri que se sintió destinado a atizar el fuego de Centroamérica, resultó devorado por las llamas de una guerra insólita. Fracaso la política de robustecerse afuera para afirmarse adentro, porque los militares pueden errar en la política pero no les está permitido el menor error en la guerra. Sin embargo, las consecuencias políticas de las Malvinas van más allá de la Argentina; es toda una concepción hemisférica desde Monroe hasta Reagan la que se derrumba, la que se desmorona. Fenecen los títulos históricos de la OEA que sólo brilla por su impotencia. Y aunque varias voces levantan la consigna de una OEA sin los Estados Unidos, los intereses se imponen, finalmente, tratando de borrar las huellas digitales de Norteamérica en esta prueba irrevocable. Pero la OEA que convocó a los Estados para sancionar a Cuba o legalizar los desembarcos, ya no existe más. Esa OEA ha caducado desde el mismo instante en que el general Menéndez firmó el acta de rendición. La historia no sucede en vano: la anatomía del "sistema interamericano" se ha exhibido tal como es, se ha revelado inútil para servir de base a un mecanismo que tenga vida.

Algo más importante aún, los mismos militares que capitulaban con entusiasmo ante el colonialismo económico, se vieron obligados a capitular dramáticamente ante el colonialismo militar. Esa no es la regla, es la excepción; pero la historia suele resolver sus grandes coyunturas por el lado de las excepciones. Gran Bretaña y los Estados Unidos se aliaron con la URSS para derrotar a Hitler, el capitalismo mundial se dividió en dos bandos, aunque en uno de ellos estuviera el socialismo. El enfrentamiento de una potencia de la OTAN con una nación latinoamericana como la Argentina era también improbable, una remota posibilidad. Con esta improbabilidad contaban los militares argentinos. Pero esta guerra resultó de la excepción y no de la regla; las tropas de asalto de Galtieri no fueron en auxilio del gobierno salvadoreño, sus ímpetus guerreros se estrellaron contra la terca determinación bélica de Gran Bretaña. El "aliado estratégico", los Estados Unidos, que esta vez no descendió desde arriba para imponer la paz, demostró, a pesar de sí mismo, que su "estrategia mundial" no sólo no incluye decisivamente a los Estados de Latinoamérica sino que ha entrado en colisión con ellos.

No hay duda de que la excepción era la guerra y la regla la diplomacia. Pero ahora no era un *casus belli* más entre Estados vecinos como los tantos que hubo en nuestra historia común, frente a los cuales, los Estados Unidos emergen con la última palabra definiendo las fronteras. La nación del norte, esta vez, no ha quedado incolume e intacta, como la "abanderada de la paz" sobre la cenizas de los odios y los rencores de sus "hermanos menores". Los Estados Unidos fueron emplazados por la his-

toria, y la historia les impuso la más costosa de las complicidades.

Por ahora, el cadalso político está levantado para el régimen militar argentino, los militares han cerrado su ciclo con el broche de oro de una gran paradoja: todo lo que prepararon condujo a resultados que nunca buscaron. La democracia argentina, tendrá la base moral de la debacle de su ejército y el cuadro latinoamericano no tiene menos que contar con este factor. Pero, ¿estamos en la década del 80, ante la crisis del "Estado autoritario" y su voluntad guerrera y truculenta? Las Malvinas, en la Argentina, imponen el recule del ejército desde las mismas esferas gubernamentales conquistadas cruentamente en las luchas civiles. Ahora viene el balance, y el balance no puede ignorar la revisión de la "doctrina de seguridad nacional" y su secuela de desaparecidos y saldos de sangre. El "juicio público" esta empezando antes de que las ánforas decreten el rescate de la democracia.

Los chilenos vuelven a las calles. ¿El poder de hierro de Pinochet empieza a quebrarse? Las protestas han adquirido un carácter multitudinario, la gente se vuelca sobre las calles y exterioriza su descontento, la desobediencia trata de organizarse desde los sindicatos y los partidos. Cuando el terror se vuelve ineficiente es porque las masas han recobrado la conciencia de su fuerza. Chile es, por ahora, el verdadero bastión del "Estado autoritario"; allí se produjo la ruptura histórica mas extrema del continente. Al ejército más constitucionalista y más legalista le tocó convertirse en la máquina del terror y en el instrumento de muerte y desolación mas eficaces del Cono Sur.

El ejército apareció como el "árbitro" de un Chile dividido por la guerra política entre las clases y los partidos, pero para tomar parte o partido junto a la desesperación y exasperación de los intereses tradicionales asustados por el rumbo revolucionario. El papel del ejército fue, empero, no el de un "árbitro bonapartista" que conserva ciertas apariencias, fue el de un frío estratega de la guerra civil que toma inequívocamente el partido de la reacción mas extrema. El ejército se colocó a la vanguardia de las fuerzas políticas y económicas enfrentadas con el gobierno de Allende. Fue, de principio a fin, el aparato militar del sistema conspirativo. El ejército más "legalista y constitucionalista" resultó ser en realidad, un ejército catilinario, el primer sedicioso y el más impecable subvertor.

Chile fue vencido porque el método del *pogrom* opuso el método democrático. La táctica de la UP tenía por base la "neutralidad" del ejército profesional y su prescindencia en la política contingente. Más que en el "quehacer propio" se confiaba en el "no hacer" del adversario, pero toda táctica que ignore las intenciones del enemigo, no es una táctica, es sólo un buen deseo. Reforzaba esta ilusión, la lúcida estrategia nacional de las Fuerzas Armadas y su conciencia de defensa territorial en un país caracterizado por sus "fronteras calientes" con Perú, la Argentina y Bolivia. Pero las Fuerzas Armadas demostraron que no absolutizaron el principio de que una guerra civil produciría un desastre territorial. El "peligro interno" real, las motivó más intensamente que el "peligro externo"

potencial. Es que la política es la ciencia de los hechos más que de las hipótesis: mientras la UP se refugiaba en las hipótesis, los militares anduvieron sobre los hechos. Un ejército así, además, preocupado por las fronteras y despreocupado de la política, no existe en ninguna parte. La UP fue una víctima de sus ilusiones, de la idealización de su adversario; no preparó el golpe de Estado, quedó más bien atrapada en el golpe de Estado. Siguió subordinada a la legalidad cuando la legalidad se volvió contra el gobierno, cuando la legalidad se convirtió en la consigna de la subversión.

Allende murió junto a la democracia, no pudo defenderla en la vida, la defendió como un héroe verdadero, en la muerte. Fue un profeta más que un estratega: el "profeta desarmado" en el sentido de Maquiavelo. Los militares quisieron ocultar las huellas de sangre del asesinato con la versión del suicidio. Pero aunque asesinado, Allende fue el símbolo de un holocausto, del holocausto que la revolución preparó contra sí misma porque en vez de capitanes tuvo diletantes.

A Chile le tocó la mas concentrada de las conspiraciones. No fue la nacionalización del cobre y las otras varias nacionalizaciones las que unificaron al enemigo exterior y al enemigo interno en una táctica conspirativa tan concentrada, fue el destino socialista de Chile. La posibilidad del socialismo. Desde el principio hasta 1973, se jugó la carta política: a la estrategia del gradualismo socialista con compromisos recíprocos sobre las "garantías constitucionales", la derecha opuso su contraestrategia subterránea del enfrentamiento militar. La derecha actuó astutamente rompió la legalidad usando el discurso legalista y la razón jurídica. Es que la razón práctica iba a estar del lado de la violencia, de quien rompa con su iniciativa todos los obstáculos legales. No había lugar a confusiones, el asunto chileno no era un asunto local. Pero la izquierda chilena era una prisionera de la legalidad y de la constitución y, sobre todo, de la "excepcionalidad" del camino democrático, de su sentido "localista" puede decirse lo que Malaparte decía de Polonia: "La historia de Polonia está llena de hechos, de que se consideran inventores los polacos. No creen que ningún acontecimiento de su vida nacional se vuelve a dar en la vida de los demás pueblos; en su patria es donde se produce por primera vez". Kissinger, sin embargo, alentó al recetario universal del golpe de Estado, Nixon, aún después de su estrepitosa caída en el escándalo de Watergate, hizo una apología del intervencionismo norteamericano en Chile. La reacción no inventó nada en Chile, aplicó lo que había aplicado en Bolivia y lo que aplicaría en la Argentina.

Tampoco la derecha compartía las razones de la "excepcionalidad" chilena, toda su acción estaba entrelazada con la ITT y la diplomacia norteamericana. ¿Por qué el ejército iba a ser una excepción en esta vasta como universal concentración conspirativa? Para el gobierno revolucionario, sin embargo, el ejército chileno tenía otra médula y respondería a su tradición, y el camino chileno era chileno en todo. El camino democrático y pacífico, sin embargo, estuvo en todo momento amenazado por la violencia. Por la subversión de las instituciones: el enfrentamiento entre

el Parlamento y el Ejecutivo era la expresión más cabal de una paz artificial que no era más que la incubación de la guerra civil. Con la "ley de requisición de armas" el Parlamento puso al ejército en las calles para el control anticipado del "aparato técnico del Estado" y para "legalizar" las maniobras militares que culminaron en el golpe de Estado. El Parlamento y la Corte Suprema condenaron al gobierno de Allende al ostracismo de la dirección administrativa del Estado, privándole de la dirección política. Si el Parlamento era la antesala parlante del golpe de Estado, la Corte Suprema ató las manos del gobierno aflojando los resortes legales que debían detener a la conspiración. Los instrumentos de la ley habían tomado la senda de la ilegalidad. La sedición contaba con el apoyo abierto de los parlamentarios y con la tolerancia de los jueces. Todos los mecanismos legales e institucionales habían entrado en movimiento para cumplir las tareas de "hostigamiento" que preceden a la batalla final, a la batalla militar.

El proceso chileno se enfangó entre sus supersticiones legalistas y la sedición legal de la derecha. Allende administraba pero no gobernaba, el ejercicio del poder estaba seccionado y feudalizado, y sin un poder concentrado y centralizado según una voluntad política única no hay defensa posible del Estado: sin mando no hay autoridad. Desde el instante en que el ejército asumió el control de la población para la requisa de armas, respaldado en la "ley" pero no en la voluntad de gobierno, actuó como cuerpo autónomo como fuerza de intervención que contaba con el "derecho" del allanamiento y de la vigilancia política. El gobierno mismo, sometido a la vigilancia del ejército, obligado por la "ley del Parlamento" a ceder sus facultades de policía en favor del protagonista del golpe de Estado, había sido expropiado en su base misma, en sus atribuciones. De antemano se habían echado las bases para la más decisiva de las desobediencias, la desobediencia del aparato coercitivo del Estado. La especificidad chilena se resolvió por el género, el ejército obedece a un sistema no obedece a un gobierno. Pero como ningún otro ejército, el chileno preparó su guerra civil con una taimada meticulosidad, protegido en la hipocresía de la ley organizó la sedición bajo la sombra secreta de los cuarteles, para irrumpir a la luz, concentrando todas sus fuerzas para descargar las despiadada y pérfidamente el 11 de setiembre.

El más pacífico de los procesos revolucionarios fue aplastado por el más violento de los golpes de Estado. El *pogrom* chileno fue una tragedia universal. Allende, con la entereza de los guerreros antiguos que solían escribir sus propios epitafios, pronosticó con su voz serena, firme y última, que se abrirán nuevamente las avenidas para que vuelva la libertad, y esperó, combatiendo, la oscuridad sin límites de la muerte.

Quizás la izquierda chilena que inundó las calles con sus gritos de paz, vuelva más temprano que tarde a remontar las calles con sus cantos fúnebres y sus gritos de guerra; pero ya nada será como antes.

La tierra caliente de Centroamérica. El ruido de las armas resuena nuevamente en la Casa Blanca y el Senado polemiza sobre Nicaragua y

El Salvador. La posición de Francia y México sobre la cuestión centroamericana ha sido un balde de agua fría para los "halcones". Además de México, el grupo "Contadora" está frenando la urgencia intervencionista de los Estados Unidos. Y, a estas alturas, el estólido "voto unánime" de la OEA para accionar el gatillo del TIAR se ha tornado imposible. Sólo los gobiernos más desprestigiados como el de Honduras o El Salvador han cifrado todas sus esperanzas en una fuerza intervencionista norteamericana. Pero la opinión pública norteamericana no quiere un nuevo Vietnam, la retórica guerrera de Reagan no entusiasma, cae pesadamente sobre el ánimo incrédulo y pesimista de una sociedad que ha sufrido los desquiciamientos y los traumas de la guerra. Pese a la oposición y al rechazo, sin embargo, pese a las resistencias internas y a la frialdad internacional, la cuestión de la "guerra de intervención" está a la orden del día. Esta probabilidad del desastre no es descartable: Norteamérica sólo puede coexistir con su propia democracia, la democracia del "patio trasero" es un preludio peligroso.

Los asesores norteamericanos en El Salvador no tienen perspectiva sin una "escalada" considerable de la ayuda militar. La guerrilla ha consolidado sus posiciones, ha consolidado su existencia, ha vencido su fugacidad para convertirse en un hecho consumado. Se ha establecido. Por el lado contrario, el de El Salvador es un "Estado en crisis" donde los gobernantes ya no tienen argumentos para gobernar y donde van perdiendo sus argumentos para combatir. Las elecciones no han apagado el fuego de la guerra civil, no han creado ilusiones nuevas, no han contenido la crisis. Y cuando es el recurso del voto el que fracasa, lo único que queda es la solución militar. La guerra de El Salvador ha avanzado ya con demasiada profundidad, nada que esté fuera de la guerra puede estar en la política. Por eso, la posición de Francia y de México que reconoce como "beligerantes" a los guerrilleros, no hace más que recoger esta realidad sin cuyo reconocimiento no puede haber esfuerzo posible de paz.

Que el soporte militar norteamericano no alcance la medida de las aspiraciones de Reagan, que el Senado se mantenga en una posición esceptica frente a una escalada mayor, que el eco latinoamericano no responda con sus antiguos entusiasmos son una evidencia del ocaso de la diplomacia belicista. Un síntoma de que la diplomacia norteamericana misma está en crisis. Estos sucesos debilitan los impulsos guerreros de Reagan y enfrían la causa de la intervención. Pero eso no significa que no esté latente el plan de una intervención unilateral, ni que la Casa Blanca no esté empeñada en una enérgica lucha con sectores del Senado y de la opinión pública para lograr un clima ideológico favorable. Por el momento, la estrategia de la Casa Blanca tiene por objetivo convertir a Honduras en una "cabeza de puente" para bifurcar sus acciones en el doble sentido de Nicaragua y El Salvador. Una política de tensión internacional destinada a recalentar el conflicto Nicaragua-Honduras, preparando a los somocistas en sus incursiones fronterizas y a los soldados salvadoreños en la táctica de la contrainsurgencia. Honduras ocupa la posición de vanguardia en la estrategia intervencionista de Reagan. No obstante, los gobier-

nos de Honduras, Guatemala y El Salvador, sólo ofrecen una endeble cobertura ante la gigantesca evidencia de la revolución centroamericana.

Los límites están señalados por una convulsionada América Latina que ha sufrido cambios o los está sufriendo. Cambios que tienden a definir con más claridad las fronteras de la diplomacia.

La crisis del Estado autoritario. Los Estados de América del Sur arrasados por la crisis económica, sus endeudamientos prodigiosos, ven estancados los resultados de sus procesos de "industrialización endeudada", y se sienten impotentes para resolver los problemas más acuciantes y elementales del nivel de vida. Mientras los grandes bancos internacionales ratificaron con los hechos el gran negocio de la usura, estos Estados están comenzando a pagar las consecuencias de la crisis mundial: la inflación, la recesión y la depresión general, agregando a todo ello, las amortizaciones e intereses de la deuda externa superiores a toda racionalidad económica. El esperado "boom" o los "milagros económicos" se esfuman como juegos de prestidigitación. Reaparecen los problemas sociales agudizados por la violencia de la crisis económica. Por primera vez, aún en el terreno de las intenciones, los gobiernos empiezan a reconocer que el problema del endeudamiento ha pasado a ser un problema común de los deudores. Es lógico, las consecuencias de la crisis mundial conmocionan profundamente las bases de las economías dependientes. Porque la crisis ha revelado todo el alcance histórico del compromiso entre las economías subordinadas y las altas esferas de la economía mundial. El "desarrollo dependiente" ha resultado un propósito platónico que nos devuelve a una realidad profundamente permeada por los problemas del subdesarrollo y de la inconsistencia económica. Pero la tesis del "desarrollo dependiente" no era únicamente económica, era también una tesis política que agotó toda idea reivindicativa, toda idea revolucionaria. No es raro, por eso, que en muchos países se hubiese apelado a las fuerzas de la reacción política para su consagración mas completa. Todas las diferencias de matices, de desarrollo histórico, y de tránsito de la democracia a la dictadura, de realización particular de la época reaccionaria han tenido un denominador común en el Cono Sur: el Estado autoritario.

Ahora, junto a la crisis económica se está produciendo la crisis del "Estado autoritario", donde la descomposición económica es uno de los factores que mina las bases del Estado, aunque no el único. Pero lo fundamental es que, en casi todos los casos, hay un verdadero desequilibrio en la dominación del bloque de poder.

Anota Poulantzas que los regímenes de dictadura "son incapaces de reformarse, es decir, de hacer una evolución interna continua y lineal hacia una forma de régimen 'democrático-parlamentario', que reemplazaría al precedente por una vía de 'sucesión controlada'." Se refiere, por cierto, a los regímenes dictatoriales que estuvieron vigentes en España, Portugal y Grecia, en los dos primeros casos con fuertes resabios fascistas en Europa. Pero las notas generales del régimen dictatorial se reproducen, parcialmente, en el "Estado autoritario latinoamericano" en el que el poder del Estado es invadido por las Fuerzas Armadas. El "factor militar"

en el poder comienza por imponer una clara línea de separación entre el Estado y la sociedad de masas. Ya se sabe que la "dictadura estatal" para ejercer su dominación política, además de la coerción, necesita de la dominación ideológica. Sin consenso no hay nexos nacionales entre gobernantes y gobernados: no hay gobierno en sentido estricto sino sistematización de la violencia o compulsión desnuda de la fuerza. La organización política del "monopolio de la fuerza", vista en todo su trayecto histórico, invierte su fuerza en debilidad. Porque al carecer de fundamento histórico para introducirse en la masa, pierde su aptitud estratégica. El "Estado autoritario" basado en el ejército, a diferencia del fascismo clásico, está privado de apoyo social, no tiene los mecanismos (sindicatos y partido) con que contaba el fascismo para combinar el peso de la coerción con la dictadura ideológica. Se ha llamado "regímenes de excepción" a las dictaduras abiertas que han reemplazado al sistema democrático-republicano, incluyéndose tanto al fascismo como a los Estados autoritarios militares, empero, en ambos casos hay algo en común, que "lo excepcional" no es sinónimo de "provisionalidad", sino que expresa la ruptura de las formas clásicas por formas que se plantean una transformación completa en las relaciones estatales. En la mente de estas dictaduras no hay idea de "provisionalidad", son "incapaces de transformarse", de regresar al *dominio común* de la burguesía, la república democrática. La idea es más bien la del reforzamiento de la autoridad del Estado, militarización de la sociedad y sobredeterminación de la "seguridad nacional".

Es por eso que en la base del tránsito democracia—dictadura—democracia, que es lo que se está viendo, o está por verse, en el Cono Sur, existe una crisis de fondo del sistema de dominación. Porque aunque la dictadura se incube en el naufragio de la declinante democracia liberal, su resultado puede ser no sólo la destrucción de la democracia demoliberal sino, incluso, su sepultamiento. En efecto, la democracia que prosigue a la dictadura llega delibitada a la escena para encargarse de la crisis, siendo ella misma un elemento de la crisis. El "continuum" dictadura—democracia, por todo esto, no es un tránsito indiferente a la sociedad nacional, ni un plan intencionadamente coherente como un epílogo necesario. Es resultado de las convulsiones sociales donde la cuestión económica se entrelaza con el reordenamiento de las instituciones y de las relaciones políticas. Las medidas concretas de "acumulación del capital" definen las relaciones entre el régimen y la sociedad de masas. El "bloque de poder" propio del "Estado autoritario" es una alianza orgánica de la gran burguesía con una masiva agresión económica del capital internacional. La dictadura del "Estado autoritario" ha establecido relaciones concretas con la gran burguesía, y una relación abstracta de explotación desnuda con las clases populares: relaciones de superexplotación. En otras palabras, al "Estado autoritario" le ha correspondido su lógica económica específica en un nuevo ciclo de reproducción del capital. La dirección del Estado, sin embargo, no se instala ni verifica sin una acumulación de contradicciones en el seno mismo de las clases dominantes. El caso argentino es notable en cuanto a inestabilidad del aparato dirigente

y el golpe dentro del golpe de Estado.

El "Estado autoritario" en su estructura y concepción no es sólo el guardaespalda de las transnacionales, es toda una *forma de Estado* en la que entran también intenciones fascizantes y una voluntad nacional estratégica. Responde, como está dicho, a la nueva fase de acumulación del capital en ciertos países dependientes; pero por otro, a la intensidad de las contradicciones sociales que empujan a una reforma del Estado para solucionarse. Pero el "Estado autoritario" por su propia naturaleza, al romper con la democracia parlamentaria, ha incubado en su propia entraña su negación. La democracia parlamentaria no sólo permite la "dominación común" de toda la burguesía, sino que permite, sobre todo, que la burguesía gobierne en nombre de la nación, que el "Estado de clase" se sumerja en la apariencia del "Estado de toda la sociedad". El "Estado autoritario", en cambio, es en las evidencias y las apariencias, un "Estado de clase" inconfundible. Dictadura pura y abierta, por tanto, del capital. La sociedad —clases populares— ha tomado una considerable distancia del Estado, y a su vez, el poder militar ha definido con absoluta precisión la separación jerárquica y burocrática del Estado. Ha sido abolida toda la osatura del régimen representativo que con sus instituciones y partidos, pone en acción las correas de transmisión entre gobierno y movimiento social, en otras palabras, el absoluto de la "volición de la fuerza" ha relativizado el consenso.

Es posible una situación perentoria, digamos provisional, de dictadura burocrática separada de la sociedad civil; pero el Estado moderno, amplio y complejo no puede estabilizarse si no incluye a la sociedad civil, no como un simple agregado, sino como parte de su misma naturaleza. Como el "Estado autoritario" basa su equilibrio en su estructura jerárquica y burocrática, al romper los eslabones entre Estado y sociedad civil ha roto con los instrumentos que hacen posible la dominación ideológica, ha roto con el consenso. De esta manera, se refuerza patológicamente el centralismo burocrático. Los intereses diversificados y encubiertos por la extensa red de instituciones propia de la democracia parlamentaria aparecen desnudamente como intereses concentrados en los aparatos estatales: particularmente en el ejército. El "ostracismo" de este Estado se convierte en la razón última de sus crisis. La fuerza deviene en debilidad. Su propia faena de destrucción le impide echar mano a los recursos para que la lucha de clases establezca relaciones políticas. Poulantzas escribe que los regímenes dictatoriales se ven obligados a transformarse, cuando ya no pueden más controlar por la fuerza el movimiento popular, lo que quiere decir (subraya) que tampoco pueden, en consecuencia —y de ningún modo—, controlar y dirigir su transformación. Se refiere al tránsito de la dictadura a la democracia representativa, puesto que no siempre la crisis de la dictadura presupone crisis revolucionaria en el sentido de la instantánea oportunidad para el socialismo. La Argentina, el Brasil o el Uruguay, por lo menos hoy, están de regreso a la democracia. porqué y cómo se opera esta vuelta a la democracia, son cuestiones que atañen por una parte a lo que es ya una evidencia: la crisis del Estado autoritario y

los límites reales en que se desenvuelve. Pero que los regímenes dictatoriales de este tipo no puedan controlar y dirigir su transformación, así sea bajo la forma de democracia liberal, es un hecho que destaca una doble situación: el "Estado autoritario" que surge para resolver la crisis de la democracia entra, a su vez, en crisis, permitiendo el retorno de la democracia en el marco de las limitaciones del Estado burgués. El Estado representativo moderno no es producto de la elaboración libre de la constitución política ni una "construcción voluntaria de la vida política, sino una compleja función institucional de la sociedad capitalista". Por eso es que en el fondo de las "rupturas" que empujan a un cambio de la forma del Estado, subsiste una situación irresuelta de desequilibrio entre las formas políticas y las relaciones económicas privadas. La nueva forma, por eso, se propone dar coherencia política al "bloque de poder", asegurando la hegemonía de las fracciones más modernas y monopolizadas y creando el ambiente social para el ejercicio de su condición de "clase reinante". Sin embargo, el nuevo régimen no es más que la "debilidad oculta" del anterior régimen, no han desaparecido sino que han tomado otro curso los elementos más resistentes de la crisis, ha sido ahogado el fenómeno pero el número no, porque en sustancia la crisis es una crisis del Estado dependiente. La clase que hegemoniza el "bloque de poder" no puede diversificar sus intereses asociándolos a los "intereses generales" al contrario los *concentra* en el lugar anómalo del centralismo burocrático. A su vez, el "Estado de clase" es la representación abstracta de un orden de relaciones sociales acatado pero no aceptado, impuesto por medio de la sistematización de la violencia a través del predominio de los aparatos coercitivos sobre los otros aparatos del Estado. A diferencia del fascismo, en el "Estado autoritario" desaparece el *minimum* indispensable de consenso mantenido a través del corporativismo y los instrumentos ideológicos; el poder político está a cargo del ejército, del aparato del Estado, paradójicamente, más burocratizado y separado de la sociedad. Del aparato coercitivo cuya unidad, homogeneidad e integridad dependen, justamente, de su grado de separación burocrática respecto de la sociedad.

Especialmente los políticos argentinos han difundido la idea del "partido armado" atribuyéndola al ejército. La noción del "partido armado" no es una noción grosera o forzada, porque de hecho el ejército está cumpliendo el papel del partido de la burguesía como clase dominante. Para Gramsci, el conjunto del Estado es el que constituye "el partido de las clases dominantes", claro que en el sentido de Marx como el comité que resuelve los asuntos comunes de la burguesía. Aquí más bien se trata de un aparato del Estado, del "aparato armado" del Estado que toma el lugar del partido y se constituye en el "partido armado" y en el único medio de organización política del bloque social dominante.

En el "Estado autoritario" dirigido por el "partido armado", el Estado se funde más enérgicamente con los intereses del capitalismo concentrando sus fuerzas. Pero el "sujeto" del Estado, el ejército, que pro-

porciona en este caso los "intelectuales" en el sentido gramsciano, y que cumple la función del *partido único* de la clase hegemónica carece de la versatilidad y ambigüedad del partido político para disolver los intereses de clase en intereses generales.

El "partido armado" es impotente para establecer una relación global entre las clases, e incluso aunque no siempre, para crear una ilusión de poder entre los estratos atrasados de abajo; su papel está nítidamente prefigurado de una manera vertical, es el "ejecutivo independizado". Desde luego este resultado es contrario al propósito de englobar a todas las clases en la unidad de la nación; para este propósito, el "Estado fuerte" no basta, no sólo por la inconsistencia de la premisa sino también por la falta de instrumentos ideológicos para *subdeterminar* a una parte importante de la población. Asumir toda la responsabilidad del Estado y de la nación significa, empero, asumir toda la realidad contradictoria de un mundo social antagonizado y en creciente tensión.

Teóricamente colocado por encima de la sociedad, pero en la práctica instalado en uno de sus extremos, el "partido armado" no sólo reproduce el conflicto (contradicción) de las fracciones del bloque dominante sino también el antagonismo "amortiguado" por la coerción entre el capital y el trabajo. Su arsenal ideológico es limitado y por consiguiente sus posibilidades de ganar consenso aparecen relativizadas y disminuidas para el ejercicio del poder a largo plazo. Su más importante ideología, la "ideología nacionalista" no es la del "nacionalismo progresista" reivindicativo es más bien una construcción reaccionaria desprendida de la "doctrina de seguridad nacional". Así visto, el "nacionalismo" es la justificación teórica del Estado de clase, es el argumento reforzador de la autoridad, la cobertura ideológica para los procedimientos punitivos de depuración social.

El "nacionalismo" de la "seguridad nacional" es el que corresponde —como ideología dominante— a la nueva etapa de adaptación del Estado a la corriente económica mundial. Como "ideología", empero, no tiene trascendencia para todas las clases, cumple únicamente una función cohesionadora en las propias filas del ejército. Por otra parte, su base filosófica no está en el *interés nacional*, está en el *interés del sistema*. No es un concepto estratégico nacional, es un concepto estratégico militar. La "seguridad nacional" es continental en el sentido del TIAR en cuanto instrumento del llamado sistema interamericano, que se vuelca hacia las fronteras interiores, hacia el enemigo interno. De esta complicada construcción, el pueblo sólo percibe el peso de la represión y de las proscripciones. La ideología "nacionalista" no va sola, va acompañada de pronunciados acentos religiosos, de reivindicaciones catolicistas de inspiración española y franquista. Con la diferencia de que el franquismo llegó a instrumentar la religión con eficacia, porque contaba con un catolicismo firmemente arraigado en la nobleza terrateniente y con un "opus dei" aliado a la burguesía industrial. Este no es el caso de Latinoamérica. La "guerra de las Cruzadas" del ejército, aquí, se ha encontrado con una gran parte de "herejes" en la propia Iglesia. La "ideología religiosa" no

pudo llevar a Cristo como estandarte de las bayonetas; muchos curas que reivindicaron al "Cristo proletario" acabaron como víctimas de la represión en las cárceles. Los elementos ideológicos del Estado autoritario militar son, más bien, el producto de una candorosa pero corrupta visión de la sociedad.

Las otras premisas ideológicas no son menos febles. El "apolitismo" —una mentira consagrada— se identifica con el "desarrollismo y las virtudes del tecnocratismo". El "apolitismo" es el fundamento filosófico de la nueva estrategia económica: la desorganización compulsiva de los mecanismos de la lucha de clases para el fin trascendente del desarrollo. El desarrollo se propone como una filosofía pero se convierte en una idea dogmática. Los tecnócratas son los intelectuales de los planes, proyectos y programas que se elaboran en el reino absoluto de los índices y los números, con una fría visión de la sociedad y del hombre. Son la "respuesta" al "hombre político" al derecho de huelga y al derecho de los sindicatos perentoriamente suprimidos o limitados.

Empero, la política, así suprimida por el "estatuto militar", por la voluntad compulsiva del poder político, no por eso desaparece o se extingue. Se esconde como un río subterráneo, no está presente en la "legalidad" pero existe escondida en la clandestinidad. Se proyecta en todos los resquicios posibles que ofrece aún la más cerrada institucionalidad, porque es uno de los productos culturales de más intensa existencia en las sociedades modernas. Incluso a la más ligera vacilación de la institucionalidad vigente, pueden precipitarse acontecimientos que amenazan con romperla. Pero, en realidad, el efecto más notable es que la "política suprimida" suele reconcentrarse en los propios aparatos del Estado, especialmente en el ejército que se convierte en una zona vulnerable haciendo peligrar su unidad y cohesión.

Una de las condiciones del Estado moderno es que el poder formal está relativamente autonomizado del poder real. Un aspecto, de más está decirlo, importante del poder real son las Fuerzas Armadas. En el "Estado autoritario" el poder formal y el poder real se unifican dándole un sello inconfundible al gobierno. Desaparece toda apariencia democrática, toda envoltura amortiguadora de la lucha de clases. El Estado se autocratiza. El gobierno recurre a la dictadura ya que más que gobernar, dicta. La estabilidad política no depende ya de la eficacia ideológica del bloque dominante, depende de la eficacia represiva, del *pogrom*. Como la democracia ha sido limitada hasta la dictadura, la "continuidad del Estado" exige mantener a la sociedad en "Estado de guerra", en un "sitio perpetuo" que termina chocando con la misma naturaleza de todo Estado. Pero como al mismo tiempo, en la ideología militar está la superestimación sublimada de las virtudes disciplinarias del ejército el "orden" se impone o se quiere imponer, porque el ejército se alza como el "partido del orden". La "continuidad del Estado" está supeditada al orden.

El prolongado reinado de las Fuerzas Armadas en el Brasil tuvo de su lado al continuado crecimiento económico y a la diversificación industrial. Estos efectos fueron considerablemente menores en Argentina y

Chile. Pero en todos los casos, el "autoritarismo militar" ha llegado a su tope. Están en marcha procesos de retorno a la democracia o protestas colectivas como en Chile que son síntomas evidentes del agotamiento del poder dictatorial. No en todos los casos el "tránsito de la dictadura a la democracia" será el mismo, el tormentoso camino que está siguiendo el proceso democrático de Bolivia, es una prueba de ello.

Notas

¹ dos Santos, Theotonio, y Bambirra, Vania, *Brasil: racionalismo, populismo y dictadura*.

² Idem.

³ Cardoso, Fernando H., *Clases sociales y crisis política en América Latina*, Instituto de Investigaciones Sociales de la U.N.A.M., Siglo XXI Editores, México.

⁴ Labastida, Julio, *Clases sociales y crisis política en América Latina*, Siglo XXI Editores, México.

⁵ Idem.

⁶ Cochabamba es la tercera ciudad de Bolivia en importancia, ubicada entre La Paz y Santa Cruz; su control por el golpe militar de agosto de 1971 tenía importancia vital para una eventual guerra civil.

⁷ Comunicado conjunto suscrito entre Geisel y Banzer, en la ciudad de Cochabamba en mayo de 1974.

⁸ De la entrevista de Charaña surgió el restablecimiento de relaciones diplomáticas Bolivia-Chile, y las desventuradas negociaciones sobre el puerto para Bolivia o el llamado "canje territorial".

⁹ El Mutun es uno de los grandes yacimientos de hierro en el mundo. Está ubicado en la frontera con Brasil.

¹⁰ Todos los estudios técnicos demostraron su inviabilidad, tanto por la topografía de la playa de Macha como por su reducida extensión de 5 kms. y la dificultad de su conexión con el altiplano boliviano.

¹¹ Tratado que obliga a Bolivia y a Chile a consultar al Perú sobre cualquier posibilidad de negociación en ex-territorios peruanos.

¹² Poulantzas, Nicos, *Las crisis de las dictaduras*, Siglo XXI Editores.

¹³ Idem.

¹⁴ Galeano, Eduardo, *Las venas abiertas de América Latina*, Siglo XXI Editores.

¹⁵ Idem.

¹⁶ Idem.

¹⁷ Kaplan, Marcos, *Formación del Estado Nacional en América Latina*, Amorrortu Editores, Buenos Aires.

¹⁸ Galeano, Eduardo, ob. cit.

¹⁹ Kaplan, Marcos, *América Latina: historia de medio siglo*, Instituto de Investigaciones Sociales de la U.N.A.M., México.

III. 1978-1982: La Dictadura y la Democracia

La crisis del militarismo. El rescate del espacio democrático siguió un curso difícil y contradictorio. Después de siete años de dominación burocrática de los militares en el gobierno de Banzer llegaba al fin la solución del sufragio universal, ofreciendo esperanzas pero sobre todo amenazas. Como todo sistema en decadencia, el de Banzer estaba en la fase de las concesiones ya que había sido obligado a un viraje respecto a la diplomacia pro-pinochetista del "canje territorial"; las presiones de la opinión nacional obligaron a la ruptura de relaciones con Chile. Retrocedía, también, respecto a la fecha de las elecciones, inicialmente programadas para 1980, ahora se adelantaban, para 1978. Cuando las dictaduras empiezan a retroceder, los pueblos persisten en la "explotación del éxito", en regatear hasta el último detalle los derechos en disputa. Eso se vio en las elecciones de 1978, Banzer tenía la intención de perpetuar el "poder militar" a través de la sucesión legal y controlada del candidato oficial el ex-Ministro del Interior; Banzer "el líder" y Pereda "el Presidente" permitirían la continuación del reinado ininterrumpido de las Fuerzas Armadas, legitimizado por la fachada electoral. Pero el equívoco era completo. Ambos iban a chocar, mejor a enredarse en una historia abominable de trucos y fraudes que terminaron disolviendo la base moral de este proyecto.

Pereda, impugnando por todos los partidos, va a las elecciones. El gobierno monta el fraude movilizándolo al ejército, los soldados asaltan las ánforas, cambian las papeletas, y el ejército se complica con estos comicios prefabricados. El simulacro de las cifras, la trampa y el truco, hacen de la "victoria" de Pereda una derrota moral, insoportable para el propio gobierno que se ve obligado a pedir la anulación de las elecciones. Después vendrá en respuesta el golpe de Pereda contra Banzer, el golpe del general Padilla contra Pereda, el gobierno interino de Guevara y el golpe de Natusch, el gobierno interino de la señora Gueiler y el golpe de García Meza, el desplazamiento de éste por Torrelío y el de Torrelío por Vildoso antes de llegar al Congreso de 1980 y al primer gobierno constitucional. Nada menos que nueve gobernantes, entre militares y

civiles, suben y caen desde la silla presidencial en apenas el transcurso de cuatro escasos años: 1978-82.

El final de Banzer no es el principio de la crisis, es su punto de ebullición, su fase de maduración.

Hasta el 17 de julio de 1980 se intentan tres actos electorales; el primero, anulado por fraude; las elecciones de 1979 no culminan con el reconocimiento congresal al ganador Siles Zuazo, y las últimas en 1980 son interrumpidas por el golpe de García Meza. Elecciones y golpes de Estado, sufragio y terror, explotación del éxito hasta la libertad más extrema y supresión absoluta de toda libertad, esto es lo que caracteriza a lo que, paradójicamente, la UDP y Siles llaman "tránsito pacífico de la dictadura a la democracia". Todo el curso del proceso democrático que se inicia en 1978 está saturado de violencia y de sangre, porque el ejército no deja, en ningún trance, de ser el carcelero de la democracia. Contra el gobierno interino de Guevara, designado por el Congreso Nacional, se levantan los ejércitos de Natusch como una anticipación luctuosa de los días de García Meza. Este entrelazamiento dramático, donde las causas y consecuencias se confunden, del "putsch" y de la conquista y reconquista de los espacios democráticos ahogados por la fuerza de las bayonetas, define una situación de incertidumbre general sobre el problema del Estado y la sociedad.

Después del "septenio" de Banzer, de la tediosa estabilidad dictatorial de las Fuerzas Armadas irrumpieron, de pronto, los elementos desequilibrantes que habían estado subyacentes por un largo tiempo. Hicieron crisis en el momento de máxima tensión, cuando el Estado solo podía estabilizarse a través de su reorganización democrática. Pero las oscilaciones bruscas entre las tentativas regresivas del aparato militar por retomar el control del poder y los esfuerzos de la democracia desgarran la "situación política", estableciendo un clima de confrontación y de antagonismo incensante. No sería posible explicarse con claridad el difícil e imprevisible destino de la democracia boliviana, sin un escueto recuento de los cambios políticos operados en estos cuatro intensos años (1978-82) de la vida nacional. Los intentos electorales coronados invariablemente por la frustración, no hacen sino destacar el trasfondo contradictorio de la situación política, donde los "oasis" democráticos son meros escenarios de las batallas decisivas de las clases condenadas casi a un inexorable enfrentamiento.

Las segundas elecciones (1979) atrincheraron frente a frente a dos grandes bloques de partidos: la UDP organizada en base al MNRI,¹ el PCB y el MIR y el MNRH² apoyado por partidos menores. Además, el propio Banzer lanzó su candidatura con su partido de reciente creación, la ADN, y el candidato Marcelo Quiroga Santa Cruz con su partido el PS-1.³ Como ni Siles ni Paz Estenssoro lograron la mayoría absoluta de los votos, la decisión final fue trasladada al Congreso Nacional. A pesar del clima de expectativa y tensión, el Congreso no pudo elegir al Presidente y Vicepresidente por el repetido empate en los votos. Siles reclamaba con su huelga de hambre, la consagración legal a la mayoría relativa

que había obtenido en los comicios generales. Pero tanto su huelga como sus esperanzas resultaron inútiles. Paz Estenssoro, su viejo rival de las épocas movimientistas, entrampó definitivamente toda posibilidad de los "dos tercios" de votos para la UDP. Fueron días de tenso dramatismo, donde el Congreso Nacional bajo la recelosa vigilancia de las Fuerzas Armadas no encontraba la fórmula para desentramar la situación.

No salió del Congreso un Presidente para gobernar los cuatro años que señala la Constitución Política. Ante la imposibilidad de lograr este resultado constitucional y con la maliciosa satisfacción de los grupos gopistas, el Congreso Nacional, "interpretando la norma constitucional", designó a Walter Guevara Arce (presidente del Senado) presidente interino de la República para presidir nuevas elecciones. La figura del "interinato" era el último recurso legal disponible para salvar las apariencias de la democracia y conjurar, momentáneamente, el peligro del golpe militar. Impotente el Parlamento Nacional para alcanzar la solución política se había visto obligado a encontrar una "solución jurídica" "interpretando" la ley constitucional. En lugar de la "voluntad política" de la Nación, se imponía la "voluntad jurídica" de los legisladores, la democracia para salvarse en realidad, se debilitaba. Este simple hecho tuvo una importancia decisiva en el suceso político.

En primer lugar, se había puesto de manifiesto que la lucha política se colocaba al borde de un equilibrio que se reflejaba en el nivel parlamentario; y en segundo lugar, que el clásico sistema presidencialista, por obra de los acontecimientos, se transformaba en un sistema parlamentario.

El fugaz período de Guevara estuvo caracterizado por el predominio parlamentario sobre un ejecutivo sin fuerza, por el reagrupamiento de los partidos y los frentes, por la importancia creciente de la COB y la indetenible conspiración militar.

El de Guevara fue un "gobierno interino", dependiente del Parlamento pero aislado de todos los partidos. A pesar, sin embargo, de que la "solución jurídica" del Congreso no estaba a la altura de la "situación política", había un consenso nacional de indiscutible tolerancia y comprensión al nuevo estado de cosas. Finalmente, el equilibrio inestable entre las fuerzas políticas que se reflejaba en el Congreso era, a su vez, producto de una nueva era social, de una nueva realidad sociológica en el país.

En efecto, los preceptos constitucionales sobre la "mayoría absoluta" en el sufragio universal estaban inspirados en la época movimientista, en la que el dominio completo del MNR definía victorias electorales por abrumadores resultados. Después del prolongado reinado militarista sobre la nación, no sólo el MNR se había escindido y atomizado en partidos diferentes sino que, empezando su agonía histórica, tenía que tender la mano a partidos de izquierda para revalidar su presencia en la historia. Las grandes coaliciones en unos casos o partidos renacientes como el PS-1 en la izquierda o la ADN en la derecha modificaban el cuadro político electoral. La sociedad misma presentaba un complicado equilibrio de fuerzas y un horizonte nuevo.

Pero en lo que tocaba a las Fuerzas Armadas, los mandos militares no habían asumido con convicción la "apertura democrática", la "apertura" les había sido "arrancada" por la presión popular, frustrando los designios de Banzer-Pereda de una "dictadura constitucional" bajo el control del ejército. La apertura iniciada en 1978 remataba en el gobierno de Guevara, después del derrocamiento de Banzer por Pereda. Este sólo hecho era definitivamente demostrativo de que la intención continuista y prorroguista de los militares tenía por principal adversario a la descomposición interna de las Fuerzas Armadas. La cohesión militar, tras largos años de gobierno, aparecía seriamente deteriorada por la lucha de fracciones. La situación interna de las Fuerzas Armadas, sin embargo, en nada disminuía su ánimo sedicioso, su voluntad de recobrar el "paraíso perdido" del poder. Lo que no implica inexistencia de tendencias contrarias al golpe, los mismos acontecimientos se habían encargado de producir una "conciencia constitucionalista" y antigolpista que ya emergió con ocasión del golpe del general Padilla contra Pereda. ¿Qué ocurrió entonces? Cuando todos los partidos exigían "elecciones inmediatas" ante la actitud dilatoria del gobierno, cuando Siles en un notable gesto de terquedad histórica llamó al pueblo a las calles, y cuando Pereda dispuso el enfrentamiento militar contra esta convocatoria de masas el "sector constitucionalista" del ejército se cruzó de por medio derrocando a Pereda. El momentáneo predominio de la tendencia constitucionalista impuso a Padilla y forzó la realización de elecciones, pero el predominio de la tendencia constitucionalista se rompió con el golpe de Natusch en 1979.

Guevara estaba atado al Parlamento y el Parlamento, a su vez, sometido a la "vigilancia" de la "institución tutelar de la patria". El Congreso Nacional había resuelto el mecanismo constitucional para el gobierno interino; pero muy pocos meses después, vendría el golpe de 1º de noviembre, el luctuoso golpe de Estado de Natusch que barrió con todas las apariencias legales de la incipiente democracia. Es difícil, definir hasta qué punto un golpe de Estado es oportuno o inoportuno, pero éste fue indiscutiblemente inoportuno. Se estrelló contra una todavía vigorosa conciencia democrática viviente en las masas, contra una experiencia que recién estaba echando a andar, y a la que todos habían apostado, incluso el propio ejército. El golpe de Estado se encontró en las calles con las "masas en acción", con el rechazo compacto de la muchedumbre, con la ira de las multitudes que se multiplicaron en las calles atajando a los tanques, interponiéndose entre las bayonetas. La "guarnición de La Paz" descargó su fuego contra las masas, utilizó todos los recursos bélicos para "ablandar" al pueblo y dejó como saldo una impresionante matanza. Pero, el "ánimo democrático" había echado ya sus raíces: la COB convocó a una huelga general que fue cumplida hasta en los últimos rincones. Sentado sobre la silla presidencial, Natusch se sintió impotente para poner en movimiento la máquina del Estado. Las oficinas ministeriales se vieron privadas de sus funcionarios, vacías, las actividades productivas paralizadas, la nación sin movimiento. La única y

sola fuerza de la conciencia colectiva, armada de piedras o palos, se puso al frente de esta insólita aventura sin principios ni objetivos.

Nunca se había producido una ola tan gigantesca de rechazo ni una tan bien montada maquinaria de desobediencia civil a la arbitrariedad de la bota. Nada pudo Natusch contra la pared de la obstinación popular. Ni el Estado ni el país podían funcionar en estas condiciones de convulsión social. Desde los últimos anillos de miseria de las barriadas populares hasta las zonas céntricas de la ciudad de La Paz insurgían las muchedumbres cuya única arma era la poderosa palanca del odio, la fuerza interior de los que se oponen con toda el alma a todas las imposiciones. Los tanques quedaban atascados entre paredes de ladrillos y adoquines amontonados por las manos innumerables de la multitud, se improvisaban barricadas y obstáculos y la soldadesca se movía apenas, con dificultades, en una ciudad retomada por sus propios pobladores.

El presidente Guevara respondió al golpe, organizando su gabinete en la clandestinidad y dictando decretos simbólicos para existir como gobierno. También el Parlamento funcionaba en la clandestinidad como consecuencia de la Resolución Congresal que desconocía al gobierno de facto. Dentro del ejército, más de cien oficiales con sus firmas y en un manifiesto público condenaron el golpe de Estado y respaldaron la vigencia de la democracia. ¿No eran acaso, las peores condiciones para un golpe de Estado? El pueblo alzado, las instituciones legítimas en franca resistencia, el ejército dividido, todo conspiraba contra la conspiración, la sedición del ejército había provocado la sedición de todos contra el ejército, el cual hizo lo único que le quedaba: negociar. Buscó al Parlamento y a la COB con la intención de acordar una fórmula de solución en un equilibrio imposible: "cogobierno COB-Fuerzas Armadas" con la coexistencia del Parlamento. Pero la única negociación posible que resultó fue la "capitulación honrosa" del ejército.

El Parlamento reanudó sus funciones en el edificio de la Plaza Murillo, rodeado por la hostilidad amenazante de los tanques y los cañones. Y mientras llegaban los "ultimátums" del Palacio de Gobierno, acompañados de las "condiciones" del coronel Natusch, la respuesta de los legisladores era la dilación, la táctica de la paciencia; el método de ganar tiempo debería también minar las energías de los militares. Pero al fin, el golpe no sólo había traído su costo de sangre, también cobró su precio al mismo prestigio de la democracia. La larga negociación entre el Parlamento y Natusch acabó socavando el prestigio del legislativo. El tremendo gasto de energías del pueblo para contener el golpe de Estado, su gasto de sangre, no halló compensación en los supuestos beneficios de la democracia; ablandó, más bien, los ánimos, desarmando el espíritu público para el ulterior golpe de García Meza. Tampoco la democracia se caracterizó por su lealtad a los oficiales demócratas, la señora Gueller no hizo nada para impedir que fueran barridos de las filas castrenses. Como una epidemia que todo lo destruye a su paso, el golpe de Natusch debilitó profundamente el espíritu democrático. Cuando por fin los generales y los coroneles abandonaron el Palacio de Gobierno aceptando

el "veto" del Parlamento a Natusch, el Congreso le retiró el "mandato" a Guevara aceptando el "veto" de los militares. De allí surgió la coyuntura y la oportunidad para Lydia Gueiler, presidenta de la Cámara de Diputados, proclamada con rara unanimidad en el Congreso Nacional.

La señora Gueiler designada para presidir las elecciones de 1980 lanzó su "paquete económico", que provocó una movilización de protesta de la COB y el bloqueo de caminos por los campesinos. Las clases que contuvieron el golpe de Natusch resultaban pagando los costos de la crisis económica. El segundo "gobierno interino" mataba prematuramente las ilusiones democráticas y aparecía acorralado por la conspiración militar que comenzaba en 1980 consolidando el golpismo en las Fuerzas Armadas. El ejército estaba dividido, un numeroso grupo de oficiales exigía el relevo del Comandante García Meza. Pero el gobierno no se atrevió a depurar al ejército y ratificó a García Meza, a Arce Gómez y a todo el aparato sedicioso. García Meza salió victorioso de la crisis, puso a todo el ejército a disposición de la campaña golpista y en plan de ofensiva, mientras el Parlamento Nacional, atascado y enfangado, deliberaba, y el ejército funcionaba como un órgano deliberativo paralelo en las reuniones de "grandes y pequeñas unidades" que "analizaban" al detalle la situación política. El ejército había retomado la iniciativa política y desde el Departamento II del Ejército (Oficina de Inteligencia), Arce Gómez organizaba el terrorismo. Todas las noches se sembraba el pánico en la ciudad de La Paz con la explosión de bombas de alta potencia. Después de cada reunión de las "grandes y pequeñas unidades", García Meza hacía declaraciones amenazantes y subversivas.

La tercera elección ratificó la victoria de la UDP, pero era el preludio del golpe de Estado. Porque, además, la "táctica antigolpista" de los partidos era una pura teoría, impregnada de un sentimiento electoralista antes que en la organización de mecanismos de autodefensa. Los partidos veían el peligro y sin embargo lo subestimaban, encandilados por los fuegos artificiales de la contienda electoral. El intento más completo, y aún así insuficiente, para una "táctica antigolpista" fue el CONADE (Consejo Nacional de Defensa de la Democracia) que incluía a la COB, a la Iglesia y a los partidos democráticos. El CONADE resultó un instrumento más declarativo que efectivo; sólo la acción espontánea desde abajo y no la dirección consciente desde arriba hizo surgir algunos "comités de defensa" en la base, diseminados y sin conexión. La UDP embriagada con sus éxitos electorales quería transformar los "comités de defensa de la democracia" en "comités de defensa del voto" distorsionando los fundamentos mismos de la autodefensa. La decisión golpista de las Fuerzas Armadas contrastaba con la visión unilateral de los partidos, con su quehacer rutinario y sin perspectivas. El pueblo fue a las elecciones, ratificó su decisión democrática, pero en realidad estaba marchando al degüello.

El Parlamento que había comenzado designando un gobierno, que era la imagen de la legalidad frente a la sedición, había caído junto a Natusch, puesto que una parte de los parlamentarios resultó comprometi-

da con el golpe de Estado. Aunque el Parlamento se "depuró" de sus representantes comprometidos con el golpe, quedó debilitado. El juicio de responsabilidades contra el gobierno de Banzer iniciado brillantemente por Marcelo Quiroga Santa Cruz —una pieza maestra en el análisis político del régimen del septenio, una denuncia del sistema impactante y patética que elevó a Marcelo Quiroga Santa Cruz a la cumbre— terminó en un prolongado estancamiento hábilmente provocado por la defensa, por los síndicos de Banzer. Semana tras semana, la "defensa" se adueñó de la palabra condenando al Parlamento a la inactividad. La vida parlamentaria había sido sacudida y conmocionada por la intensidad de los acontecimientos políticos: el golpe de Natusch. Un ejército amenazante movilizado en plan de guerra, la inseguridad general y la incertidumbre de las instituciones contribuían a una sensación de precariedad y derrota. Para curar su propio deterioro, en un intento de rescatar su prestigio mermando y declinante, el Parlamento se vio obligado a limitar su mandato con la aprobación de una resolución por la que las elecciones presidenciales de 1980 debían completarse con las elecciones generales para diputados y senadores.

El golpe del 17 de julio. La técnica del golpe militar progresa constantemente sobre sí misma. Ya han pasado los tiempos en que los militares entraban al Palacio de Gobierno, ocupaban algunas calles céntricas y se declaraban gobierno ante la mirada despreocupada de un público indiferente. El golpe militar, ahora, ya no tiene por objeto la ocupación de los "símbolos" físicos del poder, éste es un ceremonial más en la depurada técnica desorganizativa del pueblo. El golpe de ahora es una guerra. Comienza por desarticular a sangre y fuego los mecanismos colectivos de la huelga general, comienza en el *pogrom*, en la respuesta militar estratégica a la existencia supuesta o verdadera de los focos de resistencia. El éxito del golpe depende de la crueldad más extrema y expedita de la más organizada, sistemática y eficaz administración de la violencia. Entran en acción los métodos de guerra, se ponen en movimiento todos los recursos bélicos en un despliegue de carácter nacional. No sólo se prevé el control inmediato del sistema estatal de comunicaciones, ferrocarriles, aeropuertos, telégrafos, caminos, etc., o los servicios como el agua y la electricidad, se toma el control del aparato productivo mediante la coacción física. Se trata de una guerra destinada a la ocupación del espacio físico y al exterminio del "enemigo": una guerra contra el pueblo.

El 17 de julio comenzó a funcionar el COC (Comando de Operaciones Conjuntas) para reconcentrar las operaciones y recursos en un mando único. El COC movilizó a las tropas sobre la zona estratégica principal, la ciudad de La Paz y los campamentos mineros de Oruro y Potosí. Simultáneamente se decretó el "toque de queda" para "entrampar" a la población bajo un estricto régimen de proscipciones, inmovilizándola y matando su iniciativa. La capital fue controlada y asfixiada por la ocupación de sus principales centros neurálgicos. En la ciudad, las tropas regulares salieron a las calles para completar el trabajo de los "paramilitares"

que actuaban como la fuerza paralela auxiliar o como los "comandos especiales" encargados de las primeras acciones punitivas. Más de cien ambulancias ocupadas por "paramilitares" fueron desplazadas en La Paz, para mimetizar una horrorosa faena de terror y muerte. Uno de estos comandos tomó el edificio de la Central Obrera y asesinó a Marcelo Quiroga, Carlos Flores y otros dirigentes. La población se sintió desconcertada y perpleja desde el primer momento, puesto que el comienzo de las acciones no estuvo a cargo del ejército sino de los paramilitares.

En el edificio de la Central Obrera se habían reunido los dirigentes políticos y sindicales para analizar la situación, apenas la guarnición de Trinidad se rebeló contra el gobierno. Poco antes del trágico suceso de los asesinatos se decretó la huelga general de la COB. Pero la huelga general se iba a realizar cuando ya el país estaba casi completamente controlado por las Fuerzas Armadas, La Paz era ya una ciudad ocupada y sitiada, y los hechos de la COB se reproducían en todas partes. Pero la convocatoria a la huelga general había sido escuchada por todo el país y comenzó a cumplirse en los distritos mineros. Casi quince días tardó el ejército en apagar la huelga general de los mineros, donde se disparó en las proporciones de un verdadero genocidio. Las "radios mineras" convertidas en un baluarte de la resistencia, en la única voz que alteraba la monotonía salvaje de los bandos militares eran a su vez, el último vestigio de la libertad en la oscuridad del terror. Lo que ocurrió en los distritos mineros, fue el resumen de toda la barbarie de este golpe de Estado.

Un golpe estratégicamente fracasado. Dentro de la lógica histórica, el golpe de García Meza estaba contra todas las reglas. Tras dos años de una corta historia, aunque dramática, para "reponer" la democracia, y cuando por fin, Bolivia se preparaba para constitucionalizarse, reaparecía el ejército como el amo absoluto del país. Ni las condiciones internas ni las internacionales favorecían a una aventura militar de este tipo. El proceso democrático boliviano era un hecho y no una hipótesis con que contaba todo el mundo. Adentro, el odio y el rencor al ejército quedaron desmotados en la semana trágica de noviembre de 1979. ¿En quiénes podía apoyarse esta nueva aventura? Finalmente, la democracia no había tenido ni siquiera la oportunidad de exhibir todas sus debilidades, la democracia como la UDP eran una esperanza fresca algo que recién iba a existir realmente. Es cierto que el golpe del 17 había sido preparado con suficiente antelación, aún más, ya estaba en marcha desde el mismo momento en que García Meza se consolidó en el mando del ejército pero aún así, su inoportunidad y su ceguera de propósitos resultaban desconcertantes.

Desde luego, porque en la política no pueden existir los hechos puros; ni pueden tampoco, bastarse las solas voluntades omnímodas de los hombres, por poderosos que parezcan. Tendrá que haber necesariamente, una concatenación de los sucesos. Quizás hasta el mismo 17 de julio la opinión nacional, habituada a razonar dentro de un cierto esquema, alejé de sus previsiones la inminencia del golpe que se precipitaba.

Las elecciones generales recién habían concluido y faltaban 23 escasos días para la transmisión constitucional del mando. Además, la política norteamericana estaba ostensiblemente en contra de un viraje militar en Bolivia y toda Europa apoyaba a la democracia boliviana y el golpe no contaba con la adhesión abierta de la empresa privada. En cierto modo, el país fue tomado por "sorpresa", cuando menos preparado estaba para no dejarse sorprender. Todo parecía que iba en contra de los militares porque todos estaban en contra de ellos, porque, finalmente, las esperanzas en el nuevo curso habían creado sus secretos mecanismos subconscientes de adormecimiento y aletargamiento.

Pero todo esto sólo ocurría en el terreno de las apariencias, en el terreno de la lógica formal. ¿Acaso la misma democracia inconclusa con sus actos electorales fallidos, interrumpida una y otra vez por asaltos militares recurrentes, no eran síntomas más que suficientes para comprobar el grado de la crisis política? ¿Es que Natusch o Pereda habían pedido permiso a la Embajada Norteamericana o a la Comunidad Europea? Ni Pereda ni Natusch, tampoco, se habían preocupado de antemano por el sentimiento colectivo. El golpe de Estado tenía cabeza propia y caminaba sobre sus propios pies no buscaba consenso, buscaba imponerse. No tenía cobertura internacional, sólo contaba con la simpatía y el aliento del militarismo argentino. Es por eso que el comando militar no tenía otro recurso que la aplicación del terror. Pero no tenía una estrategia nacional, aunque García Meza se ufanara de su propósito de quedarse veinte años en el gobierno, nunca habló del porqué ni el para qué del poder. Además, el García Meza de 1980 no era el Banzer de 1971 que actuó sobre una estrategia continental y surgió como la cabeza visible del "partido del orden" en un momento álgido de la lucha de clases. García Meza representaba un "pinochetazo" *ex-tempori*, una dictadura sin plan. Aislado de la nación y aislado de la comunidad internacional, ¿a dónde podía ir el régimen de García Meza? No sólo fue un golpe sin la nación, fue un golpe contra la nación.

La crisis política nacional no sólo había puesto a prueba a la agonizante dictadura de Banzer y a las combinaciones militares de Pereda y Natusch, también habían puesto a prueba a un experimento democrático que no alcanzaba a consolidarse. En todo este trayecto complicado y confuso, la presencia militar resultó ser un factor "incompatible con la democracia". Todo paso hacia adelante tropezaba inexorablemente con la rebelión de los cuarteles. ¿Con qué medios podía consolidarse una democracia interdicta, declarada *sub-judice* por quienes manejan las armas de la nación? La débil conciencia democrática en el ejército, débil incluso en los escasos oficiales demócratas ha terminado forjando una organización pretoriana educada en el "putsch" y el cuartelazo.

Democracia burguesa sin burguesía democrática. Pero aunque la empresa privada no tuvo un papel decisivo el 17 de julio nunca se caracterizó por ser un baluarte de la democracia. La burguesía boliviana sin tradición nacional siempre ha recurrido al ejército, nunca ha confiado en

sí misma para ser la progenitora de un sistema democrático. El clásico "demoliberalismo" fue una ficción, que cuando fue abolido por la revolución del 52 quedó reducido a un recuerdo sin historia. Después del 52, nunca más la democracia ni aún sus formas mas caricaturescas saldría de la voluntad de la burguesía, proque desde entonces, nada más que las masas iban a ser las únicas portadoras de la democracia.

Antes, la democracia era el producto suntuario para el consumo exclusivo de un grupo, después del 52 la democracia se incorporó decisivamente a la vida cotidiana de las masas, al quehacer menudo de la vida diaria de los sindicatos, de los barrios, de la sociedad campesina. Cuando la democracia se colectivizó se volvió subversiva para un orden que sigue estacionario y se niega a cambiar. La original democracia movimientista, fecunda y revolucionaria, tampoco encontró un "terridor democrático" que salvara las conquistas de la libertad para el servicio de una burguesía industrial y laboriosa, las "conquistas de abril" fueron destruidas poco a poco, primero por la inconsecuencia de la nueva burguesía nacional, después por los métodos sanguinarios de la dictadura. Todo el edificio estatal clasista levantado sobre las ruinas de la revolución derrotada, es una fortaleza dispuesta contra los "excesos" de las masas en movimiento. Parte de él, es el ejército; parte de él, es la clase dominante subdeterminada para su propia dominación, es la oscura semiexistencia de una vida parlamentaria pobre y azarosa, es el partido democrático-burgués sin verdaderas y genuinas inclinaciones democráticas. La revolución del 52 intentó una "nueva democracia" sin poder concluirla ni completarla nunca. Entre esa nueva democracia inconclusa y las ficciones de ahora se interponen los despotismos sin futuro como si actuaran sobre un inmenso vacío.

El golpe del 17 de julio llegó sin mayores explicaciones; llegó como un resultado de la "voluntad militar", con el argumento simple de poner en orden al país, porque como decía Arce Gómez "los bolivianos no estaban preparados para la democracia". Los partidos de la burguesía media y grande, el MNRH, el PDC, y otros, "partidos democráticos" todos ellos, recibieron a la satrapía con el mutismo de una conciencia cómplice y vencida. Ninguno de los grandes personajes, de los dirigentes consagrados y establecidos, se atrevió a impugnar a los autores del 17. La "democracia" de los partidos burgueses había perdido la única dignidad que queda en la derrota, la protesta; ni un sólo acto de resistencia, ni una sola palabra en favor de la libertad. García Meza decretó la proscripción de "todos" los partidos, y éstos, con su silencio, acataron las proscripciones. La democracia había sido conquistada en las barriadas, en las aldeas, en las fábricas y en los campamentos mineros: en los territorios de la lucha de clases. Vino desde abajo, desde los abismos sociales de los *sansculottes* propietarios, y no desde los compromisos en las cumbres del poder o en los círculos intelectuales y políticos. Es por eso que el golpe del 17 se impuso sin resistencias en la "democracia oficial" y la resistencia se concentró en los medios obreros y revolucionarios.

Aún cuando el golpe se impuso contra toda lógica y contra todas las previsiones sus elementos de irracionalidad e inoportunidad tenían

su explicación en el mismo cuadro político y social. La empresa privada, en primer lugar (la burguesía), la nueva burguesía que renació del cataclismo del 52 no tuvo el clásico proceso de gestación de todas las burguesías que han acumulado el capital en estrecha relación con la propiedad de la tierra. La revolución de abril abolió el latifundio que nunca se propuso ser capitalista, difundió la pequeña propiedad parcelaria, y las posibilidades de la clase burguesa capitalista quedaron restringidas al sólo ámbito citadino: a las actividades comerciales, financieras y especulativas. Esta burguesía, con estas características acentuadamente intermedias, se consolidó, desarrolló y concentró con el auxilio y bajo el amparo de los gobiernos militares. Sólo la discrecionalidad del poder militar pudo transferir en gran escala el excedente nacional hacia la empresa privada. Entre el desarrollo de la "nueva burguesía nacional" y la "función de poder" del ejército hay una relación histórica de mutualidad y de efectos recíprocos que ha configurado la fisonomía espiritual de la clase dominante con rasgos característicos y peculiares.

Por eso decíamos que la burguesía ha hecho del ejército su religión. Sólo así ha logrado su preeminencia económica. En Bolivia, el 70% de la actividad económica estratégica está concentrada en el Estado que es el gran generador de empleo y de dinero; con los gobiernos de Barrientos y Banzer, especialmente, la empresa privada captó una parte considerable de los recursos económicos del Estado para constituirse en una cofradía de lujo gracias al esfuerzo estatal. El fundamento capitalista real de la economía estatal ha procreado una burguesía artificial, estimulada desde afuera, impulsada por el poder gubernamental. Su posición, entonces, ante el ejército y ante la democracia tiene su base en la lógica económica. Ante el golpe de García Meza, no hubo una adhesión expresa como ocurrió el 21 de agosto de 1971, pero la empresa privada tuvo una actitud de prudente acatamiento del nuevo estado de cosas, una aceptación sobreentendida.

La nueva burguesía es "hija del Estado". El Estado boliviano emergente del 52, fruto de una revolución, al dejar de ser un elemento extraño a la mayoría nacional se constituyó en un cuerpo más compacto y consistente que posee los medios para "reorganizar a las clases" y distribuir el excedente nacional. Hay en este punto, elementos que merecen ser tratados con mayor profundidad en Bolivia. Se ha puesto énfasis en la "política desnacionalizadora" de las dictaduras militares, pero esta "política desnacionalizadora" ha tenido sus peculiaridades, ya que es la sólida base económica del Estado, puesta al servicio del empresario, el rasgo principal de la política económica de los últimos años. La estrategia económica de las dictaduras militares ha consistido en una política de transferencia del capital público al capital privado, conservando la base estatal de la producción. En Bolivia no ha ocurrido de una manera concluyente lo que ha ocurrido en Chile; Pinochet "devolvió" al interés privado lo que Allende había recuperado para el Estado. Aquí, en cambio, salvo ciertas concesiones de recursos naturales y empresas al interés privado nacional o extranjero es la misma base económica del Estado

la que se pone a "disposición" de la empresa privada, mediante energícas transfusiones de capital que funcionan mediante eficientes mecanismos de la corrupción. La misma "ley de inversiones" de Banzer, destinada a poner en remate al país para las compañías extranjeras, no se concreta en realidades de peso o en inversiones productivas por la escasez de posibilidades efectivas en el país.

Las pautas del "desarrollo dependiente" que inspiraron a los militares brasileños y que alimentaron ilusiones en un "boom" económico, en Bolivia nunca tuvieron siquiera el cimiento anímico de una débil esperanza. Ya que los recursos del Estado iban casi en un solo sentido, iban a robustecer la vida artificial de una empresa privada sin talento industrial; estos recursos tampoco se proyectaron con audacia hacia obras públicas que respondieran a una estrategia de desarrollo a mediano plazo. La limitada base económica de la nación y la falta de tradiciones fabriles de la burguesía no constituían un cimiento relativamente sólido para "atraer" a las transnacionales (en la visión brasileña), para "atraerlas" a una fusión significativa con el empresariado nacional en la perspectiva del "desarrollo dependiente". La burguesía nacional ha producido "según su capacidad" cumpliendo la estéril función de consumidora privilegiada de los recursos de la nación. De este modo, la "fábrica" es un producto artificial del Estado, un injerto de la economía nacional para desarrollar una "burguesía nacional", no sobre una base natural agrícola sino sobre la base de una expropiación privada del excedente público generado por la explotación de minerales.

Como en ningún otro país latinoamericano, el desarrollo de la clase capitalista no se produce aquí por el determinismo del mercado, es un desarrollo inducido por la concentración del esfuerzo económico nacional y la función económica del Estado. Ningún Estado puede ser un creador de las clases, a lo sumo sólo puede ser un poderoso auxiliar para fenómenos en proceso de desenvolvimiento; pero no es el caso de Bolivia, sin embargo, porque después de la enérgica expropiación del 52, el objetivo de "crear una burguesía nacional" halla su más completa expresión en los siete años del régimen de Banzer. En gran medida, la burguesía nacional es una "creación" reciente del Estado, bajo determinadas condiciones políticas que son la antítesis de toda democracia. El despotismo militar sirvió tanto al desarrollo de la gran empresa como oprimió a las otras clases. Pero el desarrollo y el incremento del capitalismo no puede transcurrir en el aislamiento, en una isla y la burguesía boliviana impulsada en razón de sus nexos externos, de sus misérrimas cuotas en el mercado mundial, no echó raíces en el mercado nacional para convertirse en un fenómeno de ciertas consistencia histórica.

No hay cosa más peligrosa para esta burguesía que la ruptura de los lazos que la atan a la función económica del Estado. Estos lazos han sido tanto más poderosos cuanto más arbitrario y discrecional fue el poder gubernamental. La vida, y en algunos casos la sobrevivencia de la empresa privada, ha estado vinculada a las operaciones financieras con bancos nacionales y extranjeros y los bancos extranjeros cuentan con las garan-

tías del Banco Central de Bolivia. El financiamiento extranjero a los "proyectos" privados nunca ha sido motivo de preocupación para los prestamistas en cuanto a su viabilidad o factibilidad, puesto que contaban con la garantía de toda una Nación. En los otros casos, los bancos estatales como el Banco del Estado o el Banco Agrícola fueron los canales naturales de la apropiación privada del endeudamiento público. A través de estos bancos, la "deuda externa de Bolivia" que hoy tiene al país al borde del abismo fue transportada, en importante proporción, a las manos de los comerciantes, banqueros y los llamados industriales. También, desde luego, la deuda externa se absorbió en obras públicas o compra de maquinarias para la minería y el petróleo, obra de gran envergadura justificadas por las "comisiones" a los gestores de negocios. La relación entre la empresa privada y los medios de endeudamiento público ha sido inmejorable en los gobiernos militares.

No es casual, entonces, que los principales asesores civiles de García Meza hayan sido los hombres que pertenecen a los principales grupos financieros de Bolivia. La banca ha estado siempre representada en los gobiernos militares a través de funciones claves en el aparato administrativo. Los ministros de finanzas o presidentes de los bancos estatales han sido personajes vinculados al mundo financiero. Algo similar ha ocurrido con las grandes empresas estatales, en tal sentido recientemente el Ministro de Minería del Presidente Siles respondiendo a una ofensiva contra la empresa pública, demostró que la gran mayoría de los gerentes de COMIBOL⁴ desde hace más de veinte años había pertenecido a la empresa privada. En resumen, la empresa privada había tenido la oportunidad no sólo de manejar sus propios negocios, sino también de manejar los negocios del Estado. La posibilidad de disponer de todos los recursos, sabiendo esconder las manos, requiere de condiciones políticas particularmente favorables: la eliminación de los controles públicos, el secreto en las relaciones administrativas, la complicidad de la burocracia militar, el amordazamiento de la prensa libre, la proscripción de los derechos sindicales, la intimidación o sea, la dictadura.

¿Por qué, entonces, la burguesía o su expresión empresarial iban a sentirse satisfechas con la democracia? La democracia, por tenue que sea en su contenido, es una amenaza al carácter cerrado y secreto de casi todas estas operaciones basadas en el desangramiento de la economía estatal. Y si la economía estatal ha sobrevivido, finalmente, a cualquier intento desnacionalizador e incluso se ha incrementado, es no sólo por la consistencia de la función económica del Estado sino también porque el Estado, administrado en función de una clase, además de que no fue un obstáculo para el desarrollo del empresariado, fue su única fuente. No significa esto, sin embargo, el tope de las aspiraciones empresariales. Durante el gobierno de Torrelio, la empresa privada presentó un proyecto económico basado en dos premisas, que el Estado debía ceder a la empresa privada parte importante de su actividad económica, y que la ruina de la empresa pública sólo podía salvarse entregando propiedades del Estado a la iniciativa privada. Los "hombres de negocios", sus compa-

ñías y corporaciones, han vivido del Estado, se han tonificado y llegado a la adultez mordiendo en las arterias de COMIBOL ahora quieren avanzar más y más sobre las propiedades del Estado venciendo todas las resistencias y obstáculos de un "espíritu nacional" que es la mejor de las herencias de abril.

La paradoja de una intensa vida bancaria y una agónica y declinante vida industrial en la burguesía boliviana han producido su natural corolario ideológico. Desprecio a toda forma democrática que ponga al descubierto el nexo invisible entre las finanzas públicas y privadas. Miedo al "modo de ser" democrático de Bolivia, donde las esclusas del poder público se ven impotentes para detener los "excesos" de una masa siempre dispuesta a desbordar. La "memoria plebeya" del 52 asusta a la burguesía, atemoriza al ejército y restituye los impulsos originales de las masas convirtiendo el escenario de la democracia en un escenario de combate. La democracia misma —la democracia clásica— es un gran vacío porque es resultado incidental del *retroceso* o *repliegue* de las clases que detentan el poder, en momentos de crisis nacional. No es resultado de la acción consciente de estas clases que pudieron, en un momento, tener capacidad histórica para disolver sus intereses particulares en los intereses generales de la nación. Esta ilusión jurídica es imposible en Bolivia, ya que las clases con poder no han encontrado el modo de convertirse en clases democráticas, *nacionales* en el sentido de disfrazar sus intereses de clase como intereses de la nación.

Este dislocamiento histórico y económico entre el "representante oficial de la nación" y la nación ha alterado profundamente el carácter de la democracia. Si aquí se usa en exceso los términos de "apertura democrática" o "proceso democrático" es por la indefinición e incertidumbre que prevalece sobre esta cuestión. La burguesía no promueve la democracia, la tolera en circunstancias particularmente adversas para seguir manteniendo el "Estado fuerte", la acepta con el mismo sentimiento pesimista con que se puede aceptar un desastre natural. La democracia emerge desde abajo, reclamando las libertades individuales constitucionales para *colectivizarlas* rápidamente y convertirías en un bien social del proceso democrático, de un proceso no de un acto, de un "transcurrir" y no del *fait accompli* de las instituciones clásicas como el sufragio universal y el Parlamento. Mientras los de arriba temen que la "apertura" se transforme en un "boquete" los de abajo recurren al recuerdo luctuoso de su memoria colectiva para desconfiar de la "paz democrática" que ha resultado una paz para la guerra. Es por eso que esta historia tiene todas las apariencias de una historia que siempre vuelve a comenzar, pero sólo en apariencias, porque en el fondo, desde la conciencia social se están buscando, en una búsqueda insospechadamente compleja, los caminos para resolver el irresuelto problema de la democracia.

Lydia Gueiler sólo podía recorrer el camino trillado que había recorrido Guevara. El tope de ambos era una democracia liberal endeble pero amenazada; el carácter "interino" de sus gobiernos, el marco de su "provisionalidad" eran la pared natural que la masa expectante no podía

sobreponer y que tampoco se propuso sobreponerla. Eran el "entreacto de un drama" y no el drama mismo. Al proponerse la defensa de estos gobiernos, el movimiento popular no defendía el marco insuperable del presente sino los anchos escenarios del mañana. Ese era el contenido de CONADE y por eso, finalmente, aparecía la COB como el sistema modular de la defensa del proceso y no del gobierno (Lydia Gueiler) que lanzó el paquete económico antipopular. Pero la defensa del "proceso" —por el carácter de la empresa privada y del ejército— es una defensa "epopéyica", porque es una defensa contra todo el sistema, contra la concentración de los intereses creados.

Las causas se entrelazan a falta de una burguesía interesada en la democracia identificada con el interés nacional y sumergida en la sociedad civil los derechos individuales de la Constitución Política, en la marcha misma del acontecimiento, tienden a transformarse en libertades extremas, en libertades sociales sin ningún "demiurgo" de clase que pueda administrarlas históricamente como "representante oficial de la nación". En cada "apertura", en cada "proceso" el "derecho constitucional" no se impone como algo plasmado, como algo consolidado en el Estado nacional, sino como un vacío donde la resurrección de las *tendencias históricas jacobinistas de la masa* intuyen que para que la democracia exista tiene que ser revolucionaria. Por que en última instancia, la crisis del Estado aparece con un doble carácter, la crisis de la democracia como forma precaria de Estado y la crisis de la dictadura burocrática de los militares que aparece y reaparece convulsivamente en la escena política.

Los presidentes civiles que actuaron como la llave de las "aperturas democráticas" estaban condenados de antemano a una existencia efímera independientemente del destino que se les había asignado. Llevados al gobierno por muy pocos meses para la administración de nuevas elecciones, resultaron la personificación misma de las desventuras de una democracia subvertida por sus supuestos progenitores de clase. El avasallamiento militar, de este modo, dentro de la misma mecánica que lleva a la masa a defender los *resultados* de un proceso que recién ha comenzado avanza para *prevenir* un horizonte lleno de amenazas sociales. La democracia es un escenario de guerra más que un sistema; sólo avanzando sobre ella se la puede proteger, pero cada paso hacia adelante es paradójicamente un paso hacia su abreviación. Tanto Guevara como Gueiler fueron expulsados de la escena en un acto de ritualidad formal, para "castigar a la masa" no por los excesos de hoy sino por los excesos de mañana. En el 17 de julio, la empresa privada asistió a los funerales de la democracia con la misma indiferencia con que se contempla una desgracia ajena. Los partidos de la burguesía, como ya hemos dicho, se asimilaban a las proscripciones con una resignación callada. Ninguno de ellos mostró su "volición democrática" que es el único título que podrían exhibir ante la historia. Sobre este cuadro volvió el ejército sobre sus propias huellas, reinició su beligerante contramarcha y sin argumentos ni títulos, García Meza se instaló en el Palacio de Gobierno. Para la bur-

guesa boliviana, que nunca pudo entender la importancia de la democracia pero sí, en cambio, la importancia de las armas, era un episodio más de nuestra historia donde la esperanza y la frustración han convivido en un mundo complicado y confuso.

El patriarca de todos los otoños. La dictadura de García Meza nadaba como el "pez en el agua", entre las clases dominantes. Pero su imagen y sus métodos de dominación no podían causarle entusiasmo a nadie; porque esta dictadura, que aparecía restaurando todos los rasgos y matices más reaccionarios de todas las dictaduras del pasado no tenía sitio en la historia. De allí su ostracismo social, su presencia artificial que se impone con el argumento de las armas, sin la pretensión de convencer a nadie. Es la dominación desnuda de la fuerza, del aparato burocrático-militar, sobre toda la sociedad. Un típico régimen policíaco cuyos medios y fines son coercitivos, donde la necesidad de la violencia es la única conciencia que domina, justifica y cohesiona a sus actores. El de García Meza es el caso de un régimen policíaco que no cuenta con un proyecto. El grupo militar, que ha arrastrado a las Fuerzas Armadas a este nuevo golpe de Estado, se ha colocado, por la situación coyuntural de la ruptura constitucional, al margen de la ley de la sociedad. Más que tener los rasgos de una dictadura clásica, por todo esto, tiene los del despotismo antiguo, que combina el autoritarismo con la corrupción y su carácter acentuadamente marcial con lo delictivo.

Los partidos de la UDP, al caracterizar al gobierno de García Meza, destacaban el carácter "delincuencial" de la dictadura, sobreestimando sus rasgos corruptores y subestimando sus rasgos de clase. Es indiscutible la utilidad e incluso la oportunidad en la propaganda política de esta interpretación unilateral del hecho. Pero lo cierto es que no sólo el delito o la corrupción estaban en la base del sistema, el golpe y su gobierno no habrían sido posibles sin la actitud complaciente de la empresa privada, sin la desertión de los partidos democráticos. Porque en el fondo, aunque las apariencias sugieran imponderables, el régimen de García Meza era un retorno al régimen dictatorial, bajo condiciones particulares de la crisis de Estado agravada por la dicotomía cíclica de dictadura-democracia. Una crisis de Estado de esta naturaleza y profundidad abarca a todo el sistema, a las instituciones, aparatos del Estado y a la misma sociedad civil.

Producto de la crisis de Estado (la crisis de Estado tiene una cierta permanencia en el tiempo, en cambio la "crisis nacional" es un hecho circunstancial de visible antagonismo entre pueblo y gobierno) fue la preponderancia en el ejército de los elementos más oscuros, el de los elementos más corruptos e inescrupulosos, entre los cuales García Meza y Arce Gómez se alzaron como los "líderes". En momentos como éstos, la sociedad puede erigir a sus más genuinos valores como una ley de la necesidad de la supervivencia, pero puede también arrojar las excrescencias como en este caso, para imponerse sobre todos. De Arce Gómez y García Meza, habría dicho Arguedas que son "hombres torpes de mente y

ordinarios de corazón" porque en ellos no había ni la sombra del gobernante, eran "policías" en el mal sentido, que habían usurpado el poder en un acto de complot secreto para colocarlo frente al pueblo. Pero la ilegitimidad del régimen no venía sólo de su fuente de origen sino también del modo de insertarse en la sociedad. La concentración del poder político en el ejército había sido extremadamente reforzada, particularmente intensa, manteniendo una considerable distancia entre Estado político y sociedad civil. El Estado político se confundía con el "monopolio de la fuerza" y la coerción con la violencia: la dictadura burocrática no tenía otro principio ni otro fin que el de la dominación militar.

García Meza era un cleptómano inescrupuloso. Los escándalos económicos de este general han ocupado durante meses las primeras planas de los periódicos; comenzaron estremeciendo a la opinión pública y acabaron por convertirse en otros tantos episodios de la historia del latrocinio público. Este personaje, que compensaba la palidez de sus ideas con su capacidad para el odio, representaba el momento culminante de la descomposición moral de las Fuerzas Armadas.

Hasta antes del golpe de García Meza, los más destacados analistas políticos no se habían percatado de la importancia del narcotráfico. El narcotráfico era una actividad circunscrita y cerrada. Sólo el gobierno del 17 de julio puso en evidencia el extraordinario poder de la mafia, quedaron al descubierto los hilos que se habían introducido en los mandos de la policía y el ejército. En la conspiración que culminó con el golpe de Estado, la mano del narcotráfico movió todos los resortes, era un verdadero factor de la política y el ariete de la sedición. La reacción y la corrupción combinadas impusieron su marca y su sello al gobierno, pero además también, modificaron las reglas de la economía. El narcotráfico dejó de ser una actividad perseguida, estaba protegido y estimulado desde las esferas oficiales, se convirtió en parte sustancial de la actividad económica nacional. Se calcula que el narcotráfico manejaba —o maneja— un volumen de dólares superior al que se origina en las exportaciones de minerales. Esta economía ilegal inducida desde el gobierno dislocó el sistema financiero, el "blanqueo" del capital negro creó toda una infraestructura comercial donde el gran contrabando se adueña del mercado con masivas "importaciones" de lujo, constituyéndose en un fenómeno urbano de múltiples connotaciones sociales.

También la banca nacional, raramente próspera en medio de una economía en bancarota, asimiló por los más diversos canales el capital negro que circulaba en todo el país. En medio del derrumbe general, quiebra de fábricas, baja de la producción, en medio de un panorama negro y sin esperanzas, los banqueros fundaban nuevos bancos y sucursales, organizaban su mundo de prosperidad sobre los escombros del desastre nacional. Los banqueros y los contrabandistas se convirtieron en el sistema circulatorio del omnipresente capital de la mafia.

La mafia disponía de una "infraestructura nacional" con decenas de pistas de aterrizaje mimetizadas en los extensos llanos del oriente, con zonas autónomas de operaciones, con un sistema expedito de control

sobre los retenes aduaneros fronterizos y con unidades productivas distribuidas en casi todo el país. La oficina de "lucha contra el narcotráfico" estaba controlada por la gente de Arce Gómez, y en los hechos, por la misma mafia. Desde allí se coordinaban las tareas de protección a esta industria que florecía en el fango de la inmoralidad estatal. Sin el impulso y la complicidad de los medios gubernamentales, sin la poderosa palanca del aparato administrativo del Estado, no habría sido posible la creación de una infraestructura "nacional" de tales proporciones ni un sistema de impunidad que garantizara la producción de cocaína. El Ministerio del Interior concedía los "permisos" para la comercialización de la coca que era transportada hasta los centros de su transformación industrial, el transporte de la coca desde un punto al otro era protegido por la fuerza pública. El aparato estatal había sido puesto al servicio del desarrollo de la producción y el tráfico de la droga.

El acento unilateral en la descripción del régimen garcíamecista en la versión de la UDP, sobre su carácter delincencial encubría un dato fundamental: el entrelazamiento de las actividades ilícitas con las actividades "legales" de la banca y el comercio. Habían fracciones de clase beneficiadas con el "boom" del narcotráfico. Pero por el carácter "invisible" del producto y por su propiedad de circular por las arterias más secretas del mundo oficial hacía que las evidencias desaparecieran en medio del sistema de impunidad creado por el golpe del 17 de julio. A través de los complejos controles del Estado, y por obra espontánea del propio impulso económico empezó a funcionar toda una red social de apoyo a esta eclosión inesperada del capital sucio; los comerciantes de la coca; los "zepes", una suerte de subproletariado, que con la carga sobre las espaldas atravesaban la selva para llegar a las zonas de fabricación; los "pisadores", peones rurales arrojados por la desocupación a este tipo de actividad; los "blanqueadores", agentes urbanos que adquirían o colocaban bienes y capitales en el mercado legal; y en la cúspide, la mafia, con sus contactos nacionales e internacionales. ¿Dónde se absorbía el capital incesantemente renovado de la mafia? En lo posible viajaba a los bancos del extranjero, pero para ello, incluso, se requería la complicidad de la banca y el comercio locales. Y la parte que quedaba en el país se reproducía en ostentosas mansiones de lujo o propiedades agrícolas súbitamente "aparecidas" sin que los propietarios civiles o militares supieran explicar su origen. El narcotráfico no producía riqueza pero producía dinero.

Así como en los tiempos de Banzer, la empresa privada había llenado su vientre con el erario público que como decía Mirabeau: "¿para que ir a buscar tan lejos la causa del esplendor manufacturero de Sajonia antes de la guerra de los siete años?" Ante 180 millones de deuda pública habría que decir: ¿para que ir tan lejos a buscar el origen de las fortunas de estos dos años? La respuesta es el narcotráfico. Pero, lo que particularmente ocurre en este período —que no es el comienzo sino su auge— es que nuevos métodos de *acumulación originaria del capital* combinan, con el apoyo estatal, las formas establecidas de la economía (fracciones especulativas de la burguesía) con la robusta economía del

narcotráfico. Marx dice que la *acumulación originaria* no es resultado sino *punto de partida* del régimen capitalista de producción. Del "régimen" por supuesto, en otras palabras de la historia de una época o la prehistoria de todo el capitalismo. En este caso es una *acumulación originaria* "a-posteriori" con todos sus contenidos y formas aberrantes que implica el vivir en el "destiempo" histórico. El "pecado original" de la burguesía boliviana, su origen en el desfalco del erario público, había configurado su fisonomía intermediaria, lo que en cierta forma explica el hecho de que tardíamente ingrese en el ciclo de la *acumulación originaria*. La "acumulación salvaje" del narcotráfico, sin embargo, no puede transformarse en "capital" en su sentido nacional e industrial; circula, simplemente, como dinero, se atesora, se encarna en la banca y el comercio, produce ricos y no riqueza y, finalmente, se diluye en las relaciones comerciales más primitivas.

Cálculos no comprobados sugieren que la cocaína boliviana en su relación con la mafia internacional, incluida la norteamericana, pone en circulación una cantidad de 30 millones de dólares. Con sólo mil millones que ingresen o queden en Bolivia, lo que es un volumen equivalente al ingreso legal del Estado, se ha producido un "poder financiero" paralelo que subyuga a la banca y al comercio.

Naturalmente, el fenómeno del narcotráfico ha provocado una disociación abrupta en la economía nacional, un verdadero dislocamiento. Hay dos economías superpuestas, paralelas, coexistentes, donde el narcotráfico, con su irrupción de moneda negra en el mercado, es el que determina el cambio real y el verdadero precio del peso boliviano. El gobierno del 17 de julio ha tenido tres gobernantes, y fue bajo el gobierno de Torrelío que se dispuso la "flotación del dólar" que significó nada menos que la dictadura del "dólar negro". Los dólares negros salieron de sus escondrijos y empezaron a putular en las calles, la economía boliviana "dolarizada" por Banzer, se sobredolarizó y los precios entraron a una escalada inclemente. El mercado negro del dólar, copado por el narcotráfico, rompió con todas las resistencias, se impuso y se convirtió en el árbitro de la economía monetaria.

Así, como una fracción de la burguesía pudo absorber una parte del producto sucio la otra, la fracción industrial, empezó a sufrir las consecuencias del dislocamiento económico, de la cuarentena inetermnacional. García Meza había subido al poder juntamente con la mafia, o la mafia lo había subido a él; su gobierno estaba dominado por los intereses de sus factores y se debía a ellos y a sus negocios. Por eso, aún dentro de la incoherencia y del absurdo, la subestimación de la crisis económica que traslucía en sus discursos no era, simplemente, la frase inmotivada de un cerebro grosero, era producto de un compromiso con la mafia. Sus exabruptos no sólo eran explicables por la chatura de su pensamiento, eran resultado también de esta combinación tan raramente ignominiosa para esta época. Al pueblo le ofrecía el hambre (comeremos solo charque y chuño) o la "democracia inédita", pero el narcotráfico le entregó el gobierno, le entregó el país. Intimamente vinculado a la mafia, García Meza

no podía retroceder en la aplicación del terror, porque sólo la barrera del terror podía sostener a un "poder" tan ilegítimamente obtenido y tan corruptamente utilizado. Como es lógico, la "cuarentena" impuesta por los países, el bloqueo del crédito, la interrupción de los proyectos y programas, la obturación de los canales financieros internacionales, hicieron de Bolivia un caso anómalo, un foco epidémico. El propio ejército, contaminado en todos sus niveles, no escapaba a la sospecha internacional. En estas condiciones, la fracción industrial de la burguesía, dependiente en términos absolutos de los insumos extranjeros, se vio, más temprano que tarde, amenazada por el fantasma de la quiebra. Una industria tan elementalmente ligada al exterior ¿cómo no iba a sentirse en la debacle, como no iba a sentir los efectos del bloqueo y la cuarentena? El narcotráfico, que levantó florecientes fortunas individuales, aplastaba a la incipiente y rutinaria industria boliviana.

Por otro lado, la cohesión del ejército se debilitó prematuramente. Aquellas facciones no comprometida, no podían resistir la presión contra un gobierno señalado de inmoral, sostenido por ellas mismas. No existían "condiciones normales" para defender a un gobierno que estaba contra todas las evidencias. Obligado por el descontento interno, por la censura internacional, García Meza relevó a Arce Gómez, pero lo mantuvo en la Sección de Inteligencia del Ejército porque los vínculos de solidaridad forjados en el delito suelen ser más sólidos de lo que se supone. Por más exitoso que hubiese sido técnicamente el golpe de Estado, el gobierno de García Meza era un aborto. No tenía viabilidad, ni presente ni futura, y este signo negativo socavó las bases de la unidad castrense, reunió su propio ámbito de descontento. El origen de las conexiones entre García Meza y Arce Gómez no era ningún secreto para la oficialidad, como tampoco eran secretos todas las complicidades y los encubrimientos dentro del "sindicato".⁵ Los miembros del "sindicato" habían entrado al paraíso del narcotráfico, eran grandes hombres de negocios protegidos por el uniforme militar, las armas y los soldados. Este ejército que encaramó a un "gobierno sospechoso" no sólo perdía su "status" de ejército ante la consideración de los otros ejércitos del hemisferio, sino incluso para gran parte de la oficialidad ofendida por la existencia del "sindicato". El movimiento de descontento, que se propagó en las filas castrenses, tuvo impulsos y apariencias de carácter moral. Fue el espectáculo de desmoronamiento de su institución el que inspiró los primeros brotes conspirativos; incluso el levantamiento militar de Cochabamba agrupó tanto a hombres de derecha como de izquierda, pero en esta ocasión, como en las posteriores, el "sindicato" demostró tener las riendas de las Fuerzas Armadas.

El gobierno de García Meza no sólo carecía de razones ante la historia, sino que además carecía de razones para cohesionar a las propias Fuerzas Armadas. El crimen estableció devino en factor de disgregación interna, porque los inocentes, incongruentes e ingenuos conceptos sobre el civismo, la ética, el orden, etc., veíanse atropellados por los más altos jefes, por los profesores de "ética" del Colegio Militar. Esta "ideología"

basada en una colección de conceptos cristalizados en símbolos y supersticiones era insuficiente aún en el ámbito hermético de los cuarteles. Todo el edificio del nuevo poder, de la "democracia inédita", estaba apoyado sobre el muro de la retórica anticomunista y de los compromisos cómplices. Pero la impugnación al gobierno ya había penetrado en los cuarteles, la "organización de la fuerza" que sostenía al "gobierno de fuerza" se sentía amenazada por la destrucción. Un elemental sentimiento de supervivencia, el instinto de conservación de la institución organizó y difundió las facciones, introdujo la sedición entre los sediciosos. Las bayonetas prestan un incalculable servicio a los despotismos, pero no lo son todo; aunque en García Meza eran la fuente del poder y el poder mismo, nadie puede gobernar sentado sobre su filo. ¿A dónde iba a llegar el gobierno, a dónde las Fuerzas Armadas, si todo parecía preparar el derrumbe final? Nunca este ejército estuvo tan cerca de su disolución, amenazado por sí mismo, descompuesto por el crimen.

Cuando reapareció Natusch como el reverso de noviembre, entró a la escena como el "salvador" de la institución, como el hombre que iba a tocar a retirada a un ejército vencido. En Santa Cruz los rebeldes, en La Paz el "sindicato", separado por mil kilómetros de carretera, parapetados en los extremos oriente y occidente del país, por un momento (tres días) desataron un conflicto político que nunca llegó a ser un conflicto militar. El diálogo hostil no llegó a la hostilidad de los hechos, los dos bandos beligerantes pertrechados detrás de sus trincheras se hostigaron con vehementes ultimátums radiales, a la manera militar, sin que el antagonismo se transformara en guerra civil. Pero el alzamiento de Santa Cruz tuvo un final insólito: Natusch viajó a La Paz, negoció la renuncia de García Meza y el país quedó en manos de una triunvirato que después designó a Torrelío. El país seguía en las manos del "sindicato", pero debilitado ya, en su fase de decadencia, en el crepúsculo de la "democracia inédita". Los hechos de Santa Cruz habían puesto en evidencia la fragilidad del régimen militar. A partir de entonces, el pueblo levantará la cabeza; la vida política intensa de Bolivia irá saliendo a la superficie, rompiendo los obstáculos, imponiéndose sobre las últimas resistencias de la dictadura. Torrelío primero y Vildoso después ya no podrán detener la corriente: paso a paso, en un prolongado retroceso terminarán en el 10 de octubre de 1982.

La desobediencia civil. La masa recobra sus energías desgastando al enemigo. Si Torrelío representó el principio del fin de la "democracia inédita", Vildoso fue la expresión del ocaso y de la derrota. Y fue justamente este proceso continuo de degradación y desgaste el que levantó a la masa, el que la colocó otra vez sobre la escena haciéndola dueña de las calles. Se reaccionó contra el hambre, pero este sentimiento no era un mero impulso economicista, más bien el problema de la economía reivindicaba a la política, como si fuese el punto de apoyo para negar la fuente y el sujeto del poder. Sobre la evidencia de la impotencia de la dictadura para restablecer la producción, la distribución y la ocupación,

sobre esa evidencia incuestionable comenzó a marchar el movimiento popular. La angustia económica, sin embargo, no encubría sino que descubría la intención política. En un principio la consigna fue negativa: "fuera lo militares". Esta consigna traducía el ánimo general, exteriorizaba el sentimiento de odio acumulado y guardado por las multitudes, era una expresión patética de la ira popular. La presencia militar era un grillete imposible de sobrellevar y había una conciencia absoluta sobre este extremo y mientras más altas eran las olas del desacato social, mientras más enérgicos eran los ánimos de la colectividad, más clara y nítida era la sensación de que había que cambiar el gobierno.

Las ciudades despertaron a sus impulsos vitales, ahogaron sus miedos y se atrevieron a desafiar al terror. La conciencia de la multitud o la conciencia de la cantidad se transformó en conciencia de poder, la gente se agrupó para unificar su rechazo a los militares y para exigir la entrega del gobierno a los ganadores de las elecciones de 1980. Esta fue la atmósfera que rodeó a los hechos de Cochabamba en el gobierno de Torrelío: las calles y la plaza principal se vieron anegadas de obreros, estudiantes, muchedumbres que emergían desde las clases medias o desde los ejércitos de desocupados, se exigía la renuncia de Torrelío, se exigía la entrega del gobierno a Siles Zuazo. Cochabamba no era la excepción, también en Santa Cruz o La Paz se sentía que había llegado el momento de empujar al gobierno para precipitar su caída. Al principio fueron brotes espontáneos que surgían y se extendían. Pero cuando Torrelío quiso "escarmantar" a Cochabamba, ya era demasiado tarde pues el movimiento había adquirido proporciones nacionales: la matanza de Cochabamba no iba a contener lo incontenible. El descontento se propagaba con gran rapidez y adquiría formas distintas y diversas. En unos casos aparecía como "paros departamentales" y en otros como paros y huelgas obreras. La población percibía que mediante la presión sistemática podía conseguirse todo, se podía avanzar; la presión continuada y concentrada iba abriendo inexorablemente los resquicios de la libertad. Así, los estudiantes consiguieron la autonomía universitaria, así se consiguió la abolición del toque de queda, y así se recuperó la legalidad sindical. Fue un verdadero proceso de acumulación y condensación del descontento.

Este fenómeno social halló su expresión organizativa en la forma sindical. Ningún frente de partidos o partido de la izquierda tenía aptitud para dar cabida a la amplitud de los hechos. Los partidos actuaban dentro de la COB y no delante de ella: la COB era el "demiurgo" de los acontecimientos, el lugar de las decisiones y el centro coordinador del movimiento. Sólo de ese modo pudo articularse la huelga de los mineros con la huelga de los fabriles, y la de éstos con las acciones del movimiento campesino y sectores urbanos. Para la ciencia política podría ser una aberración que el sindicato tome el lugar del partido en la dirección de la acción histórica. Y aunque esta es una discusión de vieja data en Bolivia, la ciencia, en este caso, está obligada a recoger los productos empíricos de una vida sindical particularmente fecunda y peculiar. Las tradiciones "trade-unionistas" son poco menos que inexistentes, como casi inexistente es

en Bolivia su marco natural: la democracia clásica. La unificación sindical, la gran central sindical, la COB, es el resultado de la insurrección de 1952, de un hecho revolucionario.

Si la COB nació con sus milicias propias de obreros y campesinos, si fue parte de una fórmula particular de poder, el "co-gobierno COB-MNR", acaso ¿no es expresión de un modo singular de articulación de lo sindical y lo político? Allí, existe un discurso socialista común, la tesis de la COB, allí están, también, los partidos por supuesto, pero principalmente la FSTMB (Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia heredera de todo el acervo revolucionario del movimiento obrero. Mientras el MNR fue el partido de la revolución democrática —período revolucionario de la revolución nacional— las relaciones entre el partido y el sindicato se adaptaron a la nueva razón de Estado. Pero la conciencia política del sindicato no se reforzó en el Estado sino contra el Estado: así es la historia que comienza con el final del "cogobierno", que pasa por una dramática relación de coexistencia con el gobierno del general Torres y que transcurre en una lucha que siempre recomienza con las dictaduras militares. La relación de la COB del cogobierno con el partido, el MNR, no era la relación entre una COB socialista y el populismo movimientista; en los hechos, fue la relación del partido con su ala obrera, con su ala radical. Pero el MNR en su caso necesitó a la COB para gobernar con ella por el modo particular en que la complejidad de los hechos insertaba lo sindical en lo político.

En esta coyuntura, la COB jugó el papel central, y el afirmarlo conduce a la siguiente pregunta: ¿Es qué los partidos no están dentro de la COB? Lo están, pero su acción independiente hacia afuera es una cosa, y otra lo es su existencia asociada en este frente tácito de partidos y sindicatos. No es extraño que el razonamiento "anarco-sindicalista" encuentre argumentos de relativa validez teórica, cuando calla el partido, habla el sindicato, o cuando el partido no puede movilizar u organizar, reaparece el sindicato haciendo resucitar sus más poderosas energías. Así ocurre en el tránsito Torrelío-Vildoso-Siles, en el que los partidos actúan detrás de la convocatoria de la COB y todo lo que sucede está dentro y no fuera de la COB. Así es como se conjugan todos los hilos y el principio del movimiento parece apuntar a un final. Pero todo esto, naturalmente, no tiene en nuestro caso una intención axiológica; es más bien un diagnóstico que sirve para medir dos magnitudes diferentes: la abundancia de la vida sindical frente al todavía larvado proceso de formación de las vanguardias políticas. Claro es que los partidos están dentro de la COB, sumergidos, pero ninguna estrategia partidaria está al margen de la voz de mando de la COB, es por eso que en su interior es donde se libra la lucha de "posiciones políticas" para imponerse recién en las calles.

El primer documento de importancia pública nace del ampliado minero de Huanuni, que es una convocatoria a la unidad de la izquierda. Todo transcurría en la COB. Allí se unían y cohesionaban las diversas fases y expresiones de la explosión nacional de protesta. Y cuando con-

vocó a la "marcha del hambre" para demostrar su fuerza, y cuando después llamó a la huelga general invalidando todos los pronósticos, demostró la cantidad y la calidad de su convocatoria contra el gobierno; ya los días de Vildoso estaban contados. Esto es lo que hizo la COB. La respuesta a la *crisis nacional* era una respuesta al estilo "cobista", un proceso que se encamina a la huelga general para encontrar la solución en un nuevo equilibrio, imposible de ser superado por las limitaciones organizativas del movimiento popular. Todo el extraordinario impulso de la "masa en acción" contiene a su vez el movimiento y el freno; la capacidad de paralizar al país, de detener su marcha, no se traduce en la culminación de un poder político incuestionable que signifique la resolución de la *crisis nacional* sino sólo la negación de lo existente y el corolario de una solución política parcial.

La COB reclamaba la vuelta a la legalidad democrática en momentos en que los partidos discutían dos salidas o fórmulas constitucionales: la "cuarta elección" o la "instalación del Congreso del 80". Si la COB no planteó un tercer camino, una alianza con los partidos como ocurrió en 1970 (Torres) para disputar el poder, era por la conciencia de las propias limitaciones y los márgenes reales de la coyuntura. La movilización nacional de la COB no fue, en síntesis, una lucha por el poder sino contra el poder, fue una genuina movilización democrática para restituir la democracia o para reproducirla.

Las dos salidas constitucionales la cuarta elección o el Congreso del 80, eran las dos hipótesis necesarias para resolver la crisis política con el consiguiente repliegue del ejército. La idea de la solución congresal nació en los círculos empresariales y tomó cuerpo en los partidos. La derecha (MNRH-ADN-PDC) encontró, en esta fórmula, el argumento para decirles a los militares que se vayan, para ser ella la dueña de la situación. Aunque las elecciones entregaron una gran cantidad de votos a Siles, la derecha contaba con un buen número de parlamentarios para sumarlos y hacer mayoría. El Congreso del 80 no era malo para Siles pero era bueno para la derecha. Y además de ello, los militares podrían encontrar su salvación no en el gobierno sino fuera del gobierno; el Congreso del 80 resultaba la vía más expedita para la retirada de los militares. Extrañamente, sin embargo, Vildoso no simpatizó con esta idea, se apresuró a convocar a elecciones para 1983 apremiado a abreviarlas por la COB, el PCB y Siles Zuazo.

La COB, el PCB y Siles Zuazo compartían el proyecto de la cuarta elección, por distintos motivos, pero fundamentalmente porque la aversión a los militares podría traducirse en una poderosa votación izquierdista. La cuarta vuelta le permitiría a Siles saldar cuentas con los disidentes de su partido y resolver sus contradicciones con el MIR que se inclinó definitivamente por el Congreso del 80. Para la COB, en cambio, existía el antecedente de que la solución congresal estaba manejada entusiastamente por sus adversarios de clase para usar astutamente a la mayoría parlamentaria. Ambas salidas, sin embargo, estaban dictadas por la crisis política. La "cuarta elección" estaba sujeta a la incertidumbre, a la mani-

pulación de la dictadura y quizás, incluso, a un resultado que simplemente ratificara la votación de 1980.

Por otra parte, el Congreso del 80 era una simple restitución de los hechos, poniendo un paréntesis entre los dos años de la dictadura. Tanto lo uno como lo otro resultaban lúcidas invenciones para rectificar con las ideas lo que en los hechos era irrectificable.

Ya en el terreno de las reivindicaciones políticas, esta polémica nacional entre los dos caminos legales había puesto el punto final a la existencia de la dictadura. La discusión se había centrado en el "cuándo" y "cómo" del repliegue militar, estaba fuera de discusión la legalidad y legitimidad de las elecciones del 80; en todo caso, lo del Congreso o lo de la cuarta vuelta dependía en gran medida del ganador del 80: Siles Zuazo. Pero toda la terquedad de Siles de pronto desapareció, aceptó la tesis del Congreso, desinfló las presiones de la COB y volvió al país y al gobierno. Para la masa del pueblo, la polémica entre las dos posiciones aparecía como una polémica dogmática; lo que se quería era que los militares se fueran cuanto antes con elecciones o sin ellas. Por eso se explica el éxito del MIR que convocó a toda una multitud en la Plaza San Francisco bajo la consigna del poder inmediato a la UDP. Esta consigna concreta, "el poder ahora", motivó mucho más que el paraíso próximo de las nuevas elecciones. A falta de nuevas opciones, el campo popular no podía sino movilizarse por el gobierno, para Siles y la UDP. Es por eso que el Congreso del 80, que en la teoría servía mejor a la derecha que a la izquierda, resultó ser en la práctica una idea aceptada y consentida por el grueso de la población.

Vildoso le entregó a Siles la trajinada "banda presidencial" en sesión solemne del Congreso del 80. Se hizo en 1982, casi con los mismos personajes, lo que debió hacerse en 1980. Sobre la superficie de la historia, los hombres trataban de recorrer el calendario en sentido contrario; pero la corriente histórica que discurre en el suelo social dejó sus profundas huellas imborrables para todos: una democracia moribunda y un final ambiguo de la dictadura reaccionaria.

Notas

¹ La UDP: la coalición de partidos que llegó al gobierno con Siles, MNRI (fracción del MNR liderada por Hernán Siles), Partido Comunista y Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR), al que pertenecía el vicepresidente Paz Zamora.

² MNRH: fracción del MNR a cuya cabeza está el ex-presidente Paz Estenssoro, gobernó con Banzer en el golpe de 1971.

³ PS-1: partido fundado por Marcelo Quiroga Santa Cruz, obtuvo altos resultados electorales en 1979 y 1980; es el partido del socialismo.

⁴ COMIBOL: empresa estatal que administra los yacimientos mineros que pertenecieron al grupo Patiño, Aramayo y Hotschil.

⁵ SINDICATO: nombre del sector militar comprometido con la mafia.

IV. La Democracia

El 10 de octubre de 1982 se retoma el curso democrático. El Congreso Nacional elegido en los comicios generales de 1980 se inaugura en 1982 mediante una curiosa reparación histórica que pone entre paréntesis los dos años salvajes de despotismo militar. Síles Zuazo, el vencedor del 80, entra al Palacio de Gobierno sobre las ruinas del desastre económico pero sostenido por el aliento de la esperanza nacional. El odio fresco de la masa, las revanchas reprimidas, la imagen presente de la depredación reciente se confunden con la ilusión sin razones de la paz que comienza y la guerra que ha terminado. Han salido del Palacio los militares: el general Vildoso, el último de la serie, quiere retirarse como un "salvador", como el hombre que ha "devuelto" la democracia, y con él retroceden en retiro ordenado los vestigios vivientes del garcisme.

Una hipótesis optimista era la de pensar que el 10 de octubre se rompía con un pasado compulsivo e inestable, para entrar a una época nueva de tranquila existencia social bajo la democracia. No existen razones históricas ni sociales de peso para pensar así. Porque el estado de turbulencia social traduce, en el fondo, el agotamiento del modelo estatal del nacionalismo revolucionario, y sus resultados económicos. Este agotarse de toda una época sacude con sus estertores a toda la sociedad, a los partidos, a las instituciones republicanas, a la vida económica y espiritual, a todo el marco de relaciones entre el Estado y la Nación: al "bloque histórico" en el sentido de Gramsci, al conjunto globalizante.

Si bien es en el marco de la dictadura reaccionaria —por su inutilidad en la dirección ideológica— donde se expresa con nitidez la crisis del "bloque histórico", esta crisis se proyecta, bajo otras características, en la existencia de la democracia como sistema, aunque como proyecto siga vigente. Cabe aclarar que cuando hablamos de "crisis de Estado" lo hacemos en los términos de la crisis del "bloque histórico", es decir, no como una mera crisis de dominación o de hegemonía entre las clases que históricamente están en el bloque de poder, sino como algo que abarca al todo. El "terremoto" de la revolución nacional no congela, no cristaliza un sistema democrático estructurado, ni lo concluye para establecer

sobre él un Estado burgués consumado. Interrumpe, más bien, el curso revolucionario recuperando sus resultados parciales y desfigurando sus objetivos originales. Fruto de ello es el esfuerzo de "creación" de una burguesía nacional, bajo la tutela del Estado y el consecuente proceso de "acumulación gratuita" que hace progresar financieramente a la clase, arruinando las potencialidades económicas reales de la nación.

Dijimos anteriormente, y no sin razón histórica, que la burguesía boliviana es un injerto artificial en el tronco de la economía estatal y este injerto succionó toda la savia debilitando su propia fuente de vida. La industria extractiva del Estado no entregó a la industria privada sus materias primas, le entregó sus dólares, le entregó sus capitales, para que sobre la base de su primitivismo productivo construyera un consumo de lujo; esta economía de derroche no podía tener una seria y consistente base productiva. El "termidor" detuvo la revolución antes que se consolidara su proyecto. Antes de que el Estado, necesariamente hipertrofiado y sobredesarrollado en su función económica, dé cumplimiento a las tareas democráticas, entre ellas la diversificación de la producción con fundamento en las conquistas revolucionarias de abril, en este caso, "el termidor" fue un efecto del imperialismo, de la derrota infligida por el imperialismo a la revolución nacional; no es, como en los casos clásicos, una necesidad de la cristalización de formas y contenidos ya logrados.

Es por eso que el "bloque histórico" que emerge de la revolución nacional es un hecho inconcluso. La reforma agraria, uno de los movimientos de *guerra campesina* más profundo y estupendo de América Latina, no concluye en revolución industrial, se autocondena a la pequeña producción y se anula en el minifundio. El proyecto de inventar una clase capitalista nacional sobre los escombros de la vieja burguesía ya que la gran burguesía (Patifio, Hotschild y Aramayo) había sido expropiada, como todo producto intelectual, estaba divorciado de la nueva realidad agraria (excepto la región de Santa Cruz, aunque en forma relativa) del país. ¿Sobre qué base agraria natural podía "crearse" una burguesía industrial? De hecho, el tamaño de los acontecimientos de la revolución del 52 nada tenía que ver con la pequeñez de propósitos de sus dirigentes. La base agraria fundamental de Bolivia no tenía verdaderos antecedentes capitalistas, el viejo primitivismo agrario fue parcelado y transferido sin revolucionarlo con el auxilio de la técnica. Así el atraso agrario pasó de los "señores" a los "siervos" modificando la realidad política y social pero sin operar una gran transformación en el terreno de la producción.

Por un lado, el Estado creó las condiciones para las formas particulares de "acumulación capitalista privada", en un impulso tardío y vigoroso a la formación de la nueva burguesía. El "erario público" fue el pedestal de la nueva clase, la que no podía improvisar el desarrollo capitalista, no sólo porque estas cosas no se improvisan sino esencialmente porque el divorcio entre la burguesía urbana y los terratenientes había sido la tendencia fundamental de la historia económica de Bolivia. La reforma agraria expropió a los hacendados terratenientes sin poder resca-

tar formas capitalistas de consideración. Por el contrario, las ciudades solo reproducían en el ámbito urbano el aldeanismo de la economía agraria: los patrones lo eran en la ciudad y en el campo y fueron incapaces de constituir una economía urbana junto a su economía rural. Los "señores", al ser despojados de sus latifundios vacíos y estériles, se volcaron a la esterilidad de las actividades especulativas. Se encaramaron al comercio y a la banca y del arcaísmo agrario resbalaron al más viejo oficio de la historia de la humanidad: la usura. La "nueva burguesía" aparecía condenada por su arcano a seguir reproduciéndose con sus métodos antiguos.

Por otro lado, los nuevos poseedores de la tierra —la multitud de campesinos parcelarios— fueron abandonados a su suerte por el Estado. Resignados a una existencia pastoril sin esperanzas, con el estímulo, eso sí, del derecho de propiedad, los campesinos quedaron encadenados al mezquino determinismo de la economía familiar.

Como no existió una base natural burguesa que conectara el campo a la ciudad, como no había relación entre clase burguesa y agro, la "nueva burguesía" nada tuvo que ver, tampoco, con la realidad agraria. La "nueva clase" fue formada con una mentalidad fenicia más que capitalista, no reclutó fabricantes ni *pioneros* reclutó compradores y vendedores. Así es la lógica histórica y también la lógica económica: los productos de la naturaleza social —como en toda naturaleza— no son ajenos a la tierra. La gran burguesía expropiada, la que se forjó con el estafio, fue indiferente a la tierra, extraña al agro, pero sirvió de sólido cimiento al desarrollo de la economía estatal; y, paradójicamente, fue también el fundamento de la incipiente burguesía posterior al 52.

Una parte de la "nueva burguesía" siguió atada a la industria extractiva de minerales, sirviéndose del Estado, obteniendo canonías y privilegios, y compitiendo con él. Pero la "nueva clase" tomó, en sus líneas generales, el rumbo comercial y allí donde el comercio y la industria podían unirse, sólo lo hacían en relación a la extracción del mineral. La base productiva de la nación descansaba, en esencia, en las agigantadas funciones económicas del Estado y todas las fracciones de la burguesía competían en el reparto del excedente. La "nueva clase" forjada con el favor estatal no podía tener y no tuvo un rol de *unificación nacional* en el sentido del "piamonte", porque en su misma naturaleza subyacía la disgregación. En la región oriental del país, la hegemonía de clase se asentó en la tierra, en la agroindustria, en función del mercado mundial y no del mercado interno. Pero este desarrollo agroindustrial, de relativa intensidad, fue posible gracias a la sombra benefactora del apoyo estatal. En cambio, en la región occidental, La Paz-Oruro-Potosí, los intereses privados se refugiaron en la minería o en el comercio, en las formas más tradicionales. La "nueva clase" acentuó la división territorial de sus intereses sin interconectarse ni unificarse de una manera decisiva entre sí, se organizó en partes separadas, delimitadas y dispersas, unidas al centro común del Estado. Es por eso que las disputas por el excedente nacional profundizaron los enfrentamientos regionales y el "regionalismo" fue la

ideología más consistente de las fracciones burguesas para legitimizar sus intereses —“localizándolos” antes que “nacionalizándolos”.

La fracción agroindustrial, la más moderna en los límites bolivianos, logró identificar mejor que ninguna otra los intereses de la región con sus propios intereses. Su carácter localizado y su ventajosa situación respecto a la economía minifundiaria del lado occidental atrajo, como un fenómeno natural, gran parte del apoyo y del fomento del Estado. Pero esta distribución geográfica de las fracciones de la burguesía, sus pugnas por el reparto del excedente nacional agudizó el regionalismo, porque la hegemonía de clase no surgía directamente de la naturaleza social sino de la “inducción” estatal. La prosperidad del Oriente y la depauperación del Occidente tenían su origen en la artificial formación de una burguesía divorciada, en ambos casos, de las tareas democráticas de la unidad nacional.

Sin embargo, la existencia de la “nueva clase” no era más que una construcción cimentada en los pobres materiales del orden “minero” del pasado oligárquico. Sobrevivieron los antiguos principios; sin embargo, la profunda transformación estatal operada por la revolución del 52 hizo posible la difusión de la economía hacia las regiones secularmente olvidadas por el centralismo burocrático del Estado oligárquico. Empero el contradictorio modelo cristalizado en la fase termidoriana de la revolución nacional, al propio tiempo de crear todas las condiciones para la unidad nacional, condiciones políticas y sociales, al apelar a una “nueva burguesía nacional” legataria de beneficios sin causa, creó también las condiciones para perpetuar las raíces de la disgregación nacional. Tanto la fracción minera (minería mediana), la agroindustrial, como la comercial, todas ellas por su origen espúreo, tenían muchas más razones para conectarse con el extranjero que para interconectarse entre ellas, o realizar, en términos capitalistas, su “fusión personal”. El proceso de concentración del capital vino secundariamente como una exigencia del mercado interno; los estímulos, los verdaderos estímulos, se generaron en la estrategia estatal de la “formación” o “creación” de la burguesía nacional y en el peso de la economía mundial. Una burguesía sin historia no podía acometer el reto histórico del futuro.

La herencia sin herederos. Es difícil la aprehensión total de los resultados contradictorios de la revolución de 1952. Tanto más difícil aún si se parte de su origen “plebeyo”, de su origen de masas “obrero-campesino” que empalidece toda actuación efectivamente revolucionaria de una burguesía nacional presente en la historia. Una revolución democrático-burguesa sin burguesía nacional, en la que la insurrección urbana es el prefacio de la guerra campesina, produce sus formas democráticas propias devorando las formas del pasado. Los obreros y los campesinos que se sintieron dueños de la revolución en su momento más radical, fueron los verdaderos forjadores de su democracia de masas, una democracia revolucionaria e insurgente.

Pero no bastaba que el 52 produjera una nueva democracia, tenía

que “ir” a una nueva democracia, dar expresión institucional al “bloque histórico” surgido de los cambios en la base económica y de la emergencia de las clases. La revolución incorporó a las clases a un nuevo “bloque histórico”, en el que la pequeña burguesía populista ocupaba el lugar ideológico pero no el lugar económico de la burguesía nacional. Los objetivos de la pequeña burguesía eran filosóficamente burgueses, dentro de una revolución que políticamente comenzó aplastando y expropiando a la burguesía hegemónica. Esta particularidad, esta contradicción singular, que generó una democracia de masas, que puso sobre la escena al proletariado urbano, modeló al Estado según la magnitud de los hechos, según las transformaciones que trastocaron el orden económico y a la jerarquía social de las clases. En la primeras páginas de este trabajo se caracterizó a la primera fase de la revolución como a una revolución plebeya de tendencias jacobinistas ahora cabe agregar que la “dictadura democrática” de la pequeña burguesía es irrealizable. Es por eso que los objetivos burgueses de la pequeña burguesía revolucionaria, confusos e inciertos en sus comienzos, terminaron cristalizándose en la etapa del termidor pero poniendo al Estado al servicio de una utopía: la “creación” de una nueva clase.

Babeuf vió en la Revolución de 1789 “solamente a la precursora de otra revolución”. En este caso, la inexistencia de un suelo social consistente para la democracia burguesa produjo una democracia de rasgos más sociales que individualistas, como reflejo superestructural de la intervención obrera en la revolución. El Estado en su totalidad —sociedad civil más sociedad política— reprodujo los rasgos esenciales del fenómeno de clases. Los reprodujo asimilando una realidad económica nueva y ampliando su esfera —su consenso— a las clases insurgentes del campo y la ciudad. Hasta cierto momento, el Estado fue un reflejo fenoménico de esta situación, redujo la influencia burguesa a su mínima expresión; los caminos estaban objetivamente expeditos, pero el movimiento espontáneo de los obreros no podía producir ideología obrera, sino sólo ideología burguesa. Por eso es que el “termidor” pasó sin pena ni gloria por la fórmula del “cogobierno”. El “bloque histórico” del 52, para evitar las influencias proletarias, tuvo que pasar por el “cogobierno”, tránsito paradójico que necesitó de la presencia obrera para culminar, después, en la democracia burguesa, establecida e institucionalizada formalmente (1956) por el estatuto político de una revolución nacional inconclusa.

La burguesía boliviana (como se detalla en la primera parte de este trabajo) no sólo estuvo ausente en la revolución sino que se enfrentó a ella. Pero, por una larga etapa, tuvo que balbucear el idioma de la revolución, asimilarse a los hechos, situarse en el ámbito del nuevo Estado. Por un lado, el heredero económico del 52 (la burguesía intermediaria) nunca llegó a ser el heredero político, el heredero democrático, más bien fue el sepulturero de toda tradición democrática. El Estado fue un producto de la revolución, pero la tremenda maquinaria estatal poniéndose al servicio del limitado rol histórico de una burguesía sin horizontes aca-

bó por institucionalizar los resabios de la democracia y no a la democracia misma.

Este abismo, entre el fenómeno democrático del 52 y la penuria de sus resultados económicos y políticos posteriores, explica lo que está en la base de la crisis del "bloque histórico". En esta crisis o ruptura podemos, por lo menos, descubrir dos momentos cruciales y decisivos: el divorcio entre la revolución nacional y sus clases progenitoras, señalado aquí como el terribor del proceso; y finalmente el agotamiento del "modelo de acumulación capitalista", caracterizado por la transfusión del excedente nacional a la burguesía. Es precisamente, este último rasgo de la crisis el que se presenta en la actualidad como una cuestión irresuelta contenida en el bloque histórico del 52. El Estado, enfrentado en su función económica a una crisis de producción de gravísimas y devastadoras manifestaciones, ya no puede soportar el peso abrumador de una empresa privada inerte, ni la empresa privada puede caminar sobre sus propios pies. Todo el sistema de acumulación ha entrado en la fase del colapso y la desintegración. La base económica de la democracia burguesa ha sido profundamente removida y desgastada en un largo período de tiempo. Estamos en el momento de darle la razón a Babeuf, porque la revolución "estratégicamente fracasada" del 52 —en lo que se refiere a sus valores democrático-burgueses— no podrá retomar su línea democrática si no es con una nueva revolución, con la formación de un nuevo bloque histórico. La revolución se detuvo donde tenía que iniciarse; toda estrategia socialista actual tiene que partir de ese punto, recuperarlo, si quiere unir el problema democrático al problema revolucionario, de otro modo no sería posible.

¿El Siles del 52 o el Siles del 56? El 10 de octubre comienza en un punto muerto. Siles parece condenado a repetir su 56,¹ que es repetir la fase más deprimente de la revolución nacional. Parece regresar a la "zona crítica" de la revolución, al momento en que la "revolución traicionada" ha seccionado definitivamente los bandos de las clases (los obreros y la nueva burguesía) en dos bandos antagónicos. Pero el "repetirse" no estaba en la conciencia de Siles ni siquiera en su voluntad, porque su conciencia y su voluntad estaban más allá, más lejos que su 56. Pero los mecanismos secretos de la historia lo colocaron, igual que en el pasado, como a un prisionero de la crisis económica y como al centro de una relación confusa y tensa con el movimiento obrero. Sin embargo, el presidente Siles no llegó desarmado al 10 de octubre, traía detrás suyo una considerable fuerza moral acumulada en tres victorias electorales y en la esperanza viva del pueblo.

Pero la UDP había desarrollado y acondicionado sólo sus hábitos electorales. Llegaba con Siles al gobierno sobre la hecatombe del garcíamecismo, sin un proyecto definido, para insertarse en la democracia en vez de construir la democracia; llegaba, en fin, con un objetivo abstracto y un arsenal de ideas vago e inconsistente. Pero todo esto no era más que la expresión de dos realidades diferentes: por un lado, la acción históri-

ca del movimiento popular que se impuso sobre las últimas resistencias de la dictadura, con la huelga general y por el otro, la acción política del partido, que se coló en la coyuntura y obtuvo sus ventajas sólo en la mesa de negociaciones. La cúpula no entendió la profundidad de la crisis política ni su correlato económico, supuso que la libertad podía sustituir al pan, y algo más, que la solidaridad internacional al esfuerzo nacional.

Días antes de cumplirse la ceremonia de transmisión del mando, habló Siles en la Plaza San Francisco. Un numeroso gentío escuchó la palabra del largamente esperado Presidente Constitucional; la tarde gris y la llovizna fría y persistente no fueron un obstáculo para la presencia popular que se mantuvo expectante y atenta. Pero los anuncios del presidente, sus planes, su mirada al porvenir dejaban una turbia sensación de incertidumbre e inseguridad. Cuando, con infundado optimismo, pidió un plazo de "cien días" para resolver los problemas económicos más graves, arrancó aplausos de la multitud dispuesta a aferrarse a todas las ilusiones; pero para los observadores más serenos y meticulosos, Siles, probablemente, estaba hablando de otro país. Fue la afirmación más concreta en medio de una retórica abundante e inasible. Al mismo tiempo, sin embargo, fue lo único que quedó como una paradoja viviente, impresionante y rotunda como promesa; pero en los hechos se entretejen la fantasía y la utopía. El plazo de los "cien días" era una confesión tácita del desconocimiento de las verdaderas condiciones del país.

Si hacemos mención a este episodio y se recubre de particular importancia a una sola frase, no es sin motivo, es porque el balance de todos estos meses de gobierno nos muestra inconfundiblemente una misma imagen de Siles: como un hombre abrumado por una despiadada carga histórica de todas las responsabilidades acumuladas por el tiempo, como un espectador interesado que está por encima de los acontecimientos, de acontecimientos que se mueven solos y sin dirección. Este cuadro inerte, donde los sucesos se escapan y adquieren autonomía, no es sólo atribuible a Siles, sino a la democracia que se propuso la UDP basada en meros proyectos metafísicos, prisioneros de una crisis general que había llegado a su clímax. Siles habló de los "cien días" con la misma buena voluntad con la que un conductor político de su importancia quiere desafiar a la adversidad; pero la adversidad de los "cien días" lo atrapó a él, porque la crisis es, finalmente, más poderosa que todos los buenos deseos.

Pero Siles vino acompañado de toda su legión de "capitanes", de los dirigentes políticos de la UDP, comunistas, miristas y movimientistas de izquierda. ¿Cuál era la concepción del gobierno de todos estos hombres? Siles había dado todo un rodeo por la historia de los últimos treinta años, y en su línea ascendente, el hombre del 56 no habría soñado que el 80 estaría flanqueado por la izquierda, que iría a romper la cadena del militarismo reaccionario resucitando su vieja terquedad revolucionaria del 52. Pero el Siles del 52 entró a la historia para resolver con la revolución la crisis del Estado oligárquico. El Siles del 82, en cambio, no poseía la

fórmula revolucionaria para resolver la crisis del Estado del 82. La UDP no era la fórmula revolucionaria, era una circunstancia, un instrumento de aglutinación popular para insertarse en el Estado, sin proponerse, su transformación. No fue sólo Siles el que se detuvo en la superficie de la crisis, fue toda la UDP la que se resistió a penetrar en sus profundidades y se quedó en el gobierno como un espectador comprometido pero sin protagonismo histórico.

La UDP no comenzó presentando al país un diagnóstico completo de sus enfermedades, no hizo un balance público del estado de la economía, no acusó a los autores de la crisis de una manera revolucionaria. Se apoltronó en los sillones de los ministerios, puso en marcha la máquina administrativa sin romper drásticamente la continuidad respecto a los anteriores administradores, se acopló a la crisis en vez de enfrentarla. Veremos más adelante que será el movimiento obrero, ya sea con la imposición de hecho de la "cogestión obrera" o la negociación del "cogobierno", el que buscará los caminos para plantear soluciones a la situación política global, a pesar de la insensibilidad estratégica de la UDP. De mecanismo político, la UDP se convirtió en mecanismo administrativo, en una pieza de la estructura jurídica del Estado, en un estamento burocrático. Si la UDP no comenzó por desnudar el Estado verdadero del país era porque su proyecto no se dirigía a la disputa del "poder político", sino del poder abstracto del aparato administrativo. Puesto que la resolución de la crisis económica, ya no podía ser solo "económica", tenía que ser, además, "política" a partir de un nuevo papel en la función económica del Estado, la radiografía de la verdadera realidad nacional, el diagnóstico preciso, debían haber comenzado por demostrar el estado de agotamiento del modelo de acumulación vigente y la imposibilidad de enfrentar la situación económica sin abrir nuevos interrogantes sobre la relación Estado-empresa privada, sobre el carácter de la crisis de Estado y con ella de la crisis de la democracia. El plazo de los "cien días" no resultaba, de este modo, una concesión graciosa a la frase importante; era un producto del vacío esencial del nuevo esquema de gobierno.

La democracia oficial. Cuando el Congreso Nacional confirmó el mandato popular de Siles Zuazo y Paz Zamora, la democracia restableció su vigencia jurídica aunque no su vigencia histórica. La democracia estaba, todavía, fresca en las calles, porque esperaba mucho más de lo que la UDP podía dar, como ocurre con todo lo que se "conquista", con todo lo que se "arranca" a la fuerza. La democracia del pueblo estaba dispuesta a invadir la democracia oficial, a avanzar sobre ella presionando sobre el Parlamento. Pero la democracia es un concepto ambiguo, por un lado establece una clara línea divisoria entre la función reguladora del Estado y el limitado marco jurídico de la libertad pública es decir, es un estatuto jurídico. Y por otro, es una conquista de las masas trabajadoras. En Bolivia, el sustantivo es la democracia de masas y el adjetivo la democracia representativa.

Para las masas congregadas en la Plaza Murillo, el 10 de octubre no era una fiesta parlamentaria. Heredera del radicalismo del 52, veía al

Parlamento como a un apéndice prescindible de la democracia reconquistada, pero también lo veía como la encarnación política del poder de la burguesía. El Parlamento no ejerce esa suerte de prosternación al simbolismo del poder público, como en otros países. No es a los ojos del público, el fetiche de toda legitimidad o la síntesis jurídica y política de la soberanía popular. Porque la democracia aquí, al contrario del caso chileno, no ha desarrollado su estatuto jurídico; para eso se habría requerido la existencia plena de una ideología coherente de la clase dominante, de una capacidad histórica para la formación nacional del consenso. El Parlamento conserva la unión del consenso con la fuerza. Pero la burguesía boliviana, no sólo fracasa como ideología de clase, no sólo no tiene costumbres parlamentarias, no tiene, y este es el hecho, historia de clase democrática. No desarrolló, por lo tanto, un sistema jurídico consolidado, un sistema normativo que existiera realmente en la práctica social concreta. Si como dice Hegel, el poder legislativo es una "mediación" entre la expresión más concentrada de clase: el gobierno y la sociedad civil; es una necesidad de que la "mediación" adquiera "existencia". Adquirir existencia, hubiese sido ser parte de la historia política de la nación, ser un aspecto necesario del armazón jurídico del Estado.

La democracia representativa sólo podía adquirir existencia plena como necesidad efectiva y objetiva de la dominación de clase. Pero la dominación de clase de la burguesía necesitó menos del Parlamento, de lo que podía necesitarlo el mismo pueblo. Históricamente, todo Parlamento tiene un origen popular. La infancia de los parlamentos es la "convención", es la irrupción del pueblo revolucionario en las esferas del Estado, así, la "convención" francesa fue la cárcel de Luis XVI. La historia de la convención es la historia de los representantes del pueblo revolucionario, los jacobinos, pero la existencia del Parlamento moderno condensa la historia de la dominación política de la burguesía que cristaliza en un sistema jurídico congruente.

No hay en Bolivia una respetable tradición parlamentaria. La revolución de 1952 no se preocupó, en su momento culminante, de recoger las experiencias parlamentarias porque no las necesitó: su "convención" se situó en la existencia más enérgica de la COB y del sindicato campesino, que se convirtieron en el lugar natural de la democracia; no se explicaría de otro modo la paradoja del cogobierno. La COB fue la "convención" del proceso revolucionario del 52. Pero por su carácter irrevocable de clase, esta "convención" no podía tener una conclusión burguesa, una conclusión jurídica: era un *factum* revolucionario. Tampoco la revolución nacional, para establecer en 1956 el sistema parlamentario, partió de su "convención"; partió del taimado empirismo parlamentario prerrevolucionario, de las tradiciones "demoliberales" de la "rosca". El punto de unión, más bien entre la "convención" y la vida legislativa, se operó como un salto, la "asamblea popular" de 1971.

Pero la "asamblea popular" fue un intento de conjunción, en un "parlamento popular", de la COB y los partidos de la izquierda; fue un "intento" más que una conclusión. Torres abrió a la Asamblea Popular

las puertas del edificio del Palacio Legislativo; la burguesía, para la que el Palacio Legislativo nunca pasó de ser un museo arquitectónico, mejor cerrado que abierto, reaccionó con una mezcla de cólera y miedo ante la profanación de este símbolo del poder por los representantes obreros. Otro habría sido su sentimiento 19 años antes. La Asamblea Popular, sin embargo, sucumbió ante el extravío trotsquista, los mitos de la intelectualidad desarraigada convirtieron en un "parlamento de frankfurt"² a su emblema del "doble poder". Confrontando el "poder desarmado" de la Asamblea con el "poder armado" del ejército, la guerra civil la barrió inmisericordemente de la escena política. Para el trotsquismo de Guillermo Lora, la guerra civil fue lo menos, lo importante era la "proximidad teórica" al modelo soviético de la revolución rusa: la "conquista teórica" que, en estas mentes que todo lo han sacado de los textos y nada de la realidad, es la religión que tranquiliza sus conciencias dogmáticas. La realidad de la Asamblea, empero, arrancaba de la memoria revolucionaria del 52, su función debió ser la de un "parlamento popular" que hiciera avanzar la democracia efectiva (el gobierno de Torres) hacia una democracia superior. Pero el dislocamiento entre un pensamiento alienado y el suelo de la realidad desarmó políticamente a este hecho revolucionario notable que conectaba lúcidamente la memoria histórica de los obreros con una coyuntura raramente afortunada.

El Parlamento de la burguesía no tiene pasado popular. No tuvo ningún perfil revolucionario a lo largo de la historia republicana. Reunión de los notables liberales en un momento, tribuna, en escasas ocasiones, de los representantes revolucionarios, pero, siempre, una oficina subalterna del Ejecutivo. Esta historia pobre, de pálido contenido popular, además de ser irrescatable, no tuvo al representante burgués lúcido que disfrazara sus intereses clasistas con los prestigios del tabú parlamentario. Tan oscura como la misma existencia de la clase, fue la existencia parlamentaria.

Ahora, el 10 de octubre, el Parlamento resultaba la antesala del gobierno. Allí, Siles y Paz Zamora, cumplieron el ritual jurídico de la ratificación del mandato popular. Esta vez, no fue sólo un ritual, fue un acto político; la derecha parlamentaria al aceptar a la UDP como gobierno, al decidir con su voto, estaba creando la ilusión constitucional de su adhesión, de su participación en la democracia. Pero al mismo tiempo, condenaba al gobierno a su supeditación, a las combinaciones políticas de la democracia. La derecha parlamentaria establecía una delimitación expresa entre lo que será la "política oficial" y su "contribución" a la constitucionalización del país. Se reservaba la "autoridad" de la oposición, y podía contar con los derechos de "exigir" una determinada política gubernamental como coautora de la democracia. Los mecanismos secretos e invisibles del acontecer político encadenaban al gobierno a la suerte del Parlamento. El ceremonial del 10 de octubre consagró a Siles y a Jaime Paz, como a los mandatarios constitucionales; al consagrarlos, sin embargo, la oposición sediciosa también se legalizó. Contra la astuta terquedad de los hechos, el gobierno nació maniatado, engrillado a las fuerzas que si

aceptaban la democracia era porque habían encontrado el secreto de anularla.

El pueblo, en la Plaza Murillo, con su sentimiento reconcentrado en el odio a los militares, no dejaba, por eso, de mirar con recelo y desconfianza al Parlamento. Intuía que la fase política de desestabilización del proceso democrático iba a partir, paradójicamente, del órgano de la democracia. Ciertamente, descubría en el Congreso todas las intenciones ocultas que estaban detrás del voto de ratificación a Siles. En los hechos fue así, la mayoría parlamentaria no carecía de una estrategia parlamentaria, de una estrategia política, que debía comenzar por someter al gobierno y culminar en su desconocimiento. El instinto popular captó instantáneamente la situación política. Pero Siles no apeló al pueblo, dejó pasar el momento y todos los momentos; en lugar de la movilización, la desmovilización; en lugar de las masas, la política palaciega; y entregó así, a sus adversarios políticos, toda la iniciativa estratégica.

El 10 de octubre fue la fiesta de la UDP, el gobierno tuvo una estampa acogida popular. La única venganza de las multitudes castigadas por la dictadura era su adhesión al nuevo gobierno, su simpatía por el cambio político. Siles contaba con este espíritu, esta combatividad y convicción de las masas, no contaba, empero, con los hombres que saben entender que sin el pueblo no hay estrategia posible y que con el pueblo toda estrategia es posible. Veremos más adelante, que será este gran derroche de energías, el divorcio de los conductores con la única fuente verdadera de todo poder, lo que mutila y disloca prematuramente el proceso democrático.

El regreso a los cuarteles. En cambio, el repliegue militar tenía otras connotaciones. Si la historia política de Bolivia es, en parte, la historia de la sedición en los cuarteles, los últimos episodios de esta historia se caracterizaban por una experiencia versátil y aleccionadora. Mientras la democracia (la coyuntura democrática) recién iba a reiniciar su experiencia, el ejército había probado todas las oportunidades para agotar todas sus experiencias. Se iba abrumado por sus fracasos, extenuado por el peso de sus responsabilidades y agobiado por la acusación pública. La última cara visible del ejército era Vildoso, el personaje menos abominable en la abominación general de los dos últimos años y que, sin embargo, sintió en carne propia, el estigma de la derrota. Con él salieron del Palacio las últimas falanges pretorianas que sin ser derrotadas en la guerra, capitulaban ante un pueblo que venció en el terreno moral.

El sentimiento más intensamente certero del pueblo es el odio; toda política de poder, por eso, no sólo conquista su espacio de adhesión natural, sino también que debe saber organizar el odio para organizar la lucha. El objeto del odio era visible. Desde el fondo del alma popular explotaba el sentimiento siempre guardado, contenido, acumulado pacientemente para exteriorizarse en impotentes exclamaciones de protesta. Siles trataba de silenciar, en la Plaza Murillo, los improprios del odio callejero con recomendaciones a la moderación. Quería dar nueva expre-

sión al viejo sofisma que encubre toda modorra espiritual: "sin vencedores ni vencidos". Pero lo que estaba haciendo en realidad, era desarmar de todo ánimo combativo al protagonista real de la política: la plaza pública.

Los mismos militares democráticos, los únicos que debían ser moralmente rescatados, resultaban indiferentemente mezclados con los sediciosos en estas apelaciones a una paz sin principios. No sólo la democracia llegaba sin una "política-militar" definida hacia las Fuerzas Armadas, llegaba introduciendo la confusión, conciliando no para vencer, sino para abdicar. El resultado de la negociación fue la impunidad, no la justicia. Hay un momento para triunfar y cuando se deja que este momento se escape, la victoria se vuelve nada más que un ideal irrecuperable. Esto sucedió con la UDP. No supo descargar el golpe oportuno contra los representantes de la sedición, lo que era posible a la salida será imposible en el ocaso. Condescendió, permitió que García Meza y Arce Gómez, y con ellos sus cómplices, salieran impávidamente del país. El crimen fue premiado con la impunidad, la democracia se negó a depurar y con su benevolencia cómplice quedó desarmada de antemano.

Podrá decirse que la impunidad ha sido producto del escaso margen de posibilidades reales del gobierno para el ejercicio del poder político. Pero eso no es así. La impunidad es el producto voluntario de la indiferencia, la insensibilidad de un frente de partidos, que el mismo 10 de octubre en lugar de discutir la gran política, la estrategia, se disputaba el "cuoteo ministerial", y preparaba su guerra insensata de descuartizamiento intestino que no tardaría en llegar. El pueblo, toda la opinión esperaba que el gobierno pusiera a andar su "comité de salud pública", una legislación para los agiotistas que decretaron la ruina de la patria, para el aborrecido crimen del delito económico. Había que decretar el derecho a la confiscación para que volviera a la nación lo que era de la nación. Pero la indulgencia se convirtió en complicidad, en otro crimen.

La crisis económica. La democracia fue la heredera del desastre. Encontró al país en plena caída, en la debacle y la ruina. La esperanza que surgía con la UDP era la esperanza de los desesperados: un aferrarse a la última posibilidad en la fase casi irrevocable de la impotencia económica. Era como si un sentimiento de pesimismo nacional se confundiera con el siempre invicto instinto de conservación. Pero las masas no buscaron a un "salvador providencial" porque la democracia aparecía como el resultado de la corriente natural de la historia, era el epílogo y al mismo tiempo el prólogo de todo un combate, era el resultado del rescate de la libertad.

La crisis económica de Bolivia es, en parte, un reflejo de la crisis mundial pero tiene sus características específicas, su modo de ser propio. En nuestro caso no se trata tan solo del desequilibrio financiero o del peso extenuante de la deuda externa, que son las notas comunes de una gran parte de países, sino que hay que agregar, además, una crisis de producción.

El estaño extraído durante ochenta años bajo la tierra árida del altiplano, depositado en los más secretos reductos de la montaña, ha venido degenerando en una arenisca gris donde el brillo del metal se torna huido y raro. La historia del mineral es también la historia social del país: generaciones de generaciones, abreviadas por la silicosis, han profanado las montañas introduciéndose en sus entrañas oscuras y húmedas para arrancarle su riqueza. Sólo el sacrificio epopéyico de decenas de años fue capaz de rescatar de la tierra toda su savia, toda una riqueza acumulada por las edades, y así emergió a la superficie sobre los hombros de los mineros. De allí surgió la clase capitalista moderna, el ciclo de concentración económica más completo y su corolario, el proletariado moderno. Así como la plata fue la razón de la nación, el estaño lo fue del capitalismo. Bolivia, más que de la superficie de su territorio, ha vivido de sus potencialidades subterráneas desenterrando hasta el agotamiento sus depósitos milenarios. Pero la minería es paradójica; ha podido edificar no sólo la razón de una nación, contribuir no sólo a una nueva era de la humanidad (Potosí), y alimentar el desarrollo técnico del mundo, impulsando un poder económico fabuloso como el de la burguesía del estaño, moderna y competitiva; pero ha hecho todo esto, ha dado todo al mundo y no ha recibido casi nada a cambio.

Antes de conocer la crisis del estaño, Bolivia conoció la crisis de la plata. El agotamiento de la plata aisló a Bolivia del mundo y la convirtió durante gran parte del siglo pasado en una tierra de pastores, en una economía fisiocrática sin comunicación con las corrientes de la ciencia y la técnica. Quedó interrumpido el nexo que unía al país con las principales naciones de ultramar; el aislamiento, el localismo, acentuaron el carácter insular de la economía, el país se estancó y al estancarse retrocedió. La crisis de la plata fue una catástrofe histórica.

El estaño, ahora, está produciendo a pérdida. Forjó la fortuna de Patiño y la nación la rescató en 1952. El estaño estuvo en la base del acontecimiento más importante de la historia, en la base del "nuevo Estado", en la base del nuevo ciclo de acumulación capitalista que no habría sido posible sin el auxilio de las "vetas" del mineral. Después de que la tierra se abrió dando todo para la gran burguesía minera, empieza a mezclinarse, ahora, para COMIBOL, el asiento de la economía nacional. El conjunto de unidades empresariales, que abarca principalmente a las regiones de La Paz, Oruro y Potosí, y constituye el activo de COMIBOL trabaja a pérdida. No sólo desciende la "ley" del mineral enrareciendo el valor de la tierra, sino que obliga también a la producción a penetrar más adentro en las honduras del subsuelo, haciendo más costosa su búsqueda, más difícil técnicamente su apropiación. Cada vez el procedimiento se hace más complicado, más costosos los métodos de explotación y más abrumadora la carga de las dificultades. El mercado mundial es imposible ante estas dificultades, los precios se fijan en los mercados de Londres o Nueva York de acuerdo al libre juego de la competencia; pero el juego de la oferta es provocado por el más grande consumidor, los Estados Unidos, que baja los precios lanzando sus reservas al mercado.

La historia del estaño es el drama de una confrontación permanente entre el interés nacional y los intereses de los grandes consorcios. La revolución de 1952 devolvió a la nación los derechos al subsuelo, pero continuó la lucha contra los sórdidos e invisibles intereses de las compañías extranjeras que boicoteaban la instalación de los hornos de fundición. La mediterraneidad, los obstáculos naturales de la geografía, además de imponerle a Bolivia tremendos costos en el transporte, la obliga a pagar fletes por la escoria para que sean desechadas recién en las fundiciones del extranjero.

Los hornos de fundición eran la complementación económica del trascendental acto de la nacionalización de las minas. En la época del "superestado minero", Patiño, el amo del estaño, vendía a la Williams Harvey y comercializaba con Consolidated Tin Smelting y existía una "integración" de las tres fases de la "producción-fundición-comercialización". Pero el Estado que recuperó el estaño, no podía entrar en los engranajes de esta integración, porque para hacerlo tenía que instalar en suelo boliviano sus propios hornos de fundición contra las presiones de la Williams Harvey y su socio Patiño. Tenía que controlar la fase de la fundición, venciendo la poderosa red conspirativa que bloqueaba los caminos de la soberanía económica. La revolución nacional hacía descansar su "plan decenal" de diversificación económica sobre el esfuerzo de COMIBOL; pero, paradójicamente, no fue en este período, sino recién bajo el gobierno de Ovando (1969-70) que se instalaron los hornos de fundición. Es interesante la historia de las gestiones secretas que se realizaron en Alemania para burlar la vigilancia de los trusts y llegar a este resultado. Bolivia llegó más tarde que temprano a las fundiciones, pero las paradojas de la naturaleza le siguen imponiendo un alto precio a su subordinación a la economía de la minería.

La COMIBOL podía haber pasado por ciertos períodos de trabajo a pérdida, eso era posible y justificado por las ventajas nacionales que pudieran obtenerse. La nacionalización de las minas debió ser la base de la diversificación económica, el logro de este objetivo lo justificaba todo. Pero, ¿cuál fue el sentido de la diversificación económica? Ya nos hemos referido a la irracional distribución del excedente. Este antecedente es suficiente para diagnosticar las causas de la crisis. El esfuerzo de COMIBOL no se absorbió en un gran esfuerzo nacional, se dispersó y disipó en la inversión improductiva. El despilfarro de los recursos del Estado no sólo murió en la incapacidad de sus beneficiarios, sino que no se reprodujo en una considerable inversión exploratoria, en la búsqueda de nuevos yacimientos. Al capitalizar a los sectores improductivos, COMIBOL se desangró, sus yacimientos se vaciaron descompesando el metabolismo económico de la nación, el trabajo más considerable no se reprodujo en una centralización del capital industrial. Fue vano, históricamente, el esfuerzo equivocado de una "diversificación económica" que obedeció a un modelo de acumulación capitalista artificial. El cuerpo casi exánime de COMIBOL ha soportado todo el peso de la empresa privada y ya no puede seguir haciéndolo.

En los grandes centros mineros, distribuidos en la zona occidental del país, están acumulados, como pirámides colosales de arena, las "colas y desmontes", el viejo desperdicio cuando la ley del mineral valía mucho más que ahora. Son un monumento al trabajo, a la historia evidente de la mina; son también los restos de la riqueza a los que hay que aprovechar a través de las nuevas técnicas en las fundiciones para minerales de baja ley. Las "colas y desmontes" son el testimonio material de lo que estas montañas desnudas han entregado a Bolivia, y son también el símbolo de la explotación implacable del capital.

Pero el rasgo de la crisis económica, que ha sobrevivido como el efecto de una larga acumulación de causas, es que la empresa privada ya no puede disponer de sus despensas para repetir sus viejos banquetes. Sus industrias miserables están amenazadas por el cierre y sus obreros con el despido, pero el misérrimo presupuesto de divisas del Estado sigue protegiendo estas "fuentes de trabajo" porque, a pesar de todo, tienen que sobrevivir, prolongado su agonía.

Banzer supuso que debajo del suelo de Santa Cruz estaban esperando los lagos subterráneos del petróleo. Sobre esta esperanza incierta incrementó la explotación e hizo construir refinerías con "futuro" con una capacidad cuatro veces superior a la capacidad de la producción. Estos errores de cálculo que pueden ser la excepción en cualquier país, eran aquí la regla. Lo que técnicamente podría ser una aberración, sin embargo, no lo era desde el punto de vista de los negocios —de los negocios privados—, de las concesiones de obras y de las comisiones. El hecho es que el petróleo, en vez de aumentar y ponerse al nivel de las refinerías, disminuyó y las refinerías se convirtieron en la denuncia a la imprevisión. Cuando los precios del petróleo aumentaron en el mercado mundial, Bolivia estaba en su máximo nivel de exportación, las bombas succionaban incesantemente y el "oro negro" despertaba entusiasmos y nuevas ilusiones ilimitadas. Pero ahora, no sólo Bolivia ha cerrado los grifos de la exportación, sino que además la caída de la producción es una amenaza tan grave que no se descarta que en un futuro próximo se tenga que importar este producto. Se ha disipado el espejismo de que Bolivia es un país petrolífero; ya no puede fundar sus esperanzas en las felices hipótesis del pasado.

En Bolivia se han sobredimensionado no sólo ciertas obras de ingeniería, sino también las estimaciones sobre la potencialidad de los recursos naturales. Esta ha sido la ideología colonialista que privilegiaba la explotación intensiva de los minerales, el petróleo y el gas. Los gobiernos, invariablemente, han utilizado el mito de que Bolivia es "el mendigo sentado en un sillón de oro" para permitir cuando no empujar a la explotación irracional de los recursos naturales. Se dice que lo que aquí se necesitan son los capitales que desentierren nuestras riquezas. Sobre este mismo mito, el mito del pobre-rico, se dice también que no hay petróleo pero hay gas natural. Se vende una parte del gas natural a la Argentina y está por decidirse la venta de un importante volumen (400 millones de pies cúbicos diarios) al Brasil. Pese a que com-

pañías especializadas, recomendadas por el Banco Mundial, han certificado una cantidad modesta y han establecido que Bolivia no es un país gasífero a escala internacional, en las páginas de los periódicos puede leerse artículos que siguen hablando de las "ingentes" cantidades de gas natural. Esta es una prueba de la resistencia de los mitos. Ahora se trata de exprimir el gas que todavía queda como la única hipótesis del desarrollo nacional. Por las condiciones regionales del mercado, Bolivia puede —físicamente— vender al Brasil, pero una vez agotado el gas ya no podrá comprarlo a nadie. Como en todo dilema, sólo hay dos términos: o el gas está condenado a desaparecer o tiene que conservarse para la futura industria petroquímica y siderúrgica.

El agotamiento del petróleo induce a la tentación del gas natural. El mismo gobierno de la UDP, que en su programa electoral había inscripto la conservación de este recurso, está dispuesto a seguir los pasos de Banzer que firmó los primeros convenios con el Brasil. Se dice, reiteradamente, que la única forma de paliar la crisis es a través de la venta. Los grandes comerciantes esperan con avidez los "contratos de obra" para la construcción del gigantesco gasoducto.

El hecho es que el petróleo no ha podido compensar el déficit de la producción minera. Junto a la crisis de la minería se ha producido el agotamiento del petróleo, las fuentes mas importantes para el ingreso de capitales. Y con ello, toda la industria subsidiada por el Estado está sucumbiendo de hecho. Los empresarios sobreviven con subsidios cada vez más podres. Así, la crisis de la producción derrumba los cimientos sobre los que se ha asentado el estatuto jurídico de la nueva burguesía.

El hambre. Cuando el hambre deja de ser el síntoma de una nación atrasada para convertirse en la enfermedad, ya no es un fenómeno más o menos perceptible. Se vuelve visible, invade las calles y asola el campo. Deja de estar oculto en las aldeas ignoradas o confinado en las villas miserias, y muestra impudicamente todo el horror de sus llagas. Llega paulatina pero inexorablemente. Una vez que aparece se extiende y propaga rompiendo todas las resistencias.

Sobre la superficie de la crisis económica vino el hambre, pero el hambre tiene su propia base social, es una prolongación de la pobreza, es la miseria extrema. Los indefensos y los desamparados de siempre —los organismos menos resistentes— son los flagelados por la epidemia. En las ciudades tiene su propio carácter y lo tiene también en el campo. En la ciudad, la parálisis de la vida económica: comienza expulsando del mercado a la mercancía más vulnerable: el trabajo. La desocupación tiene sus peculiares métodos de acumulación social, recluta, indefectiblemente todos los días, a las muchedumbres que engrosan los ejércitos de la miseria. La primera víctima del capital es el trabajo: la depauperación relativa deviene en depauperación absoluta. Ante cada cálculo negativo de la empresa, el capital reduce y racionaliza el número de sus asalariados. Ante la presión de las fuerzas del mercado, el capital reacciona con el

recurso brutal del despido. Inexorablemente, la crisis del capital descarga su venganza en el trabajo.

Lo primero que se paralizó fue la industria de la construcción. Propia de toda realidad dictatorial es la espectacularidad arquitectónica, los monumentos suntuosos, el esplendor ornamental, los edificios lujosos, en fin, el factor demostrativo de un gran desarrollo urbanístico. Banzer no fue una excepción ya que parte considerable de la deuda externa fue consumida en la erección de altos rascacielos en La Paz y espléndidos barrios residenciales en Santa Cruz, los monopolios de la construcción resultaron en un poder económico de peso. El proletariado de la construcción —lo más pobre del proletariado— se multiplicó como en un colmenar. Pero la contracción del mercado y sus presiones sobre las clases medias altas redujo drásticamente las dimensiones de la construcción. Los obreros, que en la época de auge, ya tenían una alimentación menos que frugal (gaseosa, pan y banana) tuvieron que bajar aún más el consumo. Los menos afortunados terminaron en la calle. Este fue el menos gradual y el más grosero de los procesos de degradación económica. El universo suntuario de la construcción quedó paralizado de la noche a la mañana. Su efecto instantáneo fue el desempleo y la inseguridad.

Cuando la fábrica o el comercio expulsan a sus trabajadores y disminuye la cantidad social efectiva de los obreros, se hace más visible el drama de la desocupación, la miseria y el hambre. Desproporcionadamente agravados, el hambre y la miseria hacen involucionar a la sociedad que se defiende volviendo a sus formas de convivencia económica más primarias. Se convierten en una expresión regresiva reintegrándose al más arcano primitivismo social. El despotismo del hambre agudiza el instinto de conservación y multitudes de mendigos ocupan las calles, a su vez las familias y los grupos comienzan a disgregarse. Las calles se inundan de vendedores ambulantes, de vendedores de minucias, revirtiendo a los orígenes la cultura del consumo; el mercado natural vuelve del pasado al presente para languidecer otra vez en medio de unas relaciones mercantilizadas que han hecho crisis.

Los contrastes se agudizan y evidencian. La economía se corrompe. El comerciante se transforma en agiotista y entre el caos general de la escasez y los precios impone la dictadura del lucro. El agiotista juega con el mercado, la compra y la venta no son más que meros azares de un juego, sabe cuando ocultar para llegar puntualmente al precio, olfatea los pasos del gobierno, está al día con las tendencias del dólar y vende en el momento oportuno de la ganancia. Dentro de este cuadro de imperio del agio, de dictadura de los precios y libertinaje comercial, la miseria deambula por las calles, crecen las muchedumbres andrajosas que pasean su pobreza y las ciudades ya no pueden ocultarla.

El campo arrojó a sus víctimas a la ciudad. Desde los más alejados rincones del país, campesinos castigados por la sequía abandonan sus parcelas estériles y pueblan las ciudades de pordioseros y ponen en su aventurero éxodo sus últimas esperanzas de supervivencia. El cuadro ate-

rador de la sequía muestra sus trágicos resultados en la muerte por sed e inanición de los niños, en la mortandad del ganado, la destrucción de las cosechas, en fin, en una sucesión de desastres donde los fenómenos naturales se ensañan sobre el infortunio de la debacle económica. Esta corriente migratoria signada por la desesperación y el miedo expulsa a millares de campesinos hacia la hostilidad de un mundo urbano extraño.

Son ellos, los excluidos de siempre, los más vulnerables en el desastre. Según las conclusiones del gobierno, la sequía en el altiplano y los valles, y las inundaciones en el trópico han provocado un déficit de cerca de un millón y medio de toneladas métricas de alimentos; de los 26 productos agrícolas tradicionales, 24 descendieron a niveles ínfimos, agravando la crisis hasta una verdadera crisis alimentaria. Las pérdidas de cosechas e inhabilitación de tierras afectó directamente a más de un millón y medio de personas (Bolivia tiene alrededor de seis millones de habitantes). Una inmensa cantidad de pequeños productores sufrió la pérdida total de sus bienes. El gobierno tendrá que encarar el problema de la provisión de alimentos en el área urbana y el de la subsistencia de millones de damnificados en el agro.

La sequía, de acuerdo a los datos de la organización de Defensa Civil del gobierno, ha tomado a más de la tercera parte del territorio, y otra zona importante ha sido devastada por las inundaciones. La recuperación agrícola y ganadera tardará por lo menos cinco años. Esta situación de desolación en el campo se reflejó intensamente en las ciudades, a través de la escasez de papa, arroz, harina, aceite, carne, etc., lo que aumentó la inseguridad y el pánico. En La Paz, una huelga de los comerciantes (cierre de establecimientos) provocó una ola de violencia en los barrios populares con asaltos y amenazas de incendios. Grupos espontáneamente aglutinados se adueñaron de las calles durante un día entero. Nadie pudo detener estos estallidos de cólera. Pero quedaron como una severa advertencia de lo que puede ocurrir con estas olas de violencia sin dirección ni objetivos.

Las medidas de noviembre. Sobre el trasfondo social dominado por la debacle económica y la exasperación política, los "cien días" de Siles empezaron a correr con la misma velocidad incontrolada de la inflación, demostrando que la democracia había llegado no sólo como la heredera sino también como parte de la crisis. Podían invocarse los errores del pasado y someterlos, incluso, al juicio político pero el discurso sobre el pasado tenía que unirse, llegado el momento, a las responsabilidades del presente. El primer acto de política económica —"Nueva Política Económica"— se colocó en un aparente centro entre los intereses opuestos de la esperanza popular y de los amos del capital. Por otro lado, mientras los sectores sociales presionaban en busca de soluciones que se concretaran en la canasta familiar, el Fondo Monetario aconsejaba lo que había sugerido a Vildoso o podría sugerir a cualquier gobierno: la aplicación de sus pautas tradicionales. Para el FMI, las medidas del gobierno debían estar atadas al fortalecimiento del ahorro público para que Bolivia pagara

a sus acreedores de la banca internacional. Pero la deuda externa es sólo un aspecto de toda la cuestión económica, los otros aspectos son: realidades sociales vivas, vigentes en las demandas salariales y en el movimiento reivindicativo, que con legítimo derecho, piensa antes en sí mismo que en las exigencias de los acreedores extranjeros. O el gobierno aplicaba la ortodoxia monetarista, o hacía su propio diagnóstico recogiendo las realidades de la calle. Este dilema ha estado presente a lo largo de todo el año de gobierno de Siles, pero gradualmente, las orientaciones generales fueron adaptándose al "principio de la condicionalidad" en materia de sus relaciones con el Fondo.

La política del Fondo Monetario impone ajustes periódicos en el tipo de cambio, limitaciones en el gasto público y otras medidas destinadas a corregir el déficit de la balanza de pagos. Le interesa la salud del país sólo en relación con la capacidad de pago de la deuda externa y las necesidades de la población se supeditan a este objetivo. La reducción del gasto en Bolivia no es una cuestión simple, ya que casi todo depende del erario público. Si el gobierno eliminaba los subsidios se colocaba contra el pueblo, agudizaba el hambre, sustruía el pan de la canasta familiar. Además, la "racionalización" de los salarios significaba decretar la ruina social más completa: la "Nueva Política Económica" era el verdadero estreno del gobierno democrático.

Noviembre representaba la prueba de fuego para un gobierno que recién había asumido sus responsabilidades. Las medidas llegaron desorientando con su abundancia de decretos, pero clarificando los límites que el gobierno se imponía a sí mismo. Estaban inspiradas en un sentido de eclecticismo o de equilibrio entre la empresa privada y los asalariados. Ya se sabe que todo equilibrio es efímero, que el nivel de las cosas, en realidad, se encuentra en el desequilibrio. Los hechos iban a resistir esta mentalidad conciliadora, porque toda política económica, de aquí en adelante, estará en relación con la utilización del escaso presupuesto de divisas de que se dispone. Las medidas comenzaron por fijar un tipo de cambio en el nivel intermedio entre el mercado negro y el valor teórico que había definido el Estado. Sin embargo, la dictadura del dólar negro —el narco-dólar— no podía ser derrotada por un decreto; era un fenómeno social, un proceso independiente y autónomo. Para que el precio legal del dólar fuera un precio real, se requería dismantelar con métodos represivos la organización de la mafia. Y aquí residía el lado más flojo del gobierno. El nuevo tipo de cambio no sirvió para las transacciones libres, solo sirvió para que el Estado siguiera subsidiando a la empresa privada con el dólar barato.

El decreto de "desdolarización" ponía en manos del Banco Central la administración y asignación de esta escasa mercancía, que es el dólar. Todos los depósitos en dólares en la banca estatal y privada fueron convertidos a moneda nacional. Técnicamente apropiado, este recurso equivalía a una expropiación forzosa para el único fin de la desdolarización. La dolarización de la economía alcanzó su apogeo con Banzer, y seguramente no habría sido tan difícil la desdolarización de

no estar de por medio el atesoramiento originado en el narcotráfico. El gobierno expropió los depósitos pagando la indemnización legal, pero no contaba con la fuerza o era impotente para emplearla y controlar el mercado negro. El mercado negro contaba con un poder financiero mayor que el del Banco Central. El dólar legal se puso, en los hechos, a un precio cuatro veces más bajo que el dólar negro; el fisco, como siempre, cargaba con las pérdidas para subsidiar a la empresa privada.

Incluso esta buena intención reguladora fue desvirtuada casi de inmediato. Un mes después, en diciembre, el Banco Central resolvió hacerse cargo de la deuda externa de la banca privada, aceptando depósitos en moneda nacional al cambio legal vigente. El Banco Central vendía a la banca privada los escasos dólares baratos para el pago de sus deudas a la banca internacional. ¿En qué quedaban las medidas de desdolarización? Miles de clientes, entre ellos pequeños ahorristas, habían sido drásticamente expropiados; pero los grandes banqueros encontraron de pronto un gran negocio ya que traspasaban sus pérdidas al erario público y éste les garantizaba todas sus obligaciones del pasado. El Estado seguía disponiendo de las divisas que debían ser volcadas al aparato productivo, en favor del sector especulativo, sus poderes reguladores volvían a supeditarse al interés privado.

La política de precios se caracterizaba por singulares contradicciones. Así por ejemplo, el déficit del azúcar tiene su origen en que tanto los ingenios estatales como los privados actúan dentro de la misma área de competencia. La política tradicional había consistido en sacrificar sistemáticamente la empresa estatal para garantizar los beneficios de la empresa privada. Ahora había que sacrificar al consumidor en beneficio del monopolio privado del azúcar. Se subió al doble el precio y se creó un "fondo de fomento" para la industria del azúcar en base a un subido impuesto a la venta. El "fondo de fomento" no era más que un depósito a plazo para los grandes industriales, una sobreganancia que repercutía decisivamente en los precios. Era inexplicable esta política para un gobierno que quería conservar su base popular.

Sin embargo, lo más sensible, lo más directamente vinculado al problema social eran los reajustes en los precios y los salarios. Los salarios llevaban un marcado atraso respecto de los precios. Estaban, por así decirlo, en una escala diferente, los precios en un mundo suntuario y los salarios en un mundo primitivo. El poder de compra bajaba inexorablemente, bajaba por una pendiente sin término: la canasta familiar se empobrecía irremisiblemente, el salario se convertía en una fantasía trágica. La COB advirtió contra este fenómeno involutivo que hacía del trabajo la única mercancía barata y subvalorizada, la única mercancía con tendencia a la sobre-oferta. Propuso el salario mínimo vital con escala móvil, única posibilidad para lograr un equilibrio relativo. En otras palabras, propuso reajustar periódicamente la "mercancía trabajo" en relación a las otras mercancías. Pero esta era la posición de los trabajadores. El gobierno, desde luego, tenía otra filosofía y si bien no quiso separarse demasiado de las sugerencias obreras, tampoco se

aproximó en demasía a ellas. Los salarios subieron pero se mantuvo básicamente el desequilibrio con los precios. De este modo, el problema de los salarios fue tratado en el día y para el día, porque estaban inexorablemente condenados al deterioro.

En resumen, la "Nueva Política Económica" no traía nada nuevo y la desdolarización no era más que una prolongación de las antiguas políticas. No se levantó ningún tipo de resistencia social a las medidas ya que, finalmente, se estaba viviendo la "tregua de los cien días". Existía, aún, una confusión, mezcla de pesimismo y optimismo, que no se disipaba. Pero quedaron señaladas anticipadamente las tendencias fundamentales del gobierno, pues en esa oportunidad quedaron definidos los toques y la zona intermedia en que trataría de mantenerse. La "Nueva Política Económica" fue atribuida al MIR porque este partido se hizo cargo de las responsabilidades económicas del gabinete. Pero tal cosa demostraba la incoherencia oficial, pues los ministerios habían sido distribuidos como territorios independientes: al MIR le correspondió la política económica, al PCB la política social y al MNRI la de interior y relaciones exteriores. La política de gobierno fue despedazada y repartida según los puntos de vista divergentes de los cogobernantes. El solo hecho de que el peso de las responsabilidades económicas hubiese recaído en un solo partido, para alivio de los otros, muestra hasta que punto la UDP, en lugar de un frente de partidos, era sólo un agrupamiento o un lugar accidental de reunión.

El país estaba en la bancarrota, las reservas del Banco Central, al irse Vildoso, estaban en menos de 300 millones de dólares. El compromiso de la democracia era gigantesco pero se reducía a una elemental e inflexible disyuntiva: en favor de quienes se administraba la crisis. La Contraloría de la República reconocía que existían más de 6.550 casos de desfalcos o de deudas al Estado. Esta sola estadística demostraba el esquilamiento que había sufrido la nación. Pero la política oficial transitaba en un círculo vicioso, porque sus soluciones monetaristas al seguir imponiendo al Estado la distribución del famélico excedente para mantener las utilidades de la empresa privada, lo sustraía de su apremiante destino natural, colocar casi todo el esfuerzo en lo único que podía producir, el sector público.

El fin de los cien días. Los "cien días" fue sólo una metáfora, pero en lo esencial, fue el corto plazo que pidió Siles para establecer una tregua social. De todos modos, los cien días se acabaron sin pena ni gloria. El balance de los tres meses de gobierno anticipaba un futuro inquietante lleno de impotencia, vacilación e incertidumbre. Sobre el paisaje negro de la economía, apenas se destacaba la imagen del gobierno, o bien pasaba desapercibida. Los días del entusiasmo y la esperanza habían quedado irrevocablemente atrás, como un recuerdo lejano. Todo pudo esperarse, menos este aislamiento tan precoz de la UDP.

La impresión hacia afuera era de que el gobierno estaba varado y que empezaba a deshacerse por dentro, a devorarse intestínamente en

una implacable guerrilla de intrigas por posiciones burocráticas. De los tres partidos, dos de ellos, el MIR y el MNRI, hegemónicos en la política y en el gabinete, entraron en una tensa disputa por "asuntos de Estado" ante la mirada resignada del socio menor: el PCB. El MIR objetaba la posición tolerante del Ministerio del Interior respecto al narcotráfico y proponía soluciones para unificar la acción dispersa del gobierno: una instancia superior de decisión, la UDP, que debía cohesionar el accionar administrativo. Pero el MNRI rechazó el proyecto porque "recortaba" las atribuciones del Presidente. ¿Qué hacía el PCB? El PCB callaba. Su silencio era característico a la vez que deseaba, por sobre todas las cosas, que el MIR se quedara. Esta disputa, que en sus orígenes se restringía a diferencias en la concepción administrativa, alcanzaba al MNRI no solo dividido en dos grandes facciones sino incluso disgregado en el mismo grupo que apoyaba a Siles, en el "grupo palaciego" como lo apodaba el MIR.

De la discusión dentro del Palacio se llegó a la crisis de gabinete. Así se exteriorizaba una situación de latente antagonismo que comenzó el mismo 10 de octubre. Presentaron sus renuncias los seis ministros miristas con la intención de regresar, ratificados por el Presidente, imponiendo o negociando sus condiciones. Siles dejaba "pasar el tiempo" sin despejar la incógnita de sus seis huecos ministeriales. La administración del Estado seguía su curso sin apremios, imposible, sin angustiarse por los vacíos del gabinete. Parecía que los gobiernos gobiernan a pesar de todo, aún sin los gobernantes. Siles dejaba que la máquina administrativa se gobernara sola. Ante el desconcierto general pasaban los días sin que nada se solucionara. Finalmente, la crisis de gabinete se estacionó, se congeló y hasta se estabilizó.

Pero esta historia tuvo un final insólito. Se reunió el Congreso Nacional para autorizar el viaje del Presidente a Francia. Las bancadas parlamentarias se pronunciaban una por una. El Partido Socialista Uno no autorizó el viaje por considerarlo inconveniente en circunstancias en que la crisis del gobierno permanecía irresuelta. El MIR se abstuvo de votar, y en el acto llegó una comunicación oficial que notificaba la suspensión de la visita a Francia. La votación del MIR fue clave. Las renuncias de los seis ministros fueron aceptadas, y de este modo la crisis de gabinete se convirtió en una crisis política.

Como conclusión de toda esta evolución anecdótica se llega a la confirmación de que el gobierno no estaba solamente estancado en una crisis ministerial, se trataba en realidad de una crisis política de fondo, en la que la salida del MIR era solo un aspecto. Ya era evidente para todos que la UDP no tenía un proyecto nacional. El simple agrupamiento de partidos, las concepciones dispares, la improvisación eran la consecuencia de una falta de política, de un acuerdo básico, de un sentido unificador del programa y el gobierno. Se reproducía en la cúpula administrativa el viejo problema de la UDP, su entendimiento electoral y su desentendimiento en el enfoque general del país. La misma pugna de hegemonías —hegemonismo en este caso— revelaba la falta de unidad en los princi-

plos: pobreza conceptual para colocarse a la altura de los tiempos y los acontecimientos.

El gobierno dejó escapar su popularidad. Se encarceló en el Palacio y los ministerios, se encerró, se burocratizó y su crisis en la cúpula ni siquiera se reflejó en las calles. La salida del MIR lo debilitó, pero tampoco su hipotético regreso podía devolverle las energías. El gobierno era ya un peso inerte en la vida de las masas. El desgaste político era irreversible. El proyecto de la UDP era un proyecto prematuramente fracasado. Se estaba gobernando con la tolerancia de las masas pero ya no con su adhesión. Flotaba en el pueblo una sensación de fracaso no sólo por las medidas de noviembre, sino también por que la UDP mostraba su incapacidad para definir un modelo democrático de inspiración popular. El discurso antimperialista propalado en las campañas electorales no había tenido la intención de encarnarse en una acción de gobierno. Allí estaba la razón del fracaso.

Meses más tarde, con los últimos esfuerzos inútiles por "recomponer la UDP" con el reingreso del MIR al gobierno, concluyó definitivamente la UDP como proyecto histórico. Una carta del Presidente Siles ofreciendo al MIR su participación en el gobierno mereció una dura respuesta de este partido dando por terminada toda negociación. La carta firmada por la dirección del MIR contenía severas recriminaciones: "Lamentablemente, su decisión es la culminación de una serie interminable de promesas y plazos incumplidos que han erosionado profundamente la credibilidad de su gobierno. Usted y su gobierno han hecho suyas las proposiciones de política económica sugeridas por el Fondo Monetario Internacional" ... "el grupo palaciego, principal autor del extravío de conducción del proceso los primeros meses después del 10 de octubre y negativo artífice de la desarticulación frentista, cuando ya en enero de 1983 sacrificó la esperanza de un gobierno coherente, participativo y unitario, a costas de la mezquina pelea interna del control de los mecanismos de partido y gobierno" ... "nuestro partido se ve afectado de una progresiva pérdida de confianza en el liderazgo que usted representa y observa consternado el divorcio que se va produciendo entre su gobierno y las masas populares" ... "El pueblo está embargado por una terrible frustración del tamaño que fuera su esperanza" ... "el problema del hambre que se extiende y profundiza, y las renovadas amenazas contra nuestra incipiente libertad".

Esta carta fue el abrupto punto final de todo un período de paciente espera para la "recomposición de la UDP" y la "reconducción" del proceso democrático. Fue la expresión de la ruptura entre el gobierno y uno de sus más importantes componentes. Sus afirmaciones equivalen a una radiografía del gobierno, tomada por uno de sus gestores; un balance que es la expresión de toda esa relación equívoca y confusa que caracterizó al frente gobernante. Por primera vez, uno de los partidos de la UDP reconocía la "ausencia de gobierno" y una política económica cuya intención era la de "ahorrar y generar recursos para el pago de la deuda externa". Desde el punto de vista de la diagnosis, la carta del MIR era un

recuento objetivo de los errores, pero desde el punto de vista de la política era sólo un reconocimiento tardío de algo que ya había comenzado a suceder a poco del 10 de octubre, y esto no era atribuible únicamente a Siles, era producto de la impotencia general, del vacío ideológico e histórico de la UDP.

El esfuerzo de la "recomposición" de la UDP y de la "reconducción" del proceso democrático tenía lugar en el marco de una nueva correlación política. Después que la UDP había probado su impotencia de conductor y cuando el pueblo ya no creía en ella como opción, cuando las masas buscaban formas de expresión y fórmulas de gobierno (la cogestión obrera y el cogobierno) superiores, bajo estas condiciones, la "recomposición" y la "reconducción" si bien pertenecía a un pasado fresco y reciente, no dejaba de ser por eso un pasado caduco, un episodio cerrado. No es extraño que hubiese sido la derecha del MNR el más entusiasta sostenedor de esta tesis y el negociador más interesado. El PCB apoyaba a la recomposición sin tomar una decisión clara sobre el cogobierno, porque era una pieza fija del engranaje administrativo antes que el co-responsable de las decisiones políticas. El PCB fue arrinconado en sus dos ministerios, Minería y Trabajo, sobreviviendo pasivamente a todas las crisis. No pesaba en las decisiones económicas del gobierno, ¿por qué iba a pesar en las decisiones políticas? Cuando ya nadie creía en la UDP, como se percibía en la calle, como se veía en la propia actuación de Siles y en la del MIR, el PCB seguía creyendo, seguía esperando.

Para nadie fue una sorpresa la ruptura definitiva de la UDP, lo que hizo el MIR fue extender el certificado de defunción pero no inventó el cadáver. Para las masas, la UDP sólo representaba una vieja historia electoral que se iba extinguiendo, que languidecía, y cuyo derecho a la existencia había prescrito. El MIR quizás sopesó estos hechos, pero el tono de su carta y la ruptura con el Presidente perjudicaron su imagen. El periódico *Meridiano* escribía: "ocho o más ministerios hacen confianza en el Presidente. Pero cuatro... hacen la desconfianza. Todo muestra que la máxima preocupación de los últimos meses era la cuota de poder". A su vez, el vespertino *Ultima Hora* editorializaba que "no era esto, ciertamente, lo que esperaba el país de sus actuales conductores. El resultado de tantas gestiones, de un ir y venir de propuestas, réplicas y exigencias, que ya habían logrado agotar la paciencia del pueblo, merece un solo calificativo: esterilidad" ... "Las cartas que han intercambiado el Presidente y los hombres del MIR no traen ninguna solución a los problemas que nos agobian. Lejos de ello, esos documentos nos abruman por la honda sensación de fracaso que de ellos se desprende". La opinión nacional tomó el asunto como una expresión penosa de la inconsistencia gubernamental.

Entre los factores de descomposición precoz del proceso democrático no estaban sólo las disensiones intestinas de los partidos, caso MNR, el enfrentamiento entre los partidos de la UDP, estaba sobre todo la pesada carga de la crisis económica. La economía no podía tener el mismo tratamiento de las épocas normales, su examen en los gabinetes de traba-

jo o los consejos de los expertos eran una cosa, pero otra era el fenómeno social que se desprendía de ella. La racionalidad de los planes y decretos, basados en las estadísticas, se estrellaba contra el creciente sentimiento de descontento, contra la angustia del hambre. El vacío provocado por la inseguridad y el hambre no busca explicaciones ni se detiene en razones, actúa como un impulso que nace de la frustración y que para defenderse se prepara a atacar. Para los últimos gobiernos militares, la crisis fue un incontrolable factor en contra. Pero la UDP había contado con ventaja en principio: la tolerancia del pueblo y la confianza; pero no por eso conquistaba un porvenir incondicional.

Las épocas electorales convierten a la política en un espectáculo. Lo que cuenta es la agitación, la propaganda, la crítica a todo lo existente y las promesas que se ofrecen. En esos períodos la política se simplifica, la competencia pacífica para conquistar el electorado adormece y crea ilusiones. La UDP estuvo fascinada con su proyecto electoral, porque además fue una expresión acertada de acumulación social cuyo dinamismo venía de su posición práctica a las alternativas de la derecha. Recogía una situación sociológica particular, creando el espacio para reunir y aglutinar todas las energías posibles que emergían del antagonismo del pueblo contra el poder de los militares. Pero la lógica electoral abarca sólo a un aspecto parcial de toda la política. Como opción política, la UDP tenía que aprobar su examen en el gobierno. Las masas de la UDP buscaron el gobierno; el episodio del sufragio o la ceremonia de las urnas era un mero instrumento. Para la UDP, en cambio, el espíritu electoral modeló toda su organización y los partidos se agruparon para distribuirse cuotas de poder. Esta situación distrajo todas las energías, restandole tiempo a una evaluación política que se tradujera en un plan de gobierno.

El gobierno no llegó preparado para enfrentar la situación, y resultó, como en el caso de los regímenes militares, devorado por la crisis. Para enfrentar a la crisis no bastaba el ordenamiento de una serie de recursos técnicos para regular el cambio, los precios y los salarios, tenía que ponerse en acción toda una política orientada al cambio social. No se trataba en sí tan sólo de acariciar la superficie del fenómeno económico sino de fijar una estrategia íntimamente ligada a la política. Pero la UDP fue el gran ausente en la gran política, se convirtió en el aparato técnico de la administración de la crisis, se divorció de las masas, dejó de interpretarlas y expresarlas. No vio en la economía la política, ni removió los elementos subjetivos de la política para confrontarlos con la economía. No se propuso transformar la situación sino sólo mantenerla y estabilizarla.

El factor de la crisis económica, sin embargo, no era autónomo ni marchaba solo, estaba incluido en la democracia de un modo mucho más radical que el sufragio. Sólo para darse cuenta de los extravíos del gobierno, llamaba a la reflexión una curiosa nota editorial del periódico *Unidad* del PCB donde se decía que a veces los pueblos se ven obligados a sacrificar el pan en favor de la libertad. Y justamente esta libertad abstracta sin resultados económicos era lo que caracterizaba al gobierno de la UDP que no tenía capacidad de transformación social. No era sufi-

ciente proponerse la activación del aparato productivo, había que fijar una filosofía, establecer una estrategia, y el hecho de no definir una política respecto del consumo popular coadyuvó a hacer de la crisis económica el primer enemigo de la democracia.

Los mercados populares, donde la economía política es sustituida por relaciones más directas y espontáneas, se transformaron no sólo en centros de especulación sino también en centros de agitación política. Los que compraban cada día a un precio nuevo, y sintiendo la coacción de los precios, comenzaron a alimentar un sentimiento nostálgico hacia el pasado. Pero no sólo los precios sino también el ocultamiento y el agio despertaban la angustia colectiva y eran la evidencia más patética de la pérdida de autoridad. Las medidas económicas ponían en relación entre sí al privilegiado mundo del comercio y de las finanzas, que con sus múltiples recursos no habían perdido sus conexiones oficiales; pero fuera de este mundo que había preparado sus defensas y tonificado su organismo, el habitante de la calle o de la aldea rural era la única víctima de la riqueza paradójica que concentra la crisis sobre la miseria de todos. Si no se buscaba una fórmula política para que la "nación" enfrentara a la crisis en la perspectiva de resolverla para sí misma, la libertad no era más que una palabra.

La crisis económica tiene su propia soberanía. Recluta su ejército de descontentos con extraordinaria facilidad, porque no necesita de mecanismos particulares ni de especialistas en propaganda; la fuerza de la desesperación, las presiones de la privación trabajan solas, por sí mismas, unificando las expresiones de protesta. Los "períodos de impotencia económica" contienen la voz de la violencia, de la guerra civil. Cuando la crisis oprime a los pobres, el "orden" pende de un hilo, la libertad puede ser devorada por el caos.

Si decimos que la UDP fracasó en su línea estratégica es porque, al margen de sus luchas menudas e intrascendentes, careció de voluntad política para afirmarse en la corriente histórica y mantener la adhesión electoral en sus tareas de gobierno. Los pueblos pueden sacrificar momentáneamente el pan si tienen a la vista un horizonte trazado con nitidez. El programa electoral de la UDP inscribía una serie de ideas generales sobre la "soberanía económica", la "participación popular" en el gobierno, el "control" de la banca y el comercio, el "desarrollo independiente", la "asimilación de las mejores tradiciones del 52". Aunque ligero y superficial, el programa tenía una intención popular. ¿Pero qué ocurrió con la UDP-gobierno? Quedó presa de las concepciones demoliberales, y las buenas intenciones se diluyeron en la impotencia burocrática de partidos que acertaron en la agitación electoral, pero que resultaron mediocres a la hora de asumir su papel de estadistas. Así, la pugna de sectores en el MNRI desplazaba y colocaba autoridades por medio de huelgas y votos resolutivos. Por su parte, el Partido Comunista fijaba su posición económica en avisos pagados en los diarios, en vez de imponerla en el gabinete. Y finalmente, que un ex-miembro del gabinete, el MIR, reconociera que la política económica de un gobierno de partidos estaba en manos de "ministros indepen-

dientes" hacían visible que el caos de arriba no podía resolver el caos de la economía. Al profundizarse el abismo entre gobierno y pueblo, entre la fuente del poder y los titulares del poder, la crisis económica exacerbó la crisis política. La UDP había perdido tiempo y el tiempo es irrecuperable, no penetró puntualmente en la corriente popular, copó los ministerios pero se separó de las masas. La burocracia sólo produce esterilidad. La burocratización de la UDP dejó sin dirección efectiva al proceso democrático, las masas quedaron sin conductores y los conductores no quisieron hacerlas partícipes del desafío común a la crisis; el resultado fue el vacío de poder.

Democracia y democracia. "La UDP se organiza en una nueva etapa histórica que reinicia y actualiza el proceso revolucionario abierto en Bolivia en abril de 1952, enmarca su actividad en la dinámica económica y social creada por ese proceso y reivindica los mejores logros nacionales y populares de los regímenes comprendidos entre septiembre de 1969 y agosto de 1971". "La UDP se propone cambiar la orientación de la economía nacional para hacer que ésta responda a las necesidades del desarrollo armónico y equilibrado del país, en función de las necesidades de las grandes masas de obreros, campesinos, profesionales, estudiantes y demás sectores empobrecidos de la población". "La lucha de la UDP en este período electoral no se limita a buscar la recomposición de la democracia formal, sino al logro de una democracia efectiva en la que las grandes mayorías nacionales sean las que dirijan y decidan los destinos de la República". Estos párrafos han sido extraídos de la Declaración Política de la UDP. El frente ganador de las elecciones "actualiza" el proceso abierto en 1952 y "reivindica" la democracia de 1971, se propone "cambiar" la economía nacional y no lucha por la "recomposición de la democracia formal" sino por el "logro de una democracia efectiva". Estos conceptos tienen una doble importancia, no como testimonio recriminatorio para quienes no hicieron lo que escribieron sino desde el punto de vista de que la propaganda electoral para encarnarse en el pueblo tuvo que derribar los mitos de la "democracia formal" y, segundo, el enfoque de la democracia efectiva de los años 1952 y 1971.

La UDP hizo lo contrario de lo que dijo. Se prosternó ante la democracia abstracta y fue abandonada por el movimiento popular. Impotencia frente a la crisis, divorcio de gobierno y pueblo, vacío de poder, crisis de Estado, crisis de la democracia: así podría resumirse la situación. Esta suma de resultados coloca a la situación política en un trance, o se avanza o se retrocede a la reversión dictatorial. Avanzar no es negar la democracia, es llenarla de un nuevo contenido, partiendo de lo que existe hacia una exigencia nueva. Los derechos proclamados abstractamente por el Estado representativo, se vuelven concretos al avanzar la democracia. El marxismo vulgar considera a la democracia formal como algo execrable, no reconoce que contemporáneamente es el escenario histórico dentro del cual puede organizarse el "poder del pueblo" para transitar hacia una democracia política más completa. De hecho, la cuestión

involucra dos situaciones, la democracia en los países atrasados y la democracia en un país atrasado en particular: Bolivia.

Umberto Cerroni³ escribe que "Lenin descubre que en un país atrasado que no ha conquistado aún la democracia, en cierto sentido, la revolución burguesa es más beneficiosa para el proletariado que para la burguesía: descubrimiento que en occidente hubiera pasado por capitulación". El "cierto sentido" es la relativización del concepto, porque ya no se trata como creía el marxismo vulgar de que toda sociedad democrático-representativa conquista tarde o temprano una democracia superior. La democracia de los países atrasados tiene que sufrir un proceso de metamorfosis para resolver la cuestión nacional que, en el fondo, es la cuestión campesina. La transformación democrática del Estado en los países atrasados tiene su rasgo "nacional" en la incorporación decisiva de la cuestión agraria a la vida social. En Bolivia, la revolución de abril ha significado un paso gigantesto en la incorporación de las masas campesinas a la política; pero aún así, la cuestión agraria, la cuestión campesina, está todavía lejos de una solución histórica. El campesinado sigue sujeto a una estricta subordinación social, además, junto al problema de la tierra que es un hecho inconcluso existe una tremenda heterogeneidad social y cultural como presupuesto necesario en el enfoque de la cuestión democrática. Cuanto más compleja es la sociedad rural, más vigente resulta la reivindicación nacional.

Tampoco se puede definir el contenido de la "liberación nacional" sin establecer su base democrática. El imperialismo sería un mero punto de referencia mundial si no se estableciese claramente la relación entre el Estado y la sociedad, entre el género de Estado que conjunciona la dominación internacional con el dominio interno y la transformación necesaria de la sociedad civil. Cuando la contradicción entre la ciudad y el campo es tan grande, el problema democrático consiste en unir en un solo haz la cuestión campesina y la liberación nacional. El movimiento obrero estaría destinado al ostracismo más completo, no podría aspirar a dirección ideológica alguna, si no cuenta con un programa democrático para las clases democráticas. Entender la democracia sólo en su forma jurídica es una inconsecuencia teórica, porque el Estado representativo moderno es una "compleja función institucional" de la sociedad capitalista, bajo condiciones históricas particulares e irreproducible bajo otras. El Estado representativo moderno existe cuando el problema nacional ha sido resuelto y donde la sociedad civil ha separado de su seno una organización estatal jerárquica. Pero en las sociedades atrasadas el "concepto de democracia" no es un estatuto jurídico ni una forma consumada, menos un Estado diferenciado técnicamente de la sociedad, es una "cuestión", un "problema", un proceso histórico de alianza de clases oprimidas en la que la "clase democrática", el campesinado, resuelve unirse a la lucha nacional antimperialista. Así el fenómeno democrático genera sus potencialidades: las libertades sociales.

El punto de contacto históricamente más concreto entre el proletariado urbano y la democracia campesina ha sido la revolución de

1952. Allí se dio la convergencia urbano-rural en la política pero no en la ideología, por eso, el principio democrático que surgió de la experiencia directa —del carácter plebeyo de la revolución— fue más una anticipación que una realización. El 1952 es el 1905 de ambas clases: años de descubrimiento de sus formas semiestatales, de su relación histórica y de sus modos de *adquisición* del concepto revolucionario de democracia. La democracia, en este sentido de proceso, tiene un contenido híbrido, ya que por un lado es jurídicamente burguesa y por otro es socialmente campesina. 1952 representa el año de la propiedad jurídica individual de la tierra pero representa también la apropiación social de la política y la unión de las clases que producen.

No puede haber hecho más contradictorio que la democracia como proceso. Porque la democracia, en este sentido, no es la simple administración —o regulación— de la libertad individual. Es la "unidad en la lucha" del principio de la democracia con su objetivo: la democracia efectiva. La realización de las tareas democráticas (unidad nacional) están indisolublemente conexas a la cuestión campesina, que en estos países es la base del "poder popular". La razón democrática del campesinado es la tierra, esa fue su "razón" para incorporarse al Estado democrático del 52. La reforma agraria homogeneizó sus intereses diversificados y desarrolló una conciencia colectiva donde sólo había existido la dispersión. Pero esta conciencia que tuvo su punto de partida no ha tenido su punto de llegada; el derecho a la pequeña propiedad ha despertado la conciencia de los derechos en general, pero ha aislado socialmente en el conformismo a la gran masa rural. Estamos hablando de productos sociales paradójicos y contradictorios. El fenómeno del reagrupamiento social campesino es nuevo, comienza a mostrar ciertas vanguardias sindicales (Confederación Unica de Trabajadores Campesinos de Bolivia) con horizontes menos inmediatos: es el primer gran grupo social que le exige a Siles participar en el gobierno. La conciencia colectiva de los derechos se transforma en el derecho a gobernar.

Retomando el hilo, cabe un discernimiento importante, la izquierda boliviana (el marxismo) se ha desarrollado en contradicción al movimiento democrático más importante de la historia: la revolución nacional. Para unos como los "poristas" (trozkistas) fue una "revolución traicionada", para otros, como los comunistas fue una "revolución burguesa", pero la conciencia de esta contradicción no fue dialéctica, fue metafísica. Esta conciencia no se propuso la superación dialéctica de la democracia movimientista rescatando su esencia social e histórica. Allí radica el vacío del marxismo boliviano, la falta de una concepción democrática científica de la Revolución Boliviana. Y paradójicamente en el país que se constituyó en el principal laboratorio social de Sudamérica, donde los "soldados" obreros y campesinos hicieron una experiencia notable del "poder anticipado" del pueblo, es donde ha faltado una concepción democrática por parte de la izquierda marxista.

En cambio, el marxismo científicamente considerado desarrolló el concepto de democracia en el escenario de los países adelantados,

en los que el principio de la democracia "entraba en conflicto con las condiciones reales de la sociedad burguesa", en esta línea están los estudios de Adler, Kautski y Luxemburgo. Se dirá que Trozki ha dejado previsiones universales en la "revolución permanente", acerca del nexo entre democracia y revolución; pero gran parte de sus previsiones continúan en el texto. Porque aunque Trozki haya escrito para el mundo, escribió desde Rusia, escribió desde la primera gran revolución triunfante con la enorme carga que pesaba en los protagonistas de la nueva época. Pero por más acertados que fuesen sus principios sobre el carácter ininterrumpido de lo democrático-socialista, ni en la ciencia social y menos en las revoluciones, las ideas llegan encorsetadas. Lo que los trozkistas bolivianos han hecho —contra todas las recomendaciones de Trozki— fue traducir del ruso al "boliviano" la vieja disputa sobre la "dictadura democrática", y se han lamentado nostálgicamente de la falta de "tradición stalinista" en el movimiento obrero para reproducir en la realidad al contendiente del texto. A Trozki le bastó poner los pies en México para establecer todas las diferencias entre la revolución rusa y México, a otros no les ha servido de nada el haber nacido y vivido en Bolivia.

Por ello el problema democrático en la Revolución Boliviana es todavía un vacío y su aprehensión histórica y sistematización teórica tienen que enriquecerse con los productos inacabados de la revolución nacional. La percepción "pirista" de la democracia fue algo distinto. Con su concepción "etapista" santificada por las necesidades defensivas de la COMINTERN y vapuleada por la realidad; puesto que la experiencia de partidos revolucionarios cooptados por la democracia liberal tuvo el resultado funesto del colgamiento del presidente Villarroel en 1946. La democracia como "acto de creación política de la revolución" se circunscribe a un período determinado de la historia de la revolución nacional. Y es su esencia, y no sus deformaciones, lo que tiene que rescatarse para la conceptualización teórica del tránsito revolucionario.

Desde el punto de vista de las clases sociales, la democracia es una conquista ante el antagonismo entre las reivindicaciones históricas del campesinado y el dominio de clase de la burguesía antidemocrática. Aun cuando este dominio se ejerza por medio de la democracia parlamentaria. La sola institucionalidad parlamentaria no resuelve este problema, porque el Estado representativo no significa *per se* la solución del "problema nacional"; aquí sólo ha existido como el marco de la dominación de la clase burguesa en la época liberal o como el momento de equilibrio provisional entre dictadura y dictadura, en la actualidad. El "Estado representativo" es el objeto teórico de la Constitución Política pero no es el modo de ser real de la experiencia social concreta. La sociedad política casi ha excluido a la sociedad civil y por la tradición es artificial toda creación de la ley. En nuestro caso, la ley no ha probado ser una expresión del fenómeno económico. Es más bien la osamenta de una sociedad que va entrando a su caducidad.

El parlamentarismo es una necesidad coyuntural para todas las clases. Los grandes intervalos sin Parlamento han surgido de la necesidad de las clases dominantes para reorganizar su dominación, cuando han tenido que convocar al ejército u oponerse a los "peligros" de la democracia. Pero, independientemente de las reales motivaciones íntimas, se ha demostrado que el parlamentarismo clásico es superfluo a los fines estatales de la primitiva burguesía boliviana. Para las clases "subordinadas", en cambio, la restitución del "Estado representativo", más conocido como Estado de Derecho en Bolivia, ha sido una palanca de acción táctica para recuperar un espacio indispensable. Mientras la burguesía no ha necesitado del "Estado representativo" como una *necesidad* de sus relaciones económicas, el pueblo lo ha reclamado como *instante* en el proceso de sus conquistas sociales. No siempre, desde luego, ni en 1952, ni en 1970-71, porque el desarrollo social en su fluir no puede retroceder o adecuarse a un régimen constitucional en vías de superación. El "republicanismo", en el mejor estilo de la tradición liberal, no ha contado con líderes republicanos ni con una filosofía republicana que hubiese dado coherencia histórica a la burguesía nacional. Con la muerte del viejo liberalismo —resultado del 52— la burguesía se ha visto imposibilitada de resucitar sus símbolos o cubrirse con sus supersticiones.

Para el trozkismo porista (por masas) la palabra democracia es un sacrilegio. Porque todo se ha simplificado de tal modo, que el curso de la revolución boliviana ya está previsto en la "Tesis de Pulacayo", no hay más que memorizar las leyes de la revolución permanente, y "desear" y "esperar". El trozkismo quiere la dictadura del proletariado a través del gobierno obrero-campesino, pero la quiere además, encarrilada en una vía recta y sin curvas, sin afrontar los tremendos estorbos del "momento actual". "El proceso de ascenso fue truncado en agosto de 1971 y la necesidad de luchar por la vigencia de las garantías constitucionales llevó a las masas a colocarse en la misma trinchera que la ocupada por la burguesía democratizante, lo que determinó que momentáneamente se pierda la independencia de clase, la hegemonía proletaria sobre la nación oprimida".⁵ El texto transcrito de Guillermo Lora muestra la enorme brecha abierta entre táctica y estrategia. Así *los momentos tácticos* que en muchas revoluciones triunfantes han pasado por la reivindicación de las garantías constitucionales, para este autor significan una "pérdida" de la independencia de clase. Pero, ¿es acaso la burguesía la que necesita de las garantías constitucionales? Por lo menos nuestra historia prueba todo lo contrario.

Por la vía inversa (por la vía con curvas y no por la vía recta) se puede llegar a conclusiones más justas. Habíamos dicho que la democracia —incluso el Estado representativo— del 10 de octubre fue resultado de la lucha de las masas. También establecimos el principio de que la burguesía boliviana no es democrática y que la democracia aparece —en las condiciones bolivianas— como un producto subversivo del pueblo. Si se tratara del caso de una democracia representativa fosilizada, la

actitud proletaria ante la democracia sería distinta. Pero en nuestro país el "titular histórico", la burguesía nacional, es el que ha cancelado su régimen natural, el que ha expropiado la forma constitucional de su dominación asociándose a la dictadura burocrático-militar. Pero la lucha por las "garantías constitucionales" es un aspecto, un escalón, en un proceso de conquistas que no concluye tampoco en el Estado representativo. La prueba la da el programa de la UDP que concede a las masas el principio de la "democracia efectiva" aun sin decir en qué consiste. Por ello en el análisis de este período tiene que establecerse el papel de las masas en la "producción" de la democracia y en la perspectiva de su profundización.

La coestión obrera. Casi detenida la marcha del régimen democrático, estancado y burocratizado, el proceso estaba en el trance de su retroceso. Fue en el momento de su mayor enervamiento, en su fase más gris, que se produjo la intervención a COMIBOL por la Federación de Mineros. La burocracia, los técnicos y profesionales realizaban un paro de prolongada duración (15 días) que afectaba a la producción. Junto al dirigente Juan Lechín, la Federación de Mineros tomó a su cargo la administración de COMIBOL y puso bajo control todas las empresas mineras y plantas metalúrgicas. Lechín dijo que "la FSTMB se vio impelida a tomar esta determinación histórica en defensa de los intereses nacionales"... "es la primera vez en la historia que los administradores de una empresa se declaran en huelga". Pero como la FSTMB había elaborado antes un proyecto de coestión obrera, encarpado por el gobierno, Lechín afirmó que "esta es una autogestión". Por su parte la asamblea de mineros (ampliado minero) respaldó la intervención para que, sobre esta medida, se estableciera la "coestión obrera mayoritaria". "Cuando los trabajadores tengamos el poder político de la nación, entonces hablaremos de 'autogestión', pero mientras eso no ocurra es ir al enfrentamiento", concluyó un dirigente. El documento aprobado por el "ampliado" declaraba que "... con el positivo resultado que han mostrado, en forma unitaria, todos los informes de las minas y la FSTMB, ha quedado iniciada en Bolivia la experiencia de la administración obrera en COMIBOL. Constituyendo esto el fruto del desarrollo de la conciencia revolucionaria de los mineros bolivianos"... "Los trabajadores, en el marco de la coestión obrera mayoritaria, se han hecho cargo, responsablemente, de la principal fuente de riqueza nacional"... "Aprobar, por unanimidad, con decisión y fuerza lo actuado por el Comité Ejecutivo de la FSTMB".

Esta acción audaz del más importante sindicato boliviano, la FSTMB, no sólo era una respuesta a los técnicos; era un acto político ante las vacilaciones del gobierno. El gobierno sintió el impacto. Reaccionó contra la ocupación "ilegal" de COMIBOL. La respuesta de Siles, en mensaje a la nación, se caracterizó por un lenguaje desmedido: "Esto nos da toda la autoridad para enfrentarnos a dirigentes anarco-sindicalistas que en su impromptus pueden precipitar al país a la anarquía para pro-

vocar la caída del gobierno y el hundimiento de la democracia. Como si no fuera suficiente la experiencia aplicada al gobierno del general Torres"... "Fue nuestra primera preocupación, desde que asumimos el gobierno, llevar adelante el proyecto de coestión obrera consagrado como un postulado básico de las campañas electorales y del Programa de la Unidad Democrática y Popular"... "Cuando propusimos el cogobierno se nos exigió el 51 por ciento, como si el gobierno nacional fuera una sociedad anónima, y cuando propusimos la coestión obrera paritaria, se nos planteó la coestión mayoritaria, que en los hechos equivale a la autogestión"... "La ocupación es una actitud que no ofrece la menor probabilidad de conciliación con el ordenamiento jurídico-institucional del país... violación irritante de la Constitución Política del Estado, que declara nulos los actos de quienes usurpen funciones que no les competen o que no emanen de la ley"... "La ocupación ilegal de COMIBOL ha causado un daño profundo a la imagen de Bolivia en el exterior, donde podría pensarse que el nuestro es un país a la deriva, sin orden, ley, ni autoridad, en lo interno ha servido para que la derecha reaccionaria encuentre pretextos para iniciar una escalada desestabilizadora"... "es una nueva provocación política de la ultrazquierda que coincide en sus afanes con la ultraderecha proimperialista".

El mensaje de Siles congeló momentáneamente las relaciones entre el gobierno y el movimiento obrero. El tono inesperadamente recriminatorio, a menos de seis meses de gobierno democrático, era revelador de su difícil política de equilibrio social. Sin embargo, el Ministro de Finanzas declaraba que el gobierno se encontraba en un "callejón sin salida" frente a los planteamientos salariales de los técnicos. La intervención se cruzó con el "callejón sin salida" de la huelga de la burocracia y se legitimó automáticamente ante el resto de los trabajadores; pero por otra parte, su objetivo era el de legalizar la coestión obrera o su institucionalización pública. La posición del gobierno, que declarativamente no era contraria a la coestión, dejaba un serio interrogante acerca del futuro de la tregua social. Más cautas, pero idénticas en el argumento, fueron las Fuerzas Armadas, preocupadas "... por el avasallamiento del poder legal por algunos sectores que, en actitud anárquica, se resisten a respetar el principio de autoridad y a acatar el imperio de la ley". El acto de intervención no era un hecho episódico, era una acción política que partía de las experiencias del movimiento obrero boliviano; ya en 1971, el gobierno de Torres discutía la coestión con los obreros mineros. Los mineros al plantear la coestión sostenían que, durante los treinta años de minería nacionalizada, se había aplicado una política que amparaba a los empresarios privados y empobrecía al sector estatal. Sostenían que sólo trasladando el poder de COMIBOL a los mineros podía cambiarse la orientación de esa política y argumentaban "que en los años de 1979-81, de 2.890 millones de dólares que obtuvo el país en concepto de exportaciones, el sector privado utilizó 2.760 millones, mientras COMIBOL solamente 223 millones".

Para tener una idea más completa acerca del estado de tensión en-

tre los mineros y el gobierno, nos vemos obligados —no nos gusta el exceso de citas— a citar algunos conceptos de la respuesta de la FSTMB al mensaje presidencial: "No es serio atribuir a los 'improntus' de unos dirigentes mineros, la capacidad de 'precipitar al país en la anarquía'..." "Constituye un ultraje a quienes hicieron posible la más grande victoria del pueblo contra sus opresores, la revolución de abril de 1952"... "Los trabajadores no necesitan de los 'anarco-sindicalistas' para decidir por sí mismos la defensa de sus intereses y la del país"... "Respecto de la experiencia del gobierno del general Torres, debemos decir que fue precisamente la huelga general decretada por la COB la que hizo posible el ascenso de un gobierno popular"... "Tampoco puede desconocerse que el retorno de la democracia en 1982, sólo fue posible por la terca resistencia de todos los trabajadores"... "La participación 'preponderante' de los trabajadores en los 'centros de decisión política' es la conclusión extraída por nosotros luego de tres décadas de incapacidad manifiesta en los que tuvieron en sus manos la conducción del país, y que lo han conducido al borde del abismo". La respuesta de la FSTMB al mensaje presidencial reivindicaba el derecho de los obreros a preservar el proceso democrático, y el derecho de los productores a administrar la producción.

Desde el punto de vista del proceso político, la cogestión obrera no representaba el "avasallamiento" de un orden constitucional perpetuamente avasallado, sino el avance de las masas hacia el control de los mecanismos administrativos. La intervención y la cogestión eran aspectos de una misma cuestión, el hecho incidental de la huelga de los técnicos no hizo más que apurar en los hechos lo que estaba ya en los papeles. Una vez producida la ocupación era imposible retroceder: al hacerlo también retrocedía la democracia. Detrás de la actualización de este asunto no sólo estaba el antecedente del proyecto discutido con el general Torres, estaba la misma nacionalización de las minas. De hecho gigantesco en su tiempo, la nacionalización habíase convertido en una institución dentro del orden imperialista. La COMIBOL, fuente de divisas para la empresa privada, o garante de la política del FMI vigente desde 1956, no era precisamente la conclusión que buscaron los mineros con la nacionalización. Ese es empero, el destino de las nacionalizaciones cuando junto a ellas se conserva un Estado que está perdiendo su esencia nacional.

Después de treinta años de la nacionalización y su equívoco destino, lo que cabía era la "redefinición" democrática del Estado (veremos, incluso, cómo la cogestión pudo ser un escalón del cogobierno) para que entre Estado y administración de los recursos comenzara a existir una filosofía de congruente reciprocidad. El suponer que la "intervención" era un acto anarco-sindicalista fue un juicio desafortunado, porque ya era tiempo, o el tiempo democrático lo justificaba, de "reorientar" la función económica del Estado. Sin embargo, es necesario reconocer que el proyecto de cogestión plantea innumerables dificultades técnicas y jurídicas y entre ellas, la más inmediata es la de

adoptar una cogestión mayoritaria o una cogestión paritaria.

Para el mecanismo técnico de la cogestión era prioritaria la definición de su funcionamiento "paritario" o "mayoritario". La FSTMB entró a la discusión de este punto sin ceder en el carácter "mayoritario", porque la "cogestión paritaria" resultaba inexistente; equivalía a ceder al gobierno todo el control haciendo superflua la presencia obrera. La administración de hecho de los obreros debía convertirse en una administración de derecho basada en el decreto de cogestión. Desde este punto de vista, el mecanismo técnico se convierte en problema político. Mientras Siles siga afirmando que "si la cogestión no es paritaria, se debilitará el Estado boliviano", la situación se presenta como irrevocable. La intervención de la COMIBOL constituye una ventaja estratégica para los mineros: la de conservar la iniciativa. Por eso aceptaban un régimen transitorio, provisional, basado en igual número de representantes obreros y del gobierno con un presidente obrero designado por el Estado. Este equilibrio condicional que permitía la negociación, consolidaba la intervención.

Pero la cogestión, aun la cogestión mayoritaria, representaba un poder administrativo localizado y limitado. Por una parte, las redes del Estado en su total funcionamiento limitarían las intenciones de la cogestión. Las complicadas relaciones entre la disposición de los recursos (Ministerio de Finanzas), la asignación de divisas (Banco Central) y la dirección de la economía minera (Ministerio de Minería) resultaban ser los obstáculos objetivos de la función institucional del Estado. Para que la cogestión se convirtiera en un verdadero poder regulador, se requería, en primer lugar, su extensión hacia las demás empresas del Estado. Pero tal como estaban las cosas, la cogestión debía ser la antesala del cogobierno.

La situación planteada por la intervención reponía en la historia la titularidad obrera en la nacionalización de las minas. El poder de la derecha había esquilado a la COMIBOL y los principios de la nacionalización habían sido desvirtuados con la "desnacionalización" del Estado. A través de los años, de hecho la COMIBOL pasó a manos empresarias, que no necesitaron deshacerse de sus bienes (desnacionalizarlos) puesto que el Estado mismo había sido desnacionalizado. La cogestión, desde luego, no era un mero acto de administración, era un asunto de Estado que planteaba su "revalorización". El problema de la producción no era el único fundamento esencial de este retorno obrero a la fuente de la nacionalización de la minería, el fundamento era político en su más amplio sentido, era poner en manos de la nación su propia riqueza. Pero para ello, la cogestión debía derivar en cogobierno: "en la participación preponderante de los trabajadores en los centros de decisión política y económica" del Estado, como decía el documento de la COB.

Algo más, la cogestión de hecho impuesta por la intervención, no podía restringirse, sin riesgo de perecer, al asunto administrativo. Tenía que ser parte de una ofensiva política para extenderla, primero, pa-

ra después hacerla avanzar hacia niveles de decisión superiores. Pero si bien la COB puso fuerza en la cogestión, no mostró igual decisión ni en su extensión ni en la fórmula del cogobierno. Faltó voluntad estratégica, convicción de que lo uno y lo otro eran momentos subordinados del proceso de "acumulación revolucionaria" en el escenario de la democracia. Al faltar voluntad estratégica, faltó continuidad en la movilización de masas, puesto que la cogestión (como iniciativa) concluyó en el acto de intervención; no se enlazó instantáneamente con un "continuum" de acumulación revolucionaria que se fijara con claridad un objetivo, una consigna política para avanzar. La de la cogestión era una consigna indiscutible. En cambio la del cogobierno resultó discutible, discutida y madurada durante un lapso demasiado largo. Hay razones para explicar este desbalance entre situaciones que eran interdependientes. La experiencia del cogobierno COB-MNR había dejado un recuerdo frustrante. El pasado, en este caso, con su pesada carga de recriminaciones, no dejaba de actuar en el momento de las decisiones.

La cogestión como idea no es nueva. Se experimentó y se experimenta en Europa; pero como toda idea tiene su necesario correlato práctico. Lo que en Europa fue una posición del ala izquierdista de la social-democracia (Eduard Merz) o una forma gradualista de la táctica socialista, y que además, se circunscribió a la gestión en la empresa privada capitalista, tiene aquí connotaciones distintas. La gestión obrera fue un viejo postulado que en algunos países europeos, como Alemania Federal, se ha constituido en parte del sistema, y no como se pensó, en un principio de articulación con el ejercicio de la clase obrera. En la economía socialista, el régimen cogestionario de la URSS era una necesidad de la democracia económica y la gestión de la economía pasó a las organizaciones sindicales, a un sistema de gestión mixta entre directores y sindicatos que concluyó en 1930. Yugoslavia mantiene un régimen de autogestión dentro de la economía socialista de mercado, pero la acentuación de la competencia entre los diferentes grupos de obreros y la desintegración de la solidaridad colectiva han sido sus consecuencias. Aunque desde la Comuna de París hasta el Estado soviético se vea en la gestión obrera una extensión de la democracia, en unos casos ha concluido como una experiencia terminada pero cancelada de las nuevas organizaciones soviéticas, en otros (Yugoslavia) ha resultado una cuestión discutible incluso desde el punto de vista de la esencia socialista.

Aquí, la cogestión, en cambio, tiene un sentido emancipador. No tiene por objetivo la empresa privada —como en Europa— porque tal cosa no sería sino un simple acto de complicidad con la buena marcha del capital. La COMIBOL es la columna vertebral de la economía nacional, donde el Estado organiza la mayor cantidad de la producción. En el orden cualitativo la economía y la política han establecido un cierto nivel particular de dominación. La gestión obrera, en el núcleo de producción fundamental, tiene necesariamente un nivel de pertinencia indiscutible. Pero no por eso deja de ser un hecho parcial: la verda-

dera gestión remite, de todas maneras, a la economía en su conjunto. De otro modo queda atrapada, encerrada en la vida de la empresa, dentro de la globalidad hostil del Estado político. Los obreros solo ejercen "su poder" en el terreno económico, mientras en el Estado está la fuerza política, la política económica. La compleja función institucional consistente en un sistema concentrado de decisión y distribución del trabajo, crea interferencias entre economía y política. Desde ya; los requerimientos de capital de COMIBOL han encontrado obstáculos en el Ejecutivo, porque, en realidad, la disposición del sobreproducto escapa a la voluntad de los productores.

Estas son las dificultades, pero el proceso cogestionario se viene realizando en Bolivia en un marco histórico concreto. Quizás los intelectuales de la ultraizquierda hubieran querido ver en la intervención de COMIBOL, realizado su sueño de la "dualidad de poder", con una cuña obrera en el sistema del Estado. Pero esa es la parte de la poesía política, la verdadera política es una combinación cruda de hechos y voluntad. Lo cierto es que, por el contrario, el riesgo de la cogestión reside en su "acomodamiento" al orden, en su subsunción a la máquina del Estado. Y este riesgo sólo puede ser conjurado de una manera, y es que la cogestión involucre a la política económica, que incluya una contrapropuesta "nacional" en sus alcances y política en sus intenciones.

El marco histórico concreto es la especificidad del proceso democrático, su transitar sobre la "crisis nacional" y sobre la "crisis del Estado", sobre la doble obsolescencia de la dictadura burocrático-militar y del Estado representativo. Por eso, la democracia aparece sometida a presiones no sólo sociales sino también históricas; el derecho a "innovar" está en el inconsciente histórico que se objetiva en la idea axiomática de "profundización del proceso". La "profundización del proceso" es una idea y es una consigna, una idea que expresa la indigencia de la democracia clásica y una consigna que compendia la experiencia histórica de producir democracia para transformarla. De otra manera, el Estado que ha extendido su acción al territorio económico quedaría autonomizada de las fuerzas sociales, y únicamente ellas pueden hacerlo democrático. Un Estado que administra "derechos adquiridos" deberá democratizarse o redemocratizarse sobre la base de nuevas relaciones económicas. El Estado de la Constitución Política ha sido un fin más que una realidad, es un conjunto de normas jurídicas que aspira a un deber-ser. El Estado representativo está reglamentado, pero su existencia social histórica no está sólo regulada por la ley sino básicamente por los procesos económicos. Ahora, en este proceso democrático, el ánimo recreativo de las masas se orienta a democratizar el Estado, no cambiando las leyes de su constitución, sino ocupándolo social y políticamente. Este es un rasgo estrictamente democrático ya que una revolución de clase no se plantearía la ocupación del Estado sino la destrucción de la "máquina" del Estado. Se trata, en este caso, de que el movimiento obrero, junto a otras clases, avanza en la democracia para avanzar con la democracia. Tanto en la política como en la economía, el equilibrio democrático revolucionario

no puede prescindir de una posición concreta ante el Estado concreto en su trayecto acumulativo.

La intervención y la co-gestión no se hallan en un marco social consolidado, donde el estatuto jurídico-político sea expresión de la absorción de la sociedad política por la sociedad civil; es más bien un acto revolucionario que tiende a transformar relaciones estatales limitadas y estrechas. Es un acto, como decían los empresarios privados, "que se debe a la debilidad del Estado", que "rompe una elemental norma del ordenamiento jurídico nacional y, como consecuencia, se pone al margen de la legalidad, de la ley". Pero la "legalidad y la ley" son la abstracción sublimada de ciertos supuestos que pueden existir, o existir medianamente, como la "soberanía popular" que es un principio y no un predicado real. La convención francesa hizo la revolución francesa pero "no cambió a la Constitución, sino a una Constitución particular, envejecida". La "legalidad y la ley" siempre fueron transformadas por el nacimiento de nuevas necesidades y para que la Constitución sea reflejo de la soberanía popular, el pueblo debe ser el principio de la Constitución. Justamente, la "debilidad del Estado" consiste en la ruptura entre la Constitución y su principio, que es el de soberanía popular. La acción del pueblo no se coloca al margen de la ley, de la legalidad, sino la "ley y la legalidad" son las que se han colocado al margen del pueblo —de su principio— y entran en contradicción con él. La "debilidad del Estado" es una debilidad política caracterizada por el "congelamiento elitista-burocrático de la relación dirigentes-dirigidos".

El "capitalismo de Estado" en un país dependiente y atrasado, como Bolivia, ha entrado en una doble contradicción: el dirigismo económico al reforzar las relaciones privadas ha minado su propia base, y el sistema de subordinación a la economía mundial está condicionado políticamente a la filosofía del liberalismo económico. En esta relación contradictoria reside el llamado "fracaso" de la administración estatal de la economía. Porque la imprevisión de la administración estatal no es más que un producto del conflicto interés público-interés privado que se ha resuelto en desmedro del primero, en un largo proceso de descapitalización-capitalización, en un paulatino y prolongado proceso de hundimiento de la economía estatal. Cuando los empresarios privados denuncian la ineficiencia del Estado lo hacen desde el punto de vista del liberalismo, de la negación del Estado-administrador en base a una idea abstracta, sin reconocer su relación concreta, que data desde sus orígenes como empresariado moderno. Y como la crisis de la economía estatal es la crisis del país, el "modelo de acumulación de capital" ha entrado no sólo en crisis sino en una contradicción consigo mismo. La "acumulación de capital", sus procesos de realización y reproducción, se consumó a costa de la economía estatal, de los servicios del capitalismo de Estado y del dirigismo económico; ahora, sólo podría continuar al precio del hundimiento de la economía estatal, de su completo derrumbe. Por primera vez, la crisis está sometiendo a prueba la existencia de los títulos de la empresa privada.

Sería equivocado, por eso, interpretar la intervención a COMIBOL como un acto solamente destinado a "aumentar la producción". ¿Para quién aumentar? Lo que está en juego es el destino de la producción, para quienes se produce, a quienes debe servir el Estado y la economía estatal. Está cuestionándose el "modelo de acumulación de capital" no como un problema de principio teórico, sino como una necesidad inmanente —histórica— de las relaciones económicas de las que el "acto político" es su portador consciente. Lo que se ha colocado al "margen de la ley natural" es el modelo de acumulación de una burguesía nacional que devora el vientre que la cobija. Sin la sangre de COMIBOL, se extinguirían los parásitos, por eso es que la intervención, si ha de tener un horizonte, no puede ser otro que el principio de una modificación sustancial en la filosofía del dirigismo estatal. Ese es el sentido fundamental del "control obrero" en una economía estatal que ha sido mal administrada porque ha dado todo para la economía privada y nada para sí.

Cogestión y cogobierno. La gestión obrera no se orienta solo a la eficiencia administrativa como un mecanismo técnico de la producción. Es un aspecto de la "profundización del proceso democrático", es un instrumento político para operar una profunda rectificación en la disposición del sobreproducto. Habría, por eso, un hilo de continuidad política, de eslabón a eslabón, entre el hecho de la intervención y el derecho al cogobierno. Al plantear el cogobierno, la COB puntualizaba: "...de cara a la amenaza de la realidad y la necesidad de garantizar la eficiencia de la co-gestión obrera en COMIBOL y de todo el sector nacionalizado de la economía, planteamos la participación preponderante y orgánica de los trabajadores bolivianos en los centros de decisión del poder político"... "Hace diez meses, la clase obrera, protagonista del proceso democrático, alentaba la esperanza de que el actual gobierno encarara con responsabilidad la crisis, que con caracteres alarmantes, se va agudizando cada día más"... "Sin embargo, frustró este objetivo la ausencia de un programa de gobierno que, con cabal conocimiento de los factores determinantes de la crisis, permitiera la fijación de una política económica que no solamente frenara la dinámica de estos factores, sino que trasladara el peso del sacrificio de los sectores populares hacia los grupos del poder económico que, siendo los causantes de la crisis, pretenden mantener sus privilegios"... "Por espacio de dos décadas, dictaduras fascistas, a nombre de las Fuerzas Armadas ocuparon incuestionablemente el espacio político y dominaron el aparato económico y administrativo del Estado. En función de sus vínculos con el imperialismo norteamericano y la burguesía dependiente imprimieron una política de total acatamiento a los dictados del FMI, que agudizaron hasta límites intolerables el rasgo predominante de todo país capitalista dependiente, es decir la apropiación y exportación del excedente económico, producto de la superexplotación de nuestros recursos naturales y de la mano de obra miserablemente remunerada"... "La COB ante la gravedad de la crisis plantea la participación preponde-

rate de los trabajadores en la composición del gobierno a través de la COB; la coestión mayoritaria de los trabajadores en las empresas productivas del Estado, y el control obrero en la gran empresa privada".

Sólo así la coestión aparecía dentro de un plan integrado que ponía en las manos de los gestores los resortes de la política económica, o sea la dirección política del Estado. Posteriormente nos referiremos al fracaso de las negociaciones, a la inutilidad del epílogo ante la reciedumbre de la impronta social. Hasta ahora hemos enfocado los hechos y las más profundas motivaciones históricas que los originaron sin ninguna disciplina cronológica. Para ir paso a paso, anotaremos una afirmación del documento de la COB que se quedó al margen: "Este es (el cogobierno) uno de los medios efectivos para garantizar la sobrevivencia del proceso democrático, como una obra y creación de la clase obrera junto al pueblo boliviano". La COB se presentaba ante el proceso democrático como un factor, junto al pueblo, reclamando sus derechos históricos. Hasta antes de la intervención a COMIBOL, el movimiento obrero había seguido una línea reivindicativa en el plano económico, con centro en el "salario mínimo vital con escala móvil" y la movilización frente a los paquetes del FMI. El documento de la COB, al afirmar la "participación preponderante de los trabajadores" en el gobierno, representó una nueva fase en la acumulación de la conciencia social no sólo en la superación de los límites economicistas sino también en la realización del poder político. No era el objetivo de un poder abstracto: el objetivo del poder se entrelazaba al proceso democrático, como "una obra y creación de la clase obrera", la cuestión del poder ya no pertenecía al reino de las prefiguraciones inciertas, estaba aquí y más allá del proceso democrático, se proponía llegar al futuro transitando el presente.

El "paquete político" de la COB enlazaba la cuestión de la coestión con la del gobierno, como un mecanismo que relacionaba la responsabilidad en la administración económica con la corresponsabilidad política. El problema de la producción —incremento de la productividad— no podía quedar desligado de la reorientación en la distribución del excedente nacional. Cabía, entonces, como sucedió, establecer los principios de la política económica a los que se iba a ajustar la corresponsabilidad política, y fruto de ello fue el plan de emergencia de la COB. En el "plan de emergencia" se daba énfasis a los problemas de la distribución y el control financiero. Quizás el problema de la producción quedaba pendiente para su elaboración posterior en un plan de desarrollo económico; pero la COB, en su acción de gobierno, circunscribía su intención a un estricto plan de emergencia, situado en las condiciones coyunturales de la crisis.

Más que el "plan" lo importante era la cuestión del Estado, la modificación real de la acumulación de fuerzas, la ocupación obrera del gobierno. La UDP había dejado de ser una posibilidad popular, pues ya no era un vehículo para el cambio, el gobierno se había estancado y convertido en una carga para el proceso democrático. La derecha hablaba de "vacío de poder", el debilitamiento del gobierno caminaba hacia el vacío

de poder. En ningún momento la derecha empleó sus viejas tácticas de enfrentamiento ideológico unilateral al gobierno, prefirió sindicarlo de gobierno ineficiente, incapaz e impopular. Prefirió usar un lenguaje más certero y verificable en el sentimiento popular. El "vacío de poder" se venía presentando como una involución de la legitimidad del 10 de octubre. Ni los partidos de gobierno ni el liderazgo de Siles tenían la fuerza moral para imponerse sobre el terreno movedizo del deterioro oficial. Los partidos "arrastraban", simplemente, la carga del gobierno, contra la deserción de todas las simpatías, contra la desilusión y el descreimiento que suelen ser los más definitivos sentimientos de las masas. Esta pérdida de confianza, esta pérdida de consenso de este gobierno era lo que amenazaba al proceso democrático, al espíritu de adhesión popular que no podía, sin grave riesgo, disolverse en el pesimismo general. Entre otras cosas, la COB salía al frente de esta situación, asumía su responsabilidad de pueblo ante la agonía del proceso democrático.

Pero el planteamiento de la COB no era un planteamiento en el vacío, era una confrontación con las resistencias de los derechos adquiridos dentro y fuera del gobierno. La misma crisis había puesto en manos del Estado los recursos supremos para reprimir los abusos del poder económico. La defensa nacional tenía un contenido económico, debía tener por lo tanto, un contenido popular, debía dirigirse a limitar los derechos que corroían al sistema social. Además, la sola presencia preponderante de la COB en el gobierno habría significado un decisivo cambio en el contenido de la democracia, en su contenido nacional. Puesto que no cabe un proceso democrático que no avance reforzando la soberanía nacional, que no sea parte de una estrategia de liberación, consolidando las fronteras interiores políticas y económicas. Sergio Almaraz habló de la "nacionalización del gobierno" en un momento de máxima invasión imperialista en el control político del Estado. Porque la defensa de los recursos naturales es sólo un aspecto de esta confrontación universal múltiple donde la ideología y la política de enajenación se han convertido en factores de la ideología y de la política nacional. La relación del gobierno con el FMI no es una relación "inter-pares", está de por medio una historia colonialista y una actividad colonialista: esa historia y esa actitud tienen que ser rotas, las "recomendaciones" del Fondo no son tales, son "ultimatums" respondidos con capitulaciones nacionales. La economía o la política económica son producto de una historia de capitulaciones sucesivas, de "buenos ejemplos" y malos resultados.

El FMI o los consorcios extranjeros son la cara visible del imperialismo, su rostro desnudo. Son el poder externo que nos recuerdan su existencia con sus visitas anteladas a los "paquetes económicos" o hacen sentir el peso de las "enmiendas" *hickenloper, platt*, etc., en una cadena sistemática de sucesos. Pero detrás está su cara oculta, el sistema económico legitimado por la consistente fuerza de los hábitos y de las costumbres. La ideología de la clase dominante es la que se perpetúa junto a sus sagrados intereses económicos, introduciéndose en la conciencia de

los sectores más vulnerables. La banca, la industria, el comercio son un mecanismo único, subordinado e integrado al mecanismo común del FMI y del imperio financiero mundial, y mayor es la subordinación cuanto más endeble es el poder político. Por ello, el problema de la nación-imperialismo es un problema de clase, y no en vano se ha hecho frecuente el concepto de "burguesía intermediaria" que no es más que la expresión del imperialismo como sistema y como Estado. La lucha ant imperialista del país dependiente no va dirigida contra el imperio en abstracto sino contra los "cónsules" del imperio. Es una lucha por el Estado, por privar del poder político a las "clases consulares" que están en la nación y ejercen su representación. Sobre los métodos y peculiaridades de esta lucha no hay recetas, ni sirve de nada el diletantismo de la ultraizquierda, o como decía Lenin, no es más que "el ala de los radicales en el vacío". Los métodos son dictados por cada momento de la realidad concreta.

Si decimos que el aspecto principal de la lucha ant imperialista es la privación del poder político de las "clases consulares", se está estableciendo un principio porque hay una diferencia considerable entre el hacer y el decir. Durante el gobierno de Torres, Lechín relativizó las "nacionalizaciones" con el argumento de que la nacionalización de los ferrocarriles en Holanda no la hacía revolucionaria a la reina; y si la Asamblea Popular era un proyecto de poder (que terminó como un proyecto sin poder), las nacionalizaciones resultaban menos importantes que el poder mismo. Ahora, en cambio, el proceso democrático no se distinguía por las nacionalizaciones, por el contrario, sus rasgos ant imperialistas estaban desdibujados por el conformismo estéril de la sola reconquista de la democracia. La indefinición del gobierno producía un vacío histórico y la clase que domina económicamente no podía reclamar paternidad sobre un gobierno llevado, finalmente, por una huelga obrera general. El gobierno, genéricamente considerado, era un aspecto del proceso democrático, no por ser únicamente el resultado del sufragio, sino porque se trataba de una situación de hecho, la conquista de la democracia y del gobierno por los trabajadores. La caracterización de un gobierno no consiste meramente en distinguir entre lo blanco y lo negro, hay que distinguir sus matices. El radicalismo decía que el gobierno de la UDP era burgués, pues no analizaba ni su contexto ni sus circunstancias. En Rusia no habrían distinguido entre Nicolás y Kerenski, aquí no distinguían entre gobierno y Estado, entre democracia y proceso democrático. En resumen, la idea, la definición y la decisión del cogobierno se abrieron paso dentro de un debate nacional en los medios sindicales y políticos.

Este gobierno no obrero llevado por la huelga obrera general y convertido en el gobierno del Estado burgués con el consentimiento de la burguesía, representaba el triunfo pírrico del movimiento popular, la expresión de sus verdaderas limitaciones y el tope de sus posibilidades. En el terreno intelectual podían caber muchas hipótesis, sugerirse "consejos obreros" y "soluciones revolucionarias", el campo de la subjetividad es extraordinariamente fecundo para producir ideas sin movimiento,

extrañas al presente. Desde ya, la relativización del proceso democrático era un contrasentido, porque implicaba aislar de su clima social a todo un periodo histórico. Era volver al reino del dogma, a la infancia teórica de la izquierda boliviana con sus groseras generalizaciones. Ahora, el proceso democrático, no sólo como concepto sino también como realidad, no podía separarse de los propósitos, los fines, las intenciones, en fin, de la estrategia. La primera respuesta teórica y práctica la dio la COB al arrancar la bandera democrática de las manos de la llamada burguesía democrática. La hizo suya políticamente porque era su adquisición histórica. El proceso democrático es un hecho contradictorio que se sitúa jurídicamente en el territorio del Estado burgués, pero que socialmente sólo puede sobrevivir venciendo la caducidad institucional de la democracia formal, aún sin romperla, sin abolirla: "manteniendo lo que es negado en la negación". Es un proceso que contiene al mismo tiempo su memoria y su anticipación. Pero ¿qué es el gobierno? Desde el punto de vista del Estado, de la filosofía política, este gobierno es democrático-burgués; pero el problema de la revolución no es un problema filosófico, es un problema político. La lógica formal es impotente para resolver las cuestiones de la dialéctica social. El mero concepto de "gobierno burgués", extraído de su contexto general, es una mutilación, cuando el gobierno es todavía víctima de su origen, cuando reclama su esencia popular.

El proceso democrático expresaba una situación híbrida, mantenido en el marco burgués pero producido y sostenido por el movimiento obrero. No es por ello extraño que el movimiento obrero, que cargó sobre las espaldas el peso de la dictadura, que resolvió con su huelga general la "salida democrática", reorientara su acción en la disputa del gobierno. El dogma ha elevado al rango de categoría la "independencia de clase", un concepto que aunque objetiva e históricamente justo, se ha convertido en la filosofía de la inacción porque ha sido desvirtuado en su contenido. La "independencia de clase" es fruto de un proceso ideológico y es un resultado ideológico: la conciencia de clase. Pero la independencia de clase no es incompatible con compromisos tácticos en determinadas condiciones excepcionales, así por ejemplo, el período de ascenso revolucionario durante Torres, el enervamiento actual del proceso democrático. En ninguno de estos casos, el movimiento obrero "se entrega" ideológicamente a estos gobiernos nacidos en condiciones diferentes: ni a Torres que era producto del ascenso revolucionario, ni a Siles a quién le toca la responsabilidad de conducir el proceso democrático, aunque la conciencia histórica de su responsabilidad no se refleje en el gobierno.

El concepto de "independencia de clase", manejado interesadamente, manipulado por el dogmatismo, fue el pretexto teórico para debilitar políticamente el suceso ant imperialista de 1971, para que los sectarios reiteraran sus prácticas del aislamiento obrero. Empero, la historia no pasa en vano, y la experiencia de 1971, con su saldo de sangre y su deuda de los siete años infames, no fue una experiencia inútil para

la clase obrera. Más allá de los devaneos de la infancia teórica, de sus herméticos sueños dislocados de la realidad, la conciencia de clase se forja en la actividad práctica.

En esta coyuntura, el movimiento obrero se proponía impedir el fracaso del proceso y proyectar su profundización. Los partidos de la UDP, de algún modo incluidos en la COB, fueron impotentes para desatar un proceso popular partiendo de la democracia. La sola presencia de estos partidos no definía como popular al gobierno. Se incluyeron, por el contrario, pasivamente, en el orden institucional sin introducirse en las masas, sin convocar a las masas a su participación en la democracia. La propuesta del cogobierno fue para ellos una fuente de dificultades partidarias antes que un principio de solución política. La recibieron sin entusiasmo, con un fastidioso escepticismo en medio de su tranquila paz burocrática. En ningún momento, estos partidos se habían puesto al día con las pulsaciones de la historia: el gobierno había propuesto el cogobierno a la COB, pero la COB lo emplazaba. Quizás la propuesta del cogobierno (en la concentración del 9 de abril) llevaba implícita la intención de su fracaso.

Las negociaciones sobre el cogobierno tuvieron una corta historia, tensa y azarosa. Una disimulada y astuta resistencia del gobierno dilataba y entorpecía el momento de la definición. Entre sus sectores más remisos se apoderó un sentimiento común de resucitar a la UDP para cruzarle el camino al proyecto del cogobierno. Dentro del gobierno la pasividad reformista y dentro de la COB el negativismo ultraizquierdista, con estímulos diferentes y a pesar de sí mismos, tenían una comunidad de propósitos, la frustración de las negociaciones. El gobierno propuso la idea, yendo lejos en el verbo pero sin atreverse a dar pasos en la acción.

El proyecto del cogobierno no nació del vacío, pero se quería que muriera en el vacío. Se insertó en un momento de apremio social en el que la crisis económica y el apogeo de la tensión política ponían al gobierno al borde del precipicio. O el gobierno, como se decía en los discursos públicos, ampliaba su base social, o seguía su agonía para terminar en una muerte lenta pero segura. Estaba debilitado y paralizado por sus enfrentamientos intestinos, sentenciado a la derrota, reducido a la impotencia. Subsistía más que existía. Lo que la COB hacía era un emplazamiento y el gobierno se colocó entre dos fuegos, la presión social desde los sindicatos mineros y fabriles y la Confederación de Campesinos (CSUTCB), por una parte, y la reacción histórica de la Confederación de Empresarios Privados, por otra. Atemorizado en su inmovilidad agónica, el gobierno se aferró a la maniobra de la dilación alargando el momento de su negativa.

La empresa privada quería inclinar de su lado la vacilación del gobierno. El programa de emergencia de la COB incluía el "control obrero en la gran empresa privada", un pequeño servicio al entramamiento, un punto del que podía decirse: "guerra avisada no mata moros". ¿Por qué no decirlo a través de los infinitos mecanismos de que se disponen des-

de el poder administrativo? Si tanto en la COB como en el gobierno habían sectores interesados en colocar obstáculos en las negociaciones, sin duda éste era uno de esos obstáculos. Este fue el punto que resultó ser el más irritante para los empresarios. Aunque el problema era el cogobierno mismo, la Federación de Empresarios Privados de Santa Cruz se apresuró a enviar un telegrama de severa advertencia a Siles: "Federación Departamental de Empresarios Privados de Santa Cruz interpretando preocupación ciudadana mayoritaria, permítese representar planteamiento condicionado COB para integrar Poder Ejecutivo por constituir su programa una violación expresa de los derechos y libertades que establece Constitución Política del Estado en el art. sexto que literalmente expresa: 'la dignidad y libertad de las personas son inviolables', y atentatoria contra los derechos consagrados en el art. séptimo que dice: 'toda persona tiene derecho a la propiedad privada, individual o colectivamente', y el art. 144 'la iniciativa privada recibirá el estímulo y la cooperación del Estado'. Programa que COB pretende imponer para participar gobierno conspira abiertamente contra la libertad individual y colectiva y contra los principios por los cuales todo el país ha luchado para restablecer la democracia en Bolivia. No podemos aceptar como integrantes de la actividad productiva de este país ninguna tentativa política que destruya a través de intervenciones o de otro tipo de disposiciones la libertad del pueblo boliviano". Este telegrama descubre en el tono el verdadero estado de ánimo de la empresa privada, esa indignación dictada por el miedo: el paroxismo.

Pero al telegrama le siguió el documento de la Confederación de Empresarios Privados que agregaba nuevas amenazas y advertencias. Implícitamente era una convocatoria a las Fuerzas Armadas para prevenir o rectificar el "riesgo" del cogobierno. La posición de la empresa privada era el corolario de una campaña sistemática de desestabilización. En un "encuentro nacional de la libre empresa" se sostenía: "A los experimentos teóricos y tecnócratas: basta ya"; "al crecimiento desmesurado del sector público: basta ya"; "a modelos estandarizados e intervencionistas: basta ya"; "a seguir frustrando y postergando el progreso del país: basta ya"; "de utilizar la democracia, que nos pertenece a todos, para beneficio de doctrinas foráneas: basta ya"; "en la actual coyuntura, las corrientes políticas extremistas han desatado el gobierno y desde el grupo dirigente de la Central Obrera, una campaña que persigue abiertamente un modelo económico totalmente estatista con el aniquilamiento de la empresa privada. Ante este hecho, la Comisión Política plantea la necesidad de que la Confederación de Empresarios Privados asuma una defensa gremial más enérgica y decidida. Para el cumplimiento de esta misión, propone que este plenario otorgue al directorio de la Confederación amplias facultades para disponer las acciones y medidas que sean más aconsejables". La reacción cargada de ira de la empresa privada era un dato importante en la reorganización conspirativa contra el proceso democrático.

Desde ya la empresa privada estaba demasiado lejos de una acti-

tud contemplativa respecto a la posibilidad del cogobierno, además sabía que estaba ante un gobierno débil interesado en sacudirse las sospechas de izquierdismo. Asustó al gobierno y preparó el terreno para sus aliados naturales, los militares. En 1971 la empresa privada hizo una colecta millonaria para financiar el derrocamiento de Torres, pero antes llenó de alarma a la opinión pública con sus consignas. Ahora no podía establecerse con precisión cuán próxima estaba de pedir el auxilio de los militares. Pero había algo incuestionablemente cierto, y es que ni siquiera la cara "bonachona" de la UDP le resultaba tolerable, eran inclusive intolerables las intenciones incumplidas del gobierno. La empresa privada había aceptado la democracia pero no la acataba; denunciaba "el halago inmediateista a las masas bolivianas a objeto de comprometerlas con el gobierno, a fin de que, ocasionalmente, puedan servir de sostén al llamado proceso democrático". La empresa privada asimiló la idea del cogobierno como un golpe directo a sus intereses, como un atentado a su existencia. Había algo profundamente irritante: la COB resultaba ser la presencia obrera directa, la "profundización" del proceso dejaría de ser una palabra para convertirse en acción. Decía el presidente de la empresa privada: "no sólo sentimos pánico, sentimos pavor". Era la reacción ante el programa de la COB con sus ejecutores en el templo prohibido del gobierno. El poderoso instituto de la propiedad incluía como su propiedad al propio Estado, a la Constitución Política y al derecho. Si para algo servía la Constitución era para garantizar el derecho a la propiedad de los grandes empresarios.

El gobierno había respondido con una energía fuera de tono a la intervención obrera en COMIBOL; a los ataques de la empresa privada respondía con un silencio temeroso y defensivo. No se atrevió a reivindicar ni sus atribuciones, ni sus derechos emanados de la soberanía popular. La empresa privada apelaba a la Constitución, el gobierno no apelaba al pueblo. El gobierno seguía "estudiando" sin apremios los planteamientos de la COB. "Este programa ha sido elaborado sin burocracia, ha sido preparado en los días feriados. Por eso tenemos confianza de que el gobierno, con su enorme burocracia, pueda darnos su respuesta en poco tiempo", decía Lechín. Los sindicatos mineros y fabriles apoyaban el programa de la COB como una salida natural a la crisis económica y apoyaban el cogobierno como una salida a la crisis política, se alinearon detrás del proyecto y trataron de empujarlo. Pero no existía la misma decisión en la cúpula de la COB, donde la idea de la "participación preponderante de los trabajadores" tuvo un parto difícil y estuvo precedida de una larga discusión entre las diferentes tendencias políticas. Meses antes de que la iniciativa llegara al gobierno, la COB lanzó un pronunciamiento vago en el que era notoria la intención de omitir la palabra "gobierno"; se decía "participación preponderante de los trabajadores en los niveles de decisión política y económica". Pero lo sobrentendido no era suficiente, no podía ser una consigna de movilización. Recién ahora, esa idea general se concretaba apuntando a un gobierno con nombre, a un objeto determinado.

Subsistía la duda, sin embargo, no sólo respecto de las vacilaciones del gobierno, sino incluso a las vacilaciones en la misma cúpula de la COB. Con tales dudas, con tales incertidumbres, la consigna perdía su eficacia. Faltaba certeza para que se convirtiera en una fuerza en movimiento, en una avanzada de combate. Para impedir que del lado de la COB no se cayera en una simple posición retórica, vulnerable en la mesa de las negociaciones, las decisiones más importantes fueron tomadas en los "ampliados", en las "asambleas" de los trabajadores. En la masa había una decisión irrevocable, es por eso que en los hechos objetivos, la responsabilidad del fracaso ha quedado registrada en el "debe" del gobierno.

Este ha sido otro episodio de frustradas conclusiones en la historia del movimiento obrero. Una historia de lúcidas creaciones y finales desconcertantes. Se trataba aquí de coronar políticamente lo que socialmente era irrefutable: el protagonismo obrero en el proceso democrático. Se trataba de encontrar la "fórmula de gobierno" que incluyera en su unidad al presente democrático y al futuro social, la fórmula no había sido inventada, pertenecía al proceso histórico de adquisiciones teóricas del propio movimiento obrero, y tenía un antecedente frustrante porque se incluyó en el momento de la capitulación de la revolución nacional; renació durante el gobierno de Torres para disolverse en las indecisiones; volvía ahora, como la solución grande para un gobierno pequeño, para quedarse en el "intento" como un acto fallido. El gobierno actual era una fórmula democrática incompleta, carecía de futuro, no tenía aptitud para envolver el fenómeno social e introducirlo en el hecho político de la conducción del proceso democrático.

La importancia del proceso democrático —y su consigna de profundización— nace de la "ocasión histórica", del carácter de la democracia y de su entorno social. El gobierno, dentro del contexto democrático y limitado por él, se constituye en un objeto "disponible" para las fuerzas sociales que han contribuido decisivamente a su existencia. De otro modo, el planteamiento del cogobierno hubiese estado fuera de lugar. No habría tenido sentido dentro de una situación de normalidad institucional, dentro de una situación de larga estabilidad del régimen del sufragio universal. Desde el punto de vista de la Constitución Política, el gobierno era un contrasentido, la aplicación de la norma constitucional retrocedía por encima de los dos años de dictadura, borraba jurídicamente un espacio de tiempo político; los impugnadores del Congreso del 80 (antes de que la idea tomara volumen) afirmaban que la salida congresal era un absurdo, una aberración. Pero este "absurdo" solo puede explicarse por el grado de la crisis política existente. El origen electoral de la UDP, su fuente comicial, no era el único origen del gobierno, era su *leit motiv*, como lo fueron las elecciones de 1950 para la insurrección de 1952. La crisis particular de la dictadura y la crisis general del Estado encontraron en la legitimidad de 1980, sólo una de sus formas de solución sin pararse demasiado en la estricta legalidad constitucional; otra alternativa no posible pero probable habría sido un 52.

La solución parcial de la crisis se dio por el "absurdo jurídico", lo que hizo funcionar al gobierno del 82 al modo del cuasi-gobierno del 80. El Poder Legislativo para constituirse tuvo que violar lo constituido, la Constitución Política, y para existir tuvo que dar existencia formal al gobierno. La ley fue, o su cadena de transgresiones, la que puso en relación de interdependencia al Legislativo extemporáneo con el cuasi-gobierno del 80 y suprimió la cronología jurídica de los dos años de dictadura. El 10 de octubre fue la abreviación o el resumen en un solo acto de esta organización artificial del caos institucional.

Pero detrás de esta complicada formalidad constitucional que se armaba de apariencias para cubrir de un ropaje jurídico a los andrajos de la democracia oficial, la otra democracia se abría el paso sin necesidad de recurrir a los modales de la ley, porque su única autoridad era la autoridad del pueblo. Esta era otra democracia, la que asume sus derechos, los reconquista, y es producto de la lucha; la que debía su existencia a sí misma y que no podía ser un ausente en la conducción del proceso. El rasgo fundamental de este proceso es el de su creación desde abajo por el protagonismo de las masas. Pero su expresión gubernamental fue una expresión incompleta, burocrática, lo que condujo a una imagen pálida de la realidad.

Para el gobierno el "plan de emergencia de la COB" era una brasa en las manos. Presionado por la reacción de la empresa privada, entregó el estudio del plan a uno solo de los partidos de gobierno, el MNRI. Por su parte la COB apuraba: "cuando se presentó el plan de emergencia de la COB, chillaron los de la empresa privada... les ha asustado, les ha hecho temblar, porque sabían que el control obrero iba a descubrir todas sus picardías", así habló Lechín en una concentración de protesta por el alza del costo de vida. Y agregaba: "los trabajadores respaldan a ese plan e insisten en lograr una participación preponderante en la conducción del proceso democrático... la libertad ha sido conquistada por este pueblo, que ahora se encuentra en esta plaza: no es obra de nadie más que del pueblo vanguardizado por la COB". No sólo en La Paz se realizó la concentración; en todas las ciudades del interior, las marchas contra el hambre se caracterizaban por las más duras recriminaciones al gobierno, exigiendo la aplicación del plan de gobierno de la COB. Se fustigaba la política "incoherente antipopular, y pro-fondomonetarista" del gobierno de la UDP.

El prolongado estado de incertidumbre sobre la respuesta del gobierno producía una honda sensación de pesimismo y desconfianza, que Lechín definía así: "El primero en ofrecer el cogobierno a los trabajadores, precisamente, ha sido el propio Presidente de la República y lo ha reiterado en más de una ocasión"... "se han registrado declaraciones en sentido de que las condiciones no son iguales que en la época del general Torres. Yo diría lo mismo, no son iguales. El gobierno de Torres tomó medidas antipperialistas y este gobierno no las ha tomado, de tal modo que si en el anterior gobierno aceptamos el 50 por ciento en el cogobierno, con este gobierno no podemos aceptar menos del 51 por ciento".

La cuestión más importante de la política nacional, el reforzamiento democrático del proceso, se diluía entre tensiones y vacilaciones.

Abusando de las citas textuales, justificadas para entregar un cuadro relativamente completo del fracaso de las negociaciones, reproducimos a continuación algunos párrafos de la declaración de los dirigentes sindicales ante la respuesta negativa del gobierno: "Pese al rechazo al cogobierno, los trabajadores de Bolivia declaramos que nos asiste un derecho histórico ganado en grandes batallas, de participar de manera orgánica en los niveles de decisión política y porque representamos a las mayorías productoras del país y generadores de la riqueza nacional"... "La gran empresa privada desató una gigantesca campaña por todos los medios de comunicación, con el fin de hacer abortar el cogobierno a través de una distorsión grosera de los objetivos del programa de emergencia"... "Por su parte el gobierno, con su política de dilación y vacilación en problemas que exigen una respuesta decidida e inmediata, alimentó la ofensiva de toda la derecha golpista, que encontró en la dilación el tiempo que requería para montar su arremetida contra el proceso democrático"... "Planteamos un programa económico-social y el cogobierno como el órgano político capaz de cumplirlo inmediatamente, y no para las calendas griegas, y hacer frente sin dilación premeditada a la grave crisis económica, social y política del país"... "La derecha tampoco esperará que el gobierno cumpla sus propios plazos siempre diferidos para buscar su retorno al poder político"... "Declaramos igualmente que los trabajadores fuimos los actores determinantes del proceso democrático, y lo decimos a los cuatro vientos contra los demócratas de la hora usurpadores de un proceso que en el pasado inmediato contribuyeron a destruirlo". Este fue el punto final del esfuerzo más coherente para resolver la crisis política. Pero como todo gran intento concentró las energías del momento, y con su fracaso empujaba y mediatizaba al gobierno. Después de esto ¿qué podía ofrecer el gobierno al país? ¿La desgastada fórmula de la "recomposición" de la UDP? ¿La reunificación del MNR? La sola posibilidad del cogobierno había reducido a una brumosa inutilidad a todas las combinaciones políticas y a las hipótesis de solución, porque ante ellas se alzaba la sombra del pueblo someténdolas a la oscuridad.

El gobierno y la oposición. La oposición de derecha tenía por aliado al tiempo y la paciencia como método; confiaba en capitalizar los errores del gobierno y los resultados sociales de la crisis. En ningún momento alentó una idea constructiva de la democracia, más bien la democracia le servía como instrumento para removerla y conspirar contra ella. El mismo 10 de octubre había quedado planteado el "conflicto de poderes" entre el Legislativo y el Ejecutivo. Para la derecha, el Parlamento era el lugar donde tenía que hacer sentir su predominio político, el lugar natural de las alianzas, su lugar conspirativo. La tarea parlamentaria consistió en un sistemático y metódico hostigamiento al Ejecutivo, la función legislativa quedó reducida casi a la nulidad, fue reem-

plazada por las acciones e iniciativas "fiscalizadoras" para atar las manos del gobierno. Solo desacreditando al Ejecutivo, el Legislativo podía salvar su propio descrédito, sin perder la retórica democrática, la derecha "defendía" los intereses populares, convertía la crítica al gobierno en un velado método desestabilizador. Había que crear una sensación pública de "vacío de poder" y traducir esta sensación en una certidumbre absoluta. Detrás de cada "petición de informes", detrás de cada "interpelación" surgía la conclusión inevitable: vacío, desorganización, caos, irresponsabilidad. Dentro del Parlamento, la voz de la conspiración tiene otro tono, no puede apartarse de las invocaciones jurídicas y de las formas oficiales. Pero allí hallaban su expresión más racional los abiertos desafíos de la empresa privada y los silenciosos preparativos de la derecha militar. La máscara del Parlamento permitía una oposición formalmente democrática que, en el fondo, estaba preparando la caída del gobierno.

No sólo en los corrillos parlamentarios sino también fuera de ellos, la discusión de los últimos meses se centraba en la caída del gobierno. Ningún pronóstico ponía en duda este extremo. Lo que estaba en duda era el carácter del golpe de Estado más que el golpe mismo. Pero todo parecía sujetarse al complot invisible de la derecha parlamentaria, a la creación de las premisas, al socavamiento paciente e inteligente de los prestigios oficiales. La derecha utilizaba la trinchera política, lo demás lo estaba haciendo el gobierno con sus crisis de gabinete crónicas, con las designaciones pendientes de ministros, abandonadas a un suspenso interminable, con su inagotable capacidad para la indecisión. No era ninguna aventura afirmar, en estas condiciones, que no había gobierno. Después de cada crisis, la derecha siempre repetía "no hay gobierno". Después de los largos intervalos de gabinetes incompletos, otra vez: "no hay gobierno". Detrás de cada rencilla interna del MNRI por la pugna de los cargos públicos, otra vez y siempre: "no hay gobierno". Ya no era una frase. La pérdida de presencia del gobierno era una realidad, estaba en el ambiente. La indecisión, que es un defecto que merma la identidad y la personalidad del individuo, merma con mayor razón la identidad y la personalidad de un gobierno. En este caso, la indecisión se había perpetuado como una norma de la conducta pública, todo quedaba a medio hacer, no había atisbo de soluciones, no había definición.

El MNRH y la ADN, el primero, el resabio mas consistente de la capitulación histórica de la revolución nacional, y la segunda, la expresión ideológica y política más concentrada de los intereses empresariales son, en conjunto, la prolongación política de la combinación reaccionaria del 21 de agosto de 1971.⁶ El MNRH es el sector movimientista que se identifica con Banzer y con su política económica, en el período histórico de mayor consolidación de los intereses burgueses. En esto reside el punto de definición que produce la división del MNR en dos grandes corrientes. Por su parte, el MNRI (el partido de Siles) trata de recuperar las tradiciones pequeño-burguesas de su origen y sigue siendo el partido de "clase media", sin una conexión real con el mundo empresarial. Mientras que MNRH no sólo ha caminado con la gran empresa el trecho

más decisivo de la concentración capitalista, sino que ha tomado conciencia de su lugar y de sus intereses. Su alianza con la derecha política, con la ADN, es una alianza natural. Juntos, el MNRH y la ADN, constituyen una importante mayoría parlamentaria, se necesitan y complementan, son los engranajes principales de toda acción legal o ilegal, en la resolución del problema del poder.

Pero todo esto, además de sus connotaciones prácticas, tiene un fondo sociológico, ya que a pesar de su agonía histórica, el MNR en sus ramas fundamentales cumple un papel de peso en la inclinación de la balanza a la derecha o a la izquierda. Siles prefirió el exilio al compromiso con Banzer, esta definición fue decisiva para su actual ubicación y para las alianzas de su partido en el ámbito del campo popular. La historia fue la que dividió los campos en el MNRI. Es cierto que el Siles de 1956 estaba más próximo al Paz Estenssoro de hoy, y el Paz Estenssoro de ayer al Siles de hoy; pero es el acontecimiento decisivo en el momento más culminante de la confrontación entre revolución y contrarrevolución, el 21 de agosto del 71, el que empuja a los caudillos y a sus facciones a definir su presente y su futuro. A partir de ese momento, el partido de Paz Estenssoro rompió todo vínculo con el movimiento obrero, se situó, pese a sí mismo, en el ala derecha de la lucha política.

A modo de un paréntesis ilustrativo, hay que señalar la persistencia notable del movimientismo en la vida actual. Las dos alas del MNR siguen representando, en las elecciones de 1978-79-80, el capital electoral del campesinado. Después de casi 30 años, la masa electoral campesina rememora en el MNR su acto de manumisión histórica. Pero no es una simple repetición. El silismo recoge el voto campesino antibanzerista, refleja el estado de ánimo de la masa que entró en antagonismo con el sistema autoritario. A pesar del común lenguaje movimientista —nacionalismo revolucionario—, el ala silista y el ala pazestenssorista reflejan, cada una de ellas, un importante discernimiento político en una única y misma base social. Como resultado de todo un proceso de decantación, la masa campesina, sin sacudirse el yugo ideológico de su viejo partido, toma posición en su mayoría por el ala que más enérgicamente se opone a la dictadura. La pesada responsabilidad del MNRH en su complicidad con los siete años, en cambio, cobra su precio en el área rural donde tradicionalmente Paz Estenssoro fue el líder incuestionable. Desde el punto de vista de las fórmulas intelectuales, la imperceptible línea divisoria en lo ideológico los confunde. Pero socialmente no ha resultado así, en el terreno concreto de la lucha, los unos fueron reclutados por la derecha, los otros no; los unos fueron expulsados de las organizaciones populares como la COB, los otros no. En el terreno de la lucha política es importante saber quiénes están a un lado y quiénes al otro.

El partido de Paz Estenssoro busca un viraje a la derecha, pero necesita, para eso, que se opere el derrumbe moral del gobierno, que el deterioro del proceso democrático llegue a su clímax. Y en este punto, el entendimiento con la ADN en la acción parlamentaria obede-

ce a una estrategia de lúcida combinación de la legalidad democrática y el chantaje militar. Sean cuales fueren los resultados, la acción parlamentaria podía culminar en un cuestionamiento constitucional del gobierno, juicio de responsabilidades, convocatoria a nuevas elecciones, retiro de la confianza al Presidente o combinación con un golpe militar. Las actividades parlamentarias están basadas en esta táctica múltiple. En todos los casos, se quiere llegar a un "conflicto de poderes" insuperable por las vías normales. Así, el Parlamento se ha convertido en una trinchera táctica de la lucha política.

El Parlamento que es una condición de este proceso democrático puede ser, al mismo tiempo, su negación. No es una entidad abstracta, es el lugar donde la compleja lucha superestructural se intensifica, dada la existencia precaria de las instituciones de la democracia oficial. Pero además, por el modo de ser a-democrático de los partidos de la democracia. Desde octubre hasta ahora, la relación entre el Legislativo y el Ejecutivo ha seguido una constante línea de tensión, una tendencia necesaria al conflicto. La oposición de derecha ha atizado sin cesar el fuego de este conflicto. Pero el Parlamento mismo, casi abstraído de las responsabilidades de gobierno, constituido en instrumento de hostigamiento y desgaste, es parte de la crisis política en la medida en que es parte del Estado representativo. La desconexión —que sólo en parte es una desconexión real— entre las funciones del Ejecutivo y el Legislativo busca comprobar palpablemente la incapacidad de los partidos gobernantes.

Es dentro de este clima que la mecánica parlamentaria tiende a constituirse en un factor de primer orden en el establecimiento de un gobierno que defina, con coherencia, el papel de la empresa privada en la crisis económica. El "vacío de poder" pronosticado tiene que convertirse en un hecho. Es esta posibilidad la que mueve las variables tácticas entretejidas con el servicio que todavía puede prestar la ley constitucional y que son, en un sentido forzado de la palabra, salidas constitucionales. Estas "salidas", por otra parte, evitarían la recurrencia a los métodos del garfamecismo, estarían en mejor concordancia con el contexto internacional inmediato, caracterizado por las tendencias democratizadoras, no violentarían las relaciones con el mundo. Pero el camino no aparece tan llano y expedito. Si sólo se tuviera que pensar en el ámbito hermético del Parlamento, la combinación MNRH-ADN para producir efectos políticos que se traduzcan en un cambio de gobierno necesitaría un volumen de votos superior al de sus solas fuerzas. Tendría que contar con una crisis partidaria más profunda en el seno del frente oficial, particularmente en el MNRI. Para ello juega un papel importante el MNRH, cuya ambición es la de presentarse como única oposición movimientista, catalizadora de las corrientes de descontento en el vulnerable partido de Siles. La consigna de "reunificación" del MNR está destinada a volcar hacia Paz Estenssoro los futuros desgajamientos del MNRI, al reclutar, de esta manera, los salidos de la descomposición oficial, Paz Estenssoro quiere ser el jefe de la oposición movimientista, de

un MNR reunificado, para sepultar con la ayuda de la Constitución a Siles y a su gobierno.

Hay otros obstáculos además, los que están fuera del Parlamento, como por ejemplo la COB. Porque pese a la frustrante relación del gobierno y el movimiento obrero sería intolerable un retroceso a la fórmula política del 21 de agosto de 1971, aunque esta fórmula esté adocenada con apariencias legales. Sobre estos obstinados obstáculos, producto de la correlación de fuerzas, busca imponerse la táctica múltiple de la derecha.

La disputa del espacio político. Sería superfluo y simplista medir el actual estado de deterioro del proceso democrático sólo por la incapacidad del gobierno de la UDP. No hay aquí una mera "incapacidad práctica", lo que se está revelando es una "incapacidad política" de profundas raíces sociológicas, políticas y culturales.

Si bien la dominación de la burguesía dependiente está arrastrando una crisis —que es un aspecto de la crisis de Estado— que se manifiesta tanto en el "Estado autoritario" como en el "Estado representativo", en el terreno político, teórico y práctico, la izquierda no tiene un proyecto alternativo para resolver la transición "democrático-revolucionaria". Ya se sabe que la UDP fracasó prematuramente. Siles no pudo ser el eslabón que una el pasado con el presente, que una al populismo que se hunde con el marxismo que trata de emerger a la superficie. Por un lado, pertenecía a la historia como hecho, pero para reivindicar su propia existencia histórica recurría a los supuestos del futuro. Por otro, la izquierda de la UDP, para fortalecerse en la escena política recuperaba de la revolución nacional, no la íntima filosofía de sus experiencias, sino sus íconos, no el sentimiento de la historia, sino sus líderes. Es por eso que el liderazgo de Siles fue tan grande que ensombreció la naturaleza política de los acuerdos y el sentido histórico de la negociación. La resurrección del liderazgo fue una inversión electoral y ahí están los resultados.

El sufragio, sin embargo, era un episodio, el momento festivo del drama, el manto de apariencias que cubría las desnudeces del programa. No hablamos sólo del programa en el sentido estricto de las medidas económicas trascendentes sino también del programa político. Es decir, del ropaje ideológico que dé consistencia histórica a los dos momentos esenciales: el tránsito democracia-revolución. El acuerdo electoral y la coincidencia en el liderazgo dejaron pendiente lo fundamental.

Por ello, la debilidad del pacto electoral hizo crisis en el gobierno. De eso ya hemos hablado. Lo que interesa es la expresión ideológica de dos fenómenos coetáneos que apenas se rozan. Lo que parece como proyecto histórico, el nacionalismo revolucionario, y lo que no acaba de nacer, el proceso socialista. La "ruptura epistemológica" entre el socialismo emergente y el nacionalismo revolucionario agonizante no es un acto de la cúpula partidaria —como tal carecería de trascen-

dencia—; es un proceso de masas dirigido por una nueva vanguardia que debería colocarse en el lugar histórico concreto. Toda "ruptura epistemológica" no es una negación pura, es una negación dialéctica que supone una cierta permanencia de lo negado. De otra manera, se caería en el mecanismo del marxismo dogmático que quiere "aplicar" el marxismo a Bolivia, cuando de lo que se trata es de "explicar" Bolivia. Es justamente la *explicación teórica* de Bolivia lo que está en pañales, en el nivel de las definiciones generales que carecen de filo para penetrar en el suelo de la historia.

El pasado movimientista, oculto en la bruma de los tiempos, no ha sido todavía objeto de una rigurosa crítica marxista, a la manera marxista, en cuanto a métodos y resultados. Sin embargo, para no salir de nuestro marco, todos los prejuicios populistas, la idea del "Estado nacional" como tarea por realizarse, la excepcionalidad de la Bolivia "isla", la alianza de "todas" las clases, la disolución de las clases en la nación, la idea mecánica del imperialismo, no pueden ser combatidos y destruidos sin una profunda asimilación de la especificidad nacional como base de su universalización.

La alianza de un sector del nacionalismo revolucionario con el marxismo ha sido una experiencia de importancia parcial. Pero los procesos de ósmosis no son posibles en política, este efecto no ha sido suficiente para que las masas deserten del nacionalismo revolucionario y pasen al socialismo: su escenario, la UDP, ha tenido una vida corta y aleatoria. No es que se cuestione un hecho político trascendente como la UDP, tales impugnaciones no son posibles, sino el hecho es que la UDP no revela una "ruptura epistemológica" entre la parte populista y el agregado marxista, no es un producto social ni un instrumento de inducción política. No hay una recuperación marxista del espacio populista; el espacio populista está rodeado por un velo impenetrable, impregnado de mitos y recuerdos, de resistentes "supervivencias" ideológicas.

Los tres componentes de la UDP, MNRI-MIR-PCB, se insertan de manera distinta en la "actualidad" política. El MIR es la "nueva izquierda". Es difícil identificar en el MIR dónde comienza un marxismo instintivo y cómo convive con la izquierda nacional. Pero no es ese su rasgo principal. En realidad, el MIR comprende la importancia histórica de la revolución del 52, no es indiferente al curso histórico y allí radica su acierto; sin embargo, su proceso de "aprehensión" de la historia del 52 no está dictado por la explicación del nacionalismo revolucionario desde el mismo nacionalismo de izquierda. En el fondo, el MIR se proyecta como el reemplazo histórico del MNR, pero no el reemplazo en el sentido único de la vanguardia, que es común a casi toda la izquierda, sino en el sentido de su reproducción como fenómeno teóricamente remozado. Así puede entenderse la tesis del "entronque histórico" que es la manera gráfica de expresar la soldadura de los dos cabos, el MNR del pasado y el MIR del presente, el recuerdo y su anticipación. Que un partido nuevo, dueño de una consistente convocatoria

a la pequeña burguesía intelectual, y de sorpresivos y rápidos avances en el terreno social, se mire a sí mismo como una "continuación" de los vástagos del 52 o como un parto tardío de la revolución es un hecho profundamente revelador no sólo de la enorme pero incomprensible importancia de la revolución nacional, sino que es revelador, también, de la "sobrevivencia", más allá de su tiempo, de la "ideología" y de su capacidad para revivir y remozarse.

Es difícil, sin embargo, pronosticar acerca de los resultados prácticos del "entronque" ya que nos parece una imposibilidad filosófica y un atrevimiento político. Quizás el MIR se sorprenda, a la hora del balance, que no fue el camino del "entronque", sino la necesidad social de su presencia en el medio en que se ha arraigado lo que ha definido su personalidad de partido. Empero, la difícil resolución teórica de la conexión entre el pasado revolucionario y el presente revolucionario es algo que está en cada partido, sometido a la prueba de fuego de los hechos históricos, a la cuestión del poder, a la transición democrático-socialista. Es aquí donde falla, principalmente, el "entronque histórico". ¿Cómo ve el MIR el porvenir socialista? ¿Como una renovación histórico-política del 52? ¿como una revolución nacional remozada? Si es así, sería ponerle piel nueva a un cuerpo viejo. No habría horizontes, porque la historia de la revolución no es un re-curso, es más bien un tránsito.

Por otra parte, la política es la ciencia de las realidades y en el terreno de la execración, la literatura política es particularmente fecunda. Pero en cambio, el examen sociológico está obligado a una fría objetividad razonada. La revolución no ha de ser la obra exclusiva y excluyente de un marxismo impecablemente impermeable, sin relación con el gran océano no marxista que sirve de marco activo a las luchas políticas. El "izquierdismo" extremo, al pretender ciertas prescindencias, él también, a su manera, se está autoprescindiendo.

La sombra roja del PCB se difumó en la nebulosa naranja de la UDP. El PCB para ganar en la batalla electoral tuvo que admitir, en cierto modo, una pérdida de su identidad política. Tuvo que levantar la bandera naranja a mayor altura que cualesquiera de sus socios. El PCB ha sido el más entusiasta udepista de todos los partidos, para él la UDP era un "proyecto histórico", su estrategia aparecía ligada a la vida y a la estabilidad de esta coalición electoral. Ahora, el optimismo del PCB sobre la "recomposición" de la UDP se ha transformado en desesperación; aunque el instrumento udepista, que en un momento determinado sirvió para avanzar, fue agitado para evitar el cogobierno, aún en esas condiciones los comunistas se decidieron por sus nostalgias antes que por el impulso revolucionario de las masas.

La posición del PCB, a lo largo de este período, ha sido una posición acrítica, "oficialista", sin ambición estratégica. El movimiento instintivo del pueblo, que en medio de sus esperanzas fallidas intentaba un rescate de su iniciativa política, contrastaba con la actitud del Partido Comunista, condenado al inmovilismo por la maquinaria burocrática.

tica. La atmósfera gris de un sistemático y prudente silencio cubría como una telaraña su estancia en los solios ministeriales. Mientras el pueblo se convocaba a sí mismo para conducir un proceso democrático que cada día se acercaba más y más a su final, entre la desesperación de lo que se acababa irremisiblemente y la conciencia de que había que recomenzarlo todo, el Partido Comunista se aferraba a su solitaria convocatoria al MIR para la "recomposición" de una UDP, cuyos últimos resuellos se apagaban en la ataraxia gubernamental. La táctica democrática del PCB avanzó hasta la UDP, pero se negaba a avanzar más allá. Se persistía en trasponer las fronteras de clase del "Estado democrático", sin percibir que el problema del gobierno se había convertido en un espacio en disputa. Sin embargo, la "etapa" democrática era sólo un sueño desenterrado, inconsistente para insuflarle vida en esta fase dominada por la turbulencia y por el imperio definitorio de los hechos. Este déficit de inventiva y de audacia histórica, este pararse en los engranajes de un orden en plena caída es una corroboración de las penurias de una izquierda marxista impotente de resolver, revolucionariamente, el problema democrático. Un concepto de democracia, en Bolivia, que no contenga las premisas para subvertir los obstáculos que la detienen se coloca a rezago de la propia experiencia revolucionaria de las masas. El rezagamiento del PCB respecto de las reivindicaciones políticas del proletariado de la COB (la coestión y el cogobierno) se presentaba formalmente como un tibio asentimiento, sin el atrevimiento de ir más allá. El PCB se sentía arrinconado entre su lealtad de clase al movimiento obrero y sus flamantes intereses burocráticos; con un pie en el gobierno y otro en la COB se vio obligado a jugar el papel, incómodo por cierto, de "tapón" de los excesos del movimiento popular. Con un cierto disfrazamiento de las realidades, llamando gobierno popular al gobierno democrático, viendo medidas antimperialistas y populares donde no las había, sobrestimando las libertades constitucionales y subestimando el movimiento reivindicativo permanente, el PCB se ató a la suerte del gobierno y se desató del movimiento obrero.

El PS-1, el partido de Marcelo Quiroga Santa Cruz, ubicado entre los intentos de creación de nuevas fuerzas de izquierda en el período 1970-71, surge en 1979-80 como una fuerza significativa que pasa por exámenes victoriosos en los acontecimientos electorales. El relieve intelectual, la precisión en el verbo, la unidad íntima entre la emoción colectiva y la anticipación socialista, la comunicación entre el hombre y la masa, todo eso representaba la personalidad académica y revolucionaria de Marcelo Quiroga. Pero además, era el eslabón personificado entre las incertidumbres del presente y la obstinada marcha revolucionaria hacia el futuro. Su asesinato, fruto de la misma certeza reaccionaria que acabó con la vida de Allende, entra a la historia luctuosa de Bolivia en la hora funesta de la derrota, cuando su sangre se une a la sangre de los obreros mineros de Caracoles y Siglo XX que habían aprendido a estar con él en la vida. La palabra del socialismo tuvo en él un alcance desbordante. Marcelo Quiroga era un líder "necesario"

—necesario en el sentido determinista de la ley histórica—, en él la política dejó de ser un oficio burocrático para recobrar sus horizontes históricos.

El PS-1 es también el legado de Marcelo Quiroga. Pero es ya un factor que pesa en la historia, es un estar presente en el mundo crudo de las masas oprimidas, la única forma de mirar al futuro como un acontecimiento próximo. Los socialistas, definiendo sus fronteras propias, plantearon su propuesta de "profundización del proceso democrático": una convocatoria al "frente superior de la izquierda" en base a la que lanzara Marcelo Quiroga Santa Cruz en 1980 y que comprendía al MNRI, MIR, PCB, PRIN y MRTK (un partido campesino) como parte de un proyecto, que esta vez, incluía a la COB y a la CSUTCB (Confederación Unica de Campesinos) para que se hicieran cargo de la conducción del proceso democrático, con un programa antimperialista y antioligárquico.

No hubo respuesta de los partidos convocados. La negociación del cogobierno cubrió todas las expectativas y era la consigna del momento. Por una parte, los partidos (MNRI, MIR y PCB) recibieron con reticencias un proyecto que significaba transitar en un nuevo ciclo del proceso democrático. Por otro, el proyecto de la COB estaba ya encaramado en los hechos, era una posibilidad que podía convertirse en realidad. En uno y en otro caso, sin embargo, se estaba obedeciendo a los apremios de la crisis política. Eran desafíos ultrarrealistas. "Porque trataban de poner en movimiento las energías políticas necesarias para los fines de la revolución". Pero recuperar el filo revolucionario en un momento en que al mismo tiempo que madura la tragedia, se impone la selección de la mediocridad es doblemente difícil, hay que vislumbrar los peligros del futuro y vencer las resistencias de las fuerzas inertes que desdeñan su propio papel en la historia.

Pero a pesar de la niebla que achataba la visión, había que romper el equilibrio de la política tradicional saliendo al encuentro de un lugar para la acumulación del movimiento popular. Puesto que, mientras la derecha se unificaba bajo las banderas del odio contra la marcha desordenada del proceso democrático, en el otro polo cundía la dispersión, la anarquía y la atomización del movimiento; todo ello fue producto del agotamiento precoz de un esquema sin reservas ideológicas y políticas para mantenerse a la cabeza de las masas. La indigente creatividad de la UDP no había conspirado solamente contra su propia unidad, también había tenido un efecto devastador en la unidad del pueblo. El "instrumento democrático" de integración y unidad al despedazarse en el gobierno, devenía en un péfido factor de desintegración y desunión. El vacío político era manipulado por las fuerzas de la reacción, pero no era una invención, era el signo negativo de un espíritu revolucionario enervado que había trasmigrado a los rangos de la política tradicional.

El armisticio democrático lanzaba a los partidos a una cómoda existencia retórica. Hasta las lecciones trágicas del pasado habían perdi-

dó su poder de sacudir el peligroso anquilosamiento espiritual, que se apoderaba de las energías de las cúpulas, se traducía en la exasperación y el descontento de los de abajo, de los que habían sostenido las escaleras, de los que no querían seguir siendo el pedestal sino que se habían propuesto llegar hasta la cumbre.

Notas

¹ Finalizado el mandato presidencial de Paz Estenssoro, de 1952 a 1956, asume el mando Siles Zuazo, dentro de una política basada en la liberación económica y en compromisos con el FMI. Se produce el divorcio entre la COB y el gobierno, Siles trata, sin éxito, de dividir la COB con un sindicalismo oficialista mediante una entidad sindical paralela de corta duración: la COBUR.

² La Asamblea de Francfort comenzó sus reuniones el 18 de marzo de 1848, después de la Revolución de marzo en Alemania. Caracterizada la Asamblea por sus decisiones sin ningún valor práctico, fue destruida por las tropas del ejército.

³ Cerroni, Umberto, *Teoría política y socialismo*, Ediciones Era, México.

⁴ PIR (Partido de la Izquierda Revolucionaria). Partido de las masas de la izquierda boliviana que se frustró en 1946 por su complicidad con la derecha, en la asonada que concluyó con el asesinato del ex-presidente Gualberto Villarroel.

⁵ Lora, Guillermo, *Inviabilidad de la democracia. Proletariado y Nación oprimida*, Ediciones El Amauta, La Paz, 1980.

⁶ Derrocado el gobierno de Torres, se hizo cargo el general Banzer con una coalición conformada por el MNR, FSB y Fuerzas Armadas: el Frente Popular Nacionalista.

INDICE

| | |
|--|-----|
| Introducción | 7 |
| I. Fisonomía del Estado boliviano | 13 |
| II. Bolivia en el Cono Sur | 51 |
| III. 1978-1982: La dictadura y la democracia | 89 |
| IV. La democracia | 115 |

Este libro se terminó de imprimir en
Artes Gráficas Santo Domingo S.A.,
Santo Domingo 2739, Buenos Aires,
en el mes de Mayo de 1985.